Alejandro Cattaruzza

Historia de la Argentina

1916-1955



biblioteca básica de historia



Alejandro Cattaruzza

Historia de la Argentina

1916-1955







ISBN 978-987-629-257-3
3ra edición
Julio de 2016

Índice

TERCERA PARTE
1930-1943

CUARTA PARTE
1943-1955

Introducción

Este libro está dedicado al examen del período que transcurre entre la llegada a la presidencia de Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, en 1916, y el derrocamiento de Perón, en 1955. El primer acontecimiento fue resultado de la aplicación de las leyes electorales que establecían el voto secreto y obligatorio para los argentinos varones mayores de 18 años, mientras que el segundo fue la consecuencia de un golpe de estado. Los problemas centrales a los que se ha atendido son tres: el funcionamiento del mundo de la política, sus vínculos con procesos sociales de envergadura y profundidad y, finalmente, sus relaciones con el campo de la cultura, en particular a través del estudio de la toma de posición de grupos intelectuales ante los asuntos públicos.

Es conveniente hacer explícitas algunas concepciones acerca de la relación entre esos diversos planos, pues sobre ellas se funda la organización de este trabajo. Se entiende aquí que la política y sus actores se rigen por un conjunto de reglas propias, y que las acciones que ellos emprenden tienen por objetivo central lograr el éxito en ese campo peculiar. Sin embargo, los partidos exhiben un cierto anclaje social y, a la vez, los resultados de sus luchas tienen efectos por fuera del mundo específicamente político. En consecuencia, la política y sus conflictos poseen una dimensión social que no resulta sencillo precisar pero tampoco desconocer.

Los tiempos que han de estudiarse aquí fueron los de la política de masas y también los de la cultura de masas: los intelectuales cercanos a los partidos, así como aquellos vinculados a las agencias del estado, y los dirigentes o militantes con inquietudes culturales desplegaron en esos años esfuerzos muy importantes para explicar el sentido de la tarea que llevaban adelante, para justificar sus tácticas, para proponer cómo debían concebirse los escenarios en los que ellas tenían lugar y para imponer su propia interpretación sobre esos asuntos. Tales construcciones, siempre imaginarias y sin embargo siempre eficaces a la hora de sostener intervenciones políticas, fueron centrales en el in-

tento de difundir entre grandes grupos sociales qué era lo que estaba en juego, cuáles eran las posiciones propias y cuáles las ajenas, por qué las propias eran las justas, las convenientes, las adecuadas y, en un extremo, para aquellos militantes de alto compromiso y en los momentos más duros, por qué podía valer la pena arriesgar la libertad o la vida por ellas.

Teniendo en cuenta los temas que aquí se estudian, en particular los referidos a la política, pueden distinguirse varias coyunturas a lo largo de estos cuarenta años; a propósito de ellas, existe cierto consenso entre los historiadores acerca de que cada una constituye un período con cierta autonomía que admite ser estudiado por sí mismo. Este libro ha sido estructurado en cuatro partes, que remiten precisamente a esas coyunturas. La primera, dedicada al período 1880-1916, cumple una función introductoria. Luego siguen los tramos referidos a las presidencias radicales que se extienden entre 1916 y 1930, a los gobiernos herederos del golpe de estado, en el lapso 1930-1943, y finalmente al peronismo.

Desde el punto de vista de la economía pueden observarse, a su vez, transformaciones significativas a lo largo del período. Los gobiernos radicales, entre 1916 y 1930, se desarrollaron cuando la agroexportación todavía era el eje de la economía argentina. Los tiempos de la Primera Guerra Mundial y la inmediata posguerra fueron complicados, pero durante los años veinte se recompusieron parcialmente las condiciones internacionales para que aquel modelo continuara funcionando. La crisis de 1929, en cambio, lo dislocó. A la salida de la depresión, en la segunda mitad de la década abierta en 1930, la industria sustitutiva de importaciones destinada al mercado interno experimentó un fuerte crecimiento, que fue más espontáneo que alentado desde el estado. La Segunda Guerra dio mayor impulso a ese proceso, aunque también le marcó cierto límite, y luego de 1946 su consolidación fue uno de los objetivos de la política económica inicial del peronismo. De todas maneras, la exportación de productos agropecuarios siguió siendo importante a pesar del crecimiento de la industria.

Estos cambios en la economía tuvieron relación estrecha con fenómenos sociales. Así, las cifras de la inmigración ultramarina, que había sido masiva desde las últimas décadas del siglo XIX y había contribuido a constituir la peculiar sociedad argentina, se mantuvieron altas hasta 1929-1930, cuando, en razón de la crisis económica internacional, la llegada de inmigrantes disminuyó radicalmente; esta tendencia decreciente se mantendría en el tiempo. Las migraciones internas, aunque eran ya de larga data, se hicieron más intensas en los años treinta, y las

grandes ciudades fueron el destino de los migrantes nacidos en provincias, en un movimiento que continuó durante el peronismo. La combinación de esos dos factores con otros –como la escolarización de masas que, con algunos cambios de velocidad, continuó su ritmo ascendente, y la circunstancia de que el estado reconociera como argentinos a los hijos de extranjeros– provocó la paulatina nacionalización de los sectores populares, que al comienzo del período analizado, en tiempos de la Gran Guerra, se caracterizaban todavía por la fuerte presencia de los inmigrantes. No se trata, en absoluto, de la desaparición total de esas huellas, sino más bien de un proceso de incorporación al colectivo nacional de las generaciones de hijos de quienes llegaron con la gran inmigración, muchos de ellos, además, miembros de los grupos populares. El servicio militar, así como la obligatoriedad del voto, presionaron en el mismo sentido; como siempre, al tiempo que incorporaban y buscaban consolidar identidades colectivas en clave nacional, estos mecanismos contribuían al control social.

Simultáneamente, la sociedad se hacía más compleja; a partir de los años veinte, la expansión de los inciertos grupos medios se hizo visible, sobre todo en las ciudades, vinculada a los mecanismos de ascenso social. Maestros, pequeños comerciantes, empleados y algunos profesionales liberales fueron sus figuras más representativas. Por su parte, la expansión de la industrialización sustitutiva sostuvo el crecimiento de los sectores asalariados que a ella se dedicaban, se tratara de obreros o de empleados.

Si se retorna en este punto a la cuestión de la política y de las principales agrupaciones y partidos con una mirada de largo plazo, pueden percibirse algunos procesos decisivos. Uno de ellos es la paulatina declinación del poderío de los grupos políticos que habían estado a cargo del aparato estatal entre 1880 y 1916 y que con alguna precaución pueden llamarse conservadores. Durante los años radicales, la principal oposición provino justamente de los herederos de aquellos grupos. En los años treinta, continuaron exhibiendo un notable arraigo en varias provincias, que se traducía en desempeños electorales eficaces, y tuvieron además el control de sectores de la administración, pero no consiguieron consolidar una estructura nacional estable. Al final de la etapa, en 1955, sus elencos estaban casi disgregados en otras formaciones y muy menguados de votos, con la excepción de algunas provincias. Así, a la disputa entre radicales y conservadores –en ocasiones aliados a desprendimientos del radicalismo–, característica de la etapa que va de 1916 a comienzos de los años cuarenta, le sucedió la confrontación que libraron

entre 1945 y 1955 peronistas y antiperonistas; la más poderosa de las formaciones de este último conjunto era la UCR. Ese enfrentamiento sería central en la política argentina durante bastante tiempo más.

El radicalismo, por su parte, pasó de ser una agrupación opositora, que había apelado a la protesta armada en 1905, a ser partido de gobierno, para volver al llano luego del golpe de estado de 1930. Durante esos años, y aún después, el partido se parecía mucho a una reunión de estructuras provinciales bien diferenciadas, aunque algunos elementos comunes estuvieran extendidos, como ocurría con el liderazgo de Yrigoyen. En la década de 1930, el radicalismo probó sin suerte el camino de la abstención combinado con algunos levantamientos armados, para optar más tarde por la participación en elecciones, a pesar de las disidencias internas. La UCR retuvo buena parte de su potencia electoral y fue objeto de fraude masivo en las presidenciales de 1937. Finalmente, en la coyuntura de 1945/1946, el partido debió enfrentar un desafío para el cual no estaba preparado en el plano simbólico. Desde los momentos iniciales, a fines del siglo XIX, se había concebido a sí mismo como la expresión de la nación y ésa era una de las piezas clave en la identidad partidaria. En 1946, era el peronismo el que reclamaba para sí aquella condición; según planteaba el nuevo movimiento, se trataba de una nación que reconocía un lugar a los trabajadores en su condición de tales y no sólo de ciudadanos. Como se sabe, en este tipo de argumentación, sea en su versión radical o peronista, la nación puede expresarse sólo en un movimiento político; el resto queda excluido de ella. Al mismo tiempo, tales razonamientos tornan imprescindible la victoria en comicios libres: no está previsto que la nación pueda perder elecciones. Tampoco que para ganarlas deba integrarse en un frente electoral. Así, los sucesos de 1945 y 1946 atenuaron mucho los aires movimientistas del radicalismo –que sin embargo no desaparecerían por completo– y favorecieron la extensión, en el futuro, de una imagen de sí mismo que lo hacía un partido más.

Además de los conservadores, y sosteniendo complejas relaciones con ellos, otros sectores de la derecha argentina actuaron en estos años. De las posiciones de mera defensa del orden y las jerarquías tradicionales propias de comienzos del período, muchas agrupaciones e intelectuales comenzaron una deriva hacia actitudes nacionalistas más radicales y más activas, que en algunos casos tomaban como modelo al fascismo y al nacionalsocialismo, aunque se inclinaban a ver en las fuerzas armadas la institución de la que saldría el líder anhelado. En los años treinta los grupos nacionalistas se multiplicaron y crecieron,

aunque no lograron unificarse, y muchos de sus puntos de vista consiguieron auditorios amplios; los sectores católicos se confundían a menudo con esos elencos. A partir de esos años, por otra parte, la influencia del factor militar en la ecuación política se fue haciendo cada vez más notoria. También aquí el peronismo provocó realineamientos; el nacionalismo, en general, se aproximó a los gobiernos militares que se sucedieron entre 1943 y 1945; luego, algunos sectores se alejaron de un peronismo que les parecía o demasiado pragmático o demasiado popular, o ambas cosas simultáneamente. Otras agrupaciones, y también intelectuales que provenían del nacionalismo, mantuvieron en cambio su apoyo.

Por su parte, los dos grupos mayores de la izquierda política, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC) –surgido pocos años después del comienzo del proceso que estudiamos–, tuvieron trayectorias distintas. El PS se constituyó en un adversario electoral poderoso del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires a partir de la aplicación de la Ley Sáenz Peña, aunque su presencia en otros distritos, con algunas excepciones, fue decididamente débil. En cierto modo un partido dedicado a la lucha plenamente política y a la vez un partido de clase, contaba además con una ya antigua inserción en el movimiento obrero; las tensiones y los roces entre dirigentes políticos y sindicales no faltaban, pero el socialismo tenía allí un lugar destacado. El PC, por su parte, logró en los años treinta una notoria presencia en el movimiento sindical, incluso llegó a conducir sindicatos grandes y huelgas resonantes. Otro sector poderoso en el movimiento obrero era el *sindicalista*. Ya desde tiempos de Yrigoyen, algunos sindicatos, con conducciones de distintos perfiles ideológicos, habían establecido negociaciones con el estado a fin de conseguir ciertas reivindicaciones; en los años treinta esa práctica se hizo más frecuente. En el mundo del trabajo y en el de los sindicatos, la aparición del peronismo provocó un cambio muy profundo que redujo la presencia del socialismo y del comunismo; al mismo tiempo, el movimiento obrero exhibía un impactante crecimiento tanto en lo que hace al número de afiliaciones como a la estructura de sus organizaciones a partir de 1944-1945.

Junto a estas líneas de transformación, el trabajo sobre el período 1916-1955 permite percibir la permanencia de varios elementos en la política argentina. Uno de ellos remite, como se ha venido insinuando, a la manera en que distintas culturas políticas locales, con pocas excepciones, configuraban la disputa política. Un rasgo destacado –aunque no absolutamente singular– era la certeza de que dos grandes espacios

políticos, dos bloques esenciales y uniformes, se enfrentaban en un solo combate decisivo, que en muchas oportunidades llegó a ser presentado como el mismo que había tenido lugar en 1810, 1852 o 1890. Proponer un panorama de este tipo suponía también construir una imagen del adversario que lo convertía prácticamente en ilegítimo, y esa versión terminó por teñir el funcionamiento del sistema. Como se ha indicado, el radicalismo constituyó de este modo su identidad en los años de la lucha de "la causa" contra "el régimen", que era planteada como la lucha de la nación contra quienes impedían que ella se gobernara a sí misma. A su vez, la oposición conservadora a Yrigoyen se imaginaba como el sector que poseía las credenciales y los méritos, sociales y culturales, para ejercer el gobierno de la república, ahora en manos de un partido, el radical, que sólo podía ostentar su mayor caudal de votos, en una nueva denuncia de aquello que algunos miembros de la elite, desde hacía tiempo, habían llamado la "tiranía del número". Cuando hacia 1945 se instauró una nueva línea de quiebre que enfrentó al peronismo y al antiperonismo, esta batalla también se concibió como cerrada y total; ambos adversarios, además, reclamaban filiarse con la más genuina y auténtica tradición nacional.

La aplicación de las leyes electorales impulsadas por el presidente Roque Sáenz Peña en 1912 tuvo a su vez efectos que se prolongaron durante todo el período examinado. A pesar de los golpes de estado, del fraude, de las propuestas de voto cantado, de algún arrebato corporativista que imaginó la reforma de la Constitución, de la reforma constitucional que efectivamente llevó adelante el peronismo, el voto secreto y obligatorio –extendido a las mujeres a partir de 1951– quedó instalado como el horizonte contra el cual se perfilaba, por contraste, una práctica fraudulenta o una elección opaca. Por otro lado, la aplicación de aquellas leyes señaló, como se ha indicado, el momento definitivo del tránsito a la política de masas en la Argentina. Los partidos, para actuar con eficacia en la nueva situación, no podían ser ya agrupaciones de notables, reunidos en pequeños círculos, incluso si contaban con algún apoyo popular; la competencia amplia por el sufragio los obligó a poner en marcha otros mecanismos de reclutamiento, organización y propaganda. Desde ya, algunos de estos cambios habían comenzado a manifestarse, tenuemente, tiempo atrás, pero a partir de 1912-1916 afectaron al conjunto del sistema. De todas maneras, aquellos partidos orgánicos que los reformistas deseaban no surgieron en la Argentina, al menos entre los protagonistas centrales de la disputa política.

Varios autores, argentinos y extranjeros, intentaron explicar, mediante interpretaciones generales, los fenómenos que se han venido mencionando. Así, hubo quienes consideraron al peronismo como un ejemplo claro de populismo, y también el radicalismo en su versión yrigoyenista fue a veces caracterizado de esa manera. A su vez, se planteó la posibilidad de que esos movimientos, concebidos como populismos, hubieran cumplido aquí las tareas de integración de las masas, de ampliación de los derechos políticos y sociales y, en fin, de democratización de la política y la sociedad que, en el caso europeo, había impulsado la socialdemocracia. En algunas versiones de ese relato, las leyes electorales de 1912 habrían supuesto la adquisición plena de derechos políticos para los ciudadanos, y las políticas sociales del peronismo habrían acarreado la consolidación de la dimensión social de la ciudadanía. Una imagen que en parte coincidía con la anterior veía en los gobiernos radicales la expresión de la integración a la vida política de las clases medias, mientras que el peronismo habría señalado la hora de la incorporación de los trabajadores. Otras miradas, en cambio, entendían que se trataba del tránsito de un régimen oligárquico a uno democrático, que algunas versiones presentaban, en el balance final, como fallido o incompleto.

En este libro, en cambio, no se hallarán ni el presupuesto de que la ciudadanía política o la social estaban "destinadas" a conquistarse, ni la opinión de que ello haya ocurrido de una vez y para siempre; la historia argentina posterior ofrece, lamentablemente, demasiados ejemplos de lo contrario. Tampoco se ha considerado la existencia de una más que secular lucha sostenida por entidades esenciales, siempre igual a sí misma, de la cual el período analizado sería apenas un momento más. En esta ocasión, aquellas aproximaciones han sido utilizadas parcialmente para formular ciertas preguntas, a las que este libro intenta ofrecer respuestas, que se refieren a la democracia y a las varias dimensiones de la ciudadanía, así como a los conflictos políticos, sociales y culturales desatados en torno a esas cuestiones en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Quizás esas preguntas, de cara a la situación presente, tengan todavía cierta actualidad.

Deseo agradecer a Luis Alberto Romero la invitación a participar de esta colección; entiendo que coincidimos en la idea de que los historiadores deben hacer oír su voz más allá de los claustros y de los públicos especializados, y es ésta una oportunidad para intentarlo. También a Siglo XXI Editores; es sabido que para hacer del manuscrito original un

libro deben intervenir muchas personas, que en este caso lo han hecho con precisión, cordialidad y paciencia. Por otro lado, los argumentos que aquí se exponen se han forjado en varios ámbitos: las aulas de las universidades de Buenos Aires y Rosario, en las que con más continuidad desarrollo tareas docentes, son dos de ellos. También en los grupos de investigación, los congresos y jornadas donde muchos de los tramos de estas interpretaciones fueron discutidos bajo la forma de ponencias o artículos preliminares. Agradezco, entonces, a Fernando Rodríguez, Ana Lía Rey, Liliana Cattáneo, Tomás Ibarra, Alejandro Eujanian, Sylvia Saítta, Lila Caimari, Valeria Príncipe, Antonio Bozzo y Ana Virginia Persello. Todos ellos, junto a otros colegas y amigos, han sostenido esos intercambios conmigo en ámbitos formales o informales. Y a Luciano de Privitellio, cuyas opiniones son tan distintas de las mías acerca de tantas cuestiones.

PRIMERA PARTE
1880-1916

1. La Argentina conservadora

Durante la segunda mitad del siglo XIX tuvieron lugar en la Argentina profundos cambios, que se aceleraron a partir de 1880 aproximadamente. La incorporación plena a los mercados mundiales a través de la exportación de cereales y carnes, la inmigración de masas y la organización de un orden político conservador fueron, desde aquella fecha, algunos de los fenómenos más notorios. De todas maneras, ellos no significaron una ruptura absoluta con períodos anteriores ni afectaron a todas las regiones por igual. Desde el punto de vista político, la etapa se cerró entre 1912 y 1916, cuando se sancionaron nuevas leyes electorales cuya aplicación llevó a la presidencia a Hipólito Yrigoyen.

Lecturas diversas de una transformación profunda

Como ocurre con otros importantes procesos históricos, los que tuvieron lugar en la Argentina a partir de las últimas décadas del siglo XIX han sido interpretados y valorados de varios modos por historiadores, economistas y sociólogos. Esas diferencias no fueron sólo el resultado de la aplicación de perspectivas propias de distintas ciencias sociales, sino también de lecturas que se nutrían de tradiciones ideológicas encontradas o, al menos, diversas. Si bien en los últimos tiempos se ha puesto el foco sobre ciertos elementos de continuidad con la etapa anterior, así como sobre los límites que el proceso de transformación exhibió, prácticamente todos los autores admiten que cambios de gran magnitud conmovieron al país en muchos planos durante aquel período, y promovieron una profunda reorganización de la economía, la sociedad, el estado y la política.

Algunos de aquellos investigadores plantearon que, por la época, se había organizado un modelo económico, que denominaron "agroex-

portador", asociado a la incorporación de la Argentina al proceso de integración de la economía mundial. Avanzaba, además, la formación de la Argentina moderna, importantísima proveedora de cereales y carnes al mercado internacional y receptora de inversiones y de mano de obra de origen extranjero, que en su enorme mayoría provenía de Europa. El registro de la masividad de la inmigración y de sus efectos llevó a varios autores a plantear que por entonces comenzaba una "era aluvial". Se organizó un régimen de gobierno más moderno que los anteriores, conservador en lo que se refiere a la reproducción de los grupos en el poder, aunque liberal en ciertos aspectos ideológicos; por los orígenes sociales y lo cerrado del sistema, también se lo consideró oligárquico.

En lo que respecta a los procesos políticos, 1880 parece ser una fecha pertinente para señalar la apertura de esta etapa. En 1879, la campaña militar contra los indios en la Patagonia había asegurado la más importante frontera interna; el general Roca, su jefe, fue electo presidente al año siguiente. En esos momentos hizo crisis la cuestión de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, promovida por Nicolás Avellaneda, todavía presidente, y resistida por las fuerzas de la provincia de Buenos Aires. Luego de importantes combates, las fuerzas nacionales se impusieron a las provinciales y pronto se sancionó la ley que establecía que la ciudad de Buenos Aires se transformaba en la Capital Federal de la República. En cierto sentido, el intento de autonomía porteño formó parte de la serie de desafíos que las provincias habían lanzado al poder nacional en las décadas anteriores; por su parte, las últimas expresiones vigorosas del federalismo tradicional del interior y del litoral habían sido doblegadas algunos años antes, en 1873, con la derrota de Ricardo López Jordán. A partir de 1880, Roca fue el nuevo presidente; el estado nacional se impuso a Buenos Aires, la más poderosa de las provincias argentinas, con el apoyo de las elites del resto del país. Comenzaba así un ciclo de cierta estabilidad política no exenta de disputas libradas entre sectores de los grupos dominantes.

En cuanto a las modificaciones económicas y sociales, hubo estudiosos que entendieron que el proceso de incorporación al mercado mundial había tenido lugar ya a partir de los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, sobre la base de la exportación de lana, cuyo período más importante se extendió entre 1850 y 1880. Otros, en cambio, preferían 1870 como momento de corte y, finalmente, algunos señalaban que a partir de 1880 la cría de ganado vacuno y su exportación –modificadas profundamente por adelantos técnicos como el frigorí-

fico– y, más adelante, la producción cerealera, indicaban el comienzo de la etapa. En parte, lo que estaba en discusión era cuándo se había organizado un capitalismo de base agraria en la Argentina, cuáles eran sus características y hasta qué punto procedían de la conexión con los mercados internacionales, qué posibilidades habían existido de organizar un modelo menos vulnerable a los cambios en tales mercados y, en consecuencia, menos dependiente de ellos y, finalmente, si esas posibilidades habrían garantizado un crecimiento más equilibrado y sostenido de la economía nacional. Período excepcional de mejoras y progreso, garantizado por la conducción acertada de la elite, o bien proceso de construcción de un capitalismo deformado y dependiente, con un sistema político oligárquico y cerrado, y un estado dedicado en forma exclusiva a la represión de los críticos: éstas eran las dos grandes interpretaciones sobre el período que dominaban los debates político-culturales.

Algunas cifras del cambio

Los datos que siguen evidencian la importancia que tuvieron algunos de aquellos cambios. La mayoría están tomados de los censos nacionales de 1869, 1895 y 1914; debe tenerse en cuenta que sólo permiten percibir fenómenos globales y tendencias de fondo, pero no siempre muestran diferencias regionales o cambios de ritmo.

Hacia 1869, el país tenía aproximadamente 1 877 490 habitantes; en 1914, la población había crecido de manera notoria hasta llegar a los 8 090 084. Este proceso estuvo vinculado tanto con el crecimiento vegetativo como con el fenómeno de la inmigración de masas, crucial en el período. El porcentaje de extranjeros en 1869 era de 11,5 por ciento, mientras que en 1914 rondaba el 30 por ciento, la cifra más alta registrada en un censo nacional hasta hoy. A lo largo de esta etapa predominaron los europeos que provenían del ámbito rural; entre ellos, italianos y españoles fueron la mayoría.

Junto a los dos cambios mencionados, tuvo lugar una marcada tendencia a la urbanización, alentada por la circunstancia de que muchos de los inmigrantes se radicaban en las ciudades, contra lo que había sido la intención inicial de la dirigencia local. Así, entre 1869 y 1914, la población urbana creció del 33 al 58 por ciento sobre el total de habitantes. Si bien eran considerados pobladores urbanos quienes vivían en centros con más de 2000 personas, las cifras de los cambios en las grandes ciudades, como Buenos Aires y Rosario, son impactantes: en

1869 se contaban unos 187 000 habitantes en Buenos Aires, y en 1914 llegaban a 1 576 000. A lo largo del período, los extranjeros representaron alrededor de la mitad de la población total de la ciudad, con un pico del 52 por ciento en 1895. Estos porcentajes crecen si se consideran sólo los mayores de edad y los hombres. Lo anterior no debe ocultar la gran variación regional y provincial de estos fenómenos: hacia 1914, por ejemplo, en La Rioja había sólo un 2 por ciento de extranjeros y en Corrientes, un 7 por ciento. La urbanización se vinculó con la consolidación del desequilibrio entre las distintas regiones, que ya se insinuaba en etapas anteriores.

La inmigración

Los procesos migratorios masivos de fines del siglo XIX y comienzos del XX fueron un factor determinante en la constitución de una sociedad diversa de la anterior. Los porcentajes de extranjeros sobre la población total fueron singularmente altos en la Argentina. La mayoría de los inmigrantes provenía de Italia y de España.



Almanaque gallego, Buenos Aires, 1912. Biblioteca Nacional.

De todas maneras, estas cifras no ofrecen respuesta a interrogantes de otro orden, como por ejemplo los referidos a las identidades de los inmigrantes, su perdurabilidad o su reemplazo por alguna otra diferente de la original. En torno a estas cuestiones, pueden distinguirse dos grandes matrices interpretativas en el mundo de los especialistas. Una de ellas, sintetizada en la expresión "crisol de razas", insiste en que la integración de los inmigrantes fue relativamente rápida, mientras que la del "pluralismo cultural" sostiene que las identidades de los inmigrantes, sus pautas culturales, costumbres y modos de relacionarse perduraron, distinguiéndose de las propias de los nativos. Hay quienes plantean lo dudoso de la existencia de un aparato estatal afirmado antes de la época de la gran inmigración e, incluso, de una sólida sociedad nacional previa. De todos modos, este esquema simplifica y vuelve tosco un debate en el que las posiciones son bastante menos rígidas. Mayores coincidencias se manifiestan a la hora de ponderar la eficacia de los mecanismos sociales y estatales de integración en la generación de los hijos de los inmigrantes.

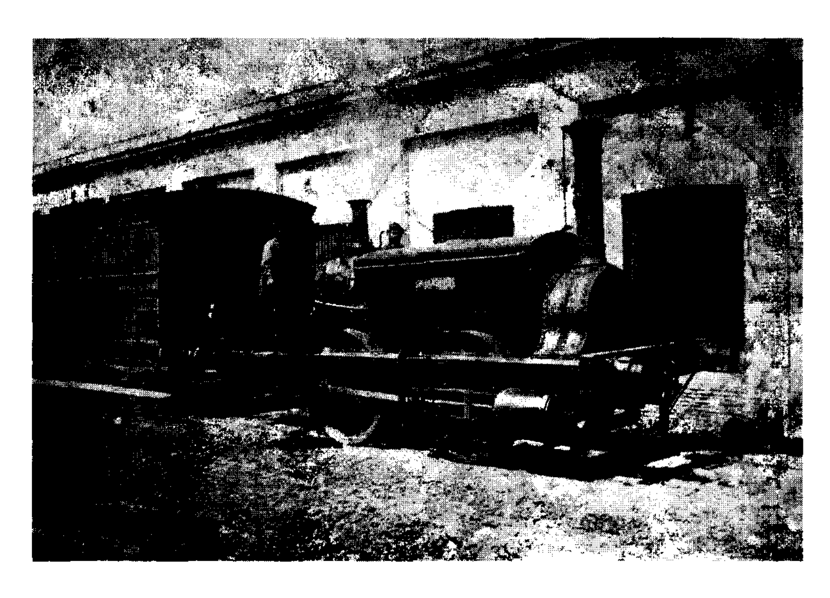
Otras variables, vinculadas en este caso a la economía, muestran también la magnitud de los cambios. Hacia 1875, los ferrocarriles, decisivos para la puesta en marcha de un sistema dedicado a la exportación de productos agropecuarios en una época en la que no había competencia del automotor, tenían una extensión de 1380 kilómetros; hacia 1890, llegaban ya a casi todas las capitales de provincias y, en 1914, alcanzaban los 34 500 kilómetros. Los puertos, en particular el de Buenos Aires, eran los centros de confluencia de la red ferroviaria. A los ferrocarriles fue destinada buena parte de las inversiones extranjeras, entre las que se destacaban los capitales de origen inglés.

En relación con los productos de exportación más importantes, no sólo se trató de cambios cuantitativos: en 1876, la lana, los cueros y el sebo eran las mercancías cuya exportación era mayor, medida en pesos oro; hacia 1914, a ellos se habían sumado las carnes congeladas y enfriadas y los cereales. Estas modificaciones habían sido posibles debido a los cambios en la producción, alentados a su vez por la demanda externa. La frontera agrícola avanzó, no sólo sobre territorios antes dominados por los indios; el ganado criollo fue cruzado con razas más finas, que permitían obtener un producto más adecuado a la demanda europea, y las unidades productivas se modernizaron. Así, poco antes de finalizar el período, la Argentina era uno de los principales exportadores de cereales y carnes cuando la demanda europea de esos bienes era particularmente intensa. En 1877, por el puerto

de Buenos Aires se exportaban bienes por un valor de 30 700 000 pesos oro; en 1912, la cifra alcanzaba los 315 160 000. En el puerto de Rosario, el incremento fue de los 2 100 000 a los 85 120 000 en los mismos años.

Los ferrocarriles

En la Argentina, el primer tramo de vías férreas se inauguró en 1857. La imagen, de mediados de los años setenta, corresponde a la locomotora La Porteña, que fue la que, casi veinte años antes, había realizado el viaje inaugural. La extensión del ferrocarril fue una de las claves para la organización de una economía cuyo sector más activo era el de la exportación de la producción agropecuaria.



Archivo General de la Nación.

Si bien el sector más dinámico de la economía era el agropecuario dedicado a la exportación, el crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los hábitos de consumo favorecieron la creación de algunas industrias destinadas al mercado interno. Comestibles, bebidas, ciertos textiles y la construcción fueron algunos de estos rubros, que demandaron a su vez mano de obra y contribuyeron a la aparición de nuevos grupos sociales. También algunas economías de las regiones no

pampeanas produjeron para esos mercados: fue el caso del vino en Cuyo y el azúcar en el Noroeste.

Junto a los cambios sociales ya mencionados –crecimiento de la población, impacto de la inmigración, concentración urbana, redistribución de la población en el territorio–, sobre los cuales la acción estatal, si se desarrollaba, tenía un efecto parcial, ocurrieron otros en los que la actividad del gobierno tuvo mayor efecto. El caso de la educación elemental es uno de los más evidentes. El impulso dado a la escuela primaria, que no fue sólo local sino que también tuvo lugar en otros países latinoamericanos y europeos, aunque con diferentes cronologías e intensidades, persiguió varios objetivos, a veces declarados por los mismos impulsores; otras veces, velados. Desde la enseñanza masiva de las habilidades necesarias para cubrir la demanda de mano de obra del capitalismo hasta la difusión de identidades en clave nacional, que vinieran a reemplazar a las antiguas; desde un objetivo civilizatorio y modernizador, que integraba y garantizaba la cohesión social, hasta un anhelo por disciplinar y expropiar culturalmente a las masas: estos y otros propósitos han sido atribuidos a la acción escolar. En el caso de la Argentina, a lo que las elites solían percibir como desafíos que la escuela podía contribuir a conjurar se sumó, desde 1890 aproximadamente, la expresión pública intensa de las identidades de los inmigrantes o, cuanto menos, de los esfuerzos de la elite de las colectividades por mantener vivo el vínculo afectivo y cultural con las patrias de origen.

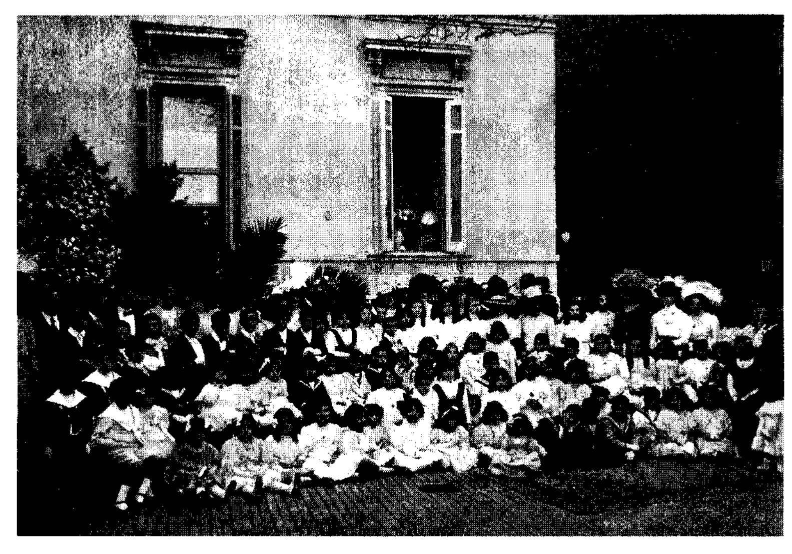
En el plano legal, esta política tuvo en la Ley 1420, de 1884, su episodio más resonante; en ella se establecía la obligatoriedad de la escuela primaria, su carácter gratuito y laico. A su vez, en 1869 el porcentaje de analfabetos era del 77,5 por ciento de la población, mientras que en 1914 el índice había descendido al 36 por ciento, en el marco de un crecimiento demográfico muy importante; la tasa de escolaridad neta subió del 20 al 48 por ciento. Entre 1900 y 1915, el número de establecimientos primarios aumentó de 4450 a 9399, y el de secundarios, de magnitud mucho más limitada todavía, de 53 a 149.

Este crecimiento, así como la creación o ampliación de los servicios hospitalarios, de los vinculados al poder judicial y de otras reparticiones, volvió más compleja la estructura administrativa del estado. Los procesos de ascenso social, que funcionaron para algunos miembros de los sectores populares en tránsito hacia los grupos medios, así como para profesionales vinculados con la elite, se vieron también favorecidos por aquella ampliación. Sin embargo, no era sólo el estado el que se tornaba más complejo, ya que también en la sociedad aparecían sec-

tores relativamente nuevos y se redefinían las características de otros. Estos cambios fueron más visibles en el mundo urbano, aunque no se detuvieron allí: la ampliación del número de trabajadores de nuevo tipo, al ritmo de la extensión del trabajo asalariado, creció aceleradamente. Desde ya, pueden rastrearse antecedentes, sobre todo en las ciudades, pero la circunstancia de que fuera en estos años cuando el movimiento obrero comenzó sus intentos de organización, así como las luchas de comienzos del siglo XX, y en particular de los años 1909-1910, son evidencia de que el conflicto social era librado por nuevos actores, inexistentes pocas décadas antes.

La escuela pública

La escuela primaria fue una de las áreas en las que el estado realizó esfuerzos importantes en la segunda mitad del siglo XIX; desde la sanción de la Ley 1420 de Educación Común, en 1884, la enseñanza era laica, gratuita y obligatoria. La ley tenía vigencia en la Capital Federal y en los territorios nacionales, ya que la educación primaria era, constitucionalmente, responsabilidad de las provincias.



Alumnos en acto escolar hacia 1905. Archivo General de la Nación.

Así como estos procesos de transformación no afectaron a todo el país con la misma profundidad, hubo también diferencias en los beneficios

que los diversos grupos sociales obtuvieron del crecimiento económico del período. Si bien la movilidad social ascendente era una posibilidad para los hijos de algunas familias populares, para muchos la situación fue dura, y la construcción de esta versión del capitalismo en la Argentina no se llevó adelante sin costo para los trabajadores. La vida en el conventillo, las huelgas y la represión que, durante bastante tiempo, fue la principal respuesta estatal a los reclamos obreros, son indicios de esas situaciones.

Los modos de la política (I): el régimen conservador

La pregunta acerca de la política durante estos años esconde otros muchos interrogantes referidos a cómo se establecían y se regulaban las relaciones entre gobernantes y gobernados; bajo qué reglas eran electos, si lo eran, los primeros; qué tanto se respetaban esas reglas en los hechos; cómo distintos actores, reunidos por su perspectiva ideológica, su pertenencia social o nacional, intentaban intervenir en los asuntos públicos; a través de qué mecanismos y con cuánto éxito el poder buscaba tornarse legítimo, y sus críticos, impugnar tal legitimidad. En el plano político también se ubica el problema de las relaciones entre el estado nacional y las provincias. Finalmente, aparece la cuestión de los derechos reconocidos a los habitantes del territorio y aquellos que eran patrimonio exclusivo de los ciudadanos; era éste un tema muy importante frente a lo masivo de la inmigración, a la baja tasa de nacionalización de los inmigrantes a lo largo de todo el período, y al hecho de que los habitantes de los llamados territorios nacionales –unidades administrativas que estaban a cargo de las regiones de incorporación reciente al dominio estatal, como la Patagonia– no estaban habilitados para elegir legisladores nacionales ni miembros del Colegio Electoral, donde finalmente era votado el presidente.

El año 1880, cuando el general Julio A. Roca comenzó su presidencia, es un punto de partida razonable para el examen de estos asuntos. Se inauguró por entonces un período de diez años de estabilidad en la vida institucional, que se prolongó hasta la llamada Revolución del 90. En una perspectiva más amplia, el orden conservador que comenzaba a funcionar habría de perdurar hasta la llegada a la presidencia de Hipólito Yrigoyen, radical, primer presidente electo en 1916 con las nuevas reglas de juego establecidas por la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912. El orden vigente hasta ese momento reconocía amplios derechos civiles –a la libertad de expresión y a la propiedad, por ejemplo–, mientras que los derechos más específicamente políticos estaban acotados, en razón de algunas

disposiciones legales y también de las prácticas electorales, que impedían la expresión de la voluntad de los ciudadanos o bien la distorsionaban.

A grandes rasgos, entre 1880 y 1916, el andamiaje político tuvo uno de sus centros en el Partido Autonomista Nacional (PAN), una agrupación heterogénea, cercana a una alianza de agrupaciones provinciales reunidas alrededor de algunos dirigentes connotados, miembros en general de las clases más acomodadas. El control de cada uno de los escenarios políticos constituido por las distintas provincias resultaba decisivo, ya que era allí donde se elegían los integrantes del Colegio Electoral encargado de seleccionar, entre los distintos candidatos, el que ocuparía la presidencia. Las elecciones solían ser manejadas por el oficialismo a través de la intervención de la policía y otros cuerpos del estado, que impedían la concurrencia de opositores a las mesas electorales, así como a través del fraude. Debe tenerse en cuenta que, por entonces, el voto era público y no obligatorio. Los gobernadores eran una pieza central en el modelo: los dirigentes de talla y visibilidad nacional del PAN tenían tras de sí a gobernadores aliados que constituían sus auténticos apoyos electorales. En más de una ocasión fueron varios los candidatos, pero todo el sistema permitía que el presidente y los gobernadores tuvieran amplias posibilidades de controlar su sucesión.

Los elencos de gobierno, y el personal político relevante en general, se reclutaban entre la elite, vieja o nueva, provinciana o porteña; en varias provincias, los gobiernos eran casi de familia: la política era todavía un asunto de notables. Por estas vías, el sistema se volvía cerrado y capaz de garantizar, al menos en buena medida, su propia reproducción sin mayores intromisiones externas, ni en el plano político ni en el social. Estas características fueron subrayadas por quienes vieron en estos gobiernos una expresión acabada del dominio oligárquico.

Los modos de la política (II): el noventa

Durante una década, entre 1880 y 1890, no pareció posible la organización de una oposición sólida a quienes, aun con conflictos, ocupaban el gobierno. Sin duda, los dirigentes excluidos del régimen tenían objeciones acerca del estado de las cosas, pero la maquinaria montada se revelaba tan eficaz que desalentaba la actividad política de los opositores. También la marcha de la economía acotaba los espacios para la crítica y fortalecía ciertos consensos entre la elite en torno a los rumbos que se debían seguir. Pero, hacia 1890, la confluencia de varias circunstancias brindó la oportu-

nidad para que los descontentos intentaran un movimiento cívico-militar, conocido como Revolución del Parque, que impugnó seriamente al "unicato" del presidente Miguel Juárez Celman y, más ampliamente, al régimen, denunciando la ausencia de comicios libres en razón del control del voto por parte del oficialismo. La libertad de sufragio fue uno de los reclamos centrales, junto al de restauración de la vigencia de la Constitución Nacional, que los revolucionarios entendían conculcada.

Fragmentos de la Proclama del Gobierno Revolucionario durante la Revolución de 1890

El movimiento revolucionario no es la obra de un partido político. Es esencialmente popular e impersonal. No obedece ni responde a las ambiciones de círculo ni hombre político alguno. No derrocamos al gobierno para derrocar hombres y sustituirlos en el mando; lo derrocamos porque no existe en su forma constitucional. Lo derrocamos para devolverlo al pueblo, a fin de que el Pueblo lo reconstituya sobre la base de la dignidad nacional y con la dignidad de otros tiempos, destruyendo esta ominosa oligarquía de advenedizos que ha deshonrado ante propios y extraños las instituciones de la República [...] El elegido para el mando será el que triunfe en comicios libres.

Documentos para la historia de la UCR, Buenos Aires, s/d, 1927. 

El movimiento tuvo lugar en momentos en que se agudizaba una crisis económica, cuyos primeros síntomas habían comenzado a manifestarse algún tiempo antes. La escasa capacidad para la maniobra política que demostraron el presidente y los suyos, las disidencias dentro del propio PAN fomentadas por el estilo de aquel grupo y algunos episodios de corrupción resonantes contribuyeron a dar vuelo a los críticos. Una oposición muy amplia y heterogénea se agrupó en la Unión Cívica de la Juventud, en 1889, y un año más tarde se creó la Unión Cívica, que en julio de 1890 intentaría el levantamiento armado. El movimiento fue derrotado luego de algunos días de combates en el centro de Buenos Aires, pero Juárez Celman debió renunciar y asumió su vicepresidente, Carlos Pellegrini.

La Revolución de 1890 constituyó un movimiento en el que se identificaron elementos propios de la política argentina del momento: sus dirigentes formaban parte, en general, de las elites políticas y sociales, y la pers-

pectiva ideológica que dominaba los documentos producidos por los revolucionarios era la de un republicanismo cívico liberal presente en la Argentina desde algunas décadas antes. También algunos católicos habían participado en la Unión Cívica. Incluso el carácter de las acciones, en las que se mezclaban jefes militares y dirigentes civiles, soldados y milicias cívicas, tenían un tono francamente conocido. Al mismo tiempo, el movimiento exhibió rasgos que reflejaban los cambios que estaban teniendo lugar.

Así, la Revolución del Parque terminó siendo la forja inicial de la Unión Cívica Radical, al punto que en el imaginario partidario ese hecho es visto hasta hoy como el mítico acontecimiento inaugural; en el comienzo, año tras año, militantes y dirigentes, muchos de ellos también notables, homenajeaban a los muertos en el Parque en un rito de fuerte contenido identitario, que se celebraba ante el monumento ubicado en el cementerio de Recoleta. Tras disputas internas, realineamientos y rupturas, la Unión Cívica se dividió entre aquellos que, reunidos en torno al ex presidente Bartolomé Mitre, eran proclives al acuerdo con el oficialismo, y quienes se mostraban reacios a él, acaudillados por Leandro N. Alem, que fundaron la Unión Cívica Radical en 1891. Los radicales hicieron del reclamo por la libertad en los comicios una de sus consignas centrales.

La creación de la UCR ha sido entendida, en muchas ocasiones, como el episodio que marca la aparición de un partido político moderno en la Argentina. De acuerdo con un modelo extendido, un partido moderno es una agrupación más estable que las que se reunían exclusivamente en ocasión de las elecciones, con recursos independientes del estado, con un planteo programático, aun bosquejado a trazos gruesos, y con reglas internas más o menos formalizadas. Sin embargo, al menos en los primeros años, el radicalismo estuvo relativamente lejos de ser tal cosa. La cuestión no sorprende: esos desajustes son habituales si se espera hallar aquel modelo en estado puro. Aun así, andando el tiempo, la UCR se mostraría como una agrupación política perdurable, bastante más cercana a la pauta moderna que sus adversarios más importantes. Además, fue un actor principal de la política argentina durante todo el siglo XX.

El radicalismo, que en principio combinó la participación electoral con la abstención, intentó también la protesta armada en dos ocasiones: 1893 y 1905. En la primera, el movimiento estalló en las provincias de Buenos Aires, San Luis y Santa Fe a fines de julio; luego, se produjeron movimientos en Tucumán y, nuevamente, en Santa Fe. En esta última provincia, colonos extranjeros participaron de las acciones armadas. En la provincia de Buenos Aires, los sublevados lograron instalar un gobierno provisorio en La Plata, pero finalmente todo el movimiento fue

derrotado. Entre 1896, cuando se suicidó Leandro N. Alem, y 1904, los organismos de dirección del partido prácticamente no funcionaron; sin embargo, la organización radical se hacía más amplia, en particular en la provincia de Buenos Aires, e Hipólito Yrigoyen alcanzaba un papel relevante, transformándose en líder del partido. En 1905, volvió a producirse un movimiento armado, también cívico-militar y también derrotado. En ambos casos, las consignas centrales de los sublevados aludían a la libertad de sufragio y a la honradez en la administración. La UCR había hecho de la Constitución Nacional su propio programa, y en el partido se afianzaba la imagen que hacía del radicalismo la expresión política de la nación misma, impedida de gobernarse dado que las elecciones no eran libres. De este modo, continuaba la objeción a la legitimidad del orden conservador, que se había hecho pública en 1890.

La Unión Cívica se fractura

En julio de 1891, cuando comenzó el proceso que desembocó en la creación formal de la Unión Cívica Radical, el sector de la Unión Cívica que se oponía al acuerdo con el oficialismo presentó un manifiesto. Los que siguen son fragmentos de ese texto.

"Conciudadanos: el desarrollo de acontecimientos graves y precipitados en los últimos días coloca al Comité Nacional de la Unión Cívica en la necesidad de dirigir el presente manifiesto a sus correligionarios y a los pueblos de la república. [...] Una minoría del Comité Nacional, formada por los partidarios del acuerdo con la agrupación dominante, acaba de romper la unidad de la Unión Cívica [...]. La Unión Cívica fue desde el principio la coalición de los hombres de bien, vinculados para destruir el sistema de gobierno imperante que ha producido tan graves perturbaciones en la República. [...] La Unión Cívica no se formó alrededor de ninguna personalidad determinada, ni se propone como objetivo de su programa ni de sus ideales la exaltación de un hombre al mando; ella debe destruir el funesto sistema de la opresión oficial, buscando el restablecimiento de las instituciones, la honradez gubernativa, la libertad de sufragio y el respeto a las autonomías de los municipios y de las provincias. [...] Las personalidades eminentes de su seno deben inclinarse ante ese programa y prestarle acatamiento [aunque] no lo entendieron así los que a toda costa querían proclamar la candidatura del general Mitre."

Documentos para la historia de la UCR, Buenos Aires, s/d, 1927.

En 1890 se había producido otro acontecimiento que merece atención: la conmemoración en Buenos Aires y en otros lugares del país del primer 1° de Mayo, una iniciativa que la Segunda Internacional, reunión de los partidos obreros y socialistas recién fundada, lanzó a escala mundial. En aquella ocasión se reclamó, en Buenos Aires, la adopción de medidas que protegieran al trabajador, como la jornada de ocho horas para los adultos y de seis para los menores, la prohibición de que trabajaran los menores de 14 años y el descanso dominical, entre otras. También se exigió la participación del estado en tareas de control e inspección de las condiciones y los lugares de trabajo. Unas 3000 personas se movilizaron ese día, con una presencia extranjera importante.

En la Argentina, los trabajadores habían apelado a la huelga sectorial con anterioridad, aunque de manera esporádica, y a comienzos del siglo XX convocaron a huelgas generales. La conmemoración de 1890 recurrió a otra práctica: la movilización callejera. Los trabajadores también habían fundado sus propias asociaciones y los activistas comenzaban a hacer circular sus publicaciones. Desde hacía tiempo, otro tipo de agrupaciones –de las colectividades inmigrantes, por ejemplo– recurrían a procedimientos semejantes, que constituían un modo de petición y de presión al estado y de intervención en los asuntos públicos, con una dimensión política evidente. En el caso del movimiento obrero, el tipo de reclamo planteado tenía un sesgo social y económico marcado; algunas corrientes con fuerte ascendiente entre los trabajadores, entre las cuales se destacaba el anarquismo, se inclinaban a ver en el estado apenas un mecanismo de opresión utilizado por el capital, un enemigo sólo capaz de reprimir, caracterización que contaba con evidencias en las que sostenerse. A su vez, los socialistas –otra de las corrientes de arraigo en el movimiento obrero– estaban en plena acción organizativa en aquellos años, creando agrupaciones locales y periódicos: en 1894 comenzó a aparecer *La Vanguardia*. En 1896, se fundó formalmente el Partido Socialista (PS).

Desde el comienzo, el PS combinó la participación electoral y la actividad parlamentaria con la tarea de organización sindical que reclamaba su propia definición como partido de clase. En 1904, Alfredo Palacios se transformó en el primer diputado socialista, favorecido por una reforma electoral de 1902 que establecía el voto uninominal por circunscripción; el mecanismo permitió su elección por el barrio porteño de La Boca. A su vez, los militantes sindicales intentaron la organización de una central a lo largo de los años noventa. Así, en 1901 se creó la Federación Obrera Argentina, luego transformada en

Federación Obrera Regional Argentina, de estirpe anarquista, y en 1902, se fundó otra central, la Unión General de Trabajadores, de orientación socialista. Desde 1901, los trabajadores protagonizaron varias huelgas generales, en un período de alta conflictividad social que se extendería hasta los años del Centenario.



La voz del socialismo: el periódico *La Vanguardia*

El editorial del primer número del diario socialista *La Vanguardia*, aparecido el 7 de abril de 1894, presentaba de este modo el emprendimiento, luego de un examen de la situación argentina:

"¿Qué se propone, pues, el grupo de trabajadores que ha fundado este periódico? ¿A qué venimos? Venimos a representar en la prensa al proletariado inteligente y sensato. Venimos a promover todas las reformas tendientes a mejorar la situación de los trabajadores: la jornada de ocho horas, la supresión de los impuestos indirectos, el amparo de las mujeres y de los niños contra la explotación capitalista y demás partes del programa mínimo del partido internacional obrero. Venimos a fomentar la acción política del elemento trabajador argentino y extranjero, como único medio de obtener esas reformas. Venimos a combatir todos los privilegios, todas las leyes que, hechas por los ricos en provecho de ellos mismos, no son más que medios de explotar a los trabajadores, que no las han hecho. Venimos a difundir las doctrinas económicas creadas por Adam Smith, Ricardo y Marx, a presentar las cosas como son y a preparar entre nosotros la gran transformación social que se acerca".

Pocos años después, en 1896, en ocasión de su primera presentación a elecciones, el socialismo manifestaba:

"El Partido Socialista obrero no dice luchar por puro patriotismo, sino por sus intereses legítimos; no pretende representar los intereses de todo el mundo, sino los del pueblo trabajador, contra la clase capitalista opresora y parásita; no hace creer al pueblo que puede llegar al bienestar y la libertad de un momento al otro, pero le asegura el triunfo si se decide a una lucha perseverante y tenaz; no espera nada del fraude ni de la violencia, pero todo de la inteligencia y la educación populares".

Roberto Reinoso (comp.), *La Vanguardia: selección de textos 1894-1955*, Buenos Aires, CEAL, 1985.

El movimiento obrero
Desde fines del siglo XIX, los trabajadores crearon sociedades de resistencia y sindicatos, así como periódicos y publicaciones, que fueron los elementos iniciales en el proceso de organización del movimiento obrero. La huelga, tanto general como sectorial, fue una herramienta que se utilizó con frecuencia.



Reunión sindical de foguistas y obreros marítimos, hacia 1904. Archivo General de la Nación.

La reforma electoral

La política en la Argentina de comienzos del siglo XX exhibía sin dudas elementos novedosos con respecto al comienzo de la etapa, en 1880: las impugnaciones a la legitimidad del orden conservador; un partido, la UCR, que se hallaba en su etapa de abstención revolucionaria ante el fraude y que, en 1905, se lanzó nuevamente a la protesta armada; la presencia del socialismo, que, más allá de sus éxitos o fracasos electorales, se implantaba con fuerza entre los trabajadores de Buenos Aires; la influencia en el movimiento obrero del anarquismo y el anarcosindicalismo, que rechazaban la participación en los partidos; los conflictos sindicales agudos. En algunos sectores conservadores, la per-

cepción de estas nuevas situaciones impulsó cierta vocación reformista, que incluyó desde el proyecto, fracasado, de un Código Nacional del Trabajo, vinculado al informe de Bialet Massé sobre la situación de los trabajadores en el país, hasta la reforma electoral de 1904. Si bien estas inclinaciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de caracterizar al régimen, fueron sólo una de sus líneas de acción: el hostigamiento policial a activistas sindicales, locales socialistas o huelguistas y manifestaciones obreras era habitual, y la Ley de Residencia de 1902 –que autorizaba la expulsión de extranjeros que perturbaran el orden público– y la aplicación del estado de sitio formaron también parte de las políticas estatales.

Entre aquellos que, desde el poder, consideraban importante impulsar una reforma electoral, se encontraba Roque Sáenz Peña, quien llegó a la presidencia en 1910 a través de los mecanismos habituales. Por entonces, la reforma era percibida como necesaria por amplias franjas de la opinión pública. Sáenz Peña asumió una actitud decidida en su favor y en 1911 se sancionaron leyes que establecían la realización de un enrolamiento general y la confección del padrón a cargo del personal militar; ése sería, en el futuro, el padrón electoral. Finalmente, la Ley Sáenz Peña fue votada en 1912, a pesar de las reticencias de varios parlamentarios conservadores. Las disposiciones centrales establecían que, para los hombres nativos o naturalizados mayores de 18 años, el voto sería universal –en el sentido de no restringido por razones económicas, sociales o culturales–, secreto y obligatorio; los analfabetos, que podían votar, no eran penados si no lo hacían. Cada elector sólo podría votar por las dos terceras partes del número de representantes a elegir.

Dado que en la Argentina el voto no estaba anteriormente limitado por aquellas razones, eran otras piezas las importantes en esta ley. Por ejemplo, la condición secreta del sufragio, que aspiraba a garantizar que el ciudadano ejerciera su derecho a elección sin presiones: ni caudillos de máquinas electorales, ni patrones, ni la fuerza pública podrían identificar las preferencias de cada votante, que emitiría su voto a conciencia. La obligatoriedad era otra cuestión relevante, ya que se buscaba garantizar la participación a fin de dotar de legitimidad a los futuros gobiernos, partiendo de la idea de que el desinterés por las cuestiones colectivas campeaba tanto entre los inmigrantes (se exhibían a modo de prueba las bajas tasas de nacionalización) como entre los nativos. El padrón a cargo del ejército brindaba garantías que otras autoridades difícilmente podían ofrecer. La cláusula de las dos terceras

partes de los representantes ponía fin al sistema de lista completa y buscaba garantizar la inclusión de las minorías. Con todo, mujeres, extranjeros no nacionalizados, habitantes de los territorios nacionales y, desde ya, menores de 18 años estaban excluidos. El presidente y su grupo parecían confiados en el poder de regeneración de la política que la nueva legislación tendría, así como en el efecto de integración social que las elecciones regidas por ella habrían de poseer.

En 1912, aplicándose la nueva ley, las elecciones de diputados en Santa Fe dieron un triunfo a la UCR. A pesar de que consiguieron algunas victorias locales, como ocurrió en 1914, los conservadores no lograron adaptarse a la nueva situación, que los exponía a una casi desconocida competencia electoral y, en 1916, fueron derrotados por la UCR. El reclamo de Sáenz Peña, en este caso de cara a sus propias fuerzas, había sido la creación de un partido orgánico, nacional y moderno, que los conservadores no consiguieron articular, aunque lo intentaron a través del Partido Demócrata Progresista. Es posible pensar, incluso, que toda la apuesta de la reforma descansaba en la idea de que eran partidos de ese tipo los actores necesarios para que la ley cumpliera sus objetivos profundos. Si bien el triunfo del radicalismo en las elecciones no fue excesivamente holgado, y la victoria de la candidatura de Yrigoyen en el Colegio Electoral estuvo en suspenso por cuestiones internas, con su elección se cerraba el período de predominio conservador y comenzaba la etapa del radicalismo en el gobierno.

Conjeturas: la cuestión de la democracia en la década de 1910

En muchas ocasiones se ha formulado la pregunta acerca de qué razones habrían impulsado al régimen a encarar una reforma de las reglas de juego político que terminaría alejando a sus miembros del manejo del estado, al menos de gran parte de él, durante unos quince años. Natalio Botana halló una fórmula que se volvió clásica para la cuestión cuando planteó la alternativa en términos de "salto al vacío" o "cálculo estratégico".

Conviene tener en cuenta varios elementos para intentar una respuesta. En principio, no era éste el primer ensayo reformista de los conservadores argentinos: ya se había intentado un cambio en 1902, ciertamente menos impactante. Luego, el estado de la opinión pública parecía entender que el sinceramiento de las prácticas electorales era imprescindible; la UCR venía insistiendo en ello desde hacía dos déca-

das, y el arraigo social del partido era respetable. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los conservadores reformistas no pensaron la reforma para ser derrotados, sino para abrir alguna participación acotada y subalterna a las fuerzas de oposición, que desactivara presiones y reclamos, dotara al régimen de legitimidad y que, al mismo tiempo, les permitiera retener los más importantes resortes de gobierno. Más allá de sus efectos y de los resultados electorales, para quienes detentaban el poder la reforma era una herramienta de continuidad, ya que confiaban en el triunfo de sus propias fuerzas.

En este sentido, un rápido repaso de otras situaciones puede ser de utilidad. Hacia 1870, en Europa la enorme mayoría de los grupos dirigentes veía la ampliación de los derechos vinculados a la ciudadanía política, entre los que el derecho al voto era central, como una peligrosa puerta a la conmoción social. Desde esa perspectiva, la democracia, asociada a aquella ampliación, pondría en manos de multitudes consideradas incultas y extremistas el manejo de los asuntos de gobierno. Sin duda, la presión de quienes no gozaban de esos derechos tuvo un papel importante en los cambios que paulatinamente empezaron a producirse en la legislación electoral desde comienzos del siglo XX. En esas transformaciones también incidió el hecho de que aquella percepción había cambiado: los gobernantes, aun presionados por sus adversarios, pasaron a suponer que la apertura electoral no alteraría sustancialmente el orden político ni social. En ese punto, las coincidencias con la apuesta de la dirigencia argentina son muchas.

Así, con ciertas excepciones nacionales fundadas tanto en la antigüedad del proceso de apertura como en su profundidad, antes de la Primera Guerra Mundial más del 90 por ciento de los varones adultos había alcanzado derechos de participación electoral en varios países europeos; en otros casos, esas cifras se ubicaron entre el 60 y el 80 por ciento para la misma fecha. El movimiento se consolidaría y se extendería aún más luego de la Gran Guerra, etapa en la que se produjo la apertura definitiva. Sin embargo, es evidente que en Europa esos porcentajes sobre el total de la población adulta eran más sencillos de alcanzar que en la Argentina, porque aquí la inmigración cambiaba el cuadro. En lo que respecta a las cifras, el efecto de la nueva legislación en las elecciones argentinas también fue visible. Así, por ejemplo, en las elecciones de 1910, en las que resultó electo Roque Sáenz Peña, votaron unas 199 000 personas, lo que representaba el 2,8 por ciento de la población total; en las de 1916, ya bajo la Ley Sáenz Peña, lo hicieron 724 000 ciudadanos, lo que elevaba la participación al 8,8 por ciento.

En Europa, la ampliación del derecho al sufragio se realizaba muchas veces aboliendo requisitos como el de la propiedad, la disponibilidad de recursos económicos o la capacidad de leer o escribir. En el caso argentino, las restricciones no habían sido exactamente ésas: los reclamos tenían que ver con el establecimiento de garantías para los comicios y el respeto a sus resultados. En este sentido, aun en un contexto legislativo más restringido, Inglaterra había establecido el voto secreto en 1872; Noruega lo había hecho en 1885; Dinamarca, en 1901, y Finlandia, en 1905. El panorama latinoamericano resulta más heterogéneo, pero en términos generales –y con la excepción de Argentina, Uruguay y México– los requisitos de ser propietario y saber leer, que en algunos escenarios nacionales se establecieron en el siglo XIX y constituían modos del voto censitario, fueron eliminados sólo luego de 1945.

A la luz de todos estos datos, es evidente que la apertura a formas democráticas a través de la extensión del derecho al voto o del establecimiento de garantías para su emisión sin coacciones no fue un fenómeno exclusivamente argentino, y que la elite local decidió, como en otros ámbitos y entre desafíos, voluntad reformista y cálculo político, ese cambio. Además, al momento de empeñarse en la reforma, los dirigentes argentinos contaban con modelos previos en los que la ampliación de los derechos políticos no había producido ningún cataclismo político o social. Sin embargo, en la Argentina, la idea de que el poder se retendría resultó errada, y, aunque el radicalismo era una fuerza moderada, ello devino en la pérdida del control conservador de parte de la administración del estado. Es probable que ese error y su resultado hayan sido los factores que hicieron que las elites percibieran la democracia como una amenaza en los años siguientes. De todas maneras, ni siquiera en los años cercanos a la sanción de la Ley Sáez Peña la prevención hacia formas ampliadas de democracia había desaparecido del todo entre importantes dirigentes conservadores argentinos: el 16 de septiembre de 1911, el general Roca señalaba, en una encuesta publicada por el diario *La Nación:* "En vez del voto obligatorio debiera pensarse en el calificado, pues el voto universal es la causa decisiva de nuestras malas costumbres electorales".

SEGUNDA PARTE
1916-1930

2. Los gobiernos radicales

Entre 1916 y 1930 se sucedieron tres gobiernos radicales, el último de ellos interrumpido por un golpe de estado. Durante esos años, uno de los conflictos políticos más relevantes se libró entre los grupos conservadores, alejados del control del estado debido a la aplicación de la Ley Sáenz Peña, y el radicalismo conducido por Hipólito Yrigoyen. La etapa culminó con el golpe militar que, el 6 de septiembre de 1930, derrocó a Yrigoyen e impuso al general Uriburu como presidente.

Yrigoyen llega a la presidencia

El 12 de octubre de 1916, rodeado de un notable fervor popular, Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia; comenzaba de este modo un ciclo de casi catorce años durante los cuales las principales disposiciones de las leyes electorales de 1912 rigieron los comicios en la Argentina. También se trató de un período en el cual la Unión Cívica Radical resultó imbatible en el ámbito nacional desde el punto de vista electoral. En 1922, a Yrigoyen lo sucedió otro presidente radical, Marcelo T. de Alvear; seis años más tarde, en 1928, Yrigoyen volvía a la presidencia luego de una gran elección, en la que los niveles de participación fueron altos. La presencia radical en Diputados también crecía en esos años. El período habría de cerrarse el 6 de septiembre de 1930, cuando el general José Félix Uriburu encabezó un golpe de estado con el apoyo de sectores de las fuerzas armadas, de gran parte de la oposición al radicalismo, la prensa e importantes franjas de la opinión pública. Con ese episodio se clausuraba la experiencia democrática más duradera en la Argentina del siglo XX, hasta la que se abriría en 1983.

Las elecciones de abril de 1916, en las que debían elegirse los miembros del Colegio Electoral que a su vez designaría al presidente, fueron ganadas por el radicalismo con el 46 por ciento de los votos emitidos,

aproximadamente. Las distintas formaciones conservadoras provinciales consiguieron el 25 por ciento de los votos. El Partido Demócrata Progresista (PDP) –creado poco tiempo antes sobre la base de la Liga del Sur, fuerte en Santa Fe, como alternativa conservadora liberal– rondaba el 13 por ciento, mientras que el Partido Socialista lograba casi el 9 por ciento. La victoria de la candidatura de Yrigoyen en el Colegio Electoral estuvo en duda hasta que se confirmó que votarían por él los electores del radicalismo disidente de Santa Fe.

Mesa electoral en 1916

La sanción de las leyes electorales impulsadas por el presidente Sáenz Peña, en 1912, inició el proceso que culminaría con el triunfo de la Unión Cívica Radical en las elecciones de 1916. Se eligieron en esa oportunidad los integrantes del Colegio Electoral que, finalmente, harían presidente a Hipólito Yrigoyen.



Archivo General de la Nación.

Sin embargo, el mundo político argentino estaba más fragmentado de lo que estos cuatro agrupamientos pueden sugerir. El radicalismo, desde antes incluso de la elección de 1916, se encontraba dividido en algunas provincias, y luego de la llegada al gobierno, esas divisiones se multiplicarían notablemente: casi no hubo provincia en la que no se produjeran conflictos internos, algunos muy agudos. Se entiende la importancia de estas pujas porque, en los hechos, las provincias eran los escenarios donde las elecciones tenían lugar. Durante la primera presidencia de Yrigoyen, las disidencias radicales no se articularon en un movimiento de alcance nacional, ni respondieron a razones idénticas o a perfiles ideológicos que pudieran ser reconocidos con claridad; en cambio, se trataba de peleas casi facciosas por el manejo de la administración o por el reconocimiento de los organismos del partido. Algunos intentos de las autoridades partidarias para lograr la reorganización fueron infructuosos y, en las elecciones de 1922, dos agrupaciones radicales presentaron candidaturas diferenciadas a presidente: la UCR, cuyo candidato fue Alvear, y la UCR Principista, que promovió la candidatura del dirigente entrerriano Miguel Laurencena. El principismo criticaba el estilo que Yrigoyen imprimía a la dirección del radicalismo oficial.

Los grupos conservadores habían fracasado, como se indicó, en la creación de una fuerza unificada de escala nacional que pudiera enfrentar a la UCR en 1916, y en los años siguientes esa unidad tampoco fue alcanzada, aunque se celebraron acuerdos electorales y se emprendieron acciones parlamentarias coordinadas. El PDP, a pesar de tener expresiones en algunos otros distritos, era un partido cuya base electoral estaba bien localizada en el sur santafecino.

Por su parte, el Partido Socialista (PS) tenía arraigo en la Capital Federal, donde logró competir con el radicalismo con cierto éxito; en el resto del país, aunque el socialismo tenía locales, en ocasiones prensa, militantes y candidatos, su poderío era escaso, con alguna excepción. Poco tiempo luego del comienzo de la presidencia de Yrigoyen, la Revolución de Octubre llevó a los bolcheviques al poder y abrió la experiencia de la Rusia soviética. La revolución, así como la guerra civil y la intervención extranjera que se sucedieron luego de octubre, conmovieron a todo el mundo político; en la Argentina, el PS –por cierto, el más importante de América Latina– terminó dividiéndose como en otros países. En principio, los disidentes (grupos más afines a la revolución bolchevique) constituyeron el Partido Socialista Internacionalista en 1918, uno de los núcleos del Partido Comunista que se fundó dos años más tarde. Ya a fines de la década de 1920, el socialismo su-

frió una nueva escisión cuando varios dirigentes crearon el Partido Socialista Independiente, que tuvo una vida relativamente efímera y estableció alianzas con sectores conservadores, hasta llegar a ubicar a algunos de sus hombres en importantes posiciones de gobierno en la década de 1930.

El socialismo frente a la UCR

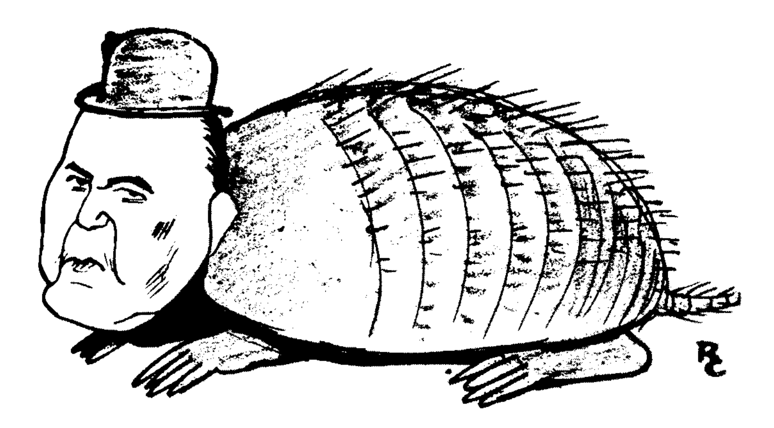
La Vanguardia, el diario del Partido Socialista, publicó el 12 de octubre de 1916, fecha de la asunción de Hipólito Yrigoyen, el siguiente análisis del hecho, que revela las dificultades que tenía el socialismo a la hora de caracterizar a la UCR, con la que además tuvo una fuerte competencia electoral en la Capital:

"Es indiscutible que el nuevo presidente representa la voluntad popular, libremente manifestada, y que, por lo tanto, tiene un significado democrático [...]. El pueblo trabajador sabe únicamente que en este día sube al poder un partido popular, pero de origen y carácter burgués, un partido apoyado por grandes terratenientes y capitalistas, que ha contado desde su primera hora con el concurso de los militares de profesión y cuenta hoy con la simpatía, el aplauso y la adulación interesada de los elementos clericales. Sabe sólo que comienza un gobierno de clase, como todos los anteriores, para el cual primarán siempre los intereses capitalistas sobre los derechos del proletariado. [...] Para concluir con el régimen actual, o atenuar sus males y reducir sus privilegios, no bastará con poner la primera magistratura en manos de un ciudadano, sino que será preciso formar esa conciencia colectiva que permite a los pueblos emanciparse a sí mismos –sin jefes, ni caudillos, ni presidentes– por obra de la instrucción general y de la educación cívica".

La disputa central: la importancia de las imágenes

Más allá de las dinámicas propias de las provincias y de las disidencias internas que se producían en las agrupaciones, durante estos años la disputa política argentina tuvo su núcleo en el conflicto entre el radicalismo y quienes habían sido los beneficiarios del antiguo orden. En esas luchas, desempeñaron un papel de importancia las imágenes que de sí mismos y del adversario construyeron los contendientes.

Desde fines del siglo XIX, en particular luego del suicidio de Leandro N. Alem ocurrido en 1896, Yrigoyen había ganado un prestigio inigualado por ningún otro dirigente radical. Todavía hoy sigue llamando la atención su tipo peculiar de conducción. Sin pronunciar grandes discursos, más proclive a la charla individual e íntima, críptico en sus escritos, construyendo de sí mismo una imagen sobria y austera, alejado de cualquier ostentación, Yrigoyen fue objeto de devoción por parte de amplios grupos populares. Al mismo tiempo, para él y también para muchos otros dirigentes y activistas radicales, la UCR era algo más que un partido político. Según esta perspectiva, los partidos eran agrupaciones efímeras, que sólo perseguían intereses sectoriales, parciales y, por eso mismo, mezquinos. En cambio, el radicalismo era concebido como la expresión de la mismísima nación, de toda ella; los límites que los radicales atribuían a tal entidad tendían a aproximarla imaginariamente a otra, cuya evocación tenía también enorme fuerza: el pueblo. Su programa de gobierno, sostenían, era la propia Constitución Nacional. Marcelo T. de Alvear, un dirigente moderado, proclive a configurar la disputa política en términos menos absolutos, señalaría años más tarde, revelando lo extendido de estos supuestos que identificaban al radicalismo con la nación, que "ser radical es ser dos veces argentino". La certeza de constituir la "causa" de la nación frente al "régimen" –ambas concebidas como entidades incompatibles, excluyentes– era una pieza central de la identidad radical, que se ponía en juego más allá de la coyuntura electoral.



Caricatura de Hipólito Yrigoyen, como "El peludo", por Ramón Columba.

Por su parte, quienes habían manejado los asuntos públicos en la etapa previa tendían a pensar que, por razones de experiencia, posición social

y educación, eran quienes debían continuar en esa función. En torno a estas cuestiones, conviene tener en cuenta que el proceso de transformación social evocado en el capítulo anterior –algunos de cuyos rasgos fueron la urbanización, la aparición de nuevas formas del conflicto social, la presencia de grandes masas inmigrantes– fue visto por muchos miembros de las elites como un fenómeno peligroso, que contribuía a la alteración de un orden que apreciaban. Se sumaba al cuadro la imprevista derrota electoral de 1916, que ponía en manos nuevas la dirección de parte de la administración nacional y algunas provinciales.

Sin embargo, no debe suponerse que la llegada del radicalismo al gobierno significó un cambio violentísimo en este plano, ya que la dirigencia radical, al menos parcialmente, tenía procedencias sociales muy semejantes a las de los miembros del régimen. Pero también integraron las filas de la UCR hombres que exhibían otros orígenes, quienes accedieron luego de 1916 a los elencos de gobierno y parlamentarios: algunos altos funcionarios y diputados fueron hijos de inmigrantes, lo que significaba la ruptura de una pauta previa bastante firme. Entre sus adversarios conservadores, paulatinamente se extendió la imagen de los gobiernos radicales como gobiernos de "los incapaces", miembros de un partido que se imponía, sin más virtudes ni méritos, por la supremacía del voto y el poder del número. Otra nota que la oposición en general, no sólo la conservadora, destacó por la negativa fue la ruptura del protocolo en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo por parte de Yrigoyen, que durante su presidencia no concurría a las sesiones de apertura ni enviaba a sus ministros a responder las interpelaciones, y en ocasiones trababa o desconocía disposiciones del Congreso.

Así, en las imágenes que conservadores y radicales construyeron del adversario, fueron puestos en primer plano rasgos que, si bien existían en la realidad, aparecían exagerados y cargados de una dimensión social muy marcada: "Hemos pasado del escarpín de baile a la alpargata", se horrorizaba el senador conservador Benigno Ocampo, el mismo día de la asunción de Hipólito Yrigoyen.

Del llano al gobierno

El radicalismo enfrentaba ahora el tránsito de partido de oposición, que no dudaba en apelar ocasionalmente a la protesta armada, sin más que ofrecer que un lugar en el combate por la causa, a partido de gobierno. Esa transformación venía impulsada por distintas circunstancias: por un

lado, debía someterse regularmente a elecciones; por otro, debía asumir responsabilidades de gestión. El cuanto al primer punto, el desempeño radical fue destacable, y la UCR amplió sustantivamente el número de sus representantes en la Cámara de Diputados. En 1917, había allí 45 representantes radicales sobre un total de 114; en 1922, al asumir Marcelo T. de Alvear la presidencia, los diputados radicales eran 101 sobre 150, aunque a poco de andar el bloque se partiría, augurando la división partidaria que tuvo lugar en 1924. En parte religión cívica forjada en los años heroicos del siglo XIX y en parte máquina electoral afinada que en varias zonas se entramaba con el estado; un cierto tono popular en su composición social, difícil de definir estrictamente y con precisión, pero también difícil de desmentir; una dimensión nacional que convivía con fuertes tensiones entre los diversos grupos provinciales que la integraban, de los cuales, sin embargo, ninguno resignaba la identidad radical: la UCR exhibió todos estos rasgos al mismo tiempo.

A pesar de que, con el paso de los años, la potencia electoral del radicalismo quedó en evidencia, el comienzo en 1916 fue complicado. La posición del gobierno nacional no era cómoda, dado que tanto el Congreso como muchos de los gobiernos provinciales estaban en manos opositoras. Yrigoyen buscó desactivar estas bases de la oposición. En el caso de las provincias, apeló a las intervenciones, que se sucedieron a lo largo de su presidencia y en varias oportunidades se establecieron por decreto, con el argumento de que sus gobiernos habían llegado a esa posición por efecto de la manipulación de las elecciones y que la auténtica autonomía era para los pueblos. Algunas provincias fueron intervenidas en más de una oportunidad. En cuanto al Congreso, las sucesivas elecciones consolidaron a la bancada radical, aunque la Cámara de Senadores continuó siendo un bastión opositor.

En cuanto al desempeño en el gobierno, hacia 1916 los radicales apenas disponían de dirigentes entrenados en el manejo de la administración o con práctica parlamentaria reciente a nivel nacional. Entre los varios frentes que debió asumir el gobierno radical se destaca el de la política exterior, ya que la Primera Guerra Mundial continuaba en curso. Yrigoyen decidió mantener la neutralidad que había adoptado el gobierno argentino ante el conflicto, mientras que la mayor parte de la oposición y de la gran prensa se había tornado favorable al bando de Francia, Inglaterra, Italia, la Rusia zarista y, luego de abril de 1917, de los Estados Unidos. El gobierno norteamericano presionó para que el argentino cambiara de posición y rompiera relaciones con sus enemigos. Y si bien algunos episodios puntuales –como el hundi-

miento de los buques argentinos Monte Protegido y Toro, en la primera mitad de 1917– tornaron la cuestión más acuciante, el presidente mantuvo su actitud.

La guerra había impactado también en la economía local. Al comienzo del conflicto, se produjo una baja general en el comercio internacional, y tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron. Luego, la exportación de productos agropecuarios repuntó, mientras las importaciones continuaban deprimidas. Así, la balanza comercial resultó favorable, aunque la baja de las importaciones resintió el desempeño de la administración, que en buena medida se sostenía con los impuestos aduaneros a los productos que ingresaban al país. El cuadro se completaba con una baja importante en los salarios reales. Finalizada la guerra en 1918, se produjo cierta recuperación parcial de la actividad económica internacional, que se frenaría hacia 1920-1921. Incluso en esa etapa, la inflación complicó la situación, y en los comités radicales llegó a venderse "carne radical" y "pan radical", más baratos que los corrientes. A su vez, Yrigoyen intentó solucionar el problema del financiamiento de las actividades estatales, que dependía casi exclusivamente de los impuestos al comercio exterior. Con ese objetivo, presentó al Parlamento un proyecto de impuesto a los ingresos personales, que sin embargo no fue tratado.

En este marco, y en lo que se refiere a su posición ante la cuestión social, Yrigoyen comenzó su gestión intentando ubicar al gobierno como árbitro frente a los conflictos obreros. Ésa fue la actitud asumida, por ejemplo, a fines de 1916 ante una huelga lanzada por dos sindicatos que, en una economía dedicada a la agroexportación, tenían un papel importante: los que agrupaban a los trabajadores portuarios, po parte, y a los ferroviarios, por otra. Esa gravitación otorgaba a las nizaciones la posibilidad de instalarse en posiciones de cierta fu la hora del conflicto. El presidente recibió a las delegaciones sindi atendió varios de sus reclamos y se negó a reprimir, respuesta c demandaban las asociaciones patronales. La política de Yrigoye criticada también por la oposición conservadora, que la denun por su debilidad ante el desorden social, cuando no por darle imp La agitación que siguió a la Revolución de Octubre, tanto entre peranzadas fuerzas de izquierda como entre quienes imaginaba habría de acarrear calamidades sociales inminentes, angostó el es para el desarrollo de esa política presidencial, que tendría su final episodios de la Semana Trágica. En enero de 1919, una huelga de l bajadores metalúrgicos de los talleres Vasena, en la ciudad de B

Aires, culminó en una huelga más amplia; las fuerzas policiales fueron desbordadas y sólo días después el ejército logró controlar la situación. Ya en 1921, se produjeron otros conflictos importantes, como el de La Forestal y el de la Patagonia, que fueron reprimidos duramente, como examinaremos en el capítulo 4.

Luego de la Revolución Soviética, surgieron en la Argentina agrupaciones peculiares. La Liga Patriótica Argentina, fundada en 1919, cuando tuvo lugar la Semana Trágica, es un buen ejemplo. Algunas estuvieron vinculadas a las asociaciones patronales; otras se nutrieron de jóvenes de la elite y destacados dirigentes conservadores, pero también de radicales y demócrata progresistas, al punto que el diario oficialista *La Época* solía publicar sueltos con el anuncio de las reuniones de la Liga, conducida por Manuel Carlés, también radical. Todas se manifestaban hostiles hacia el activismo obrero y de izquierda, con algunos tonos xenófobos y apelaciones exaltadas a la movilización patriótica contra lo que concebían como el caos social. Si bien no constituyeron partidos políticos en regla, intervinieron en los asuntos públicos organizando conferencias, congresos y campañas, y también actuando como grupos de choque que, en los hechos, desafiaban el ejercicio del monopolio estatal de la violencia. En la mayor parte de los casos, el gobierno de Yrigoyen toleró ese desafío con escasa reacción. En el caso de la Liga, la convocatoria se extendió a las mujeres, quienes a través del desarrollo de tareas caritativas, afianzaron relaciones con sectores católicos que se dedicaban a ello hacía tiempo. Eran éstas las expresiones de un nuevo tipo de agrupación de derecha, dispuesta entonces a desarrollar alguna forma de activismo social y a la disputa callejera para enfrentar a quienes consideraba sus enemigos.

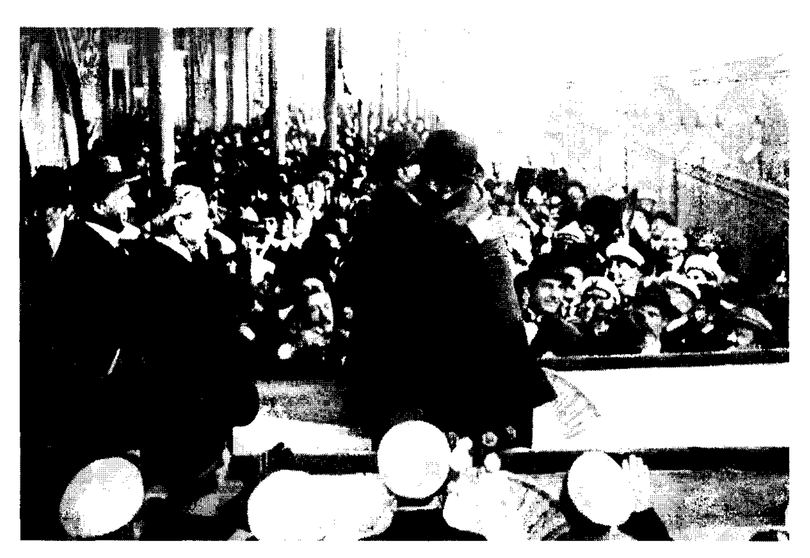
La candidatura de Marcelo T. de Alvear

Marcelo T. de Alvear era miembro de una de las familias más con das y ricas de la Argentina, cuyo linaje se remontaba al siglo XVII también un radical de los primeros tiempos, ya que siendo muy j había participado en la Revolución del Parque y luego en el lev miento de 1893, cuando ocupó posiciones de responsabilidad. En el radicalismo decidió volver a presentarse a elecciones tras la ref electoral y Alvear se contó entre los ocho diputados del partido q incorporaron al Congreso. Por entonces, la relación de Alvear c política era irregular: largas estancias en París, donde tenía una

dencia, se combinaban con la actividad partidaria. Al llegar Yrigoyen a la presidencia, le ofreció el cargo de ministro de Guerra a Alvear, quien declinó la propuesta; finalmente fue nombrado ministro plenipotenciario en París, precisamente. Durante la guerra y también en ocasión de las negociaciones posteriores a la paz, Alvear manifestó diferencias con las posiciones de Yrigoyen, pero terminó por aceptar la línea fijada por el presidente. Más allá de la política, los lazos de afecto entre Yrigoyen y Alvear eran antiguos.

Presidentes radicales

El presidente Yrigoyen recibe a Marcelo T. de Alvear, ya presidente electo, que llegaba desde París, en septiembre de 1922. Ambos dirigentes tenían una antigua relación iniciada en tiempos de la Revolución del Parque, en 1890, que no impidió las disputas internas en el radicalismo durante la presidencia de Alvear. Finalmente, el partido se quebraría en 1924.



Archivo General de la Nación.

Hacia 1921, comenzaron las negociaciones para definir la próxima candidatura radical a la presidencia: aunque varios nombres circularon, el parecer de Yrigoyen definió la cuestión a favor de Alvear, quien fue convertido en el candidato oficial en la Convención Nacional de la UCR

que sesionó en marzo de 1922. Vista a la luz de disidencias, conflictos y distanciamientos posteriores entre ambos, aquella decisión de Yrigoyen puede llamar la atención. Sin embargo, es necesario considerar que, hacia 1922, Alvear era un importante dirigente, con experiencia parlamentaria y diplomática, de lealtad probada incluso a pesar de las diferencias de criterio, con extensa pertenencia partidaria y relación personal con el líder.

Durante la campaña electoral de 1922 no faltaron los episodios de violencia, en especial en algunas provincias. En las elecciones, celebradas en abril mientras el candidato se hallaba todavía en París, la UCR que sostenía su candidatura se enfrentó a la Concentración Nacional –constituida por los grupos conservadores–, al PDP, al PS y a la UCR Principista. Las listas de electores radicales lograron imponerse en 12 distritos sobre un total de 15 (en 1916 lo habían hecho solamente en 6).

¿Un nuevo eje del conflicto político?

En los nombres de los ministros designados por Alvear se leyó un primer gesto de autonomía respecto de Yrigoyen, ya que sólo uno de ellos sostenía contactos estrechos con el ex presidente. Ese conflicto se intensificaría y se convertiría en una de las cuestiones políticas relevantes durante aquellos años. En esta ocasión, los radicales que, sin renegar de su condición de tales, se distanciaron de Yrigoyen lograron articular una alternativa nacional, y luego de que el bloque parlamentario se separara en los hechos desde 1923, en 1924 los disconformes organizaron un partido diferenciado, la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Algunos de sus jefes fueron Vicente Gallo, Leopoldo Melo, los Lencinas de Mendoza, Eduardo Laurencena de Entre Ríos. Muchos tenían largas y destacadas trayectorias radicales, que incluían desde la participación en revoluciones hasta el ejercicio de responsabilidades parlamentarias y ejecutivas: Gallo era, por ejemplo, ministro del Interior de Alvear. El rasgo en común era la crítica a Yrigoyen, que también tenía diversos orígenes, acompañada de la pretensión de constituir el auténtico radicalismo, cuya tarea era retomar la línea expresada en los documentos iniciales del siglo XIX, donde se denunciaba la actitud política personalista. Más allá de esas posiciones mínimas, era difícil hallar homogeneidad.

Por su parte, los yrigoyenistas continuaban reteniendo la estratégica provincia de Buenos Aires y hacían pie firme en la Capital Federal y otros distritos. En esta corriente comenzó a plantearse una lectura de la

gestión de Yrigoyen que tendría larga vida en la UCR. Interpretando el antipersonalismo como una escisión conservadora impulsada por quienes no eran *verdaderamente* radicales, los partidarios de Yrigoyen hicieron de su figura la encarnación de una política popular, atenta a los más humildes, antiimperialista, y de defensa de la soberanía nacional. Dado que las relaciones entre el presidente y el caudillo eran inestables, en ocasiones la crítica yrigoyenista se detenía ante la figura de Alvear; sin embargo, en el acto de transmisión del mando en 1928, la acusación de traición alcanzó al presidente saliente.

Fragmentos del mensaje del presidente Alvear al abrir las sesiones ordinarias del Congreso en 1928:

Los principios políticos que atrajeron mis simpatías y tuvieron a su servicio toda mi vida ciudadana mantienen su preeminencia en todo el país, puesto que esos principios han sido invocados por los dos grandes núcleos de opinión que han intervenido en la reciente campaña electoral. Sé muy bien que la relativa imprecisión con que esas ideas se anuncian o se relacionan con las formas positivas de su interpretación ha dado ocasión a que se discuta sobre quiénes las entienden bien o las aplican de mejor modo en beneficio del país. Sé también que en la exaltación apasionada de esa controversia, los unos niegan a los otros hasta la sinceridad de sus respectivas aseveraciones. Todo ello significa, a mi juicio, solamente un afán saludable de esclarecimientos sucesivos [...]. Pero la observación desapasionada impone a la sinceridad el reconocer que las costumbres políticas han [...] asegurado el predomino veraz y definitivo de los valores representativos de la democracia.

Presidencia Alvear 1922-1928. Compilación de mensajes, leyes, decretos y reglamentos, tomo I, Buenos Aires, Pesce, 1928.

El Congreso fue uno de los lugares en que se libró este conflicto entre personalistas y antipersonalistas. Gran parte de las bancas radicales en Diputados estaban en manos yrigoyenistas, y la obstrucción, llevada adelante incluso a través de la ausencia en el recinto, fue una práctica corriente, de la que Alvear se quejó sistemáticamente en sus mensajes al cuerpo. A través de decretos, el presidente llegó a clausurar en tres oportunidades las sesiones extraordinarias, en razón de la parálisis parlamentaria. Por su parte, el antipersonalismo no desdeñó el acuerdo

con sectores conservadores. Pero una de las piezas clave para dirimir el enfrentamiento era el control de la provincia de Buenos Aires, que –se suponía– habría de permitir al antipersonalismo desmontar la máquina electoral yrigoyenista. Aun presionado por algunos de sus ministros –Gallo en particular–, Alvear no tomó la decisión de intervenir la provincia –aunque a lo largo de su mandato las intervenciones fueron diez–, y en 1928 la UCR, que nuevamente impulsaba la candidatura de Yrigoyen, triunfó de manera contundente sobre sus competidores antipersonalistas, aliados a los conservadores.

Las líneas de acción del gobierno de Alvear

En un plano que comenzaba a ser relativamente sensible, como el del petróleo, debe destacarse la gestión del general Enrique Mosconi al frente de YPF. En junio de 1922, ya a fines de su presidencia, Yrigoyen había creado una Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el área del Ministerio de Agricultura, y Mosconi fue puesto al frente del organismo por Alvear, a comienzos de su gestión. También se creó la Fábrica Nacional de Aviones de Córdoba, en 1927. En ambos casos, una nueva preocupación militar por cuestiones industriales asociadas a la defensa nacional determinó esas decisiones; en el futuro, esa política habría de extenderse. Recuperando la iniciativa impositiva de Yrigoyen, Alvear volvió a proponer al Congreso la creación de un impuesto a los bienes personales, que tampoco recibió tratamiento.

Por otra parte, el Ejecutivo impulsó la sanción de varias leyes laborales; algunas reglamentaron el trabajo de mujeres y menores en los territorios nacionales y en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en 1926 se estableció el descanso dominical en este último ámbito. En el mismo plano, se destaca el laudo de Alvear en un fuerte conflicto desatado entre cañeros y obreros de los ingenios tucumanos, por una parte, y las empresas, por otra. La intervención de Alvear devino en la creación de una entidad provincial encargada de tratar tales conflictos en el futuro. En 1924, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que establecía el feriado para el 1° de Mayo, asociando la efemérides proletaria con la fecha de la sanción de la Constitución de 1853. Aunque el proyecto no fue tratado, el feriado se estableció por decreto. Entre la legislación referida a las cuestiones sociales y laborales, también debe contarse el proyecto de extender el sistema de jubilaciones, impulsado por el Ejecutivo en 1924. Ni las pa-

tronales ni las centrales obreras aceptaron el proyecto –en el último caso porque suponía la disminución del salario de bolsillo–, que terminó fracasando.

La conflictividad social tendió a descender en los años de Alvear, si se la compara con la del período 1917-1921, que había resultado singularmente alta. Ello se evidencia en la disminución del número de huelgas y huelguistas involucrados, y en cierto estancamiento del reclutamiento sindical. Sin duda, la recomposición económica producida luego de la crisis de la inmediata posguerra, soportada por la administración de Yrigoyen, fue un factor determinante, en particular por la recuperación de los salarios reales. En ese cuadro, sobre todo desde 1923-1924, la exportación agropecuaria volvió a funcionar con cierta eficacia, hasta que una nueva crisis, esta vez más profunda, reveló sus límites a partir de 1929.

La vuelta de Yrigoyen

A pesar del desafío que significó la escisión antipersonalista, la UCR que permanecía fiel a Yrigoyen logró triunfar en las elecciones de renovación parlamentaria de 1924 y 1926. De todas maneras, es probable que la disidencia radical alentara las esperanzas conservadoras de obtener la derrota del yrigoyenismo en las elecciones presidenciales previstas para 1928. En los comicios celebrados en abril de este último año, la UCR obtuvo 839 000 votos y 249 electores, y la UCR Antipersonalista, con el apoyo conservador, 439 000 votos y 127 electores. Luego se ubicaron las listas del PS y del PDP. La campaña fue particularmente intensa: en las elecciones hubo una gran participación, la mayor hasta ese momento, y el triunfo de Yrigoyen fue contundente en todos los distritos en los que se presentaron listas de electores que apoyarían su candidatura.

El radicalismo yrigoyenista vio en estos resultados la confirmación de muchos de sus presupuestos, en particular el que indicaba que Yrigoyen era el líder de las mayorías populares. En sus términos, éste era un plebiscito que avalaba las políticas pasadas del caudillo y también las futuras. La lectura de la elección como plebiscito era absolutamente consistente con aquella otra imagen que el radicalismo leal a Yrigoyen venía labrando de sí mismo y del conflicto político argentino: los auténticos radicales –expresión de la nación y del pueblo– frente al régimen –oligárquico y conservador–, sin espacio para otros actores, articulando toda la disputa en un combate esencial.

Si bien los conservadores y el antipersonalismo habían podido sospechar el triunfo de Yrigoyen, el dato significativo era su magnitud; ella hacía evidente la dificultad de conseguir una derrota del yrigoyenismo por la vía electoral. Muchos de sus dirigentes veían en la falta de cultura cívica popular la causa del triunfo radical. En algunas reflexiones se ponía incluso en duda lo atinado de la reforma electoral de 1912, y pronto se enlazaron con ellas las consideraciones que evaluaban otras vías para recuperar el gobierno. Así, luego de las elecciones y antes del traspaso del mando, circularon rumores acerca de un golpe de estado, que conduciría el general Agustín P. Justo, quien, sin embargo, lo desmintió públicamente.

Entre los opositores a Yrigoyen también se contaron algunas agrupaciones que comenzaban a llamarse nacionalistas, muchos de cuyos integrantes tendrían una actuación destacada en la década siguiente. Si bien exhibían cercanías con las franjas conservadoras más radicalizadas, sus relaciones con ellas no fueron siempre apacibles. Tenían, además, algunas coincidencias con intelectuales católicos, aunque no era ésta todavía la nota dominante en su pensamiento, y con aquellas organizaciones de derecha surgidas en tiempos de la Semana Trágica. Incluso exhibían algún perfil generacional relativamente homogéneo: muchos eran jóvenes nacidos con el siglo, que no habían desdeñado la actividad literaria en los ámbitos cercanos a las vanguardias, aparecidas en Buenos Aires en los tempranos años veinte. *La Nueva República*, publicación fundada en 1927, fue uno de sus emprendimientos más característicos, y los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, junto a Ernesto Palacio, nombres conocidos de sus elencos. Ellos buscarían ofrecer el soporte intelectual y suministrar cuadros de gobierno al uriburismo luego del golpe de 1930.

El camino hacia el golpe de estado

Hipólito Yrigoyen comenzaba su segundo mandato amparado en el notable éxito electoral. Sin embargo, pronto los primeros indicios de la crisis que finalmente habría de llevar a la caída de Wall Street en octubre de 1929 se hicieron sentir en la Argentina. Los fondos fiscales menguaron, el gasto del estado disminuyó y afectó una de las piezas centrales de la maquinaria oficial: se produjo una baja de sueldos y comenzó un proceso inflacionario. Ese año de 1929, el conflicto político se intensificó, ya que el oficialismo volvió a recurrir a las intervenciones para

terminar de reducir a los opositores. Pronto se llegó a la violencia, que en diciembre se cobró la vida de Carlos Washington Lencinas, dirigente mendocino que había sido gobernador de la provincia entre 1922 y 1924, cuando fue intervenida. Lencinas había sido parte del antipersonalismo y al momento de su muerte era senador nacional electo, aunque el Congreso había rechazado su diploma. Poco después, el propio Yrigoyen era víctima de un atentado, fallido, a cargo de un anarquista que, al parecer, actuaba en soledad. Tampoco faltaron los enfrentamientos callejeros entre los grupos de choque del nacionalismo, como la Liga Republicana, a la que más adelante se sumaría la Legión de Mayo, y los partidarios radicales. En la opinión pública el clima estaba cambiando, y a medida que avanzaba el año 1930, se multiplicaron las movilizaciones contra el gobierno.

La violencia se volvió más intensa en ocasión de la campaña previa a las elecciones de diputados nacionales para renovar parcialmente el cuerpo, que tuvieron lugar ese mismo año. Al momento de los comicios, se produjeron algunas denuncias de fraude y de presión de los interventores y la policía. Esta vez, los candidatos radicales a diputados, en conjunto, pasaron del 57,4 por ciento obtenido en 1928 al 41,7 por ciento; en la Capital, el radicalismo ocupó el tercer lugar, luego del Partido Socialista Independiente y del PS. De todas maneras, en las cuentas globales continuaba siendo la primera fuerza.

La oposición incluía ya públicamente no sólo a los partidos sino también a órganos de prensa, como el muy difundido diario *Crítica,* y, en poco tiempo, a agrupaciones estudiantiles. En esos ámbitos, lo que podía verse como un éxito electoral propio aún parcial –o, al menos, como el retroceso del radicalismo– no desactivó las simpatías de muchos por los planes de un golpe de estado a cargo del ejército, un elemento en los cálculos políticos cuya importancia se revelaría duradera en la Argentina del siglo XX. Desde fines del siglo XIX, se había avanzado en la constitución de fuerzas armadas más modernas, con instituciones que se afianzaban, criterios más o menos estandarizados que regulaban ascensos y jerarquías internas, y una estructura burocrática en crecimiento, ya que, desde la sanción de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, a fines de 1901, era recibido anualmente un importante número de reclutas que debía ser sometido a control médico, alojado, entrenado y reducido a la disciplina militar. El ejército se profesionalizaba y al mismo tiempo se tornaba una corporación que tendía a suponerse depositaria casi exclusiva de la tradición patria. La política yrigoyenista de reparación de las situaciones de oficiales que habían partici-

pado de la rebelión de 1905 vino a cruzarse con aquella lógica profesional, poco afecta a admitir la intervención externa en la fuerza. A lo largo de la década del veinte, cuando la consolidación profesional se acentó aún más y halló en el general Agustín P. Justo, ministro de Guerra de Alvear, un importante impulsor, la división entre oficiales que planteaban la necesidad de privilegiar los criterios profesionales y los que se asumían radicales tomó forma: los primeros se organizaron en logias, de las cuales la San Martín fue una de las más importantes, y en ellas creció el antiyrigoyenismo.

En los momentos anteriores al 6 de septiembre, existían en el ejército dos corrientes implicadas en la organización del golpe: una reunida alrededor de Justo, y la otra dirigida por el general José F. Uriburu; ambas tenían contactos con dirigentes civiles. Justo convocaba, en general, a quienes exhibían un perfil ideológico conservador moderado y liberal, entre los cuales se contaban varios antiguos radicales, mientras que en el uriburismo se alineaban algunos antiguos conservadores ahora virados hacia posiciones de derecha más extremas, como Carlos Ibarguren, y los jóvenes nacionalistas, varios de los cuales imaginaban que Uriburu sería el líder militar y de autoridad que pondría fin a los supuestos desquicios que la democracia había acarreado.

Por su parte, el PS y el PDP exhibieron recelos ante la salida golpista, más allá de que algunos de sus miembros estuvieran dispuestos a apoyarla. A pesar de tal cautela, ambas agrupaciones compartían el diagnóstico que indicaba que el yrigoyenismo había llevado a las instituciones a una situación crítica.

Otro factor a tener en cuenta a la hora de explicar este golpe de estado es la intensa competencia interna entre altos funcionarios radicales cercanos al presidente, que incluyó planes contrapuestos y bastante mezquinos para el reemplazo de Yrigoyen. Además, esos pleitos ponían al propio presidente en el papel de quien debía resolver las tensiones. En los últimos tiempos, cuando las actividades de los futuros golpistas eran públicas y visibles, mientras algunos ministros llegaron a pronunciarse a favor de la represión, otros entendían que la situación no lo reclamaba: fue la posición de estos últimos la que se impuso. El 6 de septiembre, prácticamente sin resistencia, triunfó el golpe en Buenos Aires, como resultado del avance de una columna de cadetes relativamente pequeña, con apoyo civil. En el interior, la situación se repetía con menos despliegue militar aun que en el caso de la Capital.

El golpe de estado del 6 de septiembre de 1930
Aviones sobrevuelan la ciudad de Buenos Aires el 6 de septiembre. El movimiento militar no encontró escollos de importancia en su camino y las fuerzas involucradas rápidamente tuvieron controlada la situación en la ciudad. A poco de andar, sin embargo, quedaría claro que el radicalismo derrocado conservaba mucho de su arraigo electoral.



Archivo General de la Nación.

Interpretaciones

Si bien no hubo resistencias significativas, los golpistas no contaban con guarniciones importantes y muchos mandos estaban cerca del oficialismo radical, lo que hace difícil interpretar el golpe como una acción institucional del ejército. Por otra parte, desde la propia arena política se había alentado la intervención militar, aunque el argumento utilizado con mayor frecuencia aludía a la necesidad de restaurar las reglas de juego institucional, que habrían sido violadas por Hipólito Yrigoyen. El "Manifiesto de los 44", firmado por parlamentarios opositores poco antes del golpe, exigía al gobierno "el cumplimiento de la Constitución Nacional". Estos planteos no bastan para caracterizar definitivamente el golpe ni para descifrar los impulsos auténticos

de los actores, pero no deben desestimarse. Sinceros o no, sugieren los límites que tenía una acción de este tipo: debía ser presentada como un medio para restaurar la ley. El uriburismo, que con mayor osadía dejó entrever destellos de un proyecto corporativo más cerril, pronto fue derrotado.

De lo delicado de la operación de interpretación que debieron realizar los participantes del juego político da cuenta la declaración del dirigente socialista Nicolás Repetto, aparecida el 7 de septiembre de 1930 en *La Vanguardia* : "Nos duele ver confundido hoy a nuestro país en el montón de gobiernos sudamericanos". En la visión de Repetto, el movimiento del día anterior había arrastrado a la Argentina a la situación vivida en países en los que el motín cuartelero era habitual. Debe considerarse, además, que en los días previos al golpe algunas actitudes de revancha social se entramaron con el derrocamiento del radicalismo. El mismo 6 de septiembre, comenzaron los despidos de activistas sindicales en la Unión Telefónica, mientras un funcionario policial anunciaba a los trabajadores gráficos en huelga que "había terminado el escándalo".

El gobierno surgido del golpe militar fue encabezado por el general José F. Uriburu como presidente provisional. En la coyuntura que se abría, con la UCR derrocada, una nueva disputa política se libró entre los bandos que habían participado del movimiento. Los apoyos del presidente no eran demasiados: los nacionalistas y los conservadores más extremos, entre los civiles, y algunos oficiales ideológicamente cercanos, que de todos modos estaban lejos de ser mayoritarios en el ejército. En esta institución, el sector de Justo era notoriamente más poderoso, y su jefe contaba con un amplio sistema de contactos en el mundo político, sostenido en su antigua participación en el radicalismo y su condición de ex ministro.

El uriburismo intentó impulsar una reforma corporativista de la Constitución Nacional, rápidamente bloqueada por los partidos que habían participado en el golpe. Uriburu ensayó luego una táctica que buscaba plebiscitar su gestión a través de elecciones escalonadas, pero esta salida también fracasó. La disputa entre Uriburu y Justo terminó con el triunfo de este último, quien fue finalmente el candidato oficialista a presidente en las elecciones celebradas en noviembre de 1931. Al año siguiente, se hizo cargo de la presidencia.



El golpe del 6 de septiembre según sus responsables

Los grupos complicados en el golpe de estado el 6 de septiembre dieron a conocer un manifiesto, cuyo texto final fue el resultado de una intervención del sector de Justo sobre la propuesta del uriburismo. Se indicaba allí que las "promesas de dádivas personales" habían sido los mecanismos utilizados para "corromper las conciencias" obteniendo de ese modo "sanciones plebiscitarias" a favor de las políticas oficialistas. Sus autores sostenían que tenían "fundadas razones para admitir que el desengaño de los que se han dejado tentar con aquellas promesas es definitivo". A su vez, aclaraban que "el gobierno provisorio, inspirado en el bien público y evidenciando los patrióticos sentimientos que lo animan, proclama su respeto a la Constitución y a las leyes vigentes y su anhelo de volver cuanto antes a la normalidad". Más adelante indicaban que "los miembros del gobierno provisorio contraen ante el país el compromiso de honor de no presentar ni aceptar el auspicio de su candidatura a la presidencia de la República".

Las citas textuales del manifiesto están tomadas de Tulio Halperin Donghi, *La República imposible (1930-1945)*, Buenos Aires, Ariel, 2004 [tomo V de la Biblioteca del Pensamiento Argentino].

De 1912 a 1930

Un balance sobre la experiencia de la democracia argentina entre la sanción de la Ley Sáenz Peña y el golpe de estado de 1930 puede emprenderse desde distintas perspectivas. En principio, si se tiene en cuenta que el intento de los reformistas, en particular del presidente Sáenz Peña, había sido promover la aparición de partidos orgánicos como actores del sistema, debe admitirse que el resultado fue bastante dudoso. El radicalismo se encontraba lejos de ese modelo, y tampoco los conservadores lo habían conseguido. Puede ser que el Partido Socialista, parcialmente, se acercara más al ideal, pero no era la agrupación que le daba el tono al funcionamiento de la política en la Argentina, a la que solía criticar con la expresión "política criolla" para destacar sus defectos. Así, el sistema de partidos en conjunto asumía los rasgos de los dos actores más poderosos, radicales y conservadores, que no exhibían aquellas anheladas características orgánicas. De todas

maneras, debe reconocerse que esos rasgos tampoco eran excesivamente frecuentes en otros ámbitos nacionales, ni en el horizonte sudamericano ni en el europeo.

Por otra parte, se ha mencionado ya la existencia de denuncias acerca de las presiones ejercidas a la hora de los comicios por autoridades locales, así como de intervenciones que permitían manejar las fuerzas policiales en provincias con un efecto similar hacia la oposición. Si bien en este período no se registraron objeciones masivas ni impugnaciones amplias a los resultados electorales, tampoco faltaron las quejas puntuales, en particular en la elección de 1930. Así, las disposiciones de las leyes de 1912 regían globalmente, pero una mirada más atenta a lo que ocurría a escala local permite corroborar las violaciones de las que ocasionalmente eran objeto.

La experiencia surgida de la ampliación de los derechos electorales en la Argentina estuvo a su vez condicionada por algunos modos previos en los que los actores concibieron el conflicto político. El tono general que asumieron las posiciones radicales en torno a él heredaron la interpretación que veía a la "causa" en combate contra el "régimen", y algunas posiciones de sus adversarios fueron funcionales a esa manera de configurar el enfrentamiento. De este modo, la democracia argentina luego de 1916 tendió a tener en su centro mucho más la exhibición de apoyos populares en la contienda electoral que el respeto a los mecanismos institucionales. Cierto es que, durante la presidencia de Alvear, se les otorgó algo más de atención, pero la extendida interpretación del triunfo que llevó a Yrigoyen a su segunda presidencia en 1928 como un plesbicito demostró que se trataba más bien de un fenómeno acotado.

Finalmente, pueden realizarse algunas consideraciones acerca de aspectos culturales e ideológicos relacionados con estos asuntos. Con las peculiaridades que acaban de mencionarse, las disposiciones de la ley habían tornado la puja política más competitiva y abierta, y eso devenía en esfuerzos de los partidos por lograr que más gente participara no sólo en las elecciones, sino también en otras actividades que se desarrollaban en torno a sus estructuras y a sus locales. Estas tareas más opacas y menos visibles, quizá también más continuadas, en un sentido eran asimismo políticas: la celebración de conferencias, la organización de la prensa partidaria local –pequeña, acotada, pero que demandaba trabajo y empeño–, las manifestaciones callejeras, la atención a cuestiones sociales realizada desde los locales partidarios. En un nivel más operativo, debe sumarse a este conjunto la afiliación, la intervención en las

reuniones del partido –fueran las de los organismos de dirección de la localidad o aquellas que se realizaban en el comité barrial– y aun las prácticas que debían ponerse en marcha para la apertura de un local. De este modo, crecía la participación, se multiplicaban y se extendían los mecanismos de expresión de las opiniones acerca de los asuntos públicos, y todo ello, por sendas que se sumaban al valor simbólico que había asumido el ritual del voto, sostenía la expansión de la idea que indicaba que la política no se reducía a sus aspectos más formales y que, a su vez, la ciudadanía tenía una clara dimensión política.

Pero estas mismas acciones, muchas veces realizadas en torno al comité partidario, tenían también otros costados. Si por una parte se trataba de modos de participación y movilización política en la base, por otra, esas mismas prácticas e instituciones pasaban a formar parte de redes clientelares que los caudillos barriales o de la localidad tejían, con habilidad y constancia, a partir de la distribución de bienes, recursos, empleos incluso, suministrados en definitiva por el estado. En la organización de ese tipo de estructura, pocos rasgos permitían establecer alguna diferencia importante, salvo en lo que hace a su eficacia, entre las redes radicales y las organizadas por los conservadores, o más adelante por el antipersonalismo.

Así, el objetivo de la reforma no se había alcanzado en lo que respecta al tipo de partido político que sus autores anhelaban, ni al tipo de prácticas que habría de señalar la regeneración de la política nacional. A pesar de estos fracasos relativos y de las violaciones que ya se mencionaron, las pautas fijadas por la Ley Sáenz Peña funcionaban como un reglamento amplio que muy pocos se atrevían a cuestionar públicamente todavía. Las quejas, en buen número, solían destacar precisamente que no se cumplían sus disposiciones. Sin embargo, existían algunas agrupaciones que no sólo objetaban las leyes electorales argentinas, sino la idea misma de que un gobierno democrático con las instituciones funcionando a pleno fuera deseable; las había a la derecha, en el nuevo nacionalismo de fines de los años veinte, y también a la izquierda, cuando, por ejemplo, la línea política adoptada llevaba a las columnas de manifestantes del Partido Comunista a corear la consigna "Soviet sí, Parlamento no", como ocurrió en 1929.

Todas estas circunstancias se relacionan con el discurso que asumió una parte importante del golpismo de 1930, en particular, como se indicó, quienes se hallaban cercanos a Justo. Se sostenía que el golpe era un mecanismo para recuperar la vigencia de la Constitución y las reglas que debían regir la vida institucional, desconocidas por Yrigoyen. Así, el

respeto a la Constitución y a las leyes electorales que garantizaban la expresión de la voluntad popular, asociadas a la democracia, aparecían como principios mayoritariamente admitidos en las declaraciones públicas. Una apelación que, en tiempos de un golpe de Estado, no deja de sonar paradójica.

3. La cultura y la política

En el período que se extiende desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta 1930, varias novedades agitaron el panorama cultural argentino y latinoamericano. El impacto de la Gran Guerra y el de la Revolución Rusa, la Reforma Universitaria –que se extendería luego a algunas capitales latinoamericanas–, la aparición de una nueva generación intelectual y artística que no dejó de intervenir en los asuntos colectivos, junto a los indicios de que la industria cultural se afirmaba, sostenida entre otros fenómenos por la extensión de los públicos, fueron algunas de ellas.

La guerra y la revolución

En la Argentina, aproximadamente entre principios del siglo XX y los años en que se celebraron ambos centenarios, 1910 y 1916, se hicieron visibles algunos cambios en el mundo de los intelectuales. Por una parte, habían comenzado a estabilizarse algunas alternativas profesionales para quienes trataban de dedicarse a las letras; sin embargo, eran todavía inciertas, al punto que el empleo en el estado, como inspector de escuelas, maestro o bibliotecario, era la auténtica fuente de ingresos en muchos casos. El público potencial para revistas y libros se ampliaba paulatinamente, debido al aumento de las tasas de alfabetización y a la entrada de sectores sociales más vastos en los circuitos de consumo cultural. Estos fenómenos se aceleraron en los años veinte, luego de la Gran Guerra, y expandieron el mercado de bienes culturales. A su vez, el mundo de los intelectuales conquistaba mayor autonomía a través de la consolidación de criterios propios, que se decían fundados en la dedicación o el talento, para identificar a quienes formaban parte de él; esa conquista también fue favorecida por la fundación de nuevas revistas dedicadas estrictamente a la literatura,

la crítica literaria y la vida cultural. Aunque era todavía un proceso acotado, se insinuaba la existencia de una relación más compleja y con más mediaciones entre la elite social y política y el mundo de la cultura. A comienzos de los años veinte era ya evidente que, junto al escritor ocasional, que era al mismo tiempo un personaje de la alta sociedad, se encontraban muchos otros que no exhibían ese origen social.

Entre los intelectuales argentinos, la Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto, en particular en los jóvenes, que la evocarían reiteradamente en los años siguientes y todavía durante la década de 1930. En 1923, por ejemplo, la publicación *Inicial. Revista de la nueva generación* era puesta, ya en su primer número, bajo "la advocación de los jóvenes muertos en la Gran Guerra", y no fue el único caso de alusiones de este tipo. También la Revolución Rusa fue un fenómeno que impactó en estos mismos ambientes y, aunque había sido iniciada tiempo atrás, la revolución que se desarrollaba en México convocó más atención que en otros momentos. Simultáneamente, en esos mismos años crecía un movimiento de crítica al positivismo, que muchos de estos jóvenes suponían propio de la generación anterior. Desde entonces, y al menos a lo largo de la década de 1920, algunas de las zonas más activas de la cultura llevarían la marca del juvenilismo. Desde allí se intentó la búsqueda de lo que resultaba auténticamente nuevo, así como de lo que era específicamente argentino.

La Reforma Universitaria

En ese clima, enlazada con él y alimentándolo al mismo tiempo, tuvo lugar la Reforma Universitaria de 1918, suceso fundamental en el área de encuentro entre la política y la cultura. No era la primera vez que los universitarios se movilizaban para obtener respuesta a sus reclamos: en 1903, por ejemplo, una serie de huelgas estudiantiles habían tenido lugar en Buenos Aires con el objetivo de conseguir reformas en las ordenanzas relacionadas con los exámenes y de actualizar los programas de estudio; poco después, se sumó la exigencia de una disminución en los aranceles. Durante los años siguientes, en forma intermitente, la agitación prosiguió, y en 1906 un nuevo movimiento devino en la reforma parcial de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires.

El movimiento de 1918 se inició en la Universidad de Córdoba, donde la presencia católica entre los profesores era considerable; como en otras, los cargos docentes estaban controlados por organismos vitali-

cios, las academias. A fines de 1917, comenzó un reclamo de los estudiantes referido a cuestiones estrictamente universitarias, como el régimen de asistencia, entre otras. Meses más tarde, los estudiantes creaban el Comité Pro Reforma, encargado de asumir esos reclamos, a los que se agregó el de renovación del cuerpo de profesores.

La Reforma Universitaria

La Reforma Universitaria de 1918 se convirtió en punto de referencia para buena parte de los jóvenes intelectuales que comenzaban a tener intervención pública mientras terminaba la Gran Guerra. No sólo se proclamaron sus herederos muchos de quienes se dedicaron en los años veinte y treinta a la política universitaria en la Argentina, sino que también lo hicieron algunos dirigentes latinoamericanos muy importantes, como el peruano Víctor Haya de la Torre, fundador y líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana.



Entrada de las tropas a la Universidad de Córdoba. Archivo General de la Nación.

El Comité lanzó una huelga en marzo de 1918; días después el Consejo Superior clausuraba la Universidad, a lo que el Comité respondió solicitando la toma de posición del presidente Yrigoyen, quien designó in-

terventor a José Nicolás Matienzo. El gobierno nacional acogió favorablemente las demandas estudiantiles, pero el proceso de elección de autoridades según las nuevas reglas naufragó hacia junio y el conflicto se intensificó, incluyendo una nueva huelga y masivas manifestaciones callejeras a las que se sumaron dirigentes de nivel nacional, como el socialista Alfredo Palacios. Por entonces, ya se habían fundado la Federación Universitaria Argentina y la Federación Universitaria de Córdoba, organizada en mayo.

El proceso culminó con el triunfo de los reformistas, que lograron el reconocimiento de la participación estudiantil en los organismos de gobierno, la docencia libre y la asistencia voluntaria a los cursos. En el transcurso de estos acontecimientos, los estudiantes dieron a conocer el famoso "Manifiesto de la Reforma" el 21 de junio, un documento en el que anunciaban "a los hombres libres del continente" que el estudiantado, "habiendo sido capaz de realizar una revolución en las conciencias", exigía el derecho de participar en el gobierno universitario.

El movimiento de la Reforma Universitaria desbordó pronto su marco inicial. En 1918, se reunió un primer Congreso de Estudiantes en Córdoba, cuyo segundo encuentro se celebró dos años más tarde, en México. Varios de estos jóvenes reformistas tuvieron más adelante una participación activa en los emprendimientos que compartían con las vanguardias estéticas argentinas; también, en la continuación de la militancia en las universidades, dado que el movimiento tuvo avances y retrocesos. Entre los reformistas argentinos más destacados figuran Deodoro Roca, Saúl Taborda y Julio V. González.

En América Latina, la Reforma fue un hito al cual se filiaron algunos importantes grupos políticos, como la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), creada en 1922, cuyo dirigente más notorio fue Víctor Haya de la Torre. Durante los años veinte, el APRA animó los debates en la izquierda latinoamericana, fue uno de los movimientos que puso la cuestión del imperialismo en el centro de sus análisis y logró un sólido arraigo popular en Perú. En Venezuela, la Reforma fue también una experiencia a la que remitirían posteriormente muchos de los fundadores de Acción Democrática, uno de los partidos mayores en la segunda mitad del siglo XX. En la Argentina, la relación de los reformistas con los partidos fue más lejana y compleja en los años veinte, al punto que varios de ellos intentaron, sin mayor éxito, la organización de un partido político propio, el Partido Nacional Reformista. En los años treinta, en cambio, muchos de quienes habían constituido el reformismo se integraron a los partidos, en particular al socialismo y al radicalismo. De todas mane-

ras, desde el comienzo el movimiento reformista argentino buscó dirigirse también a sectores sociales externos a la universidad.



Tramos del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918

La juventud universitaria de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica.

Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. [...] estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.

La rebeldía estalla en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. [...]

Nuestro régimen universitario –aun el más reciente– es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. [...] La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia.

Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti, *Los reformistas*, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968.

En el universo intelectual de la Reforma, eran notas significativas tanto el juvenilismo –que en ocasiones asumía tonos elitistas, dado que los estudiantes se atribuían la dirección de los asuntos culturales en la sociedad– como el espiritualismo antipositivista, ambos mencionados con anterioridad. Así, varios de estos argumentos y actitudes permiten instalar, aun con matices, a la Reforma Universitaria en el movimiento cultural mayor que buscaba la renovación de la vida cultural argentina. La Reforma Universitaria era, además, parte del proceso de apertura política que suscitaba la llegada del radicalismo al gobierno y de transformaciones sociales que la excedían. En los hechos, el gobierno de la universidad estaba reservado a miembros de familias notables, que se perpetuaban en los cargos docentes y directivos; el intento reformista por abrir ese sistema se vinculaba con la aparición de otros sectores en la institución. De todos modos, desde el punto de vista de la magnitud de los grupos sociales involucrados, todavía se trataba de un fenómeno reducido: hacia 1918, el número de alumnos universitarios en todo el país era de unos 8600.

Un clima de renovación cultural

En los años de la posguerra, unas vanguardias estéticas bastante moderadas comenzaban a buscar su lugar en el mundo intelectual argentino. Sus elencos coincidían generacionalmente con los del reformismo y exhibían una pertenencia social semejante; hombres de las vanguardias y de la Reforma, además, participaron en conjunto en numerosos emprendimientos culturales.

Al mismo tiempo, también inquietos por las novedades –en particular, por las nuevas reformas políticas radicalizadas–, otros intelectuales jóvenes se inclinaban a la denuncia social más clara, asumiendo y reclamando el compromiso del intelectual con la causa de los desposeídos, que para ellos era, al mismo tiempo, la causa de la humanidad. De este modo, el movimiento de renovación del universo literario y estético contó con varios frentes.

Ese movimiento renovador, con fuerte presencia juvenil, se expresó en la fundación de revistas. *Proa*, *Inicial*, *Martín Fierro* fueron algunas de las que se crearon en Buenos Aires, mientras que en La Plata se fundaron *Valoraciones* y *Sagitario*. Por su parte, los escritores que exaltaban la necesidad del compromiso con las luchas sociales impulsaron las revistas *Los Pensadores*, *Renovación*, *Extrema Izquierda* y *Claridad*, en-

tre otras. Todas ellas fueron fundadas entre 1921 y 1926 y, en varios casos, integraron un complejo cultural más vasto que incluía editoriales: fue el caso de *Proa* y *Claridad*, por ejemplo. Otras contaron con ateneos donde la actividad central era el dictado de conferencias, una práctica usual en la época, que incluía la visita de prestigiosos intelectuales extranjeros.

La revista *Inicial*

Inicial fue una de las revistas que animó el proceso de renovación cultural desarrollado en Buenos Aires y en otras ciudades argentinas, a partir de los tempranos años veinte. Ese clima de renovación se expresaba tanto en la actividad de las vanguardias literarias como en aquellas otras experiencias de literatura de denuncia de la situación social; todos estos emprendimientos tuvieron fuertes perfiles juveniles.



Ilustración de Daniel Agrelo en la revista *Inicial*, año 1, número 1, de octubre de 1923, página 7.

Por otra parte, ya desde aquellos años se sostuvo que la oposición entre el grupo de Boedo –el del compromiso y la denuncia social– y el de Florida –que se suponía preocupado exclusivamente por la experimentación estética– resumía las alternativas y las disputas que se libraban entre los intelectuales jóvenes. Si bien el conflicto entre Boedo y Florida no fue un enfrentamiento entre bloques disciplinados sin puntos de encuentro, la política y la crítica social que buscaba hacer evidentes los males del capitalismo eran asumidas sin reparos por los integrantes de Boedo. Allí se ubicaron Álvaro Yunque, César Tiempo, Elías Castelnuovo, Leónidas Barletta. Su extracción social era, en líneas generales, diversa de la del grupo de Florida: muchos eran hijos de inmigrantes, recién llegados al mundo cultural y a las prácticas de la escritura, ajenos a los sectores que tradicionalmente se habían ocupado de estos asuntos –mucho más cercanos a la elite por sus orígenes–. Varios de ellos fueron, además, militantes de las formaciones de la izquierda. Un personaje importante allí fue Antonio Zamora, socialista, impulsor de la revista *Los Pensadores,* que luego se transformó en *Claridad,* y de la editorial homónima.

Aunque mucho menos acusada que en el caso anterior, la inquietud por los asuntos públicos y por la política también se hizo presente entre los miembros de las vanguardias, impulsada en ocasiones por los jóvenes reformistas, que compartían actividades y proyectos intelectuales con ellos. Entre quienes participaron en estos años en las revistas reputadas como vanguardistas se encontraban Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges, Ernesto Palacio, Oliverio Girondo, Raúl Scalabrini Ortiz y Alberto Hidalgo. Tampoco faltaban los intelectuales y artistas que fueron adscriptos por sus colegas, y luego por los historiadores, tanto a Boedo como a Florida, como Nicolás Olivari, o los que como Quinquela Martín o Alfonsina Storni tenían sus propios círculos, que no se alineaban con los anteriores y mantenían relaciones con ambos.

En los años veinte, muchos de estos jóvenes asumieron un interrogante formulado con anterioridad por otros intelectuales argentinos, y ensayaron sus propias respuestas. Se trataba de la pregunta por lo exclusiva y específicamente argentino, desde el punto de vista cultural: puesto en otros términos, se trataba de plantear cuáles eran los rasgos que resultaban auténticamente nacionales. Ya en el primer tomo de *Conflicto y armonías de las razas en América,* de 1883, Domingo Faustino Sarmiento se había preguntado "desde cuándo" y "hasta dónde" podía hablarse de los argentinos; bajo nuevas formas, el interrogante había persistido incluso hasta tiempos del Centenario, y fue heredado por los

jóvenes intelectuales de los años veinte. El criollismo urbano ensayado por parte de las vanguardias fue una de las búsquedas que esa inquietud impulsó. Raúl Scalabrini Ortiz, que por entonces participaba con intensidad en la revista *Martín Fierro,* ubicó en cambio el vértice de la identidad argentina en plena ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Corrientes y Esmeralda, en su libro *El hombre que está solo y espera,* publicado, con éxito, en 1931. En ambos casos, la preocupación por la identidad era evidente.

La revista *Claridad*

Esta revista fue de las más conocidas e importantes entre las que intentaron conciliar la tarea literaria con la denuncia social y la discusión política. Llegó a tener un circuito de distribución que incluía numerosas ciudades de América Latina y además publicaba artículos firmados por intelectuales y dirigentes de la región. Ya en los años treinta, los temas más plenamente políticos se fueron imponiendo a los estéticos y literarios, aunque estos últimos nunca desaparecieron por completo.



Ilustración de Abraham Vigo para la portada del número 181 de la revista, del 27 de abril de 1929.



Artículo de presentación de *Inicial. Revista de la nueva generación*, de octubre de 1923

Hemos fundado INICIAL porque hemos creído obedecer a un mandato imperioso de nuestras conciencias, cual es el de sincerarnos en una tribuna libre respecto a los problemas que preocupan al mundo, y respecto a los valores, decadentes o estimables, de nuestro medio moral y artístico. Sabemos que existe una juventud que se ha puesto al ritmo vertiginoso de esta hora histórica, y esa juventud tiene muchas cosas que decir. Sabemos también que esa juventud se ha visto rechazada en todas partes cuando ha querido alzar la voz al diapasón de su sinceridad, y si ha logrado a veces hacerse oír, es porque se ha desvestido, en el umbral de los templos bizantinos de nuestra literatura y de nuestro arte, de la vehemencia y la espontaneidad que hacen la obra perdurable. INICIAL es para ella, ha sido creada para ella. INICIAL será el hogar de toda esa juventud dispersa que vagabundea por las publicaciones y revistas más o menos desteñidas de nuestro ambiente, sin encontrar donde pueda elevar el tono de su acento a la altura de sus propias convicciones.

Al fundar INICIAL hemos pensado que, en nuestro ambiente moral y artístico, hay hombres y cosas que es necesario combatir despiadadamente. Sentimos un profundo desprecio por todos aquellos que pontifican desde el pedestal de las artificiales consagraciones de cenáculo. [...] Por todo lo que va dicho, no será INICIAL una simple revista literaria, una antología pálida e inmóvil de los poetas y escritores jóvenes del país. Queremos que INICIAL sea una cosa viva y dinámica [...] Por eso convocamos a todo lo que hay de valiente, decidido y sano en las filas de la nueva generación.

Inicial. Revista de la nueva generación (1923-1927). Estudio preliminar: Fernando Diego Rodríguez, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2004.

En las filas de Boedo, en tanto, se insinuaba otra posición. Cuando en 1925 Evar Méndez, director de *Martín Fierro,* se empeñó en una iniciativa para levantar un monumento a José Hernández, en razón de que entendía que su obra era la única "pura y esencialmente argentina", desde las páginas de *Los Pensadores* algunos de sus miembros sostuvieron que no tenían "nada en común con el gaucho ni con el aborigen", y remataban su crítica proclamando: "nosotros somos trabajadores".

Otros itinerarios

Durante este período, la iglesia católica impulsó proyectos de distinto tipo, que iban desde la intensificación de la actividad en las parroquias hasta el establecimiento de lazos más estrechos con las fuerzas armadas. Varias de esas iniciativas tenían una dimensión cultural en sentido amplio: lecturas de la doctrina, redacción de hojas periódicas, dictado de conferencias y asistencia a ellas. En relación con la política seguida hacia el mundo de la cultura letrada, se registran dos acontecimientos de importancia. Por una parte, en 1922 comenzaron a funcionar los llamados "Cursos de Cultura Católica", donde algunos escritores se empeñaron en la formación de jóvenes que luego tendrían una actuación destacada tanto en los grupos católicos como en los nacionalistas, que en los años treinta se tornarían difíciles de distinguir. Por otra, en ambientes cercanos a los anteriores se gestó la creación de la revista *Criterio* en 1928, concebida inicialmente como una publicación dirigida a los intelectuales. Varias son las vetas del pensamiento católico en este período, y no todas ellas coincidentes; la más extendida era la que hacía de la democracia liberal una de las causas eficientes de los que eran vistos como males sociales por estos círculos.

De ámbitos que no eran idénticos pero que coincidían en la crítica a algunos de los rasgos democráticos que, según entendían, predominaban en la sociedad y en la política argentina, provino la fundación del semanario *La Nueva República* en 1927, una de las primeras empresas culturales de lo que empezaba a denominarse nacionalismo. La publicación y sus responsables, entre quienes se destacaban Julio y Rodolfo Irazusta y Ernesto Palacio, fueron fuertemente antiyrigoyenistas. Más adelante, los jóvenes que participaron allí intentaron atribuirse el papel de consejeros ideológicos del general Uriburu. En esos años, no terminaban de romper por completo con la tradición política republicana, aunque algunos manifestaron simpatías por el fascismo; tampoco habían definido con claridad uno de los enemigos que descubrirían más adelante: el imperialismo inglés.

Precisamente, la denuncia del imperialismo fue, en la Argentina de los años veinte –en particular en la segunda mitad de la década–, una actitud propia de la tradición cultural y política de la izquierda y de algunos radicales, no de la derecha nacionalista, que se tornaría antiimperialista sólo en la segunda mitad de los años treinta. Debe tenerse en cuenta, además, que durante la década de 1920 la denuncia apuntaba centralmente al imperialismo norteamericano, mientras que, en la dé-

cada de 1930, se puso el acento en el imperialismo inglés. El antiimperialismo de los años veinte exhibía diversas fuentes; una de ellas, lejana y modificada, fue lo que dio en llamarse "arielismo", en alusión al título del libro *Ariel*, publicado por el escritor uruguayo José Enrique Rodó en 1900. Allí, uno de los personajes denunciaba la mediocridad, el sentido utilitario y el crudo materialismo que campeaban en los Estados Unidos, mientras que se apreciaba, en cambio, la herencia hispanoamericana, que el uruguayo imaginaba más inclinada a las consideraciones espirituales y a las empresas desinteresadas, y que debía ser defendida ante el avance norteamericano. Simultáneamente, en un gesto elitista muy propio del modernismo, Rodó hacía de los jóvenes cultos el actor social preferido frente al utilitarismo interesado y gris de las multitudes, y consideraba que la democracia anulaba cualquier distinción fundada en el talento.

En los años veinte apareció otro frente importante y muy distinto de inspiración antiimperialista. En 1917, Lenin había publicado *El imperialismo, fase superior del capitalismo*, y hacia 1924 la Internacional Comunista planteaba una política de Frente Unido Antiimperialista para todo el mundo extraeuropeo, que significaba el apoyo comunista a los movimientos de liberación nacional. A pesar de que sus posiciones experimentaron vaivenes, hacia fines de la década de 1920, en varias reuniones de los comunistas latinoamericanos se definió que los países de la región eran colonias o semicolonias, y en consecuencia que el movimiento revolucionario que habría de impulsarse sería del tipo democrático-burgués en su forma agraria y antiimperialista. En consonancia con esos diagnósticos, hacia 1929 la militancia comunista argentina animaba la Liga Antiimperialista, donde constituía su Grupo de Izquierda, un activo participante en los actos a favor del líder nicaragüense Augusto César Sandino, quien resistía la invasión norteamericana a su país. A fines de los años veinte, además de la Liga actuaban en la Argentina la Unión Latinoamericana, creada en 1925 –en la que participaron José Ingenieros, el socialista Alfredo Palacios, los reformistas Gabriel del Mazo, Julio V. González y Carlos Sánchez Viamonte, entre otros–, y la Alianza Continental, que cobijaba militantes radicales y socialistas. Hacia fines de la década, algunas de esas asociaciones participaron en campañas a favor de una activa intervención del estado en la política petrolera.

Los contactos entre intelectuales y políticos latinoamericanos

En 1930, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y principal dirigente de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), envió una carta a Antonio Zamora, cercano al Partido Socialista y director de *Claridad*. El APRA había sido una de las agrupaciones políticas que asumía la herencia de la Reforma Universitaria, y su implante popular en Perú era por entonces muy importante. Entre otros puntos, planteaba posiciones fuertemente antiimperialistas. Estas redes latinoamericanas que vinculaban a intelectuales y políticos orientados a la crítica y a la reforma social funcionaron activamente en los años veinte.

La carta decía: "Debemos los apristas peruanos a *Claridad* nuestro fraternal testimonio de gratitud. Usted y el grupo generoso que sostiene valientemente esa revista –que hay que llamar con justicia una de las más auténticas expresiones de pensamiento izquierdista latinoamericano–, nos han brindado un magnífico espaldarazo, justamente cuando nuestra lucha se hace más intensa en el Perú y cuando más necesitamos del apoyo moral de los espíritus libres de nuestra América. Me refiero al número 214 que, ya me lo dicen las noticias, ha sido jubilosamente recibido por los trabajadores manuales e intelectuales que integran nuestras filas en el Perú".

El texto citado fue extraído de *Claridad. Revista de Arte, Crítica y Letras. Tribuna de Pensamiento Izquierdista*, número 219, Buenos Aires, 1930.

Más allá de los jóvenes

La emergencia de estos jóvenes intelectuales fue un dato fundamental en este período. Ello no debe llevar a suponer que el fenómeno ocupó todo el escenario: intelectuales mayores, ya asentados y consagrados, con los cuales en general las vanguardias tuvieron una actitud crítica, pero que se permitía cierta amabilidad, continuaron su actividad. Así ocurrió, por ejemplo, con Ricardo Rojas, un escritor con obras publicadas ya en los años inmediatamente anteriores al Centenario. En 1913, Rojas asumió la titularidad de la cátedra de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras; el primer volumen de su *Historia de la Literatura Argentina* apareció en 1917 y la obra terminó de publicarse

en 1922, con el cuarto tomo. Esa empresa de Rojas tenía un sentido político-cultural muy marcado: se trataba de probar que la literatura nacional tenía efectivamente existencia. Disponer de una tradición literaria propia, según se entendía, era imprescindible para constituir una nación plena. En 1922, Rojas fue electo decano de la Facultad de Filosofía y Letras, donde creó y dirigió el Instituto de Literatura Argentina. Éstas eran piezas institucionales del proyecto que Rojas había bosquejado en tiempos del Centenario, cuando publicó *La restauración nacionalista* (1909) y propuso, como una tarea que debía encararse de forma principalísima y urgente, la extensión de la identidad nacional entre las masas a través, entre otros medios, de la enseñanza de la literatura, la geografía y la historia argentina en la escuela. La inmigración era, en el razonamiento de Rojas, el factor que tornaba acuciante esa acción.

Otro de los intelectuales relevantes del período fue José Ingenieros, un médico que en su juventud había militado en el socialismo. Hacia 1915, Ingenieros creó la *Revista de Filosofía,* de la que fue director hasta su muerte, en 1925. Ingenieros, en cuyo pensamiento las huellas del positivismo eran muy fuertes, se vio impactado por la Revolución Rusa, a la que miró con simpatía. Fue también uno de los intelectuales que apoyó la Reforma Universitaria y participó activamente en la fundación de la Unión Latinoamericana.

En los años veinte, Leopoldo Lugones continuaba siendo un poeta muy reconocido, luego de haber sido uno de los máximos exponentes del modernismo. Había comenzado su producción a fines de siglo XIX, participando en los primeros intentos organizativos socialistas, como Ingenieros. En 1913 pronunció unas conferencias muy influyentes, que editó en 1916 bajo el título de *El payador;* allí argumentaba que el *Martín Fierro* debía ubicarse en el centro de la tradición literaria nacional. Durante los años veinte, Lugones conservó un lugar preponderante, que incluso se revela en hechos institucionales: presidió la Sociedad Argentina de Escritores y recibió el premio Nacional de Literatura. Por entonces, Lugones había reorientado ya sus perspectivas políticas, y desde comienzos de la década adoptó posiciones nacionalistas y autoritarias. Ellas habrían de expresarse con claridad en el discurso pronunciado en ocasión del centenario de la batalla de Ayacucho, en 1924, donde anunció que había sonado "la hora de la espada". Lugones reclamaba gobiernos fuertes y militares, un lugar común en estas vertientes del nacionalismo argentino, aunque otras actitudes lo convertían en un heterodoxo: desconfiaba del catolicismo y no se

sumó, en los años treinta, a las versiones antisemitas de ese movimiento. A fines de los años veinte, también formó parte de los apoyos del general Uriburu.

Más allá de los intelectuales

Fuera del mundo acotado de los intelectuales, otras transformaciones relacionadas con la cultura tenían lugar durante los años veinte y afectaban a amplias franjas de la población. Muchas estaban relacionadas con la continuidad de procesos sociales iniciados en la etapa anterior, que fueron evocados en el capítulo 1, aunque los ritmos habían cambiado.

Así, el Censo Nacional de 1914 indicaba que el analfabetismo era del 36 por ciento en personas mayores de 14 años, mientras que el Censo de 1947 señalaba una disminución al 13,6 por ciento. En ambos casos, como solía ocurrir en otras áreas, la variación por jurisdicción era muy marcada: mientras que en la provincia de Jujuy, por ejemplo, el analfabetismo había disminuido del 67 al 35 por ciento, en esos mismos años en la provincia de Buenos Aires se había reducido del 31,5 al 10 por ciento. La ciudad de Buenos Aires registró el menor índice de analfabetismo en los dos censos, pasando del 21 al 5,7 por ciento. Como puede observarse, las diferencias radicaban no sólo en los porcentajes, sino también en la cadencia de la disminución de esas cifras. A escala nacional, en 1914 los analfabetos inscriptos en el padrón electoral constituían el 36 por ciento del total, mientras que en 1928 representaban el 21 por ciento. El Censo Nacional de 1914 indica que el 48 por ciento de la población en edad escolar efectivamente concurría a la escuela en todo el territorio, mientras que un censo escolar de 1943 señala, también para todo el país, un 76,3 por ciento; sin dudas un crecimiento importante.

Este aumento de las personas que dominaban la habilidad de la lectura fue la condición necesaria para que tuviera lugar uno de los procesos característicos del período de entreguerras: la ampliación hacia los sectores medios y populares de los públicos lectores y del mercado para cierto tipo de bienes culturales, como libros, diarios y revistas. Sin embargo, el hecho de que más gente supiera leer no significaba que, automáticamente, se constituyera en un público lector. Para que tal cosa ocurriera fue preciso que tuvieran lugar otros fenómenos que también se aceleraron a partir de la Primera Guerra Mundial, como,

por una parte, la organización de una oferta cultural nueva, adaptada a la demanda, las posibilidades y los gustos de los nuevos lectores, recién llegados al mercado cultural y, por otra parte, la extensión de la práctica de la lectura entre ellos.

En aquellos fenómenos tuvieron un papel importante los cambios ocurridos en la prensa diaria, el más antiguo de los medios de comunicación, que pronto se tornarían masivos. Ya desde comienzos del siglo XX, algunos nuevos diarios pasaron a sumarse a los tradicionales *La Nación* y *La Prensa*, fundados en 1869 y 1870 respectivamente. En 1905 se creó *La Razón*, en 1908, *Última Hora*, y en 1913 apareció *Crítica*, uno de los más exitosos y novedosos, de gran influencia en la opinión pública hasta comienzos de los años cuarenta. A finales del período, en 1928, *El Mundo* comenzaba a circular, agregándose al conjunto.

En buena medida, quienes leían diarios a fines del siglo XIX eran integrantes de la elite o, al menos, de sectores acomodados, dueños de la capacidad de leer en un país donde el analfabetismo era muy alto. En los años de la fundación de *La Prensa* y *La Nación*, el censo marcaba un 77,4 por ciento de analfabetos mayores de 14 años en todo el país y un 48 por ciento en la ciudad de Buenos Aires, donde se publicaban los dos periódicos mencionados. Los lectores de viejo tipo estaban, además, integrados a los circuitos de consumo que llevaban a la suscripción a un diario y disponían de tiempo para leerlo. En cambio, en el período examinado, *Crítica* llegó a imprimir 300 000 ejemplares diarios, a los que deben sumarse los ejemplares de los demás. En el período 1928-1929, *El Mundo* declara una circulación de 127 000 ejemplares, aunque la cifra debe manejarse con precaución por provenir del mismo diario. Esas tiradas, a su vez, habían reclamado ciertos cambios técnicos en los procedimientos de impresión y distribución. Por otra parte, ya no eran proyectos que algún grupo de notables ponía en marcha, como en el siglo XIX, para sostener posiciones de su facción: los diarios eran empresas comerciales cuyo objetivo central era ganar dinero, aunque su propia naturaleza los convertía en elementos de consideración en la constitución y orientación de la opinión pública. En algunas capitales de provincia circulaban también diarios locales.

Al mismo tiempo, a partir de la Gran Guerra los periodistas que trabajaban en los nuevos diarios se volvieron definitivamente profesionales. Entre ellos, muchos escritores hicieron del periodismo la ocupación que les garantizaba un salario. En las redacciones de *El Mundo* y *Crítica*, por ejemplo, participaron numerosos escritores jóvenes de la

época, como Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, los hermanos González Tuñón y Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros. Las salas de redacción se convirtieron en un centro de sociabilidad intelectual significativo. Diarios masivos, diarios que buscaban el éxito comercial, diarios dirigidos por profesionales; diarios nuevos para un público también nuevo. Así, incorporaron secciones diversas que trataban de captar los distintos intereses de los públicos ampliados: secciones deportivas, policiales, de espectáculos, dedicadas a la vida en la ciudad; también los suplementos especializados cubrieron esas demandas. A su vez, las revistas sufrieron transformaciones semejantes; en ellas también se produjo cierta especialización y a comienzos del período, en 1919, aparecieron *Billiken* y *El Gráfico*, y pocos años después, *Para Ti*. Procesos que se sostenían mutuamente, los cambios en la oferta y la demanda daban por resultado un nuevo tipo de producto cultural.

Sin duda, entre quienes leían estos diarios y revistas se contaron los nuevos lectores populares y medios, pero también otros más entrenados y con mayor familiaridad con estos bienes y con las prácticas que demandaba su apropiación. Ocurre que los públicos masivos no son exactamente los públicos populares, aunque coincidan en algunas franjas. En cualquier caso, es posible suponer que, para los nuevos y más amplios públicos, los diarios y revistas fueron productos sobre los que se ejecutó un primer ensayo y una primera incorporación del hábito de la lectura. A esos mismos públicos ampliados intentaron llegar, y parecen haberlo conseguido, las novelas que conformaban colecciones de entrega periódica, muchas veces semanal. Se trataba de escritos de ficción, en general breves, que llegaron a poner en circulación 200 000 ejemplares, a veces más a través de las reediciones, dedicadas en gran parte a las cuestiones del amor y sus obstáculos y, desde el punto de vista estrictamente literario, alejadas de la búsqueda de novedades y de las rupturas estéticas de las vanguardias. Su fuerte era, en cambio, la reiteración de fórmulas literarias conocidas, propias de etapas anteriores de la literatura "culta". Las novelas semanales fueron un éxito, en particular entre fines de la guerra y 1925, y se vendieron masivamente en la ciudad de Buenos Aires y en muchas del interior.

Algunas editoriales, de las cuales Claridad y Tor son los ejemplos más conocidos, se sumaron a los emprendimientos dirigidos a los nuevos lectores. Claridad, como se ha planteado, era una editorial conducida por el socialista Antonio Zamora, quien dirigía además la revista homónima, dedicada a cuestiones literarias, culturales y políti-

cas. La editorial logró transformarse en una empresa exitosa, que en poco tiempo contó con imprenta y local propios. Algunas de sus colecciones, que cubrían temas muy heterogéneos, fueron la Biblioteca de Cultura Moderna (Enciclopedia para el Hogar), la Biblioteca Científica, los Manuales de Cultura Marxista y la Colección de Obras Famosas. La editorial publicaba simultáneamente varias revistas: *Revista Jurídica Argentina, Cultura Sexual y Física* e *Higiene y Salud.* De todos modos, la más conocida fue *Claridad. Revista de Arte, Crítica y Letras. Tribuna de Pensamiento Izquierdista,* tal como se presentó hasta mediados de los años treinta, que continuaba a *Los Pensadores.* Hacia la mitad de la década de 1930, *Claridad* declaraba una tirada de 10 000 ejemplares. Se trataba de una revista que prácticamente no tenía ilustraciones –apenas unas viñetas– y que solía superar las cien páginas.

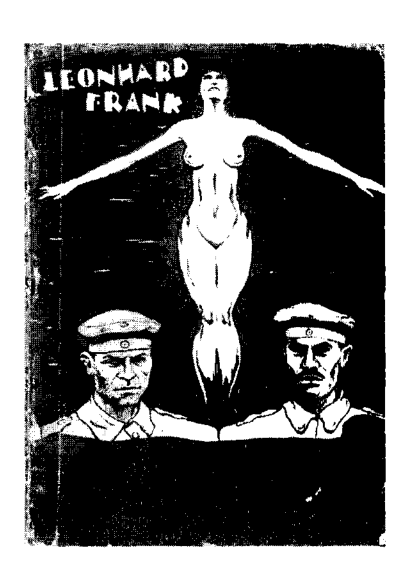
Tanto los libros como las revistas de Claridad se vendían directamente en la editorial, así como en las agencias que se fueron estableciendo en el interior del país y en América Latina. En Buenos Aires se vendían también en los quioscos y puestos de diarios, en las estaciones de ferrocarril y subterráneos, mientras que la editorial solía enviar las publicaciones a varias bibliotecas obreras. Además, los libros y las revistas tenían en general un precio accesible; el de algunas de las novelas, a fines de los años veinte, apenas cuadruplicaba el de un diario.

Las ediciones de entreguerras

A lo largo del período de entreguerras, varias editoriales intentaron alcanzar los nuevos públicos urbanos; ellos constituían un mercado potencial que auguraba ser amplio. Esos públicos estaban en parte constituidos por sectores medios y populares, que en amplias franjas recién se incorporaban al consumo de bienes culturales; a ellos se dirigió la oferta de colecciones de libros baratos, que les resultaban económicamente accesibles. Algunas de esas editoriales, como Claridad –asociada a la revista del mismo nombre–, trataban además de difundir la literatura que se alineaba con los principios políticos y sociales de quienes eran sus impulsores. *Sin novedad en el frente* y *Carlos y Ana* eran novelas antibélicas, propias del pacifismo de izquierda que se extendió a fines de la Gran Guerra, entre otras formaciones intelectuales. Estas dos obras, a fines de los años veinte y comienzos de los treinta, se ofrecían a 40 y 50 centavos; por entonces,

los diarios solían costar unos 10 centavos, con la excepción de *El Mundo*, cuyo precio era de 5 centavos.





Tapa de *Sin novedad en el frente*, de E. Remarque, publicada en la Biblioteca de Grandes Obras, y de *Carlos y Ana*, de L. Frank, publicada por la editorial Claridad (la ilustración es de Rondano).

Todos estos factores manifiestan la existencia, en el caso de Claridad, de un notorio intento de llegada a los nuevos públicos. Revistas y libros baratos, que fueron bienes de circulación muy amplia entre los sectores populares y contribuyeron a forjar tanto las bibliotecas de asociaciones como las hogareñas, apenas incipientes. Libros que se compraban en quioscos, una práctica habitual para estos nuevos públicos, mientras que la librería era todavía un mundo lejano, incluso físicamente, ya que aún estaban ubicadas, en su mayoría, en el centro de las ciudades. Colecciones y revistas que cubrían un horizonte amplio y heterogéneo de temas, que iba desde los políticos más evidentes hasta la "cultura sexual". Elencos de autores también múltiples, entre los que se contaban Tolstoi, Dostoievsky y Barbusse, junto a los argentinos Almafuerte o Evaristo Carriego. Al mismo tiempo, una amplia gama de géneros, de la novela al ensayo y a la literatura de denuncia. Completaba el sistema una revista como *Claridad*, que constituía una herramienta para sugerir qué convenía leer y cómo debía leerse, ya que no sólo hacía publicidad del fondo bibliográfico de la editorial, sino que también ofrecía recomendaciones

en la larga sección de crítica literaria. Desde el precio, entonces, hasta el sistema de distribución, los autores y temas involucrados, las propias características materiales de esos bienes, revelan la existencia de un proyecto dirigido a los sectores populares que buscaba poner al alcance de mayor cantidad de gente la literatura que apreciaban quienes eran parte del emprendimiento. Una literatura que creían útil, edificante, promotora de ciertas virtudes, que además constituía una herramienta en la tarea de conquistar conciencias y espíritus para la transformación social en la que estos hombres estaban empeñados. Desde ya, tampoco faltaban títulos que apuntaran al entretenimiento menos comprometido. Por una cuestión evidente de estructura demográfica y de condiciones asociadas a la escolarización y alfabetización, el segmento más importante del mercado para estos productos –fueran los libros de denuncia o los de esparcimiento, las revistas o los folletines– estaba ubicado en las grandes ciudades.

El teatro, el cine y la radio también formaban parte de la oferta cultural en los años veinte; los dos últimos eran fruto de avances técnicos recientes. El teatro era un espectáculo de gran importancia. Hacia 1921, en Buenos Aires se contaban unas 21 salas de teatro, que ascendían a 32 en 1925 y a 43 en 1928. Un dato que quizá resulte más significativo indica que, a lo largo de 1925, asistieron al teatro 6,9 millones de espectadores, cifra que triplicaba, aproximadamente, la población total de la ciudad. Sainetes, obras del género chico y obras consagradas de la alta cultura eran parte de la programación, en un circuito tan importante que sostenía revistas especializadas dedicadas a la crítica teatral, a las novedades de las compañías y a la vida de los actores reconocidos.

En cuanto al cine, en 1905 se inauguró en Rosario lo que al parecer fue la primera sala cinematográfica de América Latina, que venía a superar la costumbre de las proyecciones breves en cafés. Luego de 1910, las películas norteamericanas y europeas se hicieron más largas y empezaron a incluir a famosos actores de teatro, cuyos nombres aparecían en los créditos. Comenzaba así lo que se denominó *star system*, que también en este caso sostuvo una cantidad de publicaciones periódicas referidas al espectáculo tanto como a la vida privada de las estrellas. A lo largo de los años veinte, el cine era todavía mudo. En 1922, en Buenos Aires existían unos 140 cines, muchos de los cuales estaban ubicados en los barrios, sobre las avenidas principales. Un esquema similar funcionaba en Rosario.

La primera transmisión de radio tuvo lugar en 1920. Hacia 1922, existían unos 2000 aparatos receptores, que a mediados de los años treinta

rozaban el millón y medio. También aquí el esquema de las publicaciones especializadas funcionaba del mismo modo que con el teatro y el cine. No obstante, el efecto de la radio era algo diferente, ya que permitía eliminar los obstáculos de la distancia de manera inmediata.

La cultura de masas y los cambios sociales

Estas transformaciones tuvieron lugar, fundamentalmente, en las grandes ciudades, donde también se afirmaba el fútbol como espectáculo de masas. Sin embargo, la radio comenzaba a trazar una red cuyo alcance, con limitaciones todavía, terminaría por ser nacional. Así, se afirmaba la presencia de los medios masivos de comunicación en nuevos formatos, crecían públicos también nuevos y se multiplicaban los productos culturales destinados a ellos. Los cambios se apareaban, sosteniéndose mutuamente, con la aparición de modalidades más actualizadas de producir esos bienes culturales –fueron modificaciones técnicas las que permitieron ampliar la tirada y agilizar la producción de los diarios, por ejemplo–, que a su vez involucraban a nuevos personajes: periodistas profesionales y especializados en deportes o espectáculos; autores de novelas semanales o de piezas de teatro que se veían compelidos a escribir al ritmo que la demanda imponía. Al mismo tiempo, habían cambiado las maneras en que los libros, revistas y diarios circulaban. Ya no se trataba sólo de la suscripción o de la compra en las exclusivas librerías del centro, sino que se ampliaba la venta en quioscos y a domicilio, en los barrios.

Así, tanto la figura del hombre de elite que cada tanto escribía por puro gusto como la de los lectores exclusivos, escasos, poseedores de una destreza –la de la lectura– de la que pocos disponían, y del hábito y el capital para acceder a un bien caro, propias de etapas previas, aunque no habían desaparecido del todo, habían dejado de ser las dominantes. Naturalmente, desde mucho tiempo atrás habían existido libros que sobrepasaron los límites estrechos del público tradicional, letrado y culto. Los folletines se habían vendido muy bien en la Argentina de fines del siglo XIX, y el propio *Martín Fierro* había colocado unos 48 000 ejemplares entre 1872, año de su publicación, y 1878. Pero en los años veinte, la escala del fenómeno era diferente y se verificó por entonces el cruce de dos procesos relevantes: la extensión de la alfabetización entre los sectores populares y la implantación estable de los medios de comunicación masivos. Esa combinación señaló la aparición de una nueva

formación cultural en las ciudades, distinta de la antigua cultura de elite, pero también de la cultura popular tradicional –en términos generales, oral, anónima, rural–: una cultura de masas asociada estrechamente a la industria cultural.

4. Las transformaciones sociales

En los primeros años de este período se sucedieron varios conflictos sociales muy importantes: la Semana Trágica de 1919, las huelgas y la represión en La Forestal entre 1920 y 1921, y los episodios de la Patagonia, también ocurridos durante estos últimos años, son los más recordados. Luego, la conflictividad tendió a aplacarse. Mientras tanto, en el movimiento obrero se fortalecían las posiciones de los grupos sindicalistas. En un proceso más lento y menos espectacular, comenzaba una lenta transformación de la identidad de los grupos subalternos, especialmente en las ciudades; su resultado, que se tornaría más visible años después, fue la extensión de una identidad popular, con huellas atenuadas de la experiencia migratoria, y dispuesta al reclamo –antes que a la impugnación absoluta– frente al estado.

Los grandes cambios a través de los números

Como se indicó en los capítulos anteriores, el Censo Nacional de 1914 registraba una población total de 8 090 084 personas. De ellas, prácticamente el 30 por ciento eran extranjeras. En las grandes ciudades del Litoral, ese porcentaje subía notoriamente, y en Buenos Aires cerca del 51 por ciento de la población total era extranjera, con claro predominio de españoles e italianos. Si se toman en cuenta los hombres mayores de edad, las cifras son aún más elocuentes, y se advierte que en la ciudad de Buenos Aires en 1914, entre los mayores de 30 años, los extranjeros constituían más del 70 por ciento, con un pico del 88 por ciento para quienes tenían entre 55 y 60 años.

La Primera Guerra Mundial acarreó la interrupción temporaria de la llegada de inmigrantes, e incluso por unos años se registraron saldos migratorios negativos, pero luego, en los años veinte, la tendencia ascen-

dente se recuperó. De todas maneras, algunas fuentes estadísticas indican para 1930 entre un 23,5 y un 24,5 por ciento de extranjeros sobre la población total, descenso asociado al crecimiento vegetativo. Esa tendencia a la baja se aceleraría, con las consabidas diferencias regionales, a lo largo de la década de 1930, dado que los cambios económicos que a escala internacional produjo la crisis de Wall Street, ocurrida en octubre de 1929, restringieron severamente la llegada de inmigrantes en el largo plazo.

Entre 1914 y 1930 continuó el fenómeno de concentración urbana. Según el censo, en 1914 el 58 por ciento de la población vivía en las ciudades, mientras que en 1930 se calcula que ese porcentaje subió al 68 por ciento. En ese lapso, la ciudad de Buenos Aires creció de 1 700 000 habitantes a 2 300 000. Hacia 1914, casi el 20 por ciento de la población de todo el país vivía en Buenos Aires. Otras ciudades, como Rosario, también crecían en forma significativa.

En lo referido a la economía, durante los años de las presidencias radicales la exportación de productos agropecuarios continuó siendo el sector más dinámico, a pesar de que la Primera Guerra Mundial había mostrado algunos de los límites de ese funcionamiento. Por otra parte, la inmigración se recuperó luego de la guerra y se produjeron nuevas inversiones extranjeras, de manera que las variables más importantes para la economía agroexportadora se reconstituyeron. Simultáneamente, tuvo lugar un acotado desarrollo industrial, asociado, en principio, a la producción de bienes para el mercado interno y, luego, alentado porque la disminución del comercio en tiempos de la guerra favoreció el desarrollo de algunas industrias que sustituían importaciones. No obstante, este fenómeno encontró pronto su tope y no se prolongó más allá del final de la contienda.

Hacia fines de la década de 1920, la industria se convirtió en un sector más importante y activo: entre 1920 y 1930, se radicaron en la Argentina varias grandes empresas extranjeras, entre las que se destacaban las norteamericanas. Se instalaron fábricas de artículos eléctricos, productos químicos y farmacéuticos, y neumáticos, entre otras. Ford, General Motors –que sin embargo no producían autos aquí–, Goodyear, Colgate, Parke Davis fueron algunas de aquellas firmas. De acuerdo con estimaciones de la Unión Industrial Argentina, poco después del cierre de este período, hacia 1933, la industria utilizaba el 43 por ciento de la mano de obra ocupada, lo que superaba marcas anteriores. Esta tendencia al crecimiento del sector se aceleró notablemente desde mediados de la década de 1930. A pesar de estas cir-

cunstancias, cuando se produjo la crisis de 1929 y luego el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, la economía argentina continuaba centrada en la producción primaria para el mercado externo, en un esquema de relación comercial triangular que la incluía junto a Inglaterra y los Estados Unidos, cuya presencia en las importaciones argentinas crecía, así como sus inversiones en el país. Sin embargo, los productos de exportación argentinos no tenían un mercado en los Estados Unidos, cuya producción agropecuaria era también muy importante.

Por otra parte, los salarios reales tendieron a bajar desde el comienzo de la guerra, en 1914, hasta 1918. En 1919 se inició cierta recuperación, que se hizo más lenta en 1920. Luego, en tiempos de Alvear, la mejora del salario real se sostuvo, aunque complicada por la inflación. Así, tomando como base 100 el año 1929, para la ciudad de Buenos Aires, en 1914 el salario real era de 68, cayó a 42 en 1918, y se mantuvo entre 85 y 95 entre 1922 y 1927.

Por su parte, el número de trabajadores que participaron en huelgas en la Capital creció significativamente en 1917 y 1918, hasta alcanzar un máximo en 1919, el año de la Semana Trágica. Luego de 1922, con excepción de un año en el que las centrales sindicales se pronunciaron contra un proyecto de ley de jubilaciones y convocaron a una huelga general contra él, las cifras descendieron marcadamente. De este modo, el movimiento de fondo es el de una conflictividad social alta que se extiende entre 1917 y 1921, con un pico en torno a 1919, y se prolonga un tiempo más aunque con menos intensidad, para decaer luego de 1922 hasta el final de la década. Este ritmo no sólo se halla vinculado a variables de orden económico, como el salario o la inflación, sino también a episodios político-sociales, locales y lejanos, entre los que se destacan la Revolución de Octubre, el fin de la Gran Guerra y el cambio parcial de política hacia el movimiento sindical del gobierno radical. En esos tiempos, las luchas obreras se libraron en el escenario previsible de las ciudades, pero también en zonas rurales, algo relativamente novedoso para el capitalismo argentino.

Fuera de las ciudades

Hacia 1914, los trabajadores rurales, cuya intervención colectiva en los asuntos públicos y su participación en conflictos sociales fueron fenómenos propios del período, sumaban unos 880 000, considerando la ga-

nadería y la agricultura. El mundo heterogéneo de los trabajadores del campo incluía peones, braceros, estibadores, conductores y operadores de las máquinas trilladoras y carreros, y los movimientos que llevaron adelante se produjeron en las zonas pampeanas y en las áreas periféricas al corazón del modelo agroexportador, como la Patagonia, Tucumán y el Chaco.

Los salarios reales de los trabajadores rurales, tal como ocurrió en las ciudades, cayeron con fuerza entre 1915 y 1918-1919 aproximadamente. A ello se agregó un aumento de la desocupación, que devino en peores condiciones de trabajo y en la extensión de la jornada laboral. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que en el campo la situación jurídica de los trabajadores solía ser bastante más precaria que en las ciudades, y su organización sindical, más reciente y débil, cuando existía. Esas condiciones se agravaron cuando, por efecto del fin de la guerra, arribaron nuevos grupos de inmigrantes que aumentaron la disponibilidad de mano de obra, mientras tenía lugar un proceso de mecanización, factores que incrementaron las dificultades para conseguir trabajo. Todo el cuadro puso en marcha un parcial desplazamiento de población hacia las ciudades y hacia regiones extrapampeanas.

En las zonas dedicadas a la agroexportación, los conflictos sociales de la época tendieron a enfrentar a los chacareros –que se veían a sí mismos como pequeños productores–, los peones y los obreros rurales –con una identidad trabajadora– con los grandes propietarios, contratistas y arrendatarios. La Federación Agraria Argentina, surgida del conflicto de 1912 conocido como el Grito de Alcorta, se consolidó como un actor de peso en esas disputas. Compuesta por arrendatarios, la Federación intentó conseguir la modificación de las reglamentaciones que regulaban las relaciones entre los dueños de la tierra y los colonos, aspecto en el que no lograron demasiados avances, a pesar de que hacia 1916-1917 varios paros tuvieron lugar en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, incluso más allá de la decisión de la Federación Agraria. Por otra parte, a comienzos de 1919 se iniciaba una huelga de peones rurales, que coincidió con un nuevo movimiento de reclamo de los arrendatarios, que sumaron sus propias exigencias: créditos accesibles y moratoria de las deudas y, más adelante, la reforma agraria.

En esos sucesos no faltó la violencia, tanto a cargo de las fuerzas represivas –llegó a aplicarse la Ley de Defensa Social sancionada en 1910– como de los propios huelguistas, fueran trabajadores o chacareros. Finalmente, el gobierno intentó poner en marcha un plan de cierta

amplitud, que contemplaba la satisfacción de algunos de los reclamos –creación de organismos para regular las relaciones laborales en el campo, tres años de contrato como mínimo para los arrendatarios, apoyo a las cooperativas, entre otras medidas–, que fue bloqueado casi por completo en el Congreso por los grupos de la oposición conservadora. Entre los arrendatarios la agitación continuó, y en agosto de 1921 tuvo lugar una marcha de chacareros a la ciudad de Buenos Aires. Poco después, fruto de las negociaciones parlamentarias, fue sancionada una ley que se limitó a regular los arrendamientos y a fijar normas para la relación entre propietarios y arrendatarios.

En lo referido específicamente a los trabajadores asalariados, también en Córdoba las luchas comenzaron en 1917, siendo 1919 el momento de tensión máxima, mientras que en Santa Fe la mayor conflictividad se registró hacia 1920. Con diferentes intensidades, los procesos de lucha incluían incendios de campos, cortes de alambrados y envenenamiento de animales, además de la declaración de huelgas, que solían tener lugar al inicio de la cosecha. Las centrales sindicales urbanas, de mayor experiencia, colaboraban con estos movimientos, e intentaban aprovechar la oportunidad para extender la sindicalización mediante el apoyo a las organizaciones ideológicamente cercanas. Los sectores patronales respondieron acudiendo a los rompehuelgas de la Asociación Nacional del Trabajo y alentando la acción de la Liga Patriótica, que tenía partidas rurales armadas; esos grupos se sumaban a las fuerzas policiales para reprimir. A pesar de que existieron demandas particularizadas, es clara la reiteración de un conjunto de reclamos en estos movimientos, como el aumento de salarios, las mejoras en las condiciones laborales, la reducción de la jornada de trabajo y, en ocasiones, la exigencia de reconocimiento a las organizaciones de trabajadores.

Dos conflictos relevantes: La Forestal y la Patagonia

Este movimiento de conflicto social en el mundo agrario tuvo dos episodios muy importantes. Uno estuvo vinculado a la Compañía La Forestal, parte de cuyos capitales eran ingleses, que actuaba en el norte de Santa Fe y en el Chaco. En tiempos de la Primera Guerra Mundial, la compañía poseía aproximadamente 1 760 000 hectáreas en aquellas zonas, que dedicaba a la explotación del quebracho colorado en el monte, para la elaboración de tanino en fábricas que también eran pro-

piedad de la firma. Así, en torno a las instalaciones de la compañía crecieron los poblados existentes, se crearon nuevos asentamientos de trabajadores, se extendió el ferrocarril. Antes de la guerra, la demanda de trabajo generada por La Forestal había sido alta.

El trabajo en el monte resultaba particularmente duro: el trabajador se internaba allí, en ocasiones acompañado por su familia, y se alojaba en chozas o vagones de ferrocarril. La paga solía hacerse con vales, bonos o fichas de la compañía, lo que obligaba al trabajador a comprar en los propios almacenes de la empresa los productos que consumía. La empresa también era, en muchos casos, propietaria de las viviendas donde se alojaban los obreros de la planta, de modo tal que el despido no significaba sólo la pérdida del trabajo, sino también de todo lo demás: vivienda, redes sociales, amistades. Otro efecto de estas circunstancias era que el control sobre los trabajadores no se limitaba al espacio de la planta fabril o del monte, ni a las horas de trabajo, sino que se extendía espacial y temporalmente mucho más allá. El poder de la empresa era tal que ejercía funciones policiales y judiciales, apañada por comisarios y jueces de paz corruptos.

Esta situación, que suponía un desafío evidente para el estado, generó un debate en el poder legislativo de Santa Fe hacia 1915, aunque finalmente no se tomó decisión alguna. Debe tenerse en cuenta que el de La Forestal no era un caso único en estos años; en las plantaciones yerbateras y en los ingenios azucareros se daban situaciones similares, con el agregado de que la mano de obra indígena solía ser compulsivamente arrastrada al trabajo. Era un modo de organización de la producción y de la relación con el poder político, propio de cierto tipo de empresa, relativamente extendido en algunas zonas periféricas.

A pesar de que las dificultades no faltaban, activistas obreros del ferrocarril y de los barcos que recorrían el Paraná contribuyeron al inicio de la acción sindical en La Forestal, que además se vio impulsada por la instalación de un local socialista en uno de los poblados cercanos a los terrenos de la empresa. Finalmente, se abrió un centro sindical en la población de Villa Guillermina. Los militantes pronto fundaron un periódico y, a mediados de 1919, los trabajadores presentaron sus reclamos a la compañía y lanzaron la huelga para obtenerlos; exigían aumento de salarios y una jornada de trabajo de ocho horas. Se agregaba la demanda del fin de los despidos, que la empresa utilizaba como herramienta para bajar sus costos de producción.

Luego de una tregua, en 1920 el conflicto tomó nuevo impulso, y habría de sostenerse, con marchas y contramarchas, hasta comienzos de

1921. El uso de la violencia fue también frecuente: represión policial, arresto de los dirigentes obreros, despidos, cortes de energía eléctrica a los pueblos; por su parte, los trabajadores apelaron al muy eficaz recurso del sabotaje de las vías del ferrocarril, entre otros. El conflicto se cobró al menos dos muertos, un funcionario de la compañía y un trabajador. En el transcurso de estos episodios, la empresa logró el objetivo de disminuir sus costos por la vía de los despidos y desplegó prácticas monopólicas hacia sus competidores. En lo que fue un cambio significativo, en enero de 1921 la protesta obrera pasó a centrarse en el reclamo del derecho a trabajar; las condiciones se estaban tornando muy desfavorables para los trabajadores. El proceso volvió a radicalizarse y se denunciaron episodios de persecuciones y muertes de obreros en los montes, así como el incendio de locales sindicales e incluso de viviendas de algunos activistas. Hacia abril, el movimiento fue finalmente derrotado.

Para entonces, ya había comenzado otro conflicto en el sur, cuyos ecos se prolongarían en el tiempo. En la actual provincia de Santa Cruz, por entonces territorio nacional, la actividad económica central era la cría de ovejas para la exportación de lanas y carnes; la propiedad estaba radicalmente concentrada y la producción ganadera era extensiva. En la costa, se realizaba la faena de los animales destinados a los frigoríficos, que se encontraban instalados en Ríos Gallegos, San Julián y Puerto Santa Cruz. Se trataba todavía de pequeñas poblaciones que no pasaban de los 3000 habitantes. En el resto de la zona, la densidad de población era mínima y el transporte y las vías de comunicación, complicadas y difíciles.

Hacia septiembre de 1920, en Río Gallegos, la Sociedad Obrera de Oficios Varios intentó realizar un acto, que fue prohibido por las autoridades del territorio nacional. Se inició así un conflicto que en sus primeras acciones incluyó el hostigamiento patronal a cargo de la Liga Patriótica, creada el año anterior en ocasión de la Semana Trágica, en Buenos Aires. El activismo obrero sumó a las demandas de los trabajadores urbanos las de los peones rurales. Estos últimos ya habían planteado un conjunto de reclamos, hacia 1915, que reiteraban ahora; apuntaban a limitar la jornada de trabajo –que era de doce horas y a veces hasta de dieciséis–, a conseguir mejores condiciones, ya que las barracas donde se alojaban en las estancias no tenían calefacción y la comida era pésima, y a eliminar el sistema de pago en vales o en moneda chilena, que debía ser cambiada a la local. Estos reclamos fueron puestos por escrito en un petitorio, en el que la exigencia de tener "una

tarde libre para lavar la ropa" y de "no trabajar a la intemperie cuando llueve" permiten hacerse una idea cabal de las condiciones laborales. El petitorio fue rechazado, lo que desató el comienzo de la huelga. Los peones, desplazados de los establecimientos por los estancieros, organizaron campamentos en las zonas cercanas a la cordillera y se apropiaron de víveres y caballos. Hacia diciembre de 1920, comenzó la represión a cargo de la policía local y los grupos de la Liga Patriótica.

Conflictos sociales en la Patagonia

Las organizaciones obreras estaban movilizadas en algunos pueblos patagónicos ya desde la segunda mitad de 1920. A fines de ese año comenzó una huelga que fue reprimida a través de la intervención policial y de grupos de la Liga Patriótica. En el campo, los peones de estancia fueron expulsados por los propietarios.



Federación Obrera Departamental
Puerto Deseado
Al Pueblo Trabajador:
COMPAÑEROS!
Treinta camaradas nuestros están
presos por la tirania Capitalista
No obstante todavia quedamos muchos
trabajando por la causa
con mayor entusiasmo contra más tirania
¡VIVA LA HUELGA!
EL COMITÉ de Huelga

Publicación de denuncia de la situación, de diciembre de 1920. Los episodios de represión más cruenta ocurrirían a fines del año siguiente.

Denuncia de la represión en Santa Cruz

En abril de 1922, el periódico *Unión Sindical*, vinculado a la Unión Sindical Argentina –una de las centrales obreras, de orientación *sindicalista*–, denunciaba en su primer número la represión en la Patagonia y reclamaba la organización de una campaña para "desmentir categóricamente al periodismo venal empeñado en defender el latrocinio y el bandolerismo de jefes militares" y el "patriotismo felón" de la Liga Patriótica:

"Los crímenes de la Patagonia no pueden quedar impunes.

Sobre los fusilamientos en Santa Cruz.

Ya que la 'justicia histórica' se ha hecho cómplice de los malvados, el pueblo debe constituir su tribunal permanente. Fragmentos de una carta.

La clase obrera de la Patagonia ha sido asesinada a mansalva. Suman más de dos mil trabajadores fusilados, quemados con nafta, arrojados al mar, enterrados vivos en la Estancia Cifre, en Gallegos, Santa Cruz, Lago Argentino, Estancia Anita, El Cerrito, Punta Alta y otros parajes de la gélida zona. [...]

No existía otro medio para imponer el respeto debido a su condición de hombres productores que la organización sindical. Mediante este recurso –que ejerce universalmente la clase asalariada– el proletariado patagónico hizo sus reclamaciones equitativas a esos señores que han resucitado en este 'democrático' país la más odiosa y vergonzante época de feudalismo. [...]

Los hechos delictuosos y bárbaros perpetrados por el ejército nacional a las órdenes de jefes inescrupulosos, mercenarios, dignos del más ejemplar escarmiento, han sobrepasado los cálculos más pesimistas. Los caballos del ejército costeado con el dinero del pueblo, han ido a borrar a la Patagonia los angostos caminos del derecho, asesinando las tropas a indefensos hambrientos y fugitivos parias, con el regocijo de los capitalistas extranjeros".

Unión sindical, abril de 1922, reproducido en Roberto Reinoso (comp.), Bandera proletaria: selección de textos (1922-1930), Buenos Aires, CEAL, 1985.

Al inicio de 1921, llegaron a la zona las tropas del ejército al mando del teniente coronel Héctor Varela, enviadas por el gobierno nacional. La etapa siguiente del conflicto fue abierta por el laudo del gobernador del territorio, que reconocía la veracidad de algunas de las denuncias y

atendía parte de los reclamos obreros. Este resultado fue visto como una victoria parcial por parte del activismo sindical, y planteado como una derrota a manos de los "bandoleros" por ciertos sectores de la prensa y las organizaciones patronales. Con una fuerte tensión en las estancias –donde los trabajadores más activos no volvían a ser contratados y se sucedían choques, acotados, con los grupos armados de los estancieros–, el conflicto continuaba. Los terratenientes sostuvieron una reunión con el propio Yrigoyen en Buenos Aires, y arreciaron tanto las opiniones que indicaban que el conflicto estaba vinculado a las pretensiones chilenas sobre la Patagonia, como las que subrayaban que el radicalismo había sido desbordado por la protesta social y que se imponía el retorno al orden.

En septiembre de 1921, el conflicto volvió a tomar impulso, se extendió geográficamente y asumió la forma de una huelga general, con la creación de grupos de huelguistas que intentaban controlar áreas rurales. En esta oportunidad, la represión quedó a cargo de las tropas de Varela, quien estableció la ley marcial y, en las zonas de combate, fusiló en masa a huelguistas, colaboradores y dirigentes. Mientras tanto, en la Capital la prensa obrera denunciaba la situación.

Entre diciembre de 1921 y comienzos de 1922, tanto en la costa como en las zonas próximas a la cordillera, los huelguistas fueron derrotados y, en muchos casos, asesinados. Por entonces se calculaba que habían muerto unos 2000 obreros. Todos los dirigentes salvo uno, Antonio Soto, que había escapado a Chile, se hallaban entre las víctimas; los presos eran alrededor de 600. En el Congreso no faltaron las denuncias socialistas, mientras que los periódicos sindicales y de los grupos de izquierda denunciaban a Varela como el responsable de la masacre. En enero de 1923, el obrero anarquista de origen alemán Kurt Wilckens asesinó a Varela en un atentado que tuvo lugar en la Capital; Wilckens, a su vez, fue asesinado en la cárcel por un miembro de la Liga Patriótica.

En la ciudad: la Semana Trágica de 1919

Tal como indican las cifras planteadas al comienzo de este capítulo, las ciudades fueron sitios significativos para la vida social en la Argentina de la época. No sólo se reunía allí un porcentaje importante de la población, también se desarrollaba en ellas una gran actividad productiva, de transporte y comercial. Dos de las tres ciudades más grandes de la

Argentina –Buenos Aires y Rosario– eran además centros portuarios. Ellas fueron el ámbito donde, desde fines del siglo XIX, los conflictos propios de esa etapa del capitalismo, con actores que eran trabajadores asalariados, por una parte, y patrones y empresarios, por otra, tuvieron lugar más tempranamente y con perfiles más acentuados. De la multitud de conflictos laborales que sacudieron a las ciudades argentinas entre 1917 y 1921, la Semana Trágica de 1919 se instaló como el emblemático y decisivo, y el más recordado por el activismo obrero.

Los trabajadores de los talleres metalúrgicos Vasena, ubicados en plena ciudad de Buenos Aires, se encontraban en huelga desde diciembre de 1918. Los reclamos eran los habituales: reducción de la jornada laboral, aumento de salarios y reincorporación de compañeros despedidos. Apenas iniciado el año 1919, el 7 de enero, se produjo un choque entre los huelguistas y quienes continuaban trabajando amparados por custodios; la policía intervino y provocó, en principio, cuatro muertos y más de veinte heridos. Inmediatamente, una de las centrales sindicales, la Federación Obrera Región Argentina (FORA) del V° Congreso, comunista anárquica, convocó a una huelga general para el 9 de enero. La policía se enfrentó, en refriegas y tiroteos, con grupos de trabajadores que intentaban propagandizar y garantizar la huelga; finalmente, las fuerzas policiales, el 9 de enero, balearon el cortejo fúnebre de las víctimas de la represión del 7. El número de muertos y heridos esta vez fue aún más alto.

Mientras tanto, otra central sindical, la FORA del IX° Congreso, se sumaba a la convocatoria a la huelga general. El conflicto se extendió, enlazándose además con varias huelgas sectoriales que estaban en curso. La policía parecía desbordada por los trabajadores y, mientras tanto, tropas militares partían desde Campo de Mayo hacia la ciudad. Algunos creyeron que se trataba de un golpe militar destinado a frenar lo que imaginaban como una insurrección.

Varios fueron los elementos que entraron en juego en esos días. Por una parte, la alarma de sectores patronales y políticos ante un supuesto "complot maximalista", en alusión a las posiciones de la izquierda más extrema, cuya existencia era muy dudosa; el miedo, alentado por la agitación social que también reinaba en Montevideo, alentó la represión dura. Los grupos de lo que sería la Liga Patriótica, así como también grupos conservadores y radicales, salieron a la calle a colaborar con la policía, asaltando locales y periódicos sindicales y de izquierda a los que insistían en considerar "maximalistas" y suponían envueltos en aquella conspiración. Los habitantes del barrio del Once, con fuerte presencia

judía, fueron objeto de varios ataques, en una muestra de antisemitismo. La violencia que utilizaron los trabajadores, por su parte, parece haber tenido objetivos fundamentalmente defensivos.



La Semana Trágica

En enero de 1919, los episodios de la Semana Trágica sacudieron a la ciudad de Buenos Aires. Iniciados los sucesos con un conflicto laboral en los talleres Vasena, la represión se cobró un número muy importante de muertos y heridos, y no faltaron los choques entre los trabajadores y las fuerzas policiales y militares.



Imagen del entierro de las primeras víctimas; los asistentes serían luego reprimidos, a su vez. Archivo General de la Nación.

Yrigoyen intentó mantener abiertos canales de negociación con los sindicatos y también tuvo una reunión con el propio Vasena, en la cual reclamó que cediera a las exigencias obreras. Los incidentes duraron aproximadamente una semana, con días de absoluta paralización de toda actividad en la ciudad, y constituyeron uno de los máximos episodios de lucha social, quizá de impacto aún mayor que el de los futuros sucesos de la Patagonia. La visibilidad que daba al conflicto la circunstancia de desarrollarse en Buenos Aires, la presencia de las tropas del

ejército en la Capital y el número de víctimas –que muchos han estimado en alrededor de 700, pero que la Embajada de los Estados Unidos, por entonces, calculó en más de 1300– contribuyeron a instalar a la Semana Trágica como uno de los episodios más significativos de la protesta social, que señaló, además, un cambio de actitud en el gobierno radical ante la cuestión obrera.

El movimiento obrero

Quienes participaban de estos movimientos no eran sólo trabajadores movilizados espontáneamente. Las agrupaciones con funciones sindicales existían ya en la Argentina de fines del siglo XIX, como se indicó en el capítulo 1, y desde 1890 se habían realizado esfuerzos por crear una organización federativa de nivel nacional. Hacia 1916, cuando el radicalismo llegó al gobierno, las centrales activas eran varias. Un año antes, la FORA celebró su IX° Congreso. Había sido creada en 1901; en 1905, durante su V° Congreso, se había definido como comunista anárquica. A ella se fueron incorporando grupos que adscribían al *sindicalismo revolucionario.* Esta corriente entendía que era el sindicato la organización decisiva a la hora de emprender la transformación social que habría de llegar a través de la huelga general revolucionaria. Doctrinariamente, el *sindicalismo revolucionario* rechazaba la subordinación del movimiento obrero y sus organizaciones a los grupos y partidos políticos. En 1915, en su IX° Congreso, estos sectores consiguieron la mayoría y establecieron que la FORA sería en adelante una organización exclusivamente obrera, sin definición ideológica. Ciertos grupos anarquistas se manifestaron en contra del cambio y la central se dividió: por unos años, existieron la FORA del V° Congreso, que se proclamaba anarcocomunista, y la FORA del IX° Congreso, *sindicalista revolucionaria.* Esta última dio origen, en 1922, a la Unión Sindical Argentina (USA), también *sindicalista,* si bien algunos militantes socialistas y comunistas participaron de ella.

En 1926, los ferroviarios de La Fraternidad y de la Unión Ferroviaria, junto a los municipales y algunos otros gremios, fundaron la Confederación Obrera Argentina (COA). En sus puestos directivos convivían socialistas y *sindicalistas,* y la COA se preocupó por impulsar la organización sindical por rama industrial. Los militantes comunistas, por otra parte, terminaron organizando su propia central, el Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC), en 1929. Ese año, actuaban en el movimiento

obrero la FORA V° Congreso, la USA, la COA –ambas con presencia *sindicalista* y socialista– y el CUSC, comunista. En 1930, USA y COA, junto a otros sindicatos independientes, concretarían un acuerdo de unidad anterior y crearían la Confederación General del Trabajo (CGT).

Durante la primera década del siglo XX, el anarquismo había sido particularmente fuerte en el movimiento obrero. Más allá de la existencia de varios grupos y corrientes, la prevención ante los partidos políticos, la confianza en la organización autónoma de la clase obrera y, en varios sectores, la promoción de la propaganda por la acción directa fueron puntos de vista extendidos en el anarquismo. De todos modos, ya en los años veinte la presencia anarquista, sostenida en general en sindicatos de base artesana, había menguado, en un proceso lento iniciado hacia 1910. El *sindicalismo revolucionario,* que, como se planteó, ponía al sindicato y la huelga en el centro, y rechazaba a los partidos, era la tendencia dominante cuando comenzó la agitación que se prolongó desde 1917 hasta 1921, y sus organizaciones fueron participantes muy activas de ese movimiento. Los socialistas, por el contrario, asumían plenamente su condición de miembros del partido, aunque eran habituales las tensiones y las disputas entre dirigentes del ala sindical y los dirigentes políticos. Por último, los comunistas, que habían creado su partido a comienzos del período, al calor de la Revolución de Octubre y de las iniciativas que, poco más tarde, surgían de la Internacional Comunista, también participaban de la lucha política.

Por entonces, el movimiento sindical se hallaba todavía en trance de intentar extender y consolidar la organización de la fuerza obrera; ya no se encontraba en la precaria situación de los comienzos, pero tampoco la estructura sindical era firme y estable. Los sindicatos locales no siempre estaban articulados a escala nacional y en muchos casos la sindicalización por rama de la producción no estaba desarrollada. Además, las organizaciones de trabajadores rurales eran débiles. Se trataba, en consecuencia, de asociaciones locales por oficios. A fines de la década de 1920, la implantación de las compañías extranjeras ya mencionadas hizo crecer el número de trabajadores sin calificación, difíciles de encuadrar en estos modelos. Por otra parte, las cuotas que pagaban los trabajadores, llamadas "cotizaciones", eran voluntarias, y no había mecanismos acordados con las empresas para su percepción. La legislación prácticamente no reconocía a los sindicatos. Aunque había organizaciones más asentadas, resulta significativo que, hacia 1920, los cotizantes a la FORA del IX° Congreso, la más grande de las federaciones, fueran unos 68 000 sobre unos 2 230 000

trabajadores ocupados en todo el país. En 1926, otra de las centrales mencionadas, la COA, reunía unos 80 000 cotizantes declarados, de los cuales 70 000 correspondían a los sindicatos ferroviarios, que eran singularmente fuertes en virtud del papel que le cabía a su actividad en la economía nacional. Se ha calculado que el porcentaje general de cotizantes no alcanzaba el 5 por ciento de la fuerza de trabajo. Estas circunstancias no impedían que las organizaciones obreras lograran una alta movilización de trabajadores en conflictos librados para la obtención de reivindicaciones específicas.

A lo largo de la década de 1920 se produjo un fenómeno de importancia para el movimiento obrero: el comienzo de un cierto diálogo con el estado. Éste había comenzado en los primeros años de la presidencia de Yrigoyen, antes de 1919, cuando el radicalismo en el gobierno intervino en algunos conflictos para apoyar reclamos de los trabajadores, evitar la represión y establecer contactos sistemáticos con los sectores *sindicalistas*, en particular con los ferroviarios y los obreros marítimos. Se ha conjeturado que, junto a una mirada benévola que el propio presidente dirigiría a los obreros, otras consideraciones más pragmáticas impulsaban esa relación. Por una parte, los radicales competían con los socialistas en ciertas franjas de votantes, sobre todo en la Capital, y los *sindicalistas* competían a su vez con los socialistas por el encuadramiento obrero y la conducción de sus organizaciones. Las relaciones entre el radicalismo en el gobierno y los dirigentes *sindicalistas*, de acuerdo con estos cálculos, permitían al primero expandir sus bases electorales de origen obrero y al segundo, dificultar el crecimiento gremial socialista, al obtener respuestas a los reclamos de los trabajadores. Una actitud realista a la hora de la negociación que, de todas maneras, no les impedía ejercer la crítica, sin dudas sincera, a la política burguesa.

En tiempos de Alvear, la Unión Ferroviaria, un sindicato fuerte de alcance nacional, con una dirección centralizada, relacionado con una actividad estratégica para la economía agroexportadora, obtuvo de las compañías de mayor envergadura mejoras en los salarios y en las condiciones de trabajo. En las negociaciones, el estado apoyó al sindicato, que, de todas maneras, también era considerado por las empresas como un interlocutor absolutamente admisible. La Unión Ferroviaria, que en 1929 contaba con unos 63 000 cotizantes, y La Fraternidad, el sindicato de los maquinistas, establecieron un modo de negociación con las empresas y el estado que resultó exitoso, en la medida en que obtuvieron mejoras sustanciales para los trabajadores del sector. Aun-

que con menor éxito, el procedimiento fue tomado como modelo por otras organizaciones, sobre todo en la década siguiente.



Artículo aparecido en el periódico sindicalista *Bandera Proletaria*

Las mejoras inmediatas

La clase trabajadora puede mejorar su condición dentro del marco creado por el sistema capitalista. Ya la ha mejorado en alto grado y puede mejorarla más aún; y no a expensas propias [...] sino a expensas de la clase capitalista [...]

La sustitución de las jornadas de 16 horas, por ejemplo, por la de 8, acusa una mejora indiscutiblemente positiva. La higienización de los lugares de trabajo es otra mejora que no disfrutaban los trabajadores hace un cuarto de siglo. La alimentación en aquellas industrias en que [...] constituye un complemento del salario, mejoró en cantidad y calidad. Los salarios experimentaron también un aumento innegable [...]. Aparte lo consignado, tenemos una mejora igualmente estimable, de índole moral y humana: el trabajador de hoy recibe un trato que no admite comparación con el que se le daba tiempo atrás [...]. Naturalmente que las mejoras no son extensivas a toda la clase [...]. Las mejoras son patrimonio de los trabajadores que saben conquistarlas, por el procedimiento único que ya hemos señalado: el de la acción sindical. [...] La acción electoral no arranca mejoras al capitalismo; la difusión de tal o cual concepto político y social, tampoco. Es la presión sobre la economía la que puede materializar un propósito y esa función es privativa de los obreros cuando se organizan con ese fin, creando ese organismo que se llama sindicato. [...] Y mientras realiza esa labor de mejorar la economía de la clase asalariada, el sindicato va acelerando el proceso de eliminación capitalista, sin cuyo cumplimiento no habrá revolución.

Bandera proletaria, órgano de la Unión Sindical Argentina, número 167, 31 de mayo de 1924, reproducido en Roberto Reinoso (comp.), *Bandera proletaria: selección de textos (1922-1930)*, Buenos Aires, CEAL, 1985.

A grandes rasgos, durante las presidencias radicales, esto es, entre 1916 y 1930, se pasó paulatinamente de un movimiento obrero con fuerte base artesanal y perspectivas anarquistas o anarcosindicalistas que todavía tenían vigencia en algunos grupos, a un movimiento

obrero cuya organización más importante era un sindicato grande, centralizado, capaz de obtener mejoras notorias para sus trabajadores por la vía de la negociación con la patronal y el estado, pero reacio a hacer colapsar el sistema de transporte ferroviario con una huelga nacional. El proceso de cambio se tornaría más evidente en los años treinta.

Otra vez en las ciudades

Otras transformaciones, cuyos escenarios también fueron las grandes ciudades, se iniciaron aproximadamente en los años posteriores a la Gran Guerra y, como en el caso anterior, sus resultados se afirmaron en la década abierta en 1930. Se trató de una lenta modificación en la identidad de los grupos subalternos urbanos, que pasó de exhibir perfiles de clase relativamente nítidos, centrados en la condición trabajadora de sus miembros, contestatarios y con fuertes rasgos derivados de la experiencia inmigratoria, a una identidad popular, que cobijaba diversos sectores sociales, políticamente reformista y con fronteras más lábiles que la anterior. El desarrollo de ese proceso de gran escala no implicó la ausencia de conflictos sociales intensos: en este capítulo se han examinado varios de ellos, y otros tendrían lugar en los años treinta. No obstante, los modos en que sus actores se concebían a sí mismos, a sus adversarios y a la propia lucha que libraban estaban transformándose.

Varios son los procesos de orden material que contribuyeron a sostener estas lentas y masivas transformaciones. Uno de ellos se relacionó tanto con la movilidad social ascendente registrada durante estos años, como con la expectativa que ella generaba en los propios grupos trabajadores. En Buenos Aires, el crecimiento de los sectores medios –siempre de difícil e imprecisa definición– creció del 38 al 46 por ciento entre 1914 y 1936. Esos grupos medios, en torno a 1930, evidenciaban cierto estilo de vida y pautas de consumo propios en numerosas ciudades argentinas; estaban integrados por empleados administrativos y otros trabajadores calificados, profesionales, pequeños comerciantes y también maestros, una figura característica de esas franjas. Si se atiende a ese sector en particular, se advierte que, entre 1914 y 1930, el número de maestros creció el 117 por ciento, mientras que la población aumentó, aproximadamente, en un 51 por ciento.

Algunos de estos rasgos fueron advertidos ya por los contemporáneos. Ello llevó a que, a fines de los años veinte y comienzos de los

treinta, incluso ciertos ensayistas radicalizados políticamente insistieran en que lo peculiar del conflicto social en la Argentina se hallaba precisamente en aquella movilidad y en lo permeable de las fronteras entre grupos sociales. A la búsqueda de algún sujeto colectivo que pudiera encarar una transformación social profunda, observaron también que una convocatoria rigurosamente clasista no podría incluir a ciertos sectores populares tradicionales del interior. Por ello, continuaban, el sujeto al que debía convocarse para promover aquella transformación social era *el pueblo*, que cobijaría tanto a los sectores medios como a los grupos del interior no modernizado, y resultaba mucho más numeroso y extendido territorialmente que una clase obrera todavía acotada en ambos sentidos. Así, el gran espacio popular –conformado por trabajadores, pequeños propietarios y comerciantes, pobladores rurales tradicionales, chacareros, incluso nuevos intelectuales, empleados y profesionales liberales que no se contaran en las filas de los poderosos– debía ser el múltiple actor de la empresa de la reforma social.

En el crecimiento de los grupos medios también tuvo un papel decisivo la demanda de mano de obra calificada para el sector terciario y para las actividades administrativas en la industria, así como la extensión del sistema educativo, proceso que, en su dimensión de masas, estaba todavía restringido a la escuela primaria. Al mismo tiempo, la ampliación del aparato del estado, que se volvía más complejo con la organización de nuevas agencias que desempeñaban tareas en muchos casos alejadas del trabajo manual, sostuvo esa demanda de personal medianamente calificado. Naturalmente, la ampliación de los sectores medios hablaba de las posibilidades de movilidad social ascendente. De todos modos, el fenómeno no respondía al patrón de un "ascenso" inmediato de un sector a otro en el ciclo vital de un individuo; se trató, en cambio, de una movilidad a mediano plazo, que terminaba por afectar a los hijos de los trabajadores.

La reconfiguración de la identidad de los sectores populares fue alentada, a su vez, por transformaciones en la propia estructura de las ciudades, en particular la de Buenos Aires, aunque no sólo ella. En la Capital, ya desde principios de siglo se desarrolló un proceso de avance desde los barrios más antiguos hacia la periferia, y en torno al Centenario, ese avance era visible en Villa Crespo, Almagro, Flores o Caballito. El movimiento se sostenía tanto a través de la venta de lotes en cuotas –que volvían la propiedad urbana un poco más accesible– así como por la implantación de nuevos medios de transporte: el tranvía eléctrico, el subterráneo a partir de 1913 y el ferrocarril de la zona metropolitana. A ellos

se sumaría, a fines de la década de 1920, el colectivo, que paulatinamente iría creando una densa red de líneas y trayectos. El poblamiento de los nuevos barrios, que experimentaron un marcado crecimiento en estos años, fue sólo uno de los fenómenos que transformó el aspecto de la ciudad. Mientras en las zonas más alejadas persistían ciertos rasgos semirrurales –vastas extensiones de terrenos sin urbanizar, baldíos y "campitos", entre otros–, en el centro, Buenos Aires se convertía en una moderna ciudad de masas, con lujosas salas de teatro y cine, sitios de espectáculos y restaurantes. También los barrios tenían sus pequeños centros sobre las avenidas, naturalmente más modestos, con cines, cafés y comercios.

Los barrios

A lo largo del período de entreguerras continuó la extensión de la ciudad hacia los barrios. En los años treinta, ese proceso estaba casi completado y la superficie de la Capital Federal, ocupada en gran parte, salvo en algunas zonas del sur.



Barrio de Boedo en la década de 1940.

De todas maneras, conviene recordar algunos límites de este proceso. El conventillo, los hoteles baratos, las pensiones, los cuartos alquilados en casas de familia fueron lugares que los miembros de los sectores

populares habitaron con frecuencia, y si en algunos casos las estadías fueron relativamente breves, en otros se prolongaron durante largo tiempo. Hacia 1937, bastante más allá del cierre del período tratado aquí, se calcula que en Buenos Aires el 60 por ciento de las familias obreras tenía como vivienda sólo una habitación. También debe recordarse que la expansión hacia la periferia se llevó adelante sin mayor control ni planeamiento, y que los loteos no pocas veces se hicieron sobre terrenos inundables o con algún otro tipo de inconveniente estructural.

En los barrios nuevos se organizaron redes de sociabilidad locales con sus puntos de encuentro, algunos informales, como los cafés, otros más institucionalizados. Clubes, sociedades de fomento, asociaciones culturales y deportivas, o bibliotecas fueron algunos de estos últimos, entre los que podrían contarse los locales partidarios. Los aún módicos avances de la legislación referida al trabajo permitían disponer de algo más de tiempo libre: entre 1918 y 1929 se sancionaron leyes que reglamentaban el trabajo a domicilio y el trabajo infantil, así como el trabajo nocturno para algunas actividades, y fijaban la forma en que habría de pagarse el salario. Hacia 1929, se sancionó la ley de las 8 horas diarias y 48 semanales de trabajo, que ya regía en varios sectores en virtud de algunos acuerdos específicos. También en 1924, durante la presidencia de Alvear, el 1° de Mayo había sido convertido en feriado nacional, y se habían establecido leyes jubilatorias para algunas actividades. Con más tiempo libre, aparecían nuevos modos populares de utilizarlo: se ha señalado ya que el cine era un entretenimiento muy extendido, y también el fútbol, que en la década abierta en 1920 se convirtió en un espectáculo al que semanalmente concurrían decenas de miles de personas en Buenos Aires. Rosario, La Plata y Córdoba eran casos semejantes. Esos públicos masivos estaban compuestos en parte por los sectores populares.

Por otro lado, en los barrios nuevos convivía gente cuyas experiencias laborales eran muy diversas; se mezclaban así trabajadores de fábricas o talleres con profesionales, empleados, maestros y comerciantes. Los miembros de los diversos grupos participaron de importantes empresas para el barrio, como el reclamo por la instalación de servicios o de una escuela, la fundación de una biblioteca o un club. Muchas de estas iniciativas exigían cierta negociación con el estado, que comenzaba a ser visto como proveedor posible de servicios y no sólo como mero agente de represión. Este cambio, que terminaría de cuajar en la década siguiente, fue particularmente visible en el plano de la salud y la educación. Algunos partidos políticos, como el Socialista y la Unión Cí-

vica Radical, de fuerte implante barrial, funcionaron a su vez como agentes de integración de estos sectores y de articulación de sus demandas con las respuestas estatales. Estas últimas, tanto en la escala municipal como en la nacional, fueron sin embargo escasas, en muchos casos, todavía en los años veinte.

Variaciones ciudadanas

La legislación electoral de 1912 había ampliado el número de quienes gozaban de derechos políticos, a pesar de que subsistían restricciones jurídicas y, ocasionalmente, de hecho. Si bien muchas otras actividades se relacionaban con ellos, eran las elecciones el momento en que esos derechos se ejercían de modo más visible y masivo. Pero entre 1916 y 1930, también se extendió la convicción, cuyos orígenes son no obstante anteriores, de que existían derechos que se relacionaban con la vida social por distintas vías. Así, tanto en los conflictos radicalizados que tuvieron lugar entre 1917 y 1921 como en las líneas posteriores de negociación sindical con el estado, se insinuaba esa extensión en uno de los actores del proceso: las organizaciones de los trabajadores. En relación con la estructura estatal, si se tiene en cuenta la sanción de algunas leyes laborales, todavía escasas, puede verificarse el mismo fenómeno. Un caso en el que la extensión de esas certezas es visible es el de la salud: si bien amplios sectores de los grupos subalternos aún parecían entender que sólo el azar la regía, otros de sus miembros reclamaban del estado dispensarios, salas y campañas sanitarias, fuera en su condición de trabajadores, de ciudadanos o hasta de vecinos. Por su parte, numerosos funcionarios estatales y médicos comenzaron a considerar que la salud de la población era una cuestión que afectaba a los intereses nacionales; en este contexto, el ideal de una "raza argentina" fuerte ganaba terreno.

Es claro que algunos de los casos analizados desafían la opinión de que estas realidades estuvieran extendidas. En el de La Forestal, por ejemplo, las durísimas condiciones de trabajo, las peculiares relaciones que una empresa establecía con el estado, usurpando atribuciones que le correspondían a éste, las distorsiones que sufría el trabajo asalariado, son factores que llevan a reconsiderar el tipo de relaciones sociales que tenían lugar en algunas zonas del país. También permiten plantear la cuestión de la efectiva vigencia de las libertades civiles y políticas para estos sectores, cuando estaban conculcados sus derechos sociales.

Pero el cuadro debe completarse con otras figuras. Sindicalistas que, sin dejar de combatir ocasionalmente con las fuerzas policiales, apelan al estado en la negociación con la empresa; vecinos que demandan de una municipalidad la instalación de una escuela o del alumbrado público; amplísimos grupos –entre los que no se contaban los inmigrantes– que concurren a elecciones y al servicio militar obligatorio. Al tiempo que el capitalismo se afirmaba en la Argentina, se desplegaban esos fenómenos que integraban a las masas a esa esquiva entidad, la nación, y las disciplinaban socialmente. En cualquier caso, en relación con los contenidos sociales de la ciudadanía en los años veinte, el proceso era aún muy incipiente.

TERCERA PARTE
1930-1943

5. La disputa política, de un golpe a otro

Poco después del golpe de estado de 1930, quedó claro que el radicalismo, a pesar de haber sido desplazado del gobierno, contaba aún con apoyo popular. Su retorno a la lucha electoral en 1935 supuso nuevas complicaciones para el oficialismo, una alianza inestable y heterogénea articulada por el general Justo, que recurrió al fraude masivo para controlar la sucesión. En numerosas ocasiones, los mismos dirigentes que apelaban a ese mecanismo sostenían su apego a los principios constitucionales y a las leyes vigentes. Mientras tanto, crecía la importancia del ejército al momento de definir situaciones políticas. En un cuadro ya conmocionado por la Segunda Guerra Mundial, el período se cerró en 1943 con un nuevo golpe militar.

Los términos del problema

Entre el golpe de estado de 1930 y el de 1943, las disputas políticas en la Argentina fueron múltiples, complejas, libradas por numerosos actores y muy intensas, lo que contrasta con la opinión que sostiene que se trató de un enfrentamiento entre dos contendientes –"coloniales" frente a "nacionales", o autoritarios frente a democráticos– que habría ocupado toda la escena. A su vez, el contexto general en el que esas disputas tuvieron lugar cambió con rapidez en varias oportunidades, tanto por razones vinculadas a la situación local como a la internacional, sacudida primero por la crisis de 1929 y sus efectos, luego por la Guerra de España (1936-1939) y, finalmente, por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Al mismo tiempo, las posiciones y estrategias de los diferentes partidos cambiaban, al menos en algunos de sus puntos, en función de aquellas transformaciones y también de las maniobras que ensayaban sus adversarios en la Argentina.

Desde el punto de vista ideológico, se asistía al desarrollo de varios fenómenos importantes y relativamente novedosos: una crisis de la mirada liberal sobre el mundo, que excedía el plano local y era más profunda que las anteriores; ciertas reorientaciones en las posiciones de los grupos de izquierda, varios de los cuales pasaron de la certeza en la inminencia de la revolución a la consideración de otras vías para alcanzar la reforma social; el ascenso de actitudes que, sin ser del todo uniformes ni nuevas, se proclamaban nacionalistas, en muchos casos vinculadas al catolicismo. Varios de estos procesos habían comenzado en los años veinte, pero en la década de 1930 se volvieron más intensos y evidentes.

En el plano político, la cuestión electoral fue una de las más importantes. A lo largo de la década, algunos dirigentes y grupos realizaron planteos de corte corporativo y proclamaron la necesidad de una reforma de la legislación electoral. Una propuesta en esta línea fue la que Uriburu intentó impulsar durante su dictadura, que sin embargo fracasó pronto ante el rechazo de los partidos, incluso de los que habían participado en el golpe del 6 de septiembre. Otra fue la del gobernador bonaerense Manuel Fresco, cuya gestión terminó con la intervención de la provincia por parte del presidente Roberto M. Ortiz, en marzo de 1940. La cuestión radical se entramó con estos asuntos de manera directa. Desde abril de 1931, como se verá más adelante, fue evidente que el radicalismo conservaba mucho de su caudal electoral, y a partir del retorno de la UCR al juego político, decidido en 1935, la aplicación a gran escala del fraude y la manipulación de los resultados electorales fueron las respuestas del oficialismo, salvo durante unos pocos años, bajo la presidencia de Ortiz. Decididamente, las cuestiones de la democracia, del radicalismo y de las elecciones estaban emparentadas.

Sin embargo, varios sectores dirigentes continuaban proclamando su apego a las disposiciones de la Constitución, a las formas republicanas y, en algunos casos, incluso a las leyes electorales, que violaban luego en los hechos. En el futuro, no pocos problemas de legitimidad tendrían su origen en esa situación.

La dictadura de Uriburu

Luego del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, los miembros del sector afín a Uriburu ocuparon altos cargos; contaron con el apoyo de algunos grupos de civiles nacionalistas y conservadores radicalizados –aunque ningún partido importante desde el punto de vista electoral se alineó

allí–, y de sectores militares, minoritarios en la institución. Ese conjunto intentó en principio una salida de perfiles corporativos, que incluía la reforma de la Constitución Nacional y de la legislación electoral; tales proyectos, aunque anunciados, no fueron delineados con precisión. Algunas posiciones de estos sectores, así como la formación de agrupaciones militarizadas –Legión Cívica, Legión de Mayo, Liga Republicana–, los aproximaban sin dudas al fascismo europeo, pero otras los alejaban en parte de este modelo, ya que los grupos argentinos entendían que la clave para la construcción de una sociedad ordenada jerárquicamente era el ejército. La institución militar, que se había transformado en un elemento relevante para la definición de la ecuación política, era la pieza central del proyecto uriburista, mucho más que unas masas disciplinadamente movilizadas en torno al partido único, al estilo del fascismo italiano.



Las elecciones luego del golpe

Junto a los partidos, algunas agrupaciones que se proclamaban independientes apoyaron la candidatura de Justo. Fueron activas, en particular, en la Capital Federal.



Al pueblo todo de la República!

Hace más de tres meses que la Agrupación Independiente JUAN PUEBLO viene realizando una encuesta en la población de toda la República, a fin de conocer cual sería el ciudadano que tuviera méritos suficientes y que fuera una garantía de respeto a los sagrados postulados de la gloriosa revolución del 6 de Septiembre de 1930, para ocupar la primera magistratura de la Nación.

Según nuestros informes el candidato mejor colocado para ocupar el sitial de Rivadavia, es el señor General don Agustín P. Justo.

La junta de delegados que suscriben ha comprobado que el nombre del general Justo es visto con simpatía, no solo en la masa de los ciudadanos independientes sinó que tambien en los hombres de más prestigios dentro de las diversas agrupaciones políticas del país.

La Agrupación independiente JUAN PUEBLO solicita de los ciudadanos honestos y bien intencionados continuen prestigiando el nombre del general don Agustín P. Justo, para ocupar la futura presidencia de la República.

¡A los ciudadanos independientes y a los hombres políticos de todo el país, le pedimos que reflexionen detenidamente sobre la iniciativa de la Agrupación independiente JUAN PUEBLO!

Buenos Aires, 25 de Mayo de 1931

Tomás C. Black
Secretario General

Jose M. V. Castiñeiras

Luis Sanguinetti, Ulises Olgiati y Silvio Beraldo

DELEGADOS

Propaganda electoral de una efímera Agrupación Independiente Juan Pueblo, en ocasión de las elecciones de 1931.

Pero era el general Agustín P. Justo, jefe de otro de los grupos complicados en el golpe, quien contaba con la mayoría de las simpatías ideológicas y las lealtades entre los cuadros militares destacados. Justo, que había sido ministro de Alvear, disponía también de un amplio sistema de relaciones con dirigentes políticos, en particular con sectores del radicalismo. Para percibir con precisión la nueva relación de fuerzas en un escenario también nuevo, debe tenerse en cuenta que la alternativa corporativista que el uriburismo propiciaba habría de afectar no sólo al partido derrocado, la UCR, sino también a todos los demás. Eso fue lo que motivó que, a escasos días del golpe, el 27 de septiembre, se creara la Federación Nacional Democrática, donde formaron el Partido Socialista Independiente, los conservadores de la provincia de Buenos Aires y otros grupos conservadores y antipersonalistas, todos ellos favorables al golpe, pero renuentes a acompañar la salida imaginada por Uriburu.

En la misma línea de acción se sitúa la exigencia de una pronta normalización institucional que, a comienzos de 1931, un importante grupo de oficiales realizó a Uriburu. La inquietud militar continuó, probablemente alentada por Justo, aunque también actuaban oficiales yrigoyenistas que planeaban un contragolpe. Así, Uriburu debió conceder un llamado a elecciones en la provincia de Buenos Aires para abril de ese mismo año, ante la amenaza de que se produjera un movimiento militar. Severamente acotadas las posibilidades del plan inicial, el uriburismo imaginó una nueva alternativa, que consistía en llevar adelante elecciones provinciales escalonadas, para poner en evidencia el supuesto apoyo popular al proyecto presidencial, en una suerte de plebiscito en varios tiempos. En la provincia de Buenos Aires se votó el 5 de abril de 1931; estaba en juego la composición del Colegio Electoral que elegiría gobernador y vicegobernador.

Fue en ese momento cuando los dirigentes debieron tomar nota de que otra variable continuaba siendo importante en el juego político: el radicalismo. Los votos radicales fueron 218 800 frente a 187 800 votos conservadores y 41 600 socialistas; en consecuencia, en el Colegio Electoral, los socialistas definirían la situación. La UCR había mejorado su desempeño de 1930, aun sin manejar los recursos estatales a la hora del voto. Los cálculos políticos volvieron entonces a cambiar, ya que el uriburismo quedó definitivamente sin chance, y el radicalismo se convertía en un factor que debía ser tenido en cuenta, ya que a pesar del golpe, el derrocamiento y el descrédito del gobierno radical en sus últimos tiempos, quedaba demostrado que contaba con un apoyo popular nada despreciable. Finalmente, la elección de Buenos Aires fue anu-

lada en octubre, cuando ya se había convocado a elecciones presidenciales para noviembre.



La versión uriburista del golpe de Estado

En julio de 1931, durante la cena de camaradería de las fuerzas armadas, el general Uriburu pronunció un discurso en el que sostuvo que "la revolución [...] fue hecha contra un sistema y no solamente para derrocar un gobierno. No se preparó contra un partido para suplantarlo por otro, sino contra una demagogia, para que sea sustituida por un régimen orgánico que garantice el orden y el equilibrio de las instituciones, las libertades ciudadanas y la voluntad popular". A su juicio, "la revolución no fue inspirada, ni decidida ni ejecutada por los partidos políticos. La preparamos y llevamos a cabo con el ejército y la armada". Uriburu subraya lo que le parece un apoyo popular al golpe, y toma al mismo tiempo distancia de los grupos políticos: "el pueblo ha sentido y comprendido a la revolución de septiembre, mas no así los círculos que usufructúan a la política como profesionales y que creen que el país está encerrado dentro de ellos. Esos círculos pensaron que la revolución se había hecho para ellos y que debía terminar al día siguiente del derrocamiento del gobierno personalista. Reclamaron inmediatamente, envueltos todavía por el polvo del derrumbamiento, los despojos del gobierno, que era el botín que pretendían, detrás de la palabra que invocaron e invocan a grandes voces: la normalidad. Y bien: volveremos a la normalidad; es éste mi más apurado deseo y mi más vivo empeño, pues me es muy áspero el sacrificio de un gobierno difícil que no ambiciono. Pero no retornaremos a la normalidad engañosa que hasta el 6 de septiembre permitió todos los excesos de la demagogia, y que representa en el porvenir un grave peligro que puede repetirse, sino a la que estará garantizada con las reformas que constituyen el programa de la Revolución, para las que por mi parte agotaré todos los esfuerzos, a fin de que sean sancionadas".

Las citas textuales del discurso están tomadas de Tulio Halperin Donghi, *La República imposible (1930-1945)*, tomo V de la Biblioteca del Pensamiento Argentino, Buenos Aires, Ariel, 2004.

Así, en los meses que van de abril a noviembre de 1931 se realizaron operaciones y movimientos intrincados, cambiantes y cruzados. Con el quiebre del uriburismo, los grupos cercanos a Justo lograron afianzar

sus posiciones en la administración. Justo se esforzaba en la construcción de su propia candidatura a presidente y no dejó de intentar convertirse en candidato del radicalismo. En este partido se había producido el retorno de algunos disidentes que años atrás habían emigrado al antipersonalismo. En tanto, volvía al país Marcelo T. de Alvear, quien, luego de unas declaraciones bastante favorables al golpe del 6 de septiembre realizadas desde Francia, había asumido una posición crítica ante la dictadura. El ex presidente llegó a Buenos Aires a fines de abril de 1931, con una actitud claramente opositora, que ratificó en una entrevista con Uriburu; en mayo se ponía a la cabeza de la reorganización del partido. Naturalmente, Alvear era un dirigente muy poderoso en el radicalismo, que contaba además con la vieja amistad de Yrigoyen.

En julio de 1931, algunos militares yrigoyenistas intentaron un movimiento armado, que tuvo como suceso central el levantamiento del teniente coronel Gregorio Pomar en Corrientes, pero la tentativa fracasó. Varios dirigentes radicales, entre ellos el propio Alvear, fueron deportados. La dictadura convocó a elecciones para noviembre, y la UCR proclamó la candidatura de Alvear, por entonces exiliado en Montevideo. Bloqueada así la alternativa radical para su candidatura, el general Justo se dedicó a construir otra base de apoyo y simultáneamente presionó para obtener del gobierno el veto a la candidatura de Alvear, que logró poco tiempo antes de las elecciones. Ante esa circunstancia, el radicalismo decidió la abstención. El recurso era extremo, ya que en los hechos significaba entregar la presidencia a Justo.

Finalmente, en las elecciones de noviembre triunfaron los electores que apoyaron la candidatura justista. Ellos provenían del Partido Demócrata Nacional (PDN) –reunión de los grupos conservadores provinciales–, del Partido Socialista Independiente, una escisión del PS, y de la Unión Cívica Radical Antipersonalista; en un hecho singular hasta el momento en la política argentina, la iglesia católica se había pronunciado a favor de esta fórmula. En segundo lugar se ubicaron las listas de la Alianza Civil, integrada por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, que llevaban como candidatos a Lisandro de la Torre y a Nicolás Repetto e intentaban constituirse en la oposición de izquierda –una izquierda moderada y republicana– a la candidatura justista.

Varias observaciones deben realizarse en torno a estas elecciones. La primera, que en el caso del oficialismo no se trataba de una alianza estable y formalizada, sino de un acuerdo electoral entre partidos de peso muy distinto en cada provincia, y que, en general, se redujo sólo a la candidatura presidencial. Aun los candidatos a acompañar a Justo como vi-

cepresidentes fueron diversos. La segunda, que la Alianza Civil recogió parte de los votos que en otras ocasiones se habían dirigido al radicalismo, esta vez en la abstención. Luego, que el nivel de abstención fue bajo, aunque debe considerarse que la medida fue decidida muy poco tiempo antes del comicio. La conjunción de estos dos últimos fenómenos fortaleció a la oposición institucional, representada por la Alianza Civil y decidida a participar en el juego político, y llevó a que los partidos que la integraban vieran ampliada notablemente su presencia parlamentaria, mientras el radicalismo asumía el papel de oposición disruptiva por unos años, durante los cuales algunos grupos intentaron levantamientos armados con la participación de militares. El grueso del partido –a pesar de ciertas excepciones provinciales– prolongó la abstención hasta 1935. Por último, que en las elecciones de 1931 se registraron denuncias de fraude en Buenos Aires y en Mendoza; en algún caso, se trató de acciones en el marco de la contienda interna y local librada por las agrupaciones que apoyaban a Justo, que competían entre sí por el resto de los cargos en juego. Sin presencia radical y dado que la Alianza no constituía una amenaza electoral seria a escala nacional, era innecesario para el justismo apelar al fraude masivo para garantizar el resultado favorable en los comicios.

El cuadro político en los primeros años de la presidencia de Justo

Luego de las elecciones de noviembre, Justo y su vicepresidente, el conservador Julio A. Roca –hijo del ex presidente de la nación–, asumieron sus cargos en febrero de 1932. Desde ese momento y hasta su muerte, que tuvo lugar en enero de 1943, Justo sería una de las figuras decisivas en la política argentina.

Durante los primeros años de su gobierno y hasta 1935, la coyuntura política estuvo caracterizada por la abstención de la UCR y la ocasional apelación a la protesta armada por parte de algunos de sus grupos. Al mismo tiempo, la vida del partido radical continuaba a través del dictado de conferencias, la celebración de homenajes, la apertura de locales, la difusión de la prensa, la reunión de los organismos directivos. Otro de los rasgos propios de esa coyuntura fue la complicada relación entre los partidos que componían el oficialismo, cuya alianza parlamentaria, laxa e inorgánica, comenzó algo después a llamarse Concordancia. Estas agrupaciones competían por instalar a sus cuadros en el go-

bierno nacional –las situaciones provinciales estaban más definidas– y por imponer sus propias listas en las elecciones. Esa competencia fortalecía la figura de Justo, que mediaba y también decidía en última instancia, y que contaba además con el favor del ejército. Así, las agrupaciones conservadoras reunidas en el PDN, que eran las de mayor poderío electoral y presencia en las provincias, debieron resignar candidaturas y cargos ante las demás fuerzas. El otro elemento característico de los primeros años de la presidencia de Justo fue el tipo de relación trazada entre el oficialismo y los partidos de oposición parlamentaria, cuya representación había crecido de manera inusual. Aunque no faltaron crisis y disputas, esa oposición participaba de las actividades del Congreso y, en consecuencia, tenía con el oficialismo un terreno común, aun para la discrepancia. En la abstención, el radicalismo se veía compelido a impugnar de forma diferente el orden político reinante.

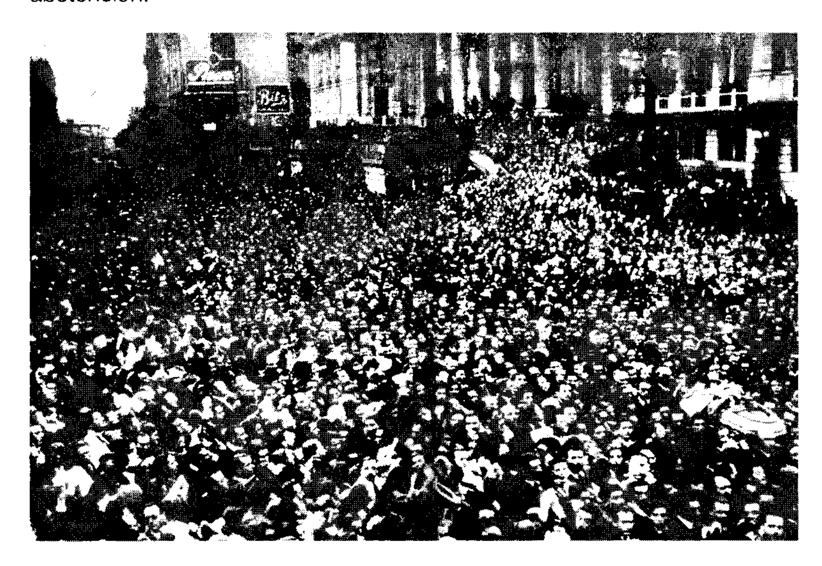
Los radicales: el retorno y el fraude

Aun con tropiezos, desde poco después del golpe de 1930 la UCR avanzaba en su reorganización. A su vez, la fecha del 5 de abril de 1931 quedaría como la de una epopeya para la militancia radical, incluso luego de levantada la abstención. Hipólito Yrigoyen, que en los primeros tiempos luego del golpe había sido encarcelado en Martín García, donde pasó más de un año sin ser procesado, continuaba ejerciendo un liderazgo crucial en el partido. La dirección de la UCR estuvo al tanto y en algunas ocasiones favoreció los levantamientos planeados en estos años, que o bien fueron descubiertos y desactivados, o bien fracasaron desde el punto de vista militar. Vistos desde hoy, resulta evidente que tenían pocas posibilidades de triunfo. Sin embargo, a pesar de las derrotas, esas rebeliones y la represión que las seguía –que en algunos casos terminó con centenares de activistas de base en prisión, junto a dirigentes como Alvear, Yrigoyen, Ricardo Rojas, antiguos ministros, gobernadores o parlamentarios– tenían el efecto de ratificar la identidad partidaria y activar elementos propios de la religión cívica que en parte era el radicalismo, circunstancia de alguna utilidad para el partido en tiempos en que, por propia decisión, no participaba de las campañas electorales. La muerte de Hipólito Yrigoyen, ocurrida el 3 de julio de 1933, fue también la ocasión de mostrar cómo funcionaban los mecanismos identitarios del radicalismo: la movilización fue masiva y, por tramos, la multitud llevó a pulso el ataúd. No obstante, en el largo plazo, este tipo de fenómenos tenía efecto, fun-

damentalmente, entre dirigentes y militantes comprometidos, y a lo sumo, en franjas algo más extensas de activistas con cierto grado de participación. En tiempos de la política de masas y en una competencia que se presume regida por las normas del voto ampliado, los vastísimos conjuntos de votantes no pueden confundirse con estos elencos.

La muerte de Yrigoyen

El 3 de julio de 1933 moría Hipólito Yrigoyen. Su entierro se transformó en una imponente manifestación del radicalismo, que se hallaba en la abstención.



Ramón Columba, *El Congreso que yo he visto*, Buenos Aires, Columba, 1978.

Por otra parte, el resto de los partidos –incluidos los opositores– y la prensa tendían a condenar cada uno de los intentos armados radicales junto a los funcionarios de gobierno; las propias reglas de juego que decían respetar se veían cuestionadas por aquellos levantamientos. Se trataba de un anticipo de las trampas que, a poco de andar, acecharían a los actores políticos, en particular al oficialismo, que todavía predicaba el respeto formal a unas reglas que, de ser en verdad aplicadas, podrían condenarlo nuevamente a la derrota electoral. La situación que se vivió en 1934 en Tucumán fue una muestra de estas alternativas múltiples:

allí, contra la posición de las autoridades nacionales, el radicalismo provincial decidió participar de las elecciones de renovación de la Cámara de Diputados de la Nación. El gobierno de Justo se preocupó por garantizar la libertad de la elección como elemento de propaganda ante la opinión pública, y el radicalismo tucumano se alzó con la victoria. Claro que el número de diputados nacionales que se elegían en aquella provincia no ponía en riesgo la mayoría oficialista, de manera que Justo podía permitirse ese gesto sin pagar mayores costos al momento de contar los diputados propios y los ajenos.

Ante una situación en la que cualquier salida entrañaba un riesgo, la dirigencia radical decidió la vuelta al ruedo electoral en 1935, trastocando el panorama. En enero de ese año, con la oposición de los grupos que decían recuperar los principios de Yrigoyen e insistían en la necesidad de no convalidar el sistema participando de él, se decidió el levantamiento de la abstención.

Algunos activistas de los sectores opuestos a esa decisión fundarían luego FORJA, una agrupación de intelectuales y cuadros políticos más que una línea interna con peso electoral. Arturo Jauretche, Homero Manzi, Jorge del Río, Gabriel del Mazo y Luis Dellepiane formaron allí, y Raúl Scalabrini Ortiz fue una figura clave en el grupo. Se definían yrigoyenistas y hacían del antiimperialismo una cuestión central, en coincidencia parcial con agrupaciones como el APRA, ya mencionado en el capítulo 3, que el dirigente peruano Víctor Haya de la Torre había fundado en 1924 con la aspiración de constituir un frente de trabajadores manuales e intelectuales latinoamericanos. En el caso de FORJA se trataba de un antiimperialismo que denunciaba la dependencia económica y política de Inglaterra, en lo que constituía una nota diferenciada del antiimperialismo de la década anterior, particularmente sensible al avance norteamericano sobre el resto del continente. Durante la segunda mitad de los años treinta y hasta la aparición del peronismo, los forjistas desplegaron una intensa tarea de propaganda, organizando reuniones y conferencias, publicando folletos, denunciando a figuras del partido en ocasión de las reuniones de los organismos directivos. Tenían grupos de activistas en varias ciudades, y algunos militantes de peso en el movimiento estudiantil. Con pocas excepciones, asumieron una posición fuertemente neutralista ante la Segunda Guerra Mundial. También otros sectores, más inclinados que los forjistas a librar la disputa electoral interna dentro del partido, fueron críticos de la línea política decidida por Alvear y las autoridades; su espacio crecía o menguaba de acuerdo con lo exitoso de la línea oficial y más adelante confluirían en la llamada "intransigencia".

De todos modos, como había ocurrido en las décadas anteriores, en gran medida el radicalismo continuaba siendo un agrupamiento de estructuras provinciales que lograba acordar algunas posiciones compartidas en los organismos de dirección nacionales. Lo que quizá fuera novedoso en estos tiempos era el hecho de que varios grupos de intelectuales y dirigentes observaron esta situación, la concibieron como un problema e intentaron, desde distintas perspectivas, estabilizar un cuerpo de doctrina y consolidar la estructura del partido para resolverlo. Fruto de esos esfuerzos fue el primer programa formalizado de la UCR, que se presentó en 1937 como plataforma electoral para las elecciones presidenciales.

FORJA y su visión del radicalismo

En junio de 1935, dirigentes e intelectuales radicales fundaron la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, uno de los grupos que cuestionó la línea oficial del partido en nombre del yrigoyenismo, la intransigencia y el "auténtico" radicalismo. Hacia enero de 1935, en ocasión de la convocatoria a elecciones internas en el partido, la agrupación sostenía:

"Levantada la abstención, quebrantada la intransigencia, el radicalismo amenaza derivar en una fuerza utilitaria que, degenerando en una nueva facción politiquera, se confunda con las que actualmente usufructúan el poder, haciendo peligrar con esto el resurgimiento de la democracia argentina [...].

Ya FORJA ha denunciado tales intentos como parte de un plan destinado a obtener la pacificación del país, favoreciendo los propósitos del capitalismo extranjero colonizador, para el total dominio de los resortes económicos y morales del pueblo, suprimiendo el peligro de la rebeldía popular emancipadora, que el radicalismo representa en tanto sea auténtica expresión de la tradición revolucionaria argentina. El electoralismo se propone lograr la disgregación de la UCR, federalizándola en intereses de distrito", continuaba argumentando, lo que impediría la realización de los "fines de la reparación nacional", que para la agrupación son "la restauración argentina sobre la base de la soberanía popular; la emancipación económica y cultural del pueblo y el imperio de la justicia social".

Las citas están tomadas de Miguel Ángel Scenna, *FORJA. Una aventura argentina (De Yrigoyen a Perón)*, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1983.

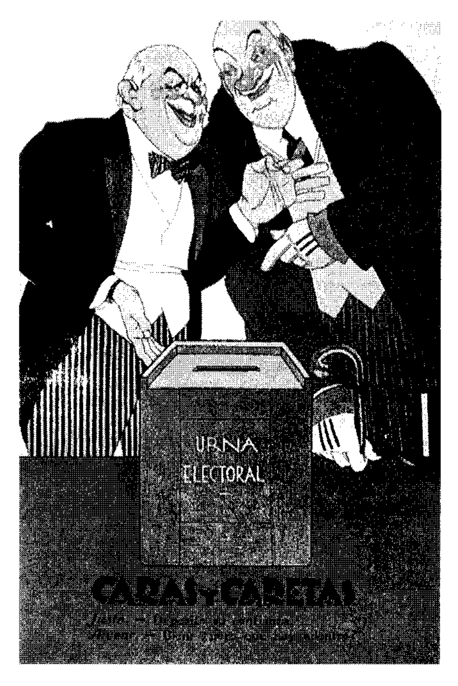
Con el radicalismo reintegrado al juego electoral, a lo largo de 1935 y 1936 tuvieron lugar elecciones de gobernadores en algunas provincias y de diputados nacionales; los candidatos radicales tuvieron un buen desempeño. Las gobernaciones de Entre Ríos, Tucumán y Córdoba fueron para ellos, y en el Congreso constituyeron un bloque muy importante. Si bien en esas provincias se votó con ciertas garantías, en la de Buenos Aires, por ejemplo, ya a fines de 1935 el voto cantado y el fraude abierto llevaban a la gobernación al conservador Manuel Fresco. En las elecciones legislativas de 1936 las denuncias de fraude fueron también muy extendidas, pero, a pesar de todo, la oposición conquistó la mayor parte de los escaños. Los éxitos radicales alertaron al oficialismo, que comenzó a instrumentar diversos procedimientos para garantizar que las elecciones presidenciales de 1937 quedaran en sus manos.

Las elecciones de 1937

Varios de aquellos mecanismos tuvieron como objetivo el control de las provincias, que continuaban siendo las jurisdicciones donde, efectivamente, tenía lugar la elección. Buenos Aires estaba garantizada para el oficialismo, dado que su gobernador era Fresco; en tanto, Santa Fe fue intervenida. Para no correr riesgos, poco antes de celebrarse los comicios de 1937, el gobierno hizo aprobar en el Parlamento una reforma de la ley electoral, que eliminaba la lista incompleta para los miembros del Colegio Electoral que elegiría al presidente. Así, quien triunfaba en el distrito se alzaba con todos los electores. En noviembre de 1937, varios procedimientos –fraude encubierto, fraude abierto, voto cantado, intervención policial– dieron el triunfo a la fórmula oficialista integrada por Ricardo Ortiz, radical antipersonalista, y Ramón Castillo, conservador de Catamarca, frente a la fórmula radical encabezada por Alvear.

Así las cosas, la situación volvía a complicarse para el radicalismo. La decisión de la dirección partidaria, que señaló el levantamiento de la abstención y la estrategia posterior, había parecido al menos parcialmente exitosa a lo largo de 1935 y 1936, pero, vista en cambio desde la derrota –aun fraudulenta– de 1937, exhibía más flancos débiles y alentaba las voces de los disidentes. Para el oficialismo, la apelación al fraude tenía el costo de la crítica de sectores amplios de la opinión pública. El dilema ante la elección de 1937 para el oficialismo había sido el siguiente: o se respetaban las reglas de juego, permitiendo una com-

petencia libre que muy probablemente terminaría en una victoria de la UCR y en el consecuente alejamiento del poder, pero con la gobernabilidad medianamente consolidada, o se aplicaba el fraude a gran escala para controlar la sucesión presidencial, poniendo en evidencia la ilegitimidad de origen del gobierno que vendría a heredarlo. Estaba clara cuál había sido la opción. En febrero de 1938 asumía la fórmula oficialista, integrada por Ortiz y Castillo.



Tapa de *Caras y Caretas* en alusión a los rumores de posible fraude en las elecciones nacionales de 1937.

La presidencia de Ortiz

Roberto Ortiz fue el candidato que Justo, árbitro en la coalición oficialista, sostuvo en las disputas internas. En cambio, el vicepresidente, Ramón Castillo, fue impuesto por los sectores conservadores. Ortiz provenía del antipersonalismo, que no era el partido electoralmente más poderoso del oficialismo. El nuevo presidente tampoco tenía arraigo dentro del ejército y dependía del apoyo de Justo para contar con esa institución. Es altamente probable que el cálculo de Justo fuera que la

presidencia de Ortiz constituía la mejor apuesta para su propio retorno, en las elecciones de 1943.

Sin embargo, la política de Ortiz reveló mayor autonomía que la prevista. Si bien al comienzo de su presidencia desestimó públicamente las denuncias generalizadas de fraude en las elecciones de diputados celebradas en marzo de 1938, un año más tarde, a comienzos de 1939, el presidente anuló unas opacas elecciones de diputados que tuvieron lugar en San Juan, y en febrero de 1940 intervino la provincia de Catamarca, territorio de origen del vicepresidente Castillo, también por cuestiones electorales. En tanto, en septiembre de 1939 había comenzado en Europa la Segunda Guerra Mundial, cuyo impacto en la política argentina sería notorio. Se ha conjeturado que el cambio que Ortiz imprimió a su política hacia el fraude obedecía tanto a la disputa con los grupos conservadores que respaldaban a Castillo como a una convicción, fundada en su antigua pertenencia al radicalismo, de que aquel dilema sólo podría quebrarse al garantizar la libertad de las elecciones. En cualquier caso, Ortiz pasó a encabezar una campaña contra el fraude, que tuvo en la intervención a la provincia de Buenos Aires su máximo capítulo. Allí, en febrero de 1940, se celebraron elecciones para gobernador, y en marzo tuvieron lugar las de diputados nacionales. El gobernador conservador Manuel Fresco, que proclamaba tanto su apego al voto cantado como al fraude, decidió asegurar en las primeras el triunfo de su candidato a gobernador, Alberto Barceló, a través de estos mecanismos. Ante las presiones del Poder Ejecutivo y de varios medios de prensa, permitió la fiscalización de las segundas, y el triunfo radical que se insinuaba creó el espacio político para que, finalmente, Ortiz interviniera la provincia.

La política de Ortiz, orientada a garantizar elecciones limpias, lo alejaba de sus aliados de antaño. En el caso de los conservadores, por razones obvias; en el de Justo, porque el ex presidente veía cuestionado su liderazgo y su estrategia para el retorno. Sin embargo, los problemas de salud de Ortiz, agravados desde mediados de 1940, tuvieron un papel central en la evolución de esta historia, ya que forzaron al presidente a solicitar licencias en varias ocasiones.

Castillo y los conservadores

En septiembre de 1941, Castillo, que reemplazaba al presidente en una de aquellas oportunidades, logró organizar su propio gabinete, con fuerte presencia conservadora. De esta manera, se quebraba la política

dirigida contra el fraude, mientras el radicalismo quedaba una vez más sin estrategia adecuada, dado que todas sus expectativas se habían centrado en la política de Ortiz. La potencial restauración de las condiciones para que se llevaran a cabo comicios fraudulentos volvía a instalar dilemas conocidos para los radicales, y el Bloque Opositor, reunión de los disidentes, pasó a manifestar, ahora con más claridad, sus críticas a la conducción de Alvear.

En estado de fuerte crisis interna, la UCR perdió varios distritos importantes en los que no hubo fraude en las elecciones para diputados nacionales celebradas en marzo de 1942. Días más tarde moría Alvear, y en julio fallecía Ortiz. En esa coyuntura, la alternativa de la garantía para los comicios parecía absolutamente lejana.

Otro de los personajes destacados en la política argentina del momento, el ex presidente Justo, también vio recortada su influencia en el gobierno hacia fines de 1942, cuando se produjo el reemplazo del general Tonazzi, ministro de Guerra que le era leal, por el general Pedro Pablo Ramírez, cercano a los militares nacionalistas. Una vez más, ante la pérdida de esta herramienta decisiva para su hipotético retorno a la presidencia, Justo se aproximó al radicalismo, y ganó terreno la idea de constituir un agrupamiento opositor que comenzó a llamarse Frente o Unión Democrática. El general se transformaba ahora en adalid de la democracia e incondicional partidario de la causa aliada en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la situación volvería a cambiar: Justo murió en enero de 1943. En tanto, los conservadores se reagrupaban y decidían que la sucesión –garantizada una vez más por la aplicación del fraude– sería esta vez para sí mismos. Robustiano Patrón Costas, senador por Salta, conservador, terrateniente vinculado al negocio del azúcar y partidario de los Aliados en la guerra, era el elegido. Esta última condición tendría un papel decisivo en los sucesos políticos argentinos por venir.

Escándalos y desprestigios

En estos años, la crisis del andamiaje institucional fue en parte el resultado de factores ya mencionados: derrocamientos, anulación de elecciones, fraudes, votos cantados que impactaban directamente en el plano electoral. Pero aquella crisis también fue alentada por otro tipo de hechos; uno de ellos fue el asesinato, en pleno recinto del Senado, de Enzo Bordabehere, senador electo por Santa Fe del opositor PDP. El

episodio tuvo lugar en julio de 1935, en el contexto de las interpelaciones y debates parlamentarios que se sucedieron luego de la firma del Tratado Roca-Runciman, que establecía importantes ventajas para el comercio y el capital británicos a cambio del mantenimiento de las compras de carnes argentinas.

Lisandro de la Torre, también senador demoprogresista, impulsó la creación de una comisión de investigación del negocio de las carnes, cuyas tareas incluían el examen de posibles maniobras ilegales de los frigoríficos ingleses, entre otras, la falsificación de documentos contables y el intento de sacarlos fuera del país. En junio de 1935, De la Torre presentó los resultados de la tarea de la comisión y denunció tanto a los frigoríficos como al gobierno por la tolerancia que demostraba al momento del cobro de impuestos y multas por infracciones. Además, Luis Duhau, ministro de Agricultura, fue acusado de vender ganado a esas mismas empresas. En una de las sesiones en las que los ministros de Justo planteaban sus argumentos, un matón de fuertes vínculos con el oficialismo disparó contra Lisandro de la Torre; el muerto fue sin embargo Bordabehere.

En la ciudad de Buenos Aires, de particular visibilidad en la política nacional, la oposición se vio enredada también en casos de corrupción con ribetes de escándalo. En 1936, varios radicales, miembros del Concejo Deliberante porteño, fueron sobornados junto a funcionarios públicos y políticos oficialistas por las compañías extranjeras de electricidad que, desde unos años antes, negociaban las prórrogas de sus concesiones. En el caso del radicalismo, la crítica a esos actos fue uno de los argumentos recurrentes de la oposición a Alvear, quien habría avalado la utilización de parte de aquel dinero en la campaña electoral de 1937.

Ya a fines del período, en 1940, otro escándalo estalló en el Congreso con la denuncia presentada por el senador Benjamín Villafañe, oficialista y antiguo y fervoroso opositor a Yrigoyen, referida a la compra de tierras realizada por el ejército en El Palomar, a precios sospechosamente altos. El ministro de Guerra, general Márquez, diputados oficialistas y radicales fueron implicados. Como corolario, Víctor Guillot, uno de los legisladores radicales involucrados, se suicidó luego de la investigación. En el juego político, el escándalo fue utilizado contra Márquez y contra el mismo presidente Ortiz, quien estaba por entonces empeñado en su campaña para garantizar elecciones limpias.

Otras formas de la intervención política

Junto a esas dimensiones de la lucha política, los intentos de intervención en las cuestiones públicas asumían también otras formas. Durante la dictadura de Uriburu, el tono estuvo dado por la restauración de la pena de muerte y una represión intensa, que incluyó el fusilamiento de los militantes anarquistas Severino di Giovanni y Paulino Scarfó, a comienzos de 1931, así como el hostigamiento a militantes obreros y activistas radicales, además de la prisión del ex presidente Yrigoyen, hecho de fuerte peso simbólico. Ya en tiempos de Justo, la prensa opositora circulaba con intensidad, los debates públicos –referidos al tratado Roca-Runciman, o a episodios europeos, entre otros– eran intensos, y los propios intentos insurreccionales del radicalismo se sumaban a ese agitado clima de discusión. Menos estruendosa que estos últimos, la movilización católica en ocasión del Congreso Eucarístico de 1934 también ganó las calles revelando una nueva presencia de la iglesia en la sociedad.

Por su parte, en numerosas ocasiones los grupos de izquierda lograron hacer circular sus publicaciones periódicas y sus libros, y algunas de estas empresas fueron muy exitosas, como la ya mencionada *Claridad.* Sin embargo, también fueron objeto de persecuciones y prohibiciones frecuentes, en particular cuando se trataba del anarquismo –ya declinante hacía tiempo– y de miembros o simpatizantes del Partido Comunista. Una ley de represión de las actividades comunistas fue sancionada a fines de 1936. En estas zonas del universo político argentino comenzaron a desarrollarse algunas acciones comunes que preanunciaban el clima de frente popular, táctica oficialmente asumida por los comunistas en 1935. A pesar de que no faltaron los intentos por concretarlos, el Frente Popular no prosperó en la Argentina; la presencia del radicalismo es un dato importante en esa cuestión. Habiendo abandonado ya la abstención, los radicales no sólo estaban convencidos de que su fortaleza electoral volvía innecesaria cualquier alianza –en la vieja línea interpretativa que concebía al radicalismo como la nación misma–, sino que buena parte de su dirigencia tenía severas objeciones ideológicas hacia el comunismo, de cuya reciente conversión al campo de la democracia, que hasta poco antes juzgaba burguesa, recelaba. Tampoco el Partido Socialista demostró entusiasmo con la alternativa del Frente Popular, al punto que concurrió a las elecciones de 1937 con su propia fórmula, mientras el Partido Comunista apoyaba la candidatura de Alvear. Entre los activistas obreros el clima de colaboración parece haber sido más intenso.

Entre los grupos vinculados a otras tradiciones, la actividad fue también muy intensa en los años treinta. Las múltiples formaciones nacionalistas, con diferencias entre sí, se mostraron particularmente dinámicas y sostuvieron periódicos, editoriales, conferencias y cursos. En los años treinta, los circuitos nacionalistas y católicos se superpusieron en muchas ocasiones, y la presencia del nacionalismo en el Ejército creció notoriamente.

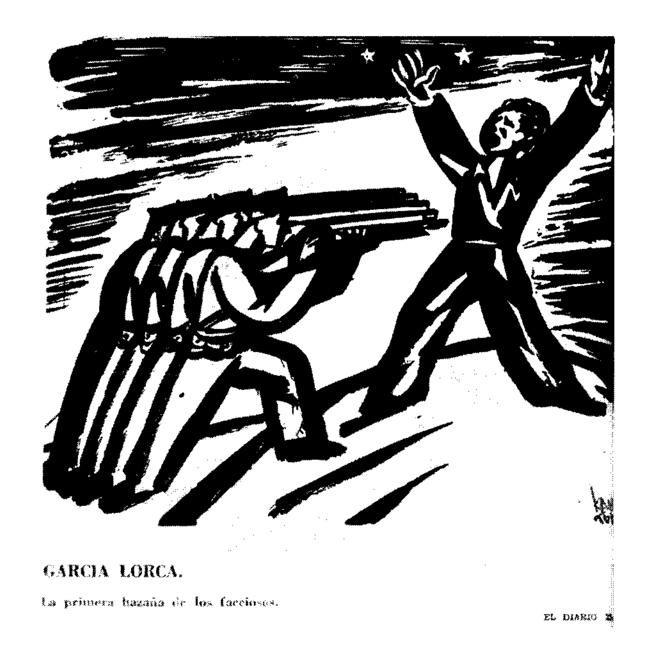
Ecos de la Guerra Civil española

En 1936, el estallido de la Guerra Civil española volvió más crispado y dramático el debate político. La existencia de una vasta colonia de inmigrantes españoles, así como las relaciones intelectuales intensas –que tenían ya varias décadas de antigüedad– contribuyeron a que la guerra tuviera un impacto cierto. Entre quienes adherían a la República se encontraban tanto los grupos de izquierda como sectores de la UCR y de la militancia sindical. Campañas de apoyo y de recolección de recursos, organización de los comités de ayuda que se extendieron a casi todo el país, movilizaciones recurrentes en las ciudades, y una menos pública operación de envío de voluntarios fueron sostenidas por los partidarios de la República, entre quienes los comunistas fueron algunos de los más eficaces organizadores. Sus adversarios, con el apoyo de los sectores nacionalistas y, en líneas generales, de los católicos, replicaban con las mismas acciones, con la excepción de las grandes movilizaciones callejeras. No obstante, el impacto tuvo sus límites, ya que el conflicto local seguía siendo una disputa política y nadie se atrevía a proponer que la salida fuera la de España.

Madrid caía en marzo de 1939 en manos de las fuerzas franquistas, mientras que la Alemania de Hitler invadía Polonia en septiembre de ese mismo año. Así, al efecto de la guerra de España vino a sumarse, casi inmediatamente después, el de la nueva contienda mundial, que fue aún mayor, en particular a partir de la entrada en conflicto de los Estados Unidos y de Rusia, en 1941. A su vez, la Argentina fue uno de los destinos de los exiliados republicanos, algunos de ellos intelectuales o políticos de nota, como Claudio Sánchez Albornoz, Luis Jiménez de Asúa o Rafael Alberti.

La guerra de España

Desde el comienzo de la guerra, muchos grupos políticos y culturales argentinos, así como asociaciones de inmigrantes, tomaron posición frente a ella. Intentaron, además, campañas de apoyo y de recolección de fondos, así como menos visibles envíos de combatientes. Por otro lado, varios de ellos buscaron enlazar sus contiendas locales con las que en España libraban las fuerzas que les eran afines, una operación intelectual que sin embargo tenía ciertos límites.



"García Lorca. La primera hazaña de los facciosos." Ilustración de Manuel Kantor, aparecida en *El Diario*, periódico publicado en Buenos Aires, el 25 de junio de 1938.

El factor militar

En la primera mitad de 1943, la situación política era compleja. El radicalismo estaba en crisis luego del fin de la apertura impulsada por Ortiz, de las derrotas electorales de 1942 y de la muerte de Alvear. A su vez, la muerte de Justo complicaba la alternativa del Frente Democrá-

tico. No eran pocos los dirigentes que entendían que la salida era militar, e intentaban encontrar quien encabezara un golpe a la medida de sus expectativas. La candidatura de Patrón Costas, que el presidente Castillo había decidido para competir en nombre del oficialismo, no terminaba de convencer a las propias fuerzas conservadoras y, lo que resultaba mucho más serio para el candidato, era mirada con mucha prevención por numerosos oficiales del ejército, quienes entendían que la neutralidad ante la guerra sería quebrada de llegar Patrón Costas a la presidencia. Aquel aumento del peso de los oficiales nacionalistas, varios de ellos, además, católicos, se completaba, en ocasiones, con simpatías ideológicas por los ordenamientos políticos vigentes en los países del Eje. Sobre ella reposaba, en parte, el aprecio de la política de neutralidad, mientras que en otros casos se la sostenía por las consecuencias que, se suponía, la entrada en la guerra podría acarrear para el país.

El panorama era incierto, y el golpe militar que tuvo lugar el 4 de junio de 1943 no lo despejó, al menos en los primeros momentos, ya que las interpretaciones acerca del movimiento, sus objetivos y protagonistas fueron varias y contradictorias. Tampoco esta vez hubo resistencia alguna y el gobierno de Castillo cayó sin más. En un anuncio de que los tiempos que se aproximaban no habrían de ser serenos, el general Arturo Rawson, que en principio había sido elegido para ocupar la presidencia, no llegó a jurar; tres días más tarde, fue reemplazado por el general Pedro Ramírez.

6. Actividades intelectuales, acciones políticas

Durante los años treinta, las discusiones políticas y culturales fueron muy vivas y quienes las libraron constituían un conjunto vasto y heterogéneo de grupos intelectuales y políticos. A pesar de todo, esa intensidad no devino en rupturas decisivas en el mundo de la cultura, al menos hasta fines de la década, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba ya muy cercana y los debates se volvieron más ríspidos.

Tiempos de discusión intensa

En algunas ocasiones, se ha querido ver en los años que van del golpe de 1930 al de 1943 una etapa opaca e improductiva desde el punto de vista cultural, y se ha planteado que esos rasgos habrían impactado profundamente en los propios intelectuales. Tanto los suicidios de Leopoldo Lugones y de Alfonsina Storni como la soledad y la espera del "hombre de Corrientes y Esmeralda", en quien Raúl Scalabrini Ortiz hallaba la encarnación del alma argentina, han sido presentados como evidencia de aquel estado de desazón. Se sumaron al cuadro las denuncias del nacionalismo acerca de la existencia de un complot del silencio en su contra que habría sido llevado adelante por el gobierno y la gran prensa, aunque ellas no coincidían del todo con los argumentos anteriores.

Sin embargo, esas pruebas son endebles, no sólo porque el libro de Scalabrini, *El hombre que está solo y espera,* fue publicado en 1931, de modo que difícilmente podía referirse a los años treinta, sino también porque los suicidios evocados parecen haber estado relacionados con circunstancias íntimas y personales. Tampoco se sostiene el argumento de la exclusión del nacionalismo, al menos para la mayor parte de la década. Numerosos intelectuales connotados de los grupos nacionalistas y católicos, tan a menudo entremezclados, fueron altos funcionarios du-

rante las gestiones de varios presidentes, desde Uriburu hasta Castillo, pasando por Justo, y en algunos gobiernos provinciales –por ejemplo, Octavio Pico, Carlos Ibarguren y Martínez Zuviría–, mientras que otros fueron premiados por el estado nacional o municipal en razón de su producción literaria, como ocurrió con el mismo Ibarguren y Julio Irazusta. El mundo de los intelectuales había cobijado además a los miembros de los elencos nacionalistas desde tiempo atrás, y continuó haciéndolo en los años treinta. Al menos hasta los años próximos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, el nacionalismo no se había convertido, en absoluto, en causa de expulsión del universo de la cultura argentina consagrada y canónica.

En vez de un momento de silencio y apatía, los años treinta fueron una coyuntura de fortísima discusión política, de gran movilización pública de escritores y ensayistas, de fundación de variadas empresas intelectuales muy activas y de intervención intensa de los partidos en el plano cultural. Cercanos horizontes rojos previeron los intelectuales de la izquierda, y no sólo la comunista, hasta 1935 al menos, para luego lanzarse con fervor a la prédica antifascista, mientras que los grupos que se inclinaban a la derecha extrema también imaginaban órdenes nuevos. Radicales de todos los sectores, católicos de varias tendencias, socialistas y conservadores, discutieron y publicaron revistas, sostuvieron editoriales, crearon diarios, dictaron conferencias, participaron en la organización de movilizaciones masivas. En estos debates, tal como ocurrió con la disputa más específicamente política librada por los partidos, tampoco pueden distinguirse ni un enfrentamiento que articule todo el escenario, ni dos claros y precisos adversarios que lo protagonicen. Nuevamente, el panorama es confuso, complejo y múltiple.

Los intelectuales y la política

Durante los años veinte, tal como se planteó en el capítulo 3, jóvenes intelectuales animaron la Reforma Universitaria y, en coincidencia parcial, las expresiones locales de las vanguardias. En ocasiones, la producción de literatura de denuncia social convocaba también a grupos generacionalmente semejantes. La política estaba allí, tanto en el conjunto de temas atendidos por estos intelectuales como en aquello que sus acciones tenían de toma de posición frente a cuestiones públicas. La Revolución de Octubre y la Primera Guerra Mundial eran fenómenos a

los que se retornaba sistemáticamente, en numerosas evocaciones y referencias, y la experiencia que se desarrollaba en Rusia era seguida con atención. Lo mismo ocurría con las intervenciones norteamericanas en Centroamérica o con la situación en España bajo la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, entre estos jóvenes fue visible cierta renuencia a la participación formalizada en los partidos en los años veinte, así como una mayor confianza en la capacidad del intelectual para incidir en los asuntos colectivos en su exclusiva condición de tal.

En los años treinta, en cambio, el compromiso partidario en regla se extendió, en un fenómeno probablemente asociado a los avatares políticos locales, en particular la experiencia del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 y la dictadura posterior. Más adelante, las negociaciones con Inglaterra por un nuevo tratado comercial, el fraude electoral y algunos negociados resonantes actuaron, entre otros sucesos, como factores de movilización para varios sectores intelectuales. En el horizonte internacional, a partir de 1936, la Guerra de España sumó intensidad a los debates; fueron muchos los hombres de la cultura que tomaron partido públicamente en esa ocasión también en la Argentina. Finalmente, deben tenerse en cuenta las discusiones europeas en torno al papel del intelectual en una época de intensa lucha política, de cuyo resultado, según se entendía, prácticamente dependía el destino de la humanidad. Estas discusiones –que, en rigor, habían comenzado a librarse ya en la segunda mitad de los años veinte– cruzaron todo el mundo cultural y no fueron exclusivas de un sector en particular: intelectuales de izquierda y de derecha, liberales, conservadores y aun quienes imaginaban que su tarea los ponía por encima del conflicto político y social se vieron envueltos en ellas.

Así, en los años veinte, jóvenes militantes universitarios creyeron posible la creación de un Partido Nacional Reformista que les permitiera llevar sus principios del claustro universitario a la gran arena política nacional, y dieron pasos en ese sentido, o participaron en iniciativas que reunían a intelectuales de varios partidos, sin filiación precisa, como la Unión Latinoamericana. En los años treinta, en cambio, algunos de ellos se incorporaron a la lucha política plena en las filas del Partido Socialista y del radicalismo.

Sin aspirar al planteo de una lista exhaustiva, pueden señalarse varios casos significativos en este sentido. Julio V. González, que provenía del reformismo universitario, se incorporó al PS; lo mismo hizo Carlos Sánchez Viamonte en 1931, que exhibía una trayectoria previa semejante y había sostenido posiciones fuertemente críticas ante el último gobierno

yrigoyenista. El radicalismo, por su parte, consiguió una adhesión muy importante cuando Ricardo Rojas se integró al partido, luego del golpe de estado. En 1934, bajo el gobierno de Justo, Rojas pasó una temporada en el penal de Ushuaia, en su condición de militante radical, experiencia que relató en su libro *Archipiélago*, publicado en 1942. Rojas no pertenecía a la generación de los jóvenes de los años veinte, pero tenía con ellos relaciones apacibles, en particular con los reformistas de la Universidad de Buenos Aires, donde había sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras y, luego, rector.

La causa de los intelectuales

Julio Barcos, por entonces en el radicalismo, planteaba de este modo la cuestión a comienzos de los años treinta:

"Este libro no tiene otra pretensión que la de abrir polémica sobre la política entre aquellos que la niegan o tergiversan su significado, ofreciendo a nuestros intelectuales, a quienes no se les concede autoridad para tratar estos problemas de la vida práctica, la oportunidad de demostrar que tal vez sean los únicos capaces de iluminar el tema. [...] ¿Dónde se ubican los intelectuales avanzados en nuestra borrosa lucha de clases? ¿En la burguesía, por la cual son explotados, pero a la cual pueden llegar mediante la política? ¿En el proletariado, cuya causa abrazaron por sentimentalismo, pero donde se les mira como advenedizos, por no ser trabajadores manuales?

Los intelectuales rebeldes que han tomado partido por la causa de los asalariados no son acogidos sino recelosamente, como huéspedes peligrosos, en las filas obreras. [...] La situación de los intelectuales en la sociedad capitalista es la de una clase perfectamente diferenciada de las otras dos, a las cuales suministra, no obstante, sus pertrechos de guerra para combatirse en el terreno de los principios ideológicos que sustentan por natural oposición. [...] A los intelectuales que hemos llenado nuestro corazón y nuestro cerebro con las ideas revolucionarias de nuestro siglo y que nos hemos educado en los libros y en la lucha simultáneamente nos toca destruir: primero, la aparente antinomia de cultura y política; segundo, la creencia de que la redención de la humanidad es empresa mesiánica de una sola clase".

Julio R. Barcos, *Política para intelectuales*, Buenos Aires, Claridad, 1931.

Otro tipo de trayectoria había seguido Julio Barcos, con actuación en el anarquismo y en el activismo docente. Barcos, autor de exitosos ensayos sobre cuestiones políticas y educativas en los años veinte, también fue a formar en las filas radicales en los años treinta, tomando parte incluso en los preparativos de al menos uno de varios levantamientos armados y en algunas de las publicaciones del partido destinadas a los intelectuales, dirigentes y militantes ilustrados, como la revista *Hechos e Ideas*. A su vez, en FORJA, fundada en 1935, Arturo Jauretche podía acreditar una antigua militancia universitaria cercana al reformismo, al igual que Gabriel del Mazo, uno de los reformistas más importantes de la década anterior, que había llegado a ser presidente de la Federación Universitaria Argentina.

Fuera del radicalismo, pero en el universo forjista, el de Raúl Scalabrini Ortiz quizá sea uno de los casos más notorios de cambio en los modos de participación del intelectual en la vida pública. De joven que publicaba con frecuencia en las revistas *Martín Fierro* y *Pulso,* ligadas a las vanguardias locales, y que en 1931 publicaba *El hombre que está solo y espera* con éxito de público y una acogida prometedora de la crítica, entre 1932 y 1933 pasó a convertirse en un intelectual que asumía plenamente su compromiso militante en el plano político. En los años siguientes, Scalabrini se dedicó con energía a cumplir el papel de organizador cultural, mientras publicaba ensayos económicos e históricos de denuncia de la dependencia económica de Inglaterra. Estas tareas continuaban siendo propias de la actividad intelectual, de manera que, más que de un corte radical que lo llevaría de intelectual a político, se trató de una reorganización de la relación entre las actividades propias de ambas esferas.

En otra franja, el Partido Comunista había conquistado ya las simpatías de algunos intelectuales, incluso en la década anterior. Aníbal Ponce, sin militar allí oficialmente, formaba parte del sector de hombres de la cultura cercanos a la agrupación; se trataba de un intelectual importante, que a la muerte de José Ingenieros se había hecho cargo de la dirección de la prestigiosa *Revista de Filosofía*. Con distintos grados de compromiso y trayectoria militante, de duración variable, pasaron por el PC local el pintor Cayetano Córdova Iturburu, los escritores Héctor Agosti y Álvaro Yunque –también colaborador habitual de *Claridad*–, el poeta Raúl González Tuñón, la escritora María Rosa Oliver, que al mismo tiempo participaba de la revista *Sur,* emprendimiento fundado en 1931 alrededor de la figura de Victoria Ocampo. Incluso Roberto Arlt colaboró en más de una de las empresas comunistas a comienzos de los años treinta, como se verá luego.

Raúl Scalabrini Ortiz

A lo largo de los años veinte, Scalabrini frecuentó los ambientes literarios porteños y colaboró en la revista de vanguardia *Martín Fierro* y en los diarios *La Nación* y *El Mundo*. En la década siguiente, luego de publicar con éxito *El hombre que está solo y espera*, en 1931, se convirtió en uno de los principales miembros del grupo FORJA, fundado en 1935. Scalabrini se hallaba volcado por entonces a la actividad intelectual con fuerte compromiso político.



Archivo General de la Nación.

A lo largo de la década, paulatinamente, dos comunistas dedicados a la investigación de temas históricos fueron ganando prestigio, hasta publicar sus primeras obras de envergadura en los tempranos años cuarenta. Se trataba de Rodolfo Puiggrós, quien en 1941 presentó *De la colonia a la Revolución*, y de Eduardo Astesano, quien ese mismo año publicó *Contenido social de la Revolución de Mayo*. Desde fines de los años veinte, como se ha planteado en el capítulo 3, el comunismo había estabilizado una interpretación de la realidad latinoamericana y argentina, que indicaba que se trataba de países semicoloniales; la etapa de la revolución a encarar aquí era, entonces, la democrático-burguesa en su forma agraria y antiimperialista. Esta lectura se sostuvo a pesar de los cambios de línea de 1935 (hacia el Frente Popular), de 1939 (hacia la denuncia

de la guerra como conflicto interimperialista), y de 1941 (cuando la Unión Soviética entró en la guerra y pasaron a impulsarse frentes de unidad nacional contra el fascismo).



Inglaterra y la historia argentina

En la apertura del Congreso Latinoamericano contra la Guerra Imperialista, celebrado en Montevideo en 1933, Aníbal Ponce, una importante figura intelectual estrechamente vinculada al Partido Comunista, señaló que en los primeros años del siglo XIX "las colonias españolas de América Latina, instigadas por Inglaterra, que aspiraba a la expansión de su comercio y a la destrucción de sus viejos rivales, entraron por el camino de la liberación política sin haber alcanzado ni con mucho la madurez económica". Así, "las nacientes burguesías de América Latina, atrasadas, indolentes, sin ninguna de las capacidades que las nuevas formas de producción exigían en el mundo, se convirtieron a poco andar en pasivos instrumentos de Inglaterra, su nueva metrópolis económica". La economía latinoamericana, precapitalista en la interpretación de Ponce, quedó bajo control inglés, que había llevado al "vasallaje cada vez más acentuado de las burguesías aborígenes"; a su vez, dado que convenía a Inglaterra "mantenerlas en la situación exclusiva de proveedoras de materias primas [...], se comprende que las tentativas industriales en América Latina que no se acordaran con la explotación inglesa, estuvieran condenadas de antemano a fracasar". Según Ponce, "el parasitismo inglés ha refrenado desde hace más de un siglo la evolución de las fuerzas económicas de América".
La denuncia de la sujeción económica a Inglaterra y del papel que le habría cabido en la historia nacional no era exclusiva de los comunistas, sino que estaba extendida a muchos sectores; poco tiempo después de esta intervención, por ejemplo, los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, intelectuales nacionalistas, formularían la suya en el libro *La Argentina y el imperialismo británico*, de 1934.

El discurso pronunciado por Ponce en 1933 figura en Aníbal Ponce, *El viento en el mundo*, Buenos Aires, El Ateneo, 1939.

Los grupos nacionalistas inclinados a la derecha habían contado desde fines de la década anterior con presencias intelectuales importantes: Leopoldo Lugones fue el caso más destacado. Desde los años veinte, Lu-

gones había reclamado gobiernos de orden y expresado su confianza en el ejército como su principal pilar y, en 1930, publicó trabajos que proponían el camino de una "grande Argentina" y una "patria fuerte", fórmulas que ponían de manifiesto la continuidad de su perspectiva. Por otra parte, hacia 1927, Ernesto Palacio, joven vanguardista, y los hermanos Irazusta, entre otros, participaron en la publicación periódica *La Nueva República*, una de las más notorias empresas culturales de ese sector. El emprendimiento logró convocar también a intelectuales conservadores de una generación mayor, como Manuel Gálvez y Carlos Ibarguren, muy bien instalados en el campo cultural. En la década de 1930, varios grupos de intelectuales se ubicaron en la zon
nacionalismo, el pensamiento conservador y el catoli
redados de los años veinte. Allí se ubican, además d
las figuras de Gustavo Franceschi, Leonardo Castella
tes– y Gustavo Martínez Zuviría, que firmaba como H
difundidas novelas, de fuerte tono antisemita.

de
ulo
a

Las revistas y publicaciones periódicas fueron insti
en torno a las cuales prosperó este encuentro entre i
nizaciones políticas. Las editoriales, muchas veces aso
otro espacio de encuentro, y a ese conjunto se suma
ciaciones de intelectuales. Así, por ejemplo, luego
Uriburu, el PC publicó *Soviet*, *Actualidad* y, más adel
Argumentos; Problemas y la Asociación de Intelectual
riodistas (AIAPE) eran dos editoriales cercanas a la
los grupos en que confluían el catolicismo y el nacio
con presencias variadas en cada caso, *Criterio*, fund
años veinte, y *Sol y Luna*, que en 1938 se planteaba in
pio mundo de los intelectuales. Con el nacionalismo
tico –y la mayoría de las veces, más radicalizado– pu
caciones que buscaban llegar a públicos más ext
Pampero, *Clarinada* y *Combate*.

Por su parte, tanto la editorial como la revista *Clar*
das a la izquierda en general, aunque su catálogo no
político. En la revista encontraron un ámbito de exp
grupos de la izquierda latinoamericana, en particular
tas exiliados en Buenos Aires. La evocada *Hechos e Idea*
la UCR creada en 1935, y entre otras editoriales cer
cuenta una efímera y más evidente Editorial Boina B
Jauretche publicó en 1934 su poema gauchesco *Paso*
caba una de las insurrecciones radicales en las que

rsita-
s con

cuyo prólogo había quedado a cargo de Jorge Luis Borges. En el radicalismo se cuenta desde luego a FORJA, con sus *Cuadernos*, que escribieron, entre otros, Jorge del Río, Luis Dellepiane y Gabriel del Mazo. A comienzos de 1940, Scalabrini Ortiz, además de participar en los *Cuadernos*, publicó *Política Británica en el Río de la Plata*, donde reunía artículos que habían aparecido con anterioridad en otros medios. En junio de ese mismo año se publicó el primer volumen de *Historia de los Ferrocarriles Argentinos*. También en este caso las investigaciones del autor habían conocido versiones preliminares en forma de artículos y con el tiempo se transformarían en libros que gozaron de una circulación muy extendida.

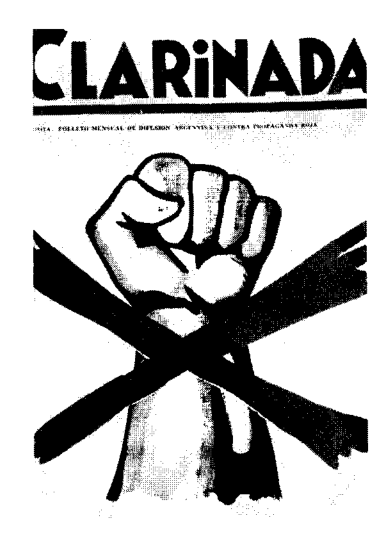
de cruce entre el
ismo, impulsos he-
las mencionadas,
.i –ambos sacerdo-
ugo Wast sus muy

uciones culturales
telectuales y orga-
ciadas a ellas, eran
ban ateneos y aso-
le la dictadura de
inte en la década,
es, Escritores y Pe-
organización. De
alismo surgieron,
ada a fines de los
tervenir en el pro-
plenamente polí
den filiarse publi
ndidos: *Crisol, El*

lad estaban asocia
ra exclusivamente
esión varios de los
os militantes apris
fue una revista de
anas al partido se
lanca. Allí, Arturo
e los libres, que evo
había participado,

La prensa de la derecha

Las publicaciones nacionalistas constituyeron un conjunt
heterogéneo en los años treinta. En el caso de *Clarinada*
un nacionalismo fuertemente antisemita y anticomunista;
la publicación se presentaba como una revista de "contr
roja". Se publicó entre 1937 y 1945.



Portada de la revista *Clarinada* del 31 de enero de 1940
Biblioteca Nacional.

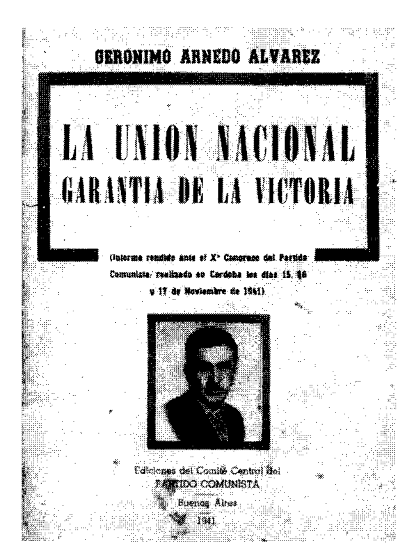
De este modo, muchos escritores, poetas, pintores, profe
rios y novelistas participaron en la vida de las agrupacio

alguna intensidad. Además, y es éste un dato significativo, eran muchos los dirigentes que, junto a sus funciones partidarias, cumplían un papel con cierto perfil intelectual y escribían sistemáticamente artículos o, más esporádicamente, ensayos –género exitoso por entonces– de más largo aliento. El comunista Rodolfo Ghioldi, los socialistas obreros, en tránsito al comunismo, Benito Marianetti y Ernesto Giudici, algunos dirigentes radicales como Leónidas Anastasi, Luis Boffi y Manuel Goldstraj son buenos ejemplos. En el espacio nacionalista, con menor formalización partidaria, la misma práctica era frecuente, y algunos de los ensayos de denuncia del sector tendrían un gran éxito, como ocurrió con *La década infame,* que al filo del período analizado, en 1945, publicó José Luis Torres, acuñando una denominación que sería duradera.



La Segunda Guerra Mundial y la política argentina

Luego de la invasión nazi a la Unión Soviética, ocurrida en 1941, el PC abandonó su caracterización de la guerra como un conflicto interimperialista, y se alineó decididamente con los Aliados. Al mismo tiempo, el comunismo alentaba las llamadas políticas de unidad nacional contra el fascismo.



Publicación del Partido Comunista, que reproduce informes y discursos planteados en el X° Congreso de la agrupación, celebrado en noviembre de 1941.

En cuanto a los ateneos y asociaciones de intelectuales, debe registrarse la existencia de un Ateneo Claridad, que no logró funcionar con continuidad; de una fracasada Unión de Escritores Proletarios y de la AIAPE, vinculadas al PC; también de varios ateneos socialistas y radicales –entre los que puede contarse a FORJA, una de cuyas actividades centrales fue la organización de conferencias y la difusión de los textos presentados–; del Colegio Libre de Estudios Superiores, que, si bien no tenía una filiación partidaria exclusiva, se convirtió en un ámbito de debate político a cargo de intelectuales de varias agrupaciones; de los Cursos de Cultura Católica, uno de los más importantes ámbitos de sociabilidad donde se cruzaban los circuitos nacionalistas, eclesiásticos y militares. A su vez, el estado impulsó la creación de la Academia Argentina de Letras, donde ocupó un lugar destacado Carlos Ibarguren.

Finalmente, por fuera de estos círculos conformados por quienes, en virtud de su tarea política o intelectual, gozaban de cierto reconocimiento y visibilidad, gran cantidad de militantes anónimos y más modestos fundaron revistas dirigidas a sus bases, sindicales o barriales, y fueron autores de los artículos que allí se publicaban, o conferencistas que se ocupaban de los temas más variados en los locales partidarios. De este modo participaban de la dimensión cultural de la lucha política, que por entonces tenía una relevancia particular, a juicio de quienes se dedicaban a ella. Parecían ser también amplios los sectores de activistas, militantes y simpatizantes que acogían con interés esas producciones.

Debates en torno a la función social de los intelectuales

No obstante sus compromisos políticos, muchos de los intelectuales tendían a suponerse miembros de un universo en el que los mecanismos de reconocimiento y consagración eran más o menos autónomos, y no estaban directamente vinculados a habilidades o saberes propiamente políticos, tales como conseguir votos para las elecciones internas o nacionales, obtener recursos para la apertura de un local u organizar una célula barrial o fabril garantizando su funcionamiento y su seguridad. Ello contribuyó a que los grupos intelectuales tuvieran una relación no del todo apacible con sectores de los partidos a los que adherían, a pesar de los esfuerzos que unos y otros, dirigentes partidarios y hombres de la cultura, hicieron muchas veces por entenderse.

Aunque de intensidades cambiantes, las tensiones fueron frecuentes en varios casos y reproducían un elemento: la búsqueda, por parte de

los intelectuales, de un papel específico para cumplir en la organización política en su condición de hombres de la cultura; en algunas oportunidades, la función que los propios intelectuales se atribuyeron fue el de guías doctrinarios. Tal búsqueda suscitó conflictos con los dirigentes más dedicados a la tarea política, que no estaban dispuestos a delegar la función que tenían en el partido. En los años treinta, estas disputas se fueron entrelazando con el proceso que sacudía a los intelectuales desde dentro de sus propias filas, alrededor del debate acerca de su función social y política y de compromiso con alguna causa partidaria.

En estas coordenadas debe situarse la discusión que sostuvo Roberto Arlt con el dirigente comunista Rodolfo Ghioldi en 1932. Al parecer, Ghioldi había invitado a Arlt y al escritor Elías Castelnuovo a escribir en *Bandera Roja,* periódico del partido que buscaba presentarse como independiente para sortear las trabas legales, habituales para el PC. Previamente, Castelnuovo y Arlt habían convocado a la creación de una agrupación de escritores proletarios, y Ghioldi los había invitado a participar en el futuro periódico. Arlt tuvo otras intervenciones en revistas comunistas, como la mencionada *Actualidad,* y en la Liga Antiimperialista, también cercana al partido.

En el debate de 1932, Arlt sostuvo que para la organización de un partido revolucionario "no basta la intención, la simpatía, ni el entusiasmo"; por el contrario, "hay que estudiar, estudiar y estudiar. Nada más". El propio Ghioldi contestó poco después, en la misma revista, que "los núcleos intelectuales y pequeñoburgueses que se acercan honestamente al proletariado y que subjetivamente desean marchar bajo su hegemonía" tienen, como primer deber, que "renunciar a la teoría de la minoría sapiente que lleva de las narices a la multitud entusiasta", que a su juicio había expuesto Arlt. El escritor respondió a su vez que "el ciudadano Ghioldi rebasa los límites del marxismo leninista para recaer sin darse cuenta en la demagogia desenfrenada, con principios autoritarios". Lo que se encontraba en discusión es el lugar que le cabía al intelectual en un partido que asumía posiciones obreristas excluyentes, como ocurría con el comunismo de comienzos de los años treinta. La discusión librada en *Bandera Roja* no fue la única, pero ilustra lo complicado de aquellas relaciones.

Claro que no sólo los comunistas tenían estos problemas. El coronel Atilio Cattáneo, conspirador radical a principios de la década, dudaba de las habilidades que Barcos, intelectual de alguna fama, demostraba como organizador de rebeliones militares. A su vez, en el ámbito del ra-

dicalismo resulta significativo que los intelectuales que organizaron tanto *Hechos e Ideas* como los citados *Cuadernos* de FORJA, dos esfuerzos destinados en gran medida a esos mismos sectores, se hubieran asignado a sí mismos el papel de encargados de definir los principios doctrinarios "auténticos" de la UCR, así como las posiciones tácticas ante los desafíos del momento. Desde ese punto de vista, aunque los alineamientos internos fueron distintos y los contactos entre sus miembros escasos, estas dos formaciones culturales radicales tenían mucho en común.

Principales dilemas de los hombres de la cultura

"En verdad, si los intelectuales –es decir, los cultores de la ciencia y del arte– como ciudadanos ejercitan su derecho y cumplen con su deber al inscribirse en un partido y servirlo fielmente, como intelectuales tienen el único deber de atender, con la obra de la indagación, de la crítica y de las creaciones artísticas, a elevar a todos los hombres y todos los partidos por igual a la más alta esfera espiritual", sostenía el llamado "Manifiesto de los intelectuales antifascistas", publicado en la Italia de Mussolini en 1925. "Contaminar política y literatura, política y ciencia es un error", argumentaban quienes firmaban el documento: el verbo utilizado, "contaminar", es revelador. El texto respondía al manifiesto que los intelectuales partidarios del fascismo habían publicado poco antes.

Ese escrito, que se atribuye al filósofo italiano Benedetto Croce, opositor liberal al régimen de Mussolini, encierra el núcleo de los dilemas que conmovieron a los intelectuales durante aquellos años, y no sólo en Europa. ¿Era posible y acertado predicar la necesidad de separar la política de la práctica intelectual y exigir la escisión entre la condición de intelectual y la condición de ciudadano? De no ser así, ¿valía lo mismo el compromiso con cualquier causa política o sólo algunas eran correctas, puesto que se encontraban asociadas a determinados valores que, desde la perspectiva del intelectual, eran preferibles a otros? Si existían tales posiciones políticas que el intelectual debía asumir en virtud de su propia naturaleza, ¿cuáles eran? Puesto en otros términos, ¿habría una causa política propia, natural de todos los intelectuales en tanto tales? ¿De cuál se trataba: la causa de la revolución, la de la libertad, la igualdad, el orden social, la nación, la democracia...?

Si bien los redactores y firmantes de dicho escrito tenían como adversarios visibles a otros hombres de la cultura que habían manifestado su apoyo al fascismo, en los años treinta se volvió evidente para muchos que

esas preguntas no tenían por qué restringirse exclusivamente a aquel régimen político. El nazismo, en el poder desde 1933; el estalinismo, que se venía consolidando en la Unión Soviética desde fines de los años veinte y que en los treinta ponía en marcha las purgas de los disidentes, incluyendo en ellas a antiguos militantes de la revolución; los regímenes liberal-democráticos o los que pretendían ser tales, aun cuando acotaban libertades civiles y políticas con el argumento de atender razones de seguridad nacional: todos estos modos peculiares de gobierno quedaron involucrados en esa serie de interrogantes.

Hacia 1930, en el contexto europeo, tales dilemas y las confrontaciones que desataron las tomas de posición frente a ellos tenían ya unos años de antigüedad y provocaron la aparición de líneas de quiebre en el mundo intelectual, que se hicieron públicas con claridad en ocasión de la Guerra Civil española.

En la Argentina, en cambio, todavía en la segunda mitad de los años treinta eran posibles algunos diálogos y encuentros entre hombres de letras que se inclinaban a opciones políticas diferentes. Durante buena parte de esta década, aunque existieron discusiones y enfrentamientos, la política no terminó de levantar muros imposibles de franquear entre muchos de los grupos culturales, y no eran pocos los que solían considerar que esas diferencias eran menos importantes que la participación común en el mundo intelectual, una concepción que, aun cuestionada, tenía raíces culturales profundas. Al mismo tiempo, las miradas sobre el estado de las cosas que las formaciones culturales argentinas ponían en juego se hallaban en construcción, y no eran poco frecuentes ni los cambios de perspectiva ni los equívocos, en un momento en que varios fenómenos sociales y políticos –la crisis, el golpe, el ascenso del fascismo– desafiaban las certezas del período previo.

La cuestión de la identidad nacional

En este paisaje agitado por discusiones varias, algunas tendencias amplias involucraron a gran parte del mundo cultural argentino. Dos de ellas fueron la extensión de actitudes y posiciones nacionalistas, por una parte, y los debates, muchas veces velados, en torno a cuál era la tradición política auténticamente nacional, por otra.

El primero de estos fenómenos tuvo varias expresiones. Sin duda, la más evidente de ellas fue el crecimiento, a lo largo de toda la década, de los grupos que se filiaban con el nacionalismo en algunas de sus ver-

siones de derecha y que, en ciertos casos, llegaron a manifestar su apoyo a los gobiernos de Mussolini y de Hitler. Las agrupaciones culturales y políticas nacionalistas se multiplicaron y conquistaron muchos adeptos. Parcialmente heterogéneas, si bien no consiguieron darse una estructura unitaria en estos años, lograron en cambio importantes éxitos en el plano cultural, que se traducían en la extensión de sus puntos de vista a sectores más amplios.

Durante los años veinte, en una etapa todavía fundacional, varios de estos grupos habían asumido posiciones elitistas, conservadoras y tradicionalistas, recelosas de la sociedad de masas y de que la ampliación de los derechos políticos pusiera en entredicho el predominio de los grupos sociales tradicionales. A lo largo de los años treinta, en cambio, se expandieron los planteos que asumían la cuestión social y que no despreciaban las apelaciones a la movilización de masas, por lo que se tornaban más modernos en cierto sentido. Hacia los tempranos años cuarenta, por ejemplo, algunos grupos del nacionalismo habían hecho suya la consigna de la justicia social, clásica del repertorio de la izquierda desde varias décadas antes. El encuentro con el pensamiento del catolicismo social, que también tenía cierta antigüedad, contribuyó con certeza a aquellos cambios. Por otra parte, la idea de que el catolicismo y la herencia cultural española eran los elementos sobre los que se asentaba lo específicamente nacional fue arraigándose sólidamente en estos grupos.

Las relaciones entre el nacionalismo y los intelectuales católicos, e incluso sectores conservadores, tendieron a ser estrechas, como se ha apuntado ya. Sin embargo, a pesar de las coincidencias en las críticas al liberalismo y a la democracia, existían diferencias doctrinarias entre ellos y puede sostenerse que el pensamiento católico se expresaba más cabalmente en, por ejemplo, la revista *Criterio*.

En la segunda mitad de los años treinta, en varios sectores del nacionalismo se difundieron argumentos antiimperialistas, que de todas maneras tampoco eran propios de todos los grupos, ni exclusivos de ellos. En las agrupaciones más radicalizadas, Inglaterra se convertía en uno de los blancos de todas las denuncias. También en muchas de las formaciones nacionalistas hizo pie el antisemitismo.

Pero el crecimiento del activismo nacionalista y la multiplicación de sus publicaciones y organizaciones, aunque fueron fenómenos importantes, no deben ocultar la incidencia de un proceso más amplio e incluso más relevante en el largo plazo: la expansión de sus auditorios y la transformación de algunos de sus argumentos en elementos de un

cierto sentido común. Es muy probable que en esa transformación se atenuaran los aspectos más radicalizados de los argumentos de los militantes. A estos procesos debe agregarse la difusión de posiciones vagamente nacionalistas, una especie de "nacionalismo de profesión", en determinados sectores de la estructura administrativa del estado, en parte relacionada con la función que se le otorgaba a cada repartición: en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que creció notoriamente a lo largo del período, entre otras razones por la extensión de la red caminera y del uso del automóvil; en Vialidad Nacional, creada a comienzos de la presidencia de Justo a través de la unificación de reparticiones previas y asociada a aquella extensión; en la Dirección General de Parques Nacionales, de 1934. Todas ellas desarrollaban actividades vinculadas al control estatal del territorio, a su integración y a la llegada del estado a zonas remotas. Incluso en el Consejo Nacional de Educación, las funciones nacionalizadoras que se atribuían a la acción escolar, un lugar común desde hacía décadas, constituían un terreno fértil para la extensión de este tipo de actitudes. Desde ya, en las fuerzas armadas, incluso los liberales y los oficiales que seguían poniendo en primer lugar los criterios profesionales desarrollaban puntos de vista cercanos a los del nacionalismo, fundados en observaciones técnicas.

Al mismo tiempo, políticos e intelectuales pertenecientes a otras tradiciones se avinieron a librar el debate en los términos que el nacionalismo proponía. Esas actitudes estaban en ocasiones motivadas por consideraciones de orden estratégico y de seguridad, algo particularmente evidente en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y obligaban al ensayo de una distinción tosca que reaparece una y otra vez en estos años, entre el nacionalismo "sano", un "buen y auténtico" nacionalismo, frente a otro, que sería reprobable. Así ocurrió, por ejemplo, en julio de 1941, cuando volvió a tratarse en el Congreso la posible constitución de una comisión de investigación de las llamadas "actividades antiargentinas". En el lenguaje de la época, esa denominación sin dudas crítica aludía a varias de las acciones que los nacionalistas llevaban adelante; tal gesto de crítica se hacía en nombre de la argentinidad verdadera, como la denominación de la comisión prevista sugiere. "Estos nacionalistas" que miraban con simpatía la política del Eje, decía en la sesión el diputado radical Raúl Damonte Taborda, "son profunda y totalmente antiargentinos. Son extranjerizantes, antinacionalistas y anticriollos". Su intervención terminaba acusándolos de ser en verdad "seudonacionalistas a sueldo de los imperialismos extranjeros".

Pocos meses más tarde, ante el X° Congreso del PC argentino, reunido en noviembre de 1941, poco tiempo después de que Hitler invadiera la Unión Soviética, el dirigente Gerónimo Arnedo Álvarez proclamaba que la organización estaba dispuesta, cumpliendo el deber de "todo auténtico patriota", siguiendo el ejemplo de Belgrano y de San Martín, a "combatir en primera fila con las armas en la mano", para defender "la existencia libre y soberana de la Nación Argentina", en esta ocasión, ante un hipotético ataque nazifascista. Por esas mismas fechas, el PC terminaba de construir una tradición nacional y progresista propia con la cual filiarse, una senda en la cual inscribir su acción política presente, en un proceso que había comenzado algún tiempo atrás. Sin duda había algo de la exageración del recién converso en estos arrebatos comunistas, pero no dejaban de estar a tono con el lenguaje político de la época.

El punto importante es que ninguno de estos actores político-culturales, ni tampoco el resto de los que por entonces intervenían en el debate, admitía que sus adversarios los acusaran de antiargentinos o antinacionales. En décadas anteriores, la lucha contra la apelación nacional lanzada por el estado hacia vastos sectores sociales había sido una actitud clásica del activismo obrero y de los partidos que aspiraban a representar y encuadrar al proletariado. Los anarquistas, en cualquiera de sus versiones, impugnaron con fervor esa identidad en clave nacional que impulsaba el estado durante la celebración del Centenario, por ejemplo, y aun los socialistas, más moderados, dudaron en ceder a ella, al menos por un tiempo. Luego de la Revolución de Octubre de 1917, las primeras organizaciones comunistas habían continuado con esa recusación a la nación y a sus símbolos, que sostuvieron hasta mediados de los años treinta aproximadamente. El anarquismo mantenía sus posiciones tradicionales, pero había entrado en un declive franco ya en los años veinte, mientras que el socialismo, no sin tensiones internas, pasaba a incorporar definitivamente la dimensión nacional en su identidad.

No obstante, en la segunda mitad de los años treinta las cosas habían cambiado a un punto tal que todos los grupos políticos de algún peso y significación pretendían ser auténticamente nacionales y acusaban a sus adversarios de ser cómplices de algún imperialismo, de trabajar como agentes al servicio de intereses extranjeros o de colaboración con alguna potencia, totalitaria, imperialista, o ambas cosas a la vez. Esta circunstancia es la expresión de una tendencia de fondo a la integración de sectores antes disruptivos a la cultura política local y al sistema político. También es probable que contribuyera a ella el avance de la nacio-

nalización de masas, resultado de muchos factores, entre los cuales se destaca el descenso de la llegada de inmigrantes de ultramar y la extensión y profundización de la acción escolar y estatal en general.

De todos modos, queda claro que por debajo de esa apelación que realizaban todos los sectores políticos e intelectuales de alguna relevancia a la tradición nacional, a los intereses de la nación, al sano nacionalismo y a la nacionalidad, existían disputas, a veces públicas y otras, libradas en sordina, por estabilizar y fijar el sentido que debía otorgarse a esos conceptos: los contenidos ideológicos y políticos de la nacionalidad no eran idénticos para los distintos grupos. En este plano, durante los años treinta terminaron de ganar terreno varios modos de concebir la nacionalidad que, a pesar de otras diferencias, hallaban el centro de la argentinidad en formas culturales antiguas, telúricas, que se suponían propias del interior rural. En ese movimiento, la figura del gaucho fue la que quedó definitivamente convertida en el tipo social que encarnaría las peculiaridades de la nación, aquello que resultaba propiamente argentino.

Planteos que exhibían alguna semejanza con éstos venían realizándose desde fines del siglo XIX y, de manera mucho más frecuente, desde el Centenario de la Revolución de Mayo. También en los años veinte, la figura de José Hernández había sido valorada por integrantes de las vanguardias; de esos ámbitos salió la primera iniciativa para erigir un monumento al autor del poema. Pero en aquellos años se trataba de opiniones de intelectuales de mayor o menor prestigio y reconocimiento; en cambio, en la segunda mitad de los años treinta, una versión sumaria de aquellas opiniones sostenía acciones estatales y políticas. Así, a fines de los años treinta se implantó el Día de la Tradición en la provincia de Buenos Aires, mientras se consideraba la instalación de un monumento al gaucho. El Consejo Nacional de Educación incorporó oficialmente las producciones de corte folclórico a las fiestas escolares, aunque es probable que algunas de ellas circularan antes, de manera informal. Simultáneamente, grupos políticos enfrentados por cuestiones que podían reputarse más urgentes –socialistas, radicales, conservadores, nacionalistas– coincidían en homenajear al *Martín Fierro*, a su autor y a la figura del gaucho. Las observaciones más cautas de algunos estudiosos, que destacaban la dificultad de hacer del gaucho un histórico tipo social propio de todo el territorio, o que insistían en que el complejo conceptual nación-folclore-gaucho no era sencillo de articular, tenían auditorios muy reducidos en la época.

Así, las concepciones de nación que ubicaban su centro simbólico en el interior rural, supuestamente representado por la figura del gaucho,

venían a sumarse a otras que ya circulaban en el mundo político-cultural argentino desde tiempo atrás, de las cuales la que hallaba el núcleo histórico nacional en la Revolución de Mayo era la más asentada y extendida. En los años treinta, se produjo un enlace en parte inesperado entre la tradición que se planteaba heredera de la nación de Mayo, que descubría su vértice en un acto político como era la Revolución que terminaría en la Independencia, y la nación que aspiraba a fundarse en las culturas rurales previas. Esta última, sin desplazar a la anterior, fue la que conquistó espacio en la época. Es posible que este movimiento también contribuyera a angostar el espacio del ya menguado liberalismo argentino, que había hecho de Mayo el momento de fundación de su propia tradición nacional.

Otras versiones del pasado y un cambio de clima político

En los últimos años de la década, un nuevo actor vino a sumar sus argumentos a las discusiones que acaban de evocarse. En agosto de 1938, un grupo de intelectuales, escritores y hombres de la política fundó en Buenos Aires el Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas. Como otros grupos culturales, pronto crearon su revista. Ambos eran las expresiones institucionales de la existencia del revisionismo histórico, que se vinculaban parcialmente con algunas experiencias previas, como la creación de la Comisión por la Repatriación de los Restos de Rosas, en 1934. Los revisionistas de 1938 mantenían relaciones cercanas, aunque no exclusivas, con algunos sectores del nacionalismo, ya que radicales como Lauro Lagos formaban parte del grupo. Se contaban entre ellos Manuel Gálvez, hombre firmemente instalado en el mundo intelectual; Ernesto Palacio y Julio Irazusta, autor junto a su hermano Rodolfo de *La Argentina y el imperialismo británico,* que hacia 1934 ofrecía algunas líneas de interpretación que los revisionistas asumirían.

El revisionismo hacía de la reivindicación de Juan Manuel de Rosas uno de sus objetivos principales y decía discutir con la historia escrita "por los vencedores de Caseros", una fórmula a la que se apeló a menudo. De acuerdo con los argumentos revisionistas, esa visión del pasado era la que sostenía la Academia Nacional de la Historia, organizada también en 1938 sobre la base de la vieja Junta de Historia y Numismática, creada por Bartolomé Mitre a fines del siglo XIX. Según la crítica revisionista, se trataba de una versión liberal, porteña y falsa de la historia nacional, y ella constituía lo que llamaban la historia ofi-

cial, de estirpe mitrista. La organización institucional del revisionismo no fue recibida con demasiada hostilidad por el resto de las entidades historiográficas, aunque en el campo cultural, en sentido más amplio, sonaron algunas voces de alarma. Es que el revisionismo asumía, explícitamente, que la suya no era una batalla exclusivamente historiográfica, sino que tenía costados políticos. A aquellas versiones de la nacionalidad que exhibían distintos anclajes históricos venía a sumarse de este modo otra, la revisionista, cuyo centro en el pasado se hallaba en los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, el Restaurador.

Política e historia en la versión del revisionismo

No entraré a considerar las causas que dieron origen a lo que llamo la versión oficial de nuestra historia, ni la legitimidad de la misma, porque ello nos llevaría a enfrentarnos con los problemas fundamentales del conocimiento histórico. Diré solamente que dicha versión no se ha independizado, que sigue siendo tributaria de la escrita por los vencedores de Caseros, en una época en que se creía que el mundo marchaba, sin perturbaciones, hacia la felicidad universal bajo la égida del liberalismo y que no se sospechaban los conflictos que acarrearía la revolución industrial, ni la expansión del capitalismo, ni la lucha de clases, ni el fascismo ni el comunismo. Impuesta por Mitre y por López, ahora tiene por paladín al antes citado doctor Levene, lo que, en mi entender, es altamente significativo. Fraguada para servir los intereses de un partido dentro del país, llenó la misión a la que se la destinaba: fue el antecedente y la justificación de la acción política de nuestras oligarquías gobernantes, o sea el partido de la "civilización". No se trataba de ser independientes, fuertes y dignos; se trataba de ser civilizados. [...] Es la angustia por nuestro destino inmediato lo que explica el actual renacimiento de los estudios históricos en nuestro país, con su consecuencia natural: la exaltación de Rosas. [...] La primera obligación de la inteligencia argentina consiste hoy en la glorificación –no ya en la rehabilitación– del gran caudillo que decidió nuestro destino [Rosas].

Ernesto Palacio, *La historia falsificada*, Buenos Aires, Difusión, 1939.

En tanto, la situación política se volvía más tensa desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y los conflictos se tornaban más duros e in-

trincados. La neutralidad fue la causa que defendieron muchos nacionalistas de manifiestas simpatías por el Eje, pero también forjistas y dirigentes radicales de otros sectores. Entre 1939 y 1941, el PC, en consonancia con las decisiones de la Tercera Internacional, también asumió una posición oficial neutralista, aunque la cultura política partidaria se inclinara velozmente al bando aliado. Así, en los años del neutralismo del PC, los comunistas Raúl Larra y Álvaro Yunque –no sin deslizar críticas y esbozar diferencias– escribieron junto al nacionalista Ernesto Palacio y a Raúl Scalabrini Ortiz en el diario *Reconquista*, dirigido por este último y acusado luego de recibir financiamiento de la Embajada alemana. A su vez, algunos conservadores que habían defendido el fraude electoral, e inclusive otros dispuestos a ponerlo en práctica en el futuro, se aproximaban al bando de las potencias democráticas. De este modo, se iba organizando una nueva línea de tensión que dividía el mundo político y cultural argentino en torno a los conflictos exteriores. Los bandos que empezaban a quedar a un lado y a otro, a pesar de sus propios esfuerzos por crearse genealogías funcionales al combate presente, no eran uniformes ideológicamente ni podían exhibir trayectorias comunes en el pasado reciente.

En este nuevo clima se produjo aquel episodio del Congreso, en 1941, cuando se debatió si las actividades del revisionismo histórico constituían "actividades antiargentinas". Entre quienes se hallaban en el recinto se contaba Emilio Ravignani, por entonces diputado radical opositor, historiador universitario, miembro de la llamada "nueva escuela histórica" y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cargos que indican que ciertos espacios de autonomía cultural no habían sido abolidos. Hacia 1934, Ravignani había felicitado a los hermanos Irazusta por su libro, una de las primeras expresiones de la interpretación revisionista, sosteniendo que "los unitarizantes, los vinculados a la oligarquía burocrática, han envenenado la cultura histórica argentina", para continuar: "queremos saber la otra verdad, esa verdad que Vds. con valentía traducen en su libro". En el debate de 1941 acerca de las "actividades antiargentinas" del revisionismo, Ravignani casi no pronunció palabra.

7. Cambios y continuidades en la sociedad

La crisis económica internacional de 1929 frenó bruscamente la inmigración europea, uno de los fenómenos sociales más importantes durante las décadas anteriores. Al mismo tiempo, la industrialización por sustitución de importaciones, que se aceleró en la segunda mitad de los años treinta, reclamó mano de obra, circunstancia que alentó la migración interna. Ese crecimiento de la industria promovió grandes cambios en el mundo de los trabajadores y en el movimiento obrero. Por otra parte, los procesos de modernización cultural y material con centro en las grandes ciudades continuaron; muchas de ellas adquirieron por entonces el aspecto que las caracterizaría durante décadas.

Escenarios en transformación

Entre 1914 y 1947 no se realizaron censos nacionales, de modo que existe una laguna en la información disponible para la década de 1930; no obstante, otras fuentes permiten obtener una imagen siquiera parcial de los cambios ocurridos durante este período.

Algunos cálculos ubican la población total, para 1930, entre los 11 000 000 y los 12 000 000 de personas, mientras que a fines de la década se la estima en torno a los 14 000 000. Sobre esas cifras provisorias, el porcentaje de extranjeros rondaba el 24 por ciento en 1930 y había descendido al 19 por ciento en 1939. Finalmente, con mayor certeza y precisión, el Censo de 1947 indicaba que se contaba con una población de 15 890 000 habitantes; el porcentaje de extranjeros continuaba disminuyendo y llegaba al 15 por ciento, al tiempo que la tasa de población urbana, por el contrario, crecía hasta alcanzar el 62 por ciento.

Varias son las transformaciones que se manifiestan en estas cifras. La primera de ellas es el quiebre de la tendencia al crecimiento del porcentaje de población extranjera que se venía registrando en los censos

de 1869, 1895 y 1914. Ese crecimiento había sido fruto del proceso de inmigración de masas que había acompañado la expansión del modelo agroexportador. Sin embargo, no se lo debe concebir como un fenómeno regular y uniforme. Por el contrario, son visibles las etapas diferenciadas, tanto por las cifras de llegada como por los saldos migratorios.

Visto en conjunto, queda claro que la restricción de la inmigración ultramarina registrada luego de la crisis económica internacional de 1929 se encuentra en el centro del cambio de tendencia. La inmigración neta era de 90 000 personas en 1929 y de 3000 en 1932, el punto más bajo. Más adelante, a lo largo de la década, se produjo una recuperación leve, que de todas maneras dejó las cifras muy lejos de las del período previo, hasta que un nuevo y breve repunte, algo más importante, se produjo luego del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Esta circunstancia cambiaba parcialmente uno de los rasgos que había caracterizado a la sociedad argentina desde fines del siglo XIX, en particular en las grandes ciudades del Litoral, donde la presencia de los inmigrantes había tenido mayor incidencia. En los años treinta, aquellas ciudades eran el escenario de una tendencia a la nacionalización que se aceleraba; en una de sus dimensiones, se trataba de un proceso de homogeneización cultural, cuya causa no fue únicamente el freno de las grandes migraciones europeas. Las políticas públicas tuvieron un papel decisivo por la vía de la nacionalización de los hijos de los inmigrantes –pero no sólo de ellos–; la acción de la escuela primaria en expansión y el servicio militar obligatorio fueron dos de los mecanismos de masas impulsados por el estado que, implantados varias décadas antes, colaboraron en aquel proceso.

Por su parte, el porcentaje de la población urbana sobre el total continuaba creciendo, en un largo proceso: según los censos nacionales, iba del 29 por ciento en 1869 al 62 por ciento en 1947; otras fuentes presentan cifras todavía más altas. A ello había contribuido, hasta 1930, la inclinación de los inmigrantes a radicarse en las ciudades, aunque también existían movimientos migratorios internos. Pero, acotada la llegada de inmigrantes de ultramar, durante los años treinta, se produjo un aumento y una reorientación de las migraciones internas, alentadas en particular por el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se aceleró a lo largo de la segunda mitad de la década. Durante los años inmediatamente posteriores a la crisis, en los cuales la desocupación fue muy importante, comenzaron a desarrollarse las primeras villas miseria en algunas ciudades.

Villa Desocupación en 1932



La Razón. Archivo General de la Nación.

Andrés Cabona, un destacado dirigente sindical de la USA y luego de la CGT en los años treinta, evocaba de este modo los efectos de la crisis de 1929:
"Por esos años, como resultado de la crisis, se acentuó la falta de trabajo. No sólo se formó la Villa Desocupación de Puerto Nuevo; también en las inmediaciones de Campana la gente se instaló en cuevas excavadas directamente en las barrancas; cerca de La Plata, contra los terraplenes del Ferrocarril Sud, había centenares de familias durmiendo casi a la intemperie".

Oscar Troncoso, *Fundadores del gremialismo obrero*, vol. 1, Buenos Aires, CEAL, 1983.

La coyuntura cambió a partir de 1934 aproximadamente. Las industrias sustitutivas se instalaron en las ciudades y demandaron mano de obra que en parte fue aportada por quienes migraban del campo o de las ciudades más pequeñas a los grandes conglomerados urbanos. Así, también en la ciudad de Buenos Aires, la presencia de personas nacidas en el resto del país, que había sido del 9 por ciento en 1914, creció moderadamente

hasta llegar al 15 por ciento en 1936, y en 1947 el proceso se había acelerado visiblemente: el porcentaje de residentes en la ciudad pero nacidos fuera de ésta era del 37 por ciento. Situaciones semejantes tenían lugar en los alrededores. De hecho, a lo largo de los años treinta, el despoblamiento rural llegó a convertirse en una seria preocupación entre funcionarios del estado nacional y de las provincias, y también entre algunos dirigentes políticos. En el escenario porteño, se trataba de un movimiento que tendría gran impacto social.

Las ciudades: Buenos Aires

En torno a la ciudad de Buenos Aires crecía por estos años el conurbano, donde se expresaron los efectos de varias de las modificaciones económicas y demográficas mencionadas. En los partidos cercanos a la Capital, en muchas ocasiones, se radicaron las industrias sustitutivas, y su población tendió a aumentar. Temas que ya habían llamado la atención de funcionarios y técnicos en la década anterior, como la gestión del conglomerado de la Capital y sus alrededores, se tornaron perentorios. Si bien en algún momento previo se había considerado la articulación entre ambos espacios, en los años treinta la tendencia fue inversa. La construcción de la avenida General Paz como circunvalación de la Capital a lo largo de la segunda mitad de la década fue una expresión de esa actitud, al materializar una distinción entre esos distritos que, hasta el momento, era mucho menos perceptible.

La Capital también sufrió transformaciones internas. Por una parte, hacia comienzos de los años cuarenta su población comenzó a aproximarse a la que tendría hasta la década de 1980, casi 3 000 000 de personas. Continuó la expansión hacia los barrios más alejados del centro, que se había iniciado en la década anterior, y se fue haciendo más densa la población de esas zonas, cuya comunicación con el centro de la ciudad mejoró. Los espacios libres tendieron a disminuir marcadamente y quedaron reducidos al sur de la ciudad.

Como ocurrió en Mendoza, Córdoba y Rosario, también en Buenos Aires durante los años treinta se multiplicó el número de casas de departamentos de varios pisos y de rascacielos, y amplios sectores del centro de la ciudad adquirieron un aspecto que perdura hoy en día. El edificio Kavannagh en Plaza San Martín, que durante años fue presentado como el más alto de Sudamérica, fue inaugurado en 1935. En algunas de sus zonas centrales, las ciudades asumían perfiles aún más modernos

que los que habían adquirido en la década anterior. En el caso de Buenos Aires hay que agregar además el ensanche de la avenida Corrientes, que se inició en Callao hacia 1936; un año más tarde, se llegaba a Carlos Pellegrini y se avanzaba hacia el Bajo. También fueron demolidas varias manzanas en el cruce de Corrientes y la avenida 9 de Julio; allí, en 1936, luego de apenas dos meses de trabajo, se inauguró el obelisco. Toda la zona estaba en obra: se inició la construcción de la avenida 9 de Julio, las diagonales y nuevos subterráneos.

En estos años se completó también la Costanera, comenzaron los trabajos en la avenida General Paz, se entubaron arroyos y se reemplazaron los viejos puentes sobre el Riachuelo por modernas construcciones.



Buenos Aires en transformación

En los años treinta, el paisaje urbano del centro porteño adquirió perfiles que se mantendrían por mucho tiempo. A ello contribuyeron la apertura de nuevas calles y avenidas y la ampliación de otras, como Corrientes y 9 de Julio, la construcción del obelisco y la de muchos edificios en altura.



Ensanche de la calle Corrientes, hacia 1935. Archivo General de la Nación.

Aunque de menor escala, también tuvieron lugar en otras ciudades procesos de modernización semejantes. De todos modos, Buenos Aires, en virtud de su importancia en la población total, en la articulación con el mercado externo que, aun en baja luego de la crisis, seguía siendo un factor económicamente decisivo, así como en lo referido a la política y a la vida cultural, continuaba llamando la atención de ensayistas e intelectuales. En los años treinta se expandieron argumentos –algunos, poco novedosos, enlazaban con reflexiones formuladas ya en el Centenario–, planteados desde posiciones ideológicas diversas, que denunciaban que la Capital tenía su mirada puesta en el extranjero y se hallaba de espaldas al "país real", que estaría en el interior. Centro de la red de ferrocarriles que se extendía por la geografía nacional para introducir las mercancías importadas y extraer los productos de la agroexportación, argumentaba Scalabrini Ortiz, denunciando que ello sólo beneficiaba al imperialismo inglés; núcleo de un "país abanico", sostenía Alejandro Bunge, que señalaba los límites territoriales y sociales del esquema; centro del país artificial y falso, sugería Eduardo Mallea.

Desequilibrio económico. La Argentina, país abanico

En el año 1924 pudimos comprobar este hecho: un tercio del territorio de la República, abarcado dentro de un arco de círculo de 780 kilómetros de radio con centro en la Capital, comprendía ocho décimos de la población y nueve décimos de la capacidad económica. ¿Han cambiado las cosas desde entonces? Al renovar ese estudio a fin de conocer la relación en 1938, nos pareció conveniente hacer el examen dividiendo el país en tres zonas formadas con arcos de círculo trazados siempre con centro en Buenos Aires. La primera con radio de 580 kilómetros, la segunda con radio de 1000 y la tercera abarcando las regiones que están más allá del segundo arco. Se forma así un abanico que revela cómo la densidad de la población, la capacidad económica, el nivel cultural y el nivel de vida van disminuyendo a medida que aumenta la distancia de la Capital. No cabe dudar que a crear esas diferencias han contribuido razones climáticas y geográficas, en particular la cantidad de lluvia anual. Pero tampoco puede caber duda de que han contribuido a acentuar ese desequilibrio, en particular en el curso de los últimos treinta años, la atracción demográfica de las grandes ciudades del litoral, la inversión en el primer sector de la mayor parte de los recursos fiscales de

la nación, y la política económica –más propiamente la ausencia de una política– que ha significado la postura de esa primera región mirando hacia ultramar y con la espalda al interior.

Alejandro Bunge, *Una nueva Argentina*, Buenos Aires, Kraft, 1940. 

Por su parte, también en el área de los fenómenos culturales de masas, algunas tendencias que se habían insinuado o bien manifestado con fuerza durante la década del veinte continuaron su desarrollo en la siguiente. Así ocurrió, por ejemplo, con el movimiento de fondo que hacía crecer las tasas de alfabetización y escolarización: algunas estadísticas educativas indican que, sobre la población en edad escolar de todo el país –de 5 a 14 años en este caso–, en 1930 estaba matriculado el 58 por ciento y, en 1940, el 64 por ciento. Entre 1930 y 1939, el número de escuelas primarias, públicas y privadas, pasó de 11 300 a 13 300 en todo el territorio nacional. En las escuelas secundarias, el incremento fue de 421 a 762.

Si bien el crecimiento también se manifestaba en el secundario, y de manera muy marcada, las cifras ponen asimismo de manifiesto el corte que todavía existía entre los grupos sociales que accedían a uno y otro nivel del sistema educativo. Así, en 1939 se contaban 1 900 000 alumnos primarios y 143 000 secundarios; los universitarios eran por entonces unos 33 000. A su vez, el analfabetismo exhibía grandes variaciones regionales, como en la etapa previa, aunque tendía a la baja en todos los distritos. Los censos nacionales marcan el movimiento profundo e indican que, en 1914, el porcentaje de analfabetos mayores de 14 años era del 35 por ciento en todo el país y, en 1947, del 14 por ciento. Si se considera la ciudad de Buenos Aires, se encontraba hacia 1943 en el 1,4 por ciento de los menores de 14, mientras que en el territorio de Neuquén ese mismo año se registraba el 29 por ciento. Sin embargo, en ambos casos, el descenso era marcado frente a las cifras de comienzos de la década de 1930.

Se consolidaban entonces, particularmente en las ciudades, los públicos consumidores de bienes culturales que habían comenzado a producirse a gran escala tiempo atrás, como libros baratos, diarios de vastísima tirada, revistas y magazines dedicados a los temas más variados. También otros medios de comunicación ampliaban sus redes y se afirmaban; el de la radio es un caso notorio. El cine sonoro se imponía, y hacia comienzos de la década de 1940, una todavía incipiente producción nacional conquistaba algunos notables éxitos de público, a pesar de hallarse aún en una fase inicial.

De la agroexportación al mercado interno: economía y sociedad

Como se ha indicado en el capítulo 5, las transformaciones que tuvieron lugar en la economía en torno a la crisis de 1929 fueron muy importantes, y terminarían por cambiar durante varias décadas el eje de la economía argentina, que se desplazó de la venta de productos primarios en el mercado internacional a la producción destinada al mercado interno, con una marcada presencia de la industria. De todas maneras, ese cambio no significó el fin de la exportación de productos agropecuarios, sino su paso a un plano menos relevante que el que había ocupado en la etapa previa.

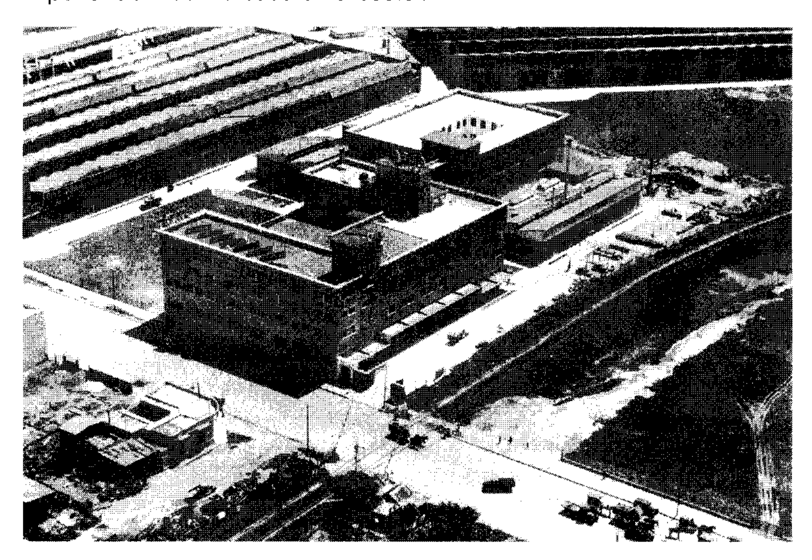
Por otra parte, ya antes de los años treinta existían algunos sectores industriales que producían bienes para abastecer el mercado local, integrados por unas pocas empresas grandes, por lo general de capital extranjero, y por numerosos talleres pequeños. Naturalmente, también había un sector industrial asociado a la agroexportación, en el que se destacaban los frigoríficos. Recordemos además que en la segunda mitad de los años veinte se habían instalado algunas plantas de firmas norteamericanas mencionadas en capítulos anteriores.

Sin embargo, a lo largo de los años treinta, la envergadura del proceso de industrialización, alentado esta vez por la sustitución de importaciones, fue mucho mayor. Entre 1929 y 1931, la producción industrial cayó debido a los efectos recesivos de la crisis, pero, si se considera un rango temporal mayor, se observa que existió un crecimiento de aproximadamente el 8 por ciento anual entre 1930 y 1934, que se incrementó luego. Contribuyeron a él tanto la disminución de las exportaciones generada por la crisis como el deterioro de los términos del intercambio, que volvían más complicada la obtención de divisas para aplicar a la importación de productos industriales. También tuvo incidencia el aumento de los aranceles para la mercancía importada, que perseguía objetivos fiscales; a pesar de algunas bajas, como las que se negociaron para varios productos en el marco del Tratado Roca-Runciman de 1933, esos aranceles operaron como un mecanismo proteccionista, al que se sumó más tarde el control de cambios. A partir de 1939, la guerra en Europa bloqueó las importaciones e impulsó un nuevo crecimiento de la producción industrial. En 1945, al fin de la Segunda Guerra Mundial, la industria argentina tenía una participación en el producto bruto interno superior a la del sector agropecuario, y se fabricaban neumáticos, químicos, pinturas, productos eléctricos para el hogar y textiles, entre otros.

El mercado para esos bienes también se ampliaba, a pesar de ciertos límites. Continuaba el crecimiento de la población, aunque con tasas más moderadas que en períodos previos, y la concentración urbana contribuía a la ampliación del mercado. La industrialización generaba demanda de productos que la propia industria suministraba. Algunas ramas específicas, como la construcción, se veían también alentadas por las transformaciones urbanas y la construcción de caminos y rutas, por entonces muy importante. La presencia extranjera en el sector era alta, asociada en general a las grandes fábricas, y continuaban siendo abundantes las pequeñas empresas y talleres, que sin embargo habían decaído a lo largo de la década. En 1935, por ejemplo, los trabajadores empleados en fábricas con más de 100 puestos de trabajo eran 223 500 y, en 1941, 366 900. La Unión Industrial Argentina (UIA) estimaba que, entre 1933 y 1938, el porcentaje de la población económicamente activa ocupada en el sector industrial creció del 43 al 47 por ciento, aproximadamente.

Las nuevas fábricas

En la segunda mitad de los años treinta, en el contexto de un crecimiento general de la industria, los grandes establecimientos pasaron a tener una importancia más marcada en el sector.



Fábrica de pinturas Alba, instalada en el barrio porteño de Nueva Pompeya, hacia 1938.

Estas transformaciones incidieron hondamente en el mundo de los trabajadores y sus organizaciones, y se cruzaron con los cambios producidos desde comienzos de los años veinte, a veces ratificándolos, y otras, en cambio, reorientándolos. En el caso argentino, el crecimiento del sector industrial y el consecuente aumento de la cantidad de personas que encontraban un puesto de trabajo allí eran paralelos a un crecimiento de los sectores medios, que también se había iniciado algún tiempo atrás, vinculado a las posibilidades de ascenso social. El proceso de constitución de nuevas identidades populares urbanas que había comenzado en la etapa anterior no se detuvo, y se enlazó con esta extensión del número de trabajadores industriales, obreros o empleados.

Por otra parte, tanto el aumento general del número de trabajadores de las industrias como el crecimiento del número de establecimientos fabriles grandes, en los que tenían importancia numérica los obreros no calificados, aceleraron y profundizaron el declive, iniciado mucho tiempo antes, de un tipo de sindicato propio de etapas previas, que reclutaba artesanos y trabajadores altamente especializados y desconfiaba en forma radical y persistente del estado y de la política: el anarquismo y el anarcosindicalismo eran las corrientes ideológicas predominantes en ese marco. Uno de los desafíos para las organizaciones sindicales durante los años treinta fue ampliar los sectores de trabajadores que participaban en el sindicato, incluidos aquellos que no tenían calificación. Varias organizaciones obreras apelaron al mundo de la política para encarar esa tarea, incluida la negociación con el estado, no sólo para la resolución de conflictos específicos, sino también para la obtención de herramientas legales referidas a las condiciones de trabajo. De todos modos, esto no constituía una novedad absoluta.

Estas circunstancias ratificaron que los avatares de la vida política resultaban importantes para el movimiento obrero. Hacia comienzos de la década, la desocupación complicó la actividad sindical, que debía desarrollarse en un contexto donde la oferta de mano de obra superaba la demanda y los salarios disminuían. El golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 llevó al gobierno a unos elencos que, con muy pocas excepciones, estaban preocupados por restaurar lo que entendían que era un orden deseable, así como una disciplina laboral y, más en general, social, que supuestamente había sido alterada por la "demagogia radical", acusada además de haber contribuido a alentar

la agitación entre los trabajadores. Esas preocupaciones, manifestadas

te en el mundo de los
n con los cambios pro-
veces ratificándolos, y
so argentino, el creci-
umento de la cantidad
bajo allí eran paralelos
también se había ini-
bilidades de ascenso so-
tidades populares urba-
ior no se detuvo, y se
bajadores industriales,

número de trabajadores
ero de establecimientos
a numérica los obreros
eclive, iniciado mucho
etapas previas, que re-
cializados y desconfiaba
política: el anarquismo
ológicas predominantes
nizaciones sindicales du-
e trabajadores que par-
no tenían calificación.
o de la política para en-
tado, no sólo para la re-
n para la obtención de
es de trabajo. De todos
a.

ares de la vida política
brero. Hacia comienzos
ividad sindical, que de-
ta de mano de obra su
l golpe de estado del 6
s elencos que, con muy
restaurar lo que enten
na disciplina laboral y,
bía sido alterada por la
r contribuido a alentar

a menudo durante las grandes conmociones oc
presidencia de Yrigoyen –la Semana Trágica en 1
la Patagonia en 1921–, se apoyaban en percepcio
persistentes. En los equipos de gobierno de Urib
ba una actitud anticomunista marcada. Durante
rigencia obrera sufrió represión, expulsiones d
trescientos extranjeros fueron deportados, entr
dicales, y tuvieron lugar varias ejecuciones mien
estado de sitio.

Así, ni el contexto económico ni las condiciones
tre 1930 y la llegada al gobierno de Justo, a comie
cieron la actividad de los militantes sindicales; ana
llevaron la peor parte en la represión, y varias de l
controlaban quedaron prácticamente sin posibil
ción represiva consolidó el declive que ya sufría e
dicalistas comunistas, por su parte, disponían de
partido para intentar atemperar el impacto de la
que existieron otros sectores hacia los cuales el g
tolerancia, el conjunto del movimiento sindical f
políticas. A pesar de todo, dos de las centrales, la U
tina y la Confederación Obrera Argentina, reto
años previos, terminaron de fundar formalmen
después del golpe de estado; el sindicato más pode
rroviaria.

La llegada de Justo a la presidencia significó un
de las condiciones generales para el desarrollo
Contribuyó a ello la presencia en funciones de g
antipersonalistas, que tenían experiencia en la ne
ganizaciones obreras dominadas por la corriente
un clima general en el que se ampliaban parcia
para la actividad política con la reapertura del Co
dos, esa ampliación fue todavía limitada y se redu
posibilidad de celebrar reuniones y actuar en los
riesgos que en tiempos del uriburismo.

Tal como ocurría con otros modos de intervenc
lectivos, la situación no era la misma en todo el pa
ral y en otros distritos donde el peso de la opinió
ble, o donde el gobierno local era más tolerante
acción obrera eran mayores. Al mismo tiempo, la a

frente a cada conflicto variaba de acuerdo con distintos factores, que incluían la importancia del sector económico en cuestión, la filiación política –si la tenía– de la dirección del sindicato en huelga, el cálculo del gobierno acerca del peso que tendría en la opinión pública una actitud represiva, las reparticiones estatales que estaban involucradas en el conflicto o en su solución. A lo largo de todo el período, no faltaron ni la represión dura ni la negociación.

Luego del fin del gobierno uriburista, la situación económica continuó complicada y, tal como ha sostenido Joel Horowitz, atendiendo a un índice muy sensible, en 1932 tuvo lugar una ola de huelgas importante, pero en el 75 por ciento de ellas los trabajadores fueron derrotados. Todavía en 1934, en la Capital Federal, el porcentaje de derrotas de los trabajadores en conflictos de este tipo era del 73,7 por ciento. Sin embargo, a partir de ese mismo año comenzó a insinuarse cierta recuperación económica, fundada en la reconstitución parcial de las exportaciones tradicionales y en una tenue mejora en los términos del intercambio, lo cual se combinó con el crecimiento de la industria, que demandaba mano de obra. Hacia 1936, los sindicatos fueron vencidos sólo en el 42 por ciento de los conflictos laborales. Esos porcentajes continuaron descendiendo a lo largo del período.

Los sindicatos, la política y la acción estatal

Entre 1929 y 1930 existían en la Argentina varias centrales sindicales con diferencias ideológicas y organizativas: la FORA V° Congreso, que se definía comunista-anárquica; la Unión Sindical Argentina; la Confederación Obrera Argentina, donde militaban socialistas y *sindicalistas* que, en 1930, luego del golpe y como final de un proceso anterior, se unirían constituyendo la Confederación General del Trabajo; y el Comité de Unidad Sindical Clasista, comunista. Un informe de la Liga Patriótica indicaba que en 1932 unos 132 000 trabajadores estaban afiliados a las organizaciones sindicales en Buenos Aires. La mayor de las centrales era la CGT, con casi el 83 por ciento de los afiliados. Los sindicatos ferroviarios –La Fraternidad y la Unión Ferroviaria– eran la base de la nueva central y los que aportaban la mayor parte de los trabajadores que efectivamente pagaban su cuota sindical. A fines de los años veinte, estos dos sindicatos eran un modelo exitoso de organización que había negociado con el estado en tiempos de los gobiernos radicales, en busca de que éstos presionaran a las empresas a la hora

de solucionar conflictos laborales. Por eso, para gran parte de la dirigencia sindical no era banal la cuestión de en qué manos se hallaba el aparato administrativo del estado.

Una vez que Justo llegó a la presidencia, con la apertura parcial del juego político, los sindicatos cuyos dirigentes tenían vínculos con algún partido, aunque fueran informales, contaron con una ventaja adicional, ya que crecían las posibilidades de que las bancadas políticamente próximas promovieran la sanción de leyes favorables a sus trabajadores. Una estrategia de este tipo se tornaba atractiva además para aquellas organizaciones con pocas posibilidades de extender su estructura a todo el país o a la mayoría de los establecimientos del sector. Así, el Partido Socialista, cuyo grupo parlamentario se había visto incrementado notoriamente por la abstención del radicalismo en las elecciones de 1931, era un interlocutor privilegiado para los sindicatos afines, y al mismo tiempo se tornaba un elemento clave para el gobierno justista que, impugnado por la abstención y los levantamientos radicales, buscaba consolidar su legitimidad. La negociación en el Parlamento de leyes referidas a cuestiones obreras fue una práctica que se desarrolló ocasionalmente en esos primeros tiempos, aunque las leyes que finalmente se aprobaron quedaron restringidas a ciertas actividades y territorios.

La Unión Obreros Municipales, dirigida por Francisco Pérez Leirós, y el Sindicato de Empleados de Comercio, conducido por Ángel Borlenghi, fueron casos en los que este mecanismo funcionó con éxito para las dirigencias sindicales. De fuertes vínculos con el PS, la dirección del sindicato de comercio asumió que tanto el perfil social de sus miembros como la dispersión de los lugares de trabajo eran obstáculos para la organización. Apelaron entonces a dos recursos: la creación de una confederación de alcance nacional, que reunió a varios sindicatos de la actividad, y la realización de movilizaciones políticas que, en 1932, lograron la sanción de dos leyes que, sin embargo, tendrían inicialmente aplicación sólo en la Capital Federal: la del "sábado inglés" y la que establecía que los locales comerciales debían cerrar a las ocho de la noche. La primera medida significaba fijar la semana de trabajo en cinco días y medio, mientras que la segunda acotaba en los hechos la jornada laboral de los trabajadores del sector. Simultáneamente, otras modificaciones favorecieron la retención del puesto de trabajo al tornar más complicados los despidos. A su vez, los municipales se valían de la fuerte presencia socialista en el Concejo Deliberante porteño para obtener sus propias mejoras específicas. En el caso de los empleados de

comercio, la eficacia de la estrategia se reveló en el crecimiento de la organización: hacia 1932 sus miembros no llegaban a los 1000, mientras que en 1936 rondaban los 18 000.

Al analizar estos casos, debe tenerse en cuenta que los votos socialistas en el Parlamento no alcanzaban para sancionar dichas normas; tampoco los que podía aportar el PDP. La negociación parlamentaria debía necesariamente incluir votos oficialistas, ya fueran antipersonalistas, conservadores o socialistas independientes. Estos fenómenos constituyen ejemplos claros de la reconfiguración de las relaciones entre sectores del movimiento sindical, el estado y los partidos. Ésta se había insinuado ya en el período anterior, pero en esta oportunidad incluía una dimensión parlamentaria más acusada que, de todas maneras, se desdibujó con el correr de la década.



C.G.T.

Aparece los Viernes

Trabajadores del mundo, uníos

Con más fe que nunca el proletariado debe reafirmar su decisión de vencer al enemigo

Portada del periódico *CGT*, de 1934.

Por su parte, luego de la represión uriburista, el sector del movimiento obrero vinculado al Partido Comunista logró reorganizarse. A partir de mediados de la década, cuando se iniciaron los cambios económicos mencionados, el sindicalismo comunista se transformó en uno de los grupos más eficaces dentro del movimiento obrero y de los más exito-

sos en la organización de trabajadores no calificados; percibió además, con una precisión que no tuvieron otros sectores, la importancia que la mano de obra femenina había adquirido en varias actividades y desplegó con eficacia la tarea de sindicalización de las trabajadoras.

De los conflictos protagonizados por los sindicatos liderados por dirigentes comunistas, la gran huelga de la construcción de fines de 1935 y comienzos de 1936 fue la más resonante. El movimiento comenzó en octubre, a raíz de un accidente de trabajo. En Buenos Aires tuvieron lugar acciones de violencia eficaces y contundentes, que llevarían a la intervención del Departamento Nacional del Trabajo en la negociación de una salida al conflicto. Las organizaciones patronales rechazaron el acuerdo y en enero de 1936 los sindicatos comunistas organizaron una huelga de dos días en apoyo a los trabajadores de la construcción; algunos medios de transporte fueron atacados y los episodios dejaron varios muertos. El Ministerio del Interior intervino esta vez y forzó a las patronales a negociar un acuerdo. La victoria del sindicato había sido importante y a partir de allí prosperó la organización de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, que a comienzos de la década de 1940 era la segunda organización en cantidad de afiliados, luego de la Unión Ferroviaria.

En el sector de la alimentación, el crecimiento sindical bajo la dirección comunista también fue notable, ya que se pasó de unos 500 miembros en 1936, restringidos a los obreros de la carne, a unos 19 000 en 1941, que eran trabajadores de la alimentación en general. En ambos casos, el de la construcción y el de la alimentación, las nuevas federaciones tenían alcance nacional y tendían a la organización de sindicatos unificados por rama de actividad. En la industria textil, los comunistas promovieron la firma de acuerdos y convenios con los empresarios por sector y no por establecimiento.

De todos modos, el comunismo no era la única fuerza sindical, ni siquiera la mayor, sino la que logró el crecimiento más marcado a lo largo de la década. Si bien existían la FORA, sectores independientes y el comité comunista, la CGT era la central más grande, a pesar incluso de las divisiones, como la que en 1937 llevó a que se refundara la Unión Sindical Argentina. Durante años predominaron allí las posiciones *sindicalistas*, y sus dirigentes, si bien mantuvieron la prevención hacia los partidos socialista y comunista, con quienes además de tener diferencias ideológicas competían por el encuadramiento de los trabajadores, reclamaron al estado reconocimiento y participación. Los grandes sindicatos vinculados al transporte, tan importantes en la década anterior, seguían siendo fuertes: la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y los tran-

viarios. Junto a ellos, aparecían ahora en la CGT los obreros de la construcción, la Federación de Empleados de Comercio y los trabajadores de la alimentación, con organizaciones que en algunos casos superaban en número a las anteriores, así como textiles y estatales. Estos cambios se debían, por una parte, a la eficacia de las diversas direcciones sindicales a la hora de la organización y, por otra, se asociaban a cambios en la estructura productiva y a la extensión de las funciones del estado.

Fragmentos del Programa mínimo de la CGT, aprobado el 26 de abril de 1931

El Comité Confederal de la CGT sostiene que "hace suyo el programa de reivindicaciones que el proletariado mundial tiene elaborado" y presenta su propio programa mínimo, limitado "intencionalmente a las cuestiones más fundamentales y urgentes, a la vez que de fácil realización. [...]
Reconocimiento de los sindicatos. Por el mero hecho de existir, los sindicatos serán considerados como instituciones de bien público, con facultades para vigilar la aplicación de la legislación obrera. [...] [La acción de los sindicatos] ha elevado el tenor de vida de la clase obrera y la ha dignificado suscitando en su seno preocupaciones de orden moral y demostrando asimismo que los vicios y la abyección [...] sólo eran fruto de la miseria y del trabajo excesivo y agotador. Donde el sindicato se afianza y su acción se extiende, la jornada de trabajo se reduce y el salario se eleva; el alcoholismo, la prostitución y el juego van desapareciendo y disminuye la tabla de la mortalidad. La industria misma no habría realizado la mitad de sus progresos sin los Sindicatos y sus luchas. La legislación social existente es, también, una consecuencia de la acción de los trabajadores. [...]
Intervención obrera. Intervención y contralor de la organización obrera en diversos organismos del estado. La CGT propicia la representación directa de las organizaciones sindicales en el Departamento Nacional de Trabajo, Dirección de Inmigración, Departamento Nacional de Higiene, Dirección General de Ferrocarriles, Administración de los FFCC del estado, Dirección General de Navegación y Puertos y Prefectura General Marítima, reparticiones que por la naturaleza de sus funciones tienen una relación directa y permanente con los trabajadores".

En Roberto Reinoso, *El periódico "CGT" (1932-1937)*, Buenos Aires, CEAL, 1987.

La política internacional también influyó, aun con mediaciones, en la vida sindical. Así, por ejemplo, en 1935 el PC cambió de táctica en consonancia con lo decidido por la Internacional Comunista, y pasó de promover una línea de clase contra clase a impulsar con fervor la política de Frente Popular antifascista y antiimperialista, lo que significaba la colaboración con otros partidos de izquierda. En el movimiento obrero, el PC decidió disolver su central, el CUSC. La guerra de España, que comenzó en 1936, fomentó las tendencias a la colaboración, aunque no faltaron pujas y disidencias. Pero el fin de la guerra civil, con la caída de Madrid en manos franquistas en 1939, fue apenas anterior a la firma del tratado de no agresión entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética. Poco después comenzaba la Segunda Guerra Mundial y los comunistas locales asumieron una posición de neutralidad y de denuncia decidida del imperialismo, al tiempo que impulsaban la radicalización de los conflictos gremiales.

Esta etapa se prolongaría hasta 1941, cuando la Unión Soviética entró en la guerra junto a los Aliados. La dirigencia obrera vinculada al comunismo moderó entonces sus reclamos, aunque una vez más, cuando el presidente Castillo declaró el estado de sitio, fueron los activistas sindicales comunistas los más afectados. La unidad sindical, de por sí complicada por la competencia entre las diversas tendencias existentes, tampoco se vio favorecida por estas sucesivas reorientaciones. En marzo de 1943, pocos meses antes del golpe de estado, la CGT se dividió en dos organizaciones. La llamada CGT número 1 reunía en sus filas a la Unión Ferroviaria y a los tranviarios entre los sindicatos importantes, mientras que la CGT número 2 convocaba a La Fraternidad, la Unión Obreros Municipales y la Federación de Empleados de Comercio, junto a los sindicatos con direcciones comunistas. Los episodios de ruptura fueron bastante escandalosos, con votantes que cambiaron súbitamente de bando, reemplazos de delegados y repetición de votaciones.

Límites

Pocos años antes, en 1941, un censo llevado adelante por el Departamento Nacional del Trabajo había señalado que alrededor de 440 000 trabajadores estaban sindicalizados. Ello representaba un crecimiento absoluto a lo largo de la década de 1930, que sin embargo continuaba dejando el porcentaje de trabajadores urbanos sindicalizados en el 12 por ciento del total de la mano de obra de ese sector. La tasa resulta alta

si se la compara con la información disponible para otros países latinoamericanos, pero es marcadamente menor que muchas de las que en esos años se alcanzaban en Europa: en Dinamarca, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores sindicalizados en los sectores no agrícolas era del 43 por ciento en 1938, mientras que en Francia llegaba al 56 por ciento. Aquella cifra de 1941, a su vez, sería también muy inferior a las que se alcanzarían luego en la Argentina.

En su gran mayoría, las bases sindicales se encontraban en las grandes ciudades del Litoral, pero aun allí la situación distaba de ser sencilla. En los hechos, los escasos convenios conseguidos solían ser desconocidos por las empresas, e incluso algunas de las mejoras obtenidas por ley corrían esa suerte. El poder de las organizaciones sindicales y la extensión de sus redes militantes eran absolutamente insuficientes para llevar adelante el control de las condiciones de trabajo en fábricas y talleres, donde, además de los rigores de las tareas desarrolladas, a menudo debía soportarse el cruce de información patronal y policial, en particular acerca del activismo comunista.

A ello deben agregarse las ya mencionadas diferencias según la jurisdicción de la que se tratara. Estas diferencias, que jugaron un papel destacado, se expresaban en el tamaño y el tipo de estructura estatal presente en cada caso, fuera la estructura del estado nacional o la de los provinciales; su relación con las elites locales; los perfiles políticos que estas últimas exhibían. En Jujuy, por ejemplo, la cerrada trama que enlazaba a los industriales azucareros y a los funcionarios de esas empresas con el poder político, en manos de los grupos conservadores durante toda la década de 1930, se traducía en condiciones de trabajo particularmente duras, sin que ninguna autoridad se encargara del cumplimiento de las pocas reglamentaciones existentes.

Como en la década anterior, la mano de obra estacional que demandaban los ingenios en aquella provincia era suministrada por contratistas, "conchabadores" o "negreros" según los propios documentos de época, que apelaban sin mayores reparos a la coacción, en particular sobre los indígenas. Traslados forzados de pueblos enteros, pagos en vales canjeables sólo en la proveeduría de la propia empresa, endeudamiento de los trabajadores por la misma razón, condiciones absolutamente miserables de trabajo y de vivienda –dado que en ocasiones se los alojaba en terrenos del propio ingenio–, eran habituales por entonces. Allí, y en algunas otras áreas y actividades, difícilmente podía hablarse de la vigencia plena de un régimen de trabajo asalariado: en buena parte se trataba formas de explotación y

dominación más arcaicas. En 1941, sindicalistas empeñados en extender su acción a los yerbatales denunciaron situaciones semejantes en Misiones.

Por su parte, Alfredo Palacios, que recorrió las provincias del Noroeste en 1936 y 1937 como miembro de una comisión del Senado, publicó *El dolor argentino,* en 1938, y *Pueblos desamparados,* en 1942, donde recopiló sus intervenciones en el Congreso referidas a aquella experiencia. Allí, además de subrayar las dificultades que enfrentaban los trabajadores, detenía su mirada en el fenómeno más amplio de la pobreza. En 1938, el senador socialista veía "una perspectiva pavorosa: la del porvenir de innumerables pequeñuelos argentinos, tarados por las enfermedades que engendra la miseria". En la misma región, hacia 1934, algunas fuentes señalaban que más del 50 por ciento de los futuros reclutas no estaba apto físicamente para cumplir con el servicio militar. El panorama no era más benévolo para algunos sectores en las ciudades. En lo que hace a una variable muy amplia, el salario real en la ciudad de Buenos Aires, si se toma como base 100 en 1929, pasó a 97 en 1939; había descendido a comienzos de la década de 1930 hasta 91 y sólo había superado los niveles de 1929 en dos oportunidades a lo largo de diez años. Hacia 1937, el 61 por ciento de las familias obreras vivía en una única habitación en las grandes ciudades y, hacia mediados de los años cuarenta, el 63 por ciento de los trabajadores no era propietario de su vivienda.

De todas maneras, no debe suponerse que las voces que advertían sobre la situación provenían exclusivamente de la oposición. El propio presidente Ricardo M. Ortiz sostenía, en el discurso pronunciado ante el Parlamento al año siguiente, en 1938, que existían "poblaciones enteras carentes de los medios de vida indispensables", asoladas por el paludismo y otras endemias, subalimentadas y obligadas a la deserción escolar. El presidente propuso, en esa oportunidad, la intervención estatal frente a tales males. Ortiz, conviene recordarlo, había sido electo en los comicios fraudulentos de 1937.

Muchos sectores ideológicos, oficialistas y opositores, compartían también la preocupación de la época por los efectos que la miseria podía causar en lo que denominaban la "raza argentina", tornándola vulnerable y debilitando, en consecuencia, las supuestas potencialidades de la nación.

El estado

A lo largo de los años treinta, la estructura estatal dedicada a cuestiones laborales no había crecido demasiado: el Departamento Nacional del Trabajo era una módica repartición, tal como lo sugiere su categoría. Pero en otras áreas se producían novedades. En la dedicada a la economía, se creaban nuevos organismos, como la Junta Reguladora –luego, Nacional– de Granos y la de Carnes, organizadas en tiempos de Justo con el objetivo de intervenir en la producción. En 1932, se creaba por ley la Dirección Nacional de Vialidad, involucrada directamente en la explosiva expansión de los caminos y rutas, que iban de 2000 kilómetros en 1932 a 60 000 en 1944, de los cuales 30 000 eran de tránsito permanente. Vialidad era en principio una repartición del Ministerio de Obras Públicas, un sector también muy dinámico, con correlato en algunos organismos provinciales. YPF, a su vez, crecía al calor de la demanda de combustible generada por el aumento de la circulación automotor y de la red vial; su participación en el mercado estuvo en alza entre 1931 y 1934. En los años siguientes, la empresa inauguró sus laboratorios en Florencio Varela, importantes obras en Comodoro Rivadavia y la red de estaciones de servicio en colaboración con el Automóvil Club, que llegaron a puntos alejados del territorio nacional. La creación de comisiones e institutos nacionales en el área de cultura y de la Dirección de Parques Nacionales son ejemplos que apuntan en el mismo sentido, y se sumaron a las áreas más antiguas y asentadas de la administración estatal, que eran la dedicada a educación, la de seguridad y militar, y la de salud. Estas nuevas funciones y actividades que el estado asumía ampliaron el número de trabajadores y empleados sin rango jerárquico en el sector, y también el de funcionarios, miembros de la alta burocracia y expertos –ingenieros, arquitectos, médicos– que construyeron o consolidaron perspectivas que buscaban explicar y justificar la importancia de sus respectivas actividades.

Este fenómeno no era exclusivamente local; las dirigencias de muchos países capitalistas habían tentado diversas formas de intervención económica y planificación parcial de la producción como búsqueda de una salida a la crisis de 1929 y como modo de prevenir futuros colapsos, en lo que constituían bosquejos de políticas anticíclicas. En los países centrales, la proximidad de la guerra, en el horizonte desde mediados de la década, alentó estas tendencias a organizar y regular la vida económica.

Es probable que, en la Argentina de los años treinta, se tratara más de medidas de coyuntura y de corto plazo que de planes orgánicos y es-

tratégicos, entre otras razones porque no fueron muchos los dirigentes que percibieron que la economía argentina y su modo de relación con el mundo estaban sufriendo cambios profundos. En cualquier caso, entre funcionarios y burócratas, entre altos cuadros estatales y empleados, y también entre los públicos que demandaban los servicios que aquellas reparticiones ofrecían, se afirmó la idea de que el estado tenía allí alguna función que cumplir. Así, es probable que en estas zonas de encuentro terminara de arraigar la noción, que ya se había manifestado parcialmente con anterioridad, de que correspondían a los ciudadanos, en tanto tales, otros derechos además de los estrictamente civiles y políticos.

CUARTA PARTE
1943-1955

8. La llegada del peronismo, 1943-1946

Los pocos años que van del golpe de estado de 1943 al triunfo de Perón en las elecciones de 1946 son cruciales para la historia argentina. Fragua por entonces la primera versión de un movimiento que, prácticamente desde su aparición en el panorama político argentino, desafió los intentos de explicación y análisis: el peronismo. Entendido como fascismo criollo, movimiento de emancipación de los trabajadores, populismo, heredero del nacionalismo, pero también del radicalismo o del catolicismo social, el peronismo, cambiante en el largo plazo, signó la segunda mitad del siglo XX argentino.

Otro golpe

El 4 de junio de 1943, un nuevo golpe de estado derrocó al presidente Castillo e impuso inicialmente al general Arturo Rawson como su sucesor. Sin embargo, apenas tres días más tarde, en un movimiento militar interno y sin que hubiera llegado a prestar juramento como presidente, Rawson fue reemplazado por el general Pedro Ramírez. Vertiginosa, la disputa entre los militares también acabó pronto con la presidencia de Ramírez, quien entre fines de febrero y comienzos de marzo de 1944 delegó el mando en manos del general Edelmiro Farrell, y renunció luego. Mientras tanto, una figura que se había mantenido en una relativa segunda línea comenzó a ganar visibilidad y poder: la de Juan Domingo Perón, por entonces, coronel.

Desde el punto de vista de la lucha política, éstos no eran tiempos claros. En los años anteriores al golpe de junio de 1943, luego del intento de Ortiz de garantizar elecciones libres, el oficialismo había vuelto a recurrir al fraude electoral en muchos distritos; los partidos de oposición no lograban hallar una salida a la crisis que se había instalado en el mundo político, ya que el gobierno mantenía la ficción del funciona-

miento parlamentario, pero se reservaba el manejo discrecional de las elecciones. No faltaban los dirigentes opositores que consideraban la intervención militar como la única alternativa posible para la restauración de condiciones electorales aceptables y transparentes, o al menos como la alternativa más eficaz. A su vez, en el sensible frente externo, la neutralidad asumida ante la Segunda Guerra Mundial se había transformado en un foco de conflicto serio luego de la entrada de los Estados Unidos en la guerra, en 1941.

Movimientos militares fallidos que nunca se concretaron a pesar de haber sido planeados, rumores intermitentes de golpes en ciernes, intrigas de palacio y operaciones cruzadas eran la norma, al punto que, en el nivel más inmediato, el golpe del 4 de junio fue desencadenado por el pedido de renuncia que Castillo formuló a su ministro de Guerra, el general Ramírez. El presidente, alertado de que sectores del radicalismo le habrían propuesto al ministro que encabezara un golpe de estado, intentó detener el movimiento exigiendo su renuncia. Pocos meses antes, en noviembre de 1942, Ramírez había sido impulsado a ese cargo por los grupos nacionalistas del ejército, que trataban así de debilitar al justismo, sector en el que tenía un papel importante el anterior ministro de Guerra, general Tonazzi, lo cual puso en evidencia cuántos sectores estaban en la disputa y cuántas acciones estaban en marcha. También el justismo parece haber contemplado la vía golpista, aunque con fines diferentes.

De todos modos, en un nivel más profundo, el golpe del 4 de junio no puede desvincularse del hecho de que la candidatura oficialista había recaído en Robustiano Patrón Costas, cuando se dibujaban ya en el horizonte las elecciones presidenciales previstas para septiembre de 1943. Conservador, abierto partidario del fraude, miembro de la elite salteña, hacendado y empresario del azúcar en ingenios donde el trato a los trabajadores era muy duro, partidario de la causa aliada, la perspectiva de que Patrón Costas fuera finalmente presidente inquietaba a los partidos opositores, que habían organizado un primer esbozo de Unión Democrática a fines de 1942, pero también a varios de los grupos militares, tanto a los que entendían que la neutralidad era irrenunciable como a quienes consideraban necesario el retorno a prácticas electorales menos opacas.

Así, al producirse el golpe de estado del 4 de junio, eran pocas las certezas acerca de lo que en verdad estaba ocurriendo. Los lazos conservadores de Rawson llevaron a algunos grupos a suponer que el auténtico motivo del golpe era acabar con la neutralidad que Castillo,

también conservador, había sostenido, para alinear al país con los Aliados. Otros leyeron en el movimiento, con un optimismo que pronto se revelaría excesivo, el retorno del ejército a las sendas de la democracia: el golpe habría venido a poner fin al fraude, cuando las elecciones presidenciales estaban más o menos próximas. Por un tiempo breve, ésta fue la opinión inicial de algunos grupos radicales y comunistas.

A la confusión interpretativa del momento contribuyeron los nombres que se filtraron como miembros del gabinete de Rawson, donde había neutralistas que miraban a las potencias del Eje con simpatía, así como personajes vinculados a los capitales ingleses, presumiblemente favorables a la causa aliada. Prácticamente todos ellos formaban parte de los viejos elencos de la elite. En este equívoco cuadro, Rawson fue reemplazado por Ramírez, su ministro de Guerra.

Los socialistas ante la caída del gobierno de Castillo

El 5 de junio de 1943, el diario socialista *La Vanguardia* planteaba, ante el gobierno surgido del golpe de estado del 4 de junio de 1943, que "ayer cayó indefendido el gobierno indefendible. El ministro de la Guerra del señor Castillo barrió con el gobierno que vivía al margen de la Constitución. Desde ayer la fuerza reemplaza en el poder al fraude integral". El artículo sostiene que el gobierno de Castillo era "hijo de la ambición sensual de una clase ciega y prepotente" y que "la caída de este gobierno no será lamentada. Nadie lo defendió. Nadie lamentará su triste fin. Frente a los hechos producidos surge evidente la significación histórica del programa político aprobado por el congreso socialista, consistente en lograr la unidad de los argentinos en la democracia, sin exclusiones ni torpes limitaciones y bajo la bandera de una fórmula democrática integrada por figuras respetables y de prestigio nacional".

Visto desde hoy, y aunque otros aspectos estén todavía en duda, queda claro que se trataba de un golpe de estado en el cual el ejército aparecía involucrado institucionalmente. Eran los propios mandos de guarniciones y sus altas autoridades los que hacían intervenir al ejército, no sólo en la definición de la situación política, sino, como se vería en el corto plazo, en el ejercicio directo del manejo del aparato estatal a una escala novedosa. De todas maneras, esto no significaba la ausencia de disputas, tensiones y diferencias entre grupos, resultado de discrepancias personales algunas, y otras, de la pertenencia a ciertas tradiciones

internas y a diversas familias ideológicas. Así, aunque minoritarios, seguían existiendo oficiales radicales, y hasta los había cercanos a los grupos intransigentes; el justismo, inclinado al liberalismo moderado y conservador, tampoco había desaparecido. No faltaban quienes eran decididamente nacionalistas y agregaban a esa posición los matices que aportaba el catolicismo; su influencia había crecido en los años treinta. Más allá de estos nacionalistas más definidos, un rasgo característico de la mirada militar sobre el mundo a comienzos de los años cuarenta fue la extensión de un nacionalismo más genérico, compatible con varias perspectivas ideológicas y alternativas políticas.

El GOU

En el interior del ejército, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) fue el sector más eficaz y operativo. Se trataba inicialmente de una logia secreta, como otras que habían existido en el ejército, constituida en gran parte por coroneles y tenientes coroneles, también mayores y capitanes y algunos pocos generales, que no pertenecían al núcleo original. De este modo, eran oficiales de rango bajo y medio, y relativamente jóvenes, en su mayoría, quienes lo integraban. Si bien la planificación de la acción del 4 de junio no fue muy ajustada y en su ejecución el GOU tuvo un lugar secundario, esta logia pronto se transformó en el único sector en condiciones de encauzar hacia algún puerto el proceso abierto luego del golpe. Su papel en la orientación que asumió el gobierno fue relevante a partir de octubre de 1943, cuando la proximidad con los grupos civiles del nacionalismo católico se volvió más estrecha. Allí, entre otros, formó el coronel Perón.

La carrera profesional de Perón incluía cargos de profesor en la Escuela Superior de Guerra, de agregado militar en Chile y cursos de perfeccionamiento realizados en la Italia fascista entre 1939 y 1940. Su foja registraba contactos iniciales con el uriburismo y un alineamiento final con el bando de Justo en el golpe de 1930. En el GOU también participaron el coronel Urbano de la Vega, quien había sido conspirador contra Ortiz en un movimiento frustrado que reclutó apoyos entre los nacionalistas; el coronel Miguel Montes, cercano en cambio al radicalismo yrigoyenista; Eduardo Ávalos, de contactos firmes con el radicalismo sabattinista, y Domingo Mercante.

La existencia de antecedentes tan diversos no impidió que, en tiempos de guerra, estos militares hallaran razones para la acción común.

Ella se fundaba en ciertas posiciones que se pretendían profesionales y técnicas, aunque a todas luces también tenían un costado político: en su centro estaba la preocupación por la llamada defensa nacional –a la que Perón dedicaría una conferencia dictada en la Universidad de La Plata en 1944–, concebida como una tarea que competía a toda la nación, no sólo a los militares. Apelando a una denominación europea de fines del siglo XIX, en estos ámbitos solía postularse que los planteos más actualizados acerca de la defensa nacional se articulaban en torno a la idea de la "nación en armas".

Así, entre estos militares se difundió la opinión de que la autonomía industrial era necesaria para garantizar aquella defensa; la decisión norteamericana de suspender la venta de armas como una de las respuestas a la política de neutralidad argentina dio mayor trascendencia a este punto. También se entendía que la intervención estatal en la vida económica era una herramienta útil para ese anhelo, y aun se extendía el criterio de que la atención dedicada a la cuestión social era un modo de evitar el conflicto y la lucha de clases, que estos oficiales veían como un mal en la medida en que amenazaba la unidad nacional que la defensa exigía. Al mismo tiempo, una política social adecuada fortalecería físicamente a los sectores populares que constituían el ejército; las observaciones acerca de los porcentajes de conscriptos que no eran aptos para el servicio militar eran vistas con creciente alarma. Desde estos puntos de vista, la política social no sólo atenuaba la posibilidad de que se abrieran frentes internos de disputa articulados alrededor de las diferencias sociales, sino que fortalecía la capacidad bélica de la población. En otro plano, la guerra de España era un fantasma recurrente en esos sectores y el triunfo del Frente Popular chileno en 1938 activaba sus temores de un avance comunista en la Argentina, al que, según creían, las actitudes liberales no hacían más que favorecer.

En parte, estos últimos eran argumentos que ya habían planteado sectores del nacionalismo desde fines de los años treinta, dispuestos a disputar con la izquierda la movilización callejera y la inserción en los sectores populares –más allá del éxito que efectivamente tuvieran en la empresa–. Se trataba de un nacionalismo más propio de la era de la política de masas que el que había animado a los grupos conservadores radicalizados de los años veinte. También algunos planteos del catolicismo social, más tradicional y moderado, se aproximaban a las observaciones militares acerca de la política social como manera de evitar el conflicto. En los días de junio de 1943, fue el GOU el ámbito donde se decidió el reemplazo de Rawson por Ramírez: ése fue el auténtico

golpe de los coroneles. Sin embargo, a pesar de las coincidencias en aquellos puntos de vista y en las acciones de junio, también el GOU sería sacudido por competencias personales y disidencias políticas.

Plan de Unificación del GOU

(fragmentos de un diagnóstico de situación)

La Obra de Unificación como una colaboración al bien del servicio persigue unir espiritual y materialmente a los jefes y oficiales del ejército por entender que en esa unión reside la verdadera cohesión de los cuadros y que de ella nace la unidad de acción, base de todo esfuerzo colectivo. [...]

Un todo animado de una sola doctrina y con una sola voluntad es la consigna de la hora, porque la defensa del ejército, contra todos sus enemigos internos y externos, no es posible si no se antepone a las conveniencias personales o de grupos el interés de la Institución.

[...] estamos ante una situación tan grave como no ha habido otra desde la organización de nuestro país. Estamos en peligro de guerra con el frente interno en plena descomposición. Se perciben claramente dos acciones del enemigo: una presión en fuerza por Estados Unidos a hacerse efectiva por ese país o por sus personeros; la destrucción del frente *interior*, iniciada por la penetración y agitación del país por agentes de espionaje y propaganda, a la que amenaza seguir con la conquista del gobierno en las próximas elecciones y luego con la revolución comunista tipo Frente Popular.

Fermín Chávez, *Perón y el peronismo en la historia contemporánea*, Buenos Aires, Oriente, 1975. Véase una versión con leves diferencias en Robert Potash, *Perón y el GOU: los documentos de una logia secreta*, Buenos Aires, Sudamericana, 1984.

En principio, Ramírez mantuvo la neutralidad pese a la presión norteamericana y a la que comenzaba a ejercer con más decisión la mayoría de las fuerzas políticas, que pronto se ubicaron en la oposición, luego de los momentos de desconcierto inicial. En Europa, los Aliados pasaron a la ofensiva, y los opositores argentinos, recuperando y agudizando posiciones ya insinuadas en los años anteriores, plantearon la disputa política local con el gobierno militar como un episodio más de la universal lucha de las democracias contra el fascismo. La

presencia de católicos integristas y de nacionalistas extremos en el gobierno –que en varios casos se habían manifestado admiradores de las políticas fascistas y nazis, y antisemitas fervorosos– alimentaba y dotaba de verosimilitud dicha interpretación del conflicto político local.

También contribuían a ello algunas decisiones del gobierno, de las cuales la implantación de la enseñanza religiosa fue una de las más significativas. En cualquier caso, la tradición de la escuela laica ya había sufrido embates previos a escala provincial: el gobernador Fresco había tomado la misma decisión para las escuelas de la provincia de Buenos Aires en 1936, y en Catamarca había ocurrido algo semejante hacia 1941. El Partido Socialista y el Partido Comunista fueron los más activos impulsores de la interpretación que hacía del gobierno militar uno fascista, y pronto aplicarían la misma lectura a lo que empezaba a llamarse peronismo.

En este contexto, en enero de 1944 el presidente Ramírez decidió romper relaciones con el Eje, mientras las expresiones opositoras y la presión internacional se volvían aún más intensas. Este primer desvío de la política neutralista no fue tolerado por la mayoría del GOU, que en poco tiempo impulsó el desplazamiento de Ramírez.

Perón, los sindicatos y la Secretaría de Trabajo

Mientras tanto, el coronel Perón comenzaba la construcción de una relación que habría de continuar, aun con variantes, durante largo tiempo. Las primeras políticas del gobierno militar hacia el movimiento obrero habían sido exclusivamente represivas, incluidas la prisión de dirigentes, en particular comunistas, la intervención de varias organizaciones y la disolución de una de las dos CGT. Jugando su propio juego en el interior del gobierno, Perón, designado al frente del Departamento Nacional del Trabajo en octubre de 1943, logró la transformación del organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión y asumió como secretario en diciembre.

En esos momentos, el movimiento obrero en la Argentina contaba con dos centrales importantes y estaba inmerso en situaciones de disputa y conflicto entre las distintas corrientes. Los sindicatos tenían un implante más sólido en los sectores de transportes y en servicios. En la industria, en crecimiento desde la mitad de la década anterior y, más notoriamente, desde el comienzo de la guerra, gracias a la sustitución de importaciones, la presencia sindical era menor, a pesar de que en ese

sector el desempeño comunista había sido muy eficaz a lo largo de los años treinta.

Al mismo tiempo, los movimientos de Perón eran resultado de una serie de contactos con dirigentes sindicales de varias tendencias, con la exclusión, en general y una vez más, de aquellos vinculados al PC. Los primeros momentos de la relación con las direcciones sindicales no fueron sencillos, y predominaron la cautela y las prevenciones por parte de los dirigentes obreros, a pesar de que las relaciones familiares de Mercante (cuyo padre era dirigente ferroviario) aportaron algunas redes; desde octubre, Mercante era interventor en la Unión Ferroviaria, uno de los grandes sindicatos. Las diferentes trayectorias y perspectivas ideológicas, las pertenencias a circuitos, ámbitos de sociabilidad y culturas políticas tan distintos, tornaban complejo ese encuentro.

Cuando, a raíz de las decisiones tomadas en el plano de la política exterior, el GOU desplazó definitivamente a Ramírez a fines de febrero de 1944, el general Farrel ocupó la presidencia y Perón el Ministerio de Guerra, decisivo en esos momentos. Pronto, Perón ocuparía también la vicepresidencia de la nación. A lo largo de 1944, la relación entre Perón y los dirigentes de numerosos sindicatos se afirmó notoriamente.

Fue esta vinculación entre parte de la dirigencia obrera y sectores de los militares jóvenes, que como se indicó no estaba exenta de recelos, una de las más importantes novedades del momento. La base en la que se apoyaba aquella aproximación era un conjunto de disposiciones legales que trastocaron profundamente las relaciones laborales; puede tomarse como ejemplo de este fenómeno la firma de convenios de trabajo. Entre 1941 y 1943, de acuerdo con cálculos de Louise Doyon, se firmaron unos 400 contratos, y entre mayo de 1944 y agosto de 1945, unos 700. Además, era la propia Secretaría de Trabajo la que aprobaba cada convenio entre los sindicatos y los empresarios y, a partir de ese momento, el acuerdo se tornaba obligatorio; la Secretaría disponía del poder de imponerlo a la patronal.

En una escala más próxima a la situación vivida en los propios lugares de trabajo, los activistas sindicales fueron reconocidos oficialmente y se les otorgaron credenciales que habilitaban su entrada a los establecimientos, lo que impulsó una mayor afiliación. Las comisiones gremiales que comenzaron a funcionar en las empresas también fueron una herramienta de movilización y participación para los trabajadores. En el mismo período se establecieron los tribunales de trabajo, se controló el cumplimiento de las jornadas laborales, se extendió el régimen jubilatorio, se sancionó el llamado Estatuto del Peón, que por primera vez

establecía derechos para los trabajadores rurales e intervenía en las relaciones laborales en el sector, y en 1945 se fijaron las vacaciones pagas, el aguinaldo y nuevas y más favorables condiciones de estabilidad para los trabajadores. Simultáneamente, los sindicatos reacios al alineamiento sufrían la creación de organizaciones paralelas y el encarcelamiento de sus dirigentes.

Perón y los sindicatos

El dirigente sindical de los empleados de comercio Ángel Borlenghi, que provenía del socialismo, en un acto junto a Perón, anunció un nuevo régimen jubilatorio para los trabajadores de su sindicato, en 1944. A lo largo de ese año, Perón afianzó sus lazos con las organizaciones obreras, en una relación que de todos modos no estaba libre de recelos.



Fotografía incluida en Fermín Chávez, *Perón y el peronismo en la historia contemporánea*, Buenos Aires, Oriente, 1975.

Hacia el 17 de Octubre

Por su parte, los opositores al gobierno militar asumieron posiciones más duras, en un proceso alentado por varios fenómenos. Entre ellos se ubicaba la continuidad de los triunfos aliados en Europa, que eran vistos por muchos de los opositores como victorias del propio bando; también la competencia –por cierto, inesperada– que algunas organizaciones de sólido implante entre los trabajadores comenzaban a vislumbrar cuando sus viejos dirigentes se aproximaban a los coroneles. De todos modos, la base social más activa y movilizada de la oposición estaba en los sectores medios urbanos, aunque la alarma patronal ante la modificación de las leyes que ampliaban los derechos laborales terminó de dar el tono específico a la posición opositora. El modo en que se desarrollaba el enfrentamiento afectó al proyecto de Perón y sus aliados militares, impulsándolos a afianzar la alianza con los sindicatos, cuando en principio buscaban convocar también a los sectores del capital, de acuerdo con su propia visión de un orden político y social deseable.

El frente militar, por su parte, no era absolutamente homogéneo. El GOU se disolvió en momentos del derrocamiento de Ramírez, y eran varios los oficiales que miraban con recelo el avance de Perón, por entonces una de las figuras centrales –si no la más importante– del gobierno. La relación que Perón había comenzado con la actriz Eva Duarte, más tarde Evita, no era tampoco un dato que la cultura extendida en muchos militares tolerara con facilidad, al menos en público.

En marzo de 1945, cerca ya del final de la contienda mundial, el gobierno militar declaró la guerra a los países del Eje, mientras varias de las figuras del nacionalismo más extremo eran desplazadas de sus puestos. La decisión fue tomada en virtud de la situación internacional y del curso, ya definitivo, de la guerra.

El campo de disputa política se organizó, así, en torno a conflictos que tenían distintos objetivos y también diversos ritmos, aunque a veces aparecían entremezclados. Los sectores mayoritarios de los grandes partidos se pronunciaron contra el gobierno militar, con el apoyo de las organizaciones de estudiantes y las patronales. Estas últimas pasaron a hacer pública, con estridencia y sinceridad, y con sorprendente torpeza política, su oposición cerril a las medidas laborales que impulsaba el estado a través de manifiestos que se sucedieron en junio, mientras los sindicatos agrupados, aun con prevenciones, en torno a la Secretaría de Trabajo, pasaron a asumir el enfrentamiento

en clave de clase. Los militares que el ascenso de Perón y los suyos habían dejado en un segundo plano competían con los que ahora estaban encumbrándose. A la escena se sumó el nuevo embajador norteamericano, Spruille Braden, convencido no sólo del carácter nazifascista del gobierno de Farrell, sino también de que le tocaba en suerte una destacada actuación en el proceso que, según sostenía, habría de terminar con esa amenaza.

Por otra parte, a través de mecanismos de diverso tipo, se iba tejiendo una trama que, según quedaría demostrado luego, convertiría a Perón en líder de vastos sectores populares y de los trabajadores. Las reuniones con la dirigencia sindical adicta eran permanentes, así como con los políticos de distinta procedencia que se le aproximaban. Se sucedían las intervenciones radiales y las declaraciones de prensa, y no eran extrañas las movilizaciones sindicales a la Secretaría de Trabajo; en julio tuvo lugar una muy importante. Sin embargo, las calles no eran sólo de los partidarios de Perón; en septiembre se realizó una enorme manifestación opositora: la Marcha de la Constitución y la Libertad. En esa situación, los militares opuestos a Perón decidieron actuar. Un movimiento interno encabezado por el general Eduardo Ávalos forzó a Perón a renunciar a sus cargos el 9 de octubre; días después, el ex funcionario era encarcelado y enviado a la isla Martín García.

Mientras los partidos se negaban a cualquier trato con el gobierno militar, bloqueando una de las salidas posibles, los dirigentes de las organizaciones sindicales y los militares cercanos a Perón maniobraron también, a la vez que se extendía la agitación en las fábricas y en los barrios populares, que incluyó manifestaciones acotadas. Luego de varios días de reuniones, el 16 de octubre, en una votación en la que el resultado fue ajustado, la CGT decidió llamar a una huelga general para el 18, en defensa de las conquistas obtenidas. El 17 de octubre, en una acción anticipada y coordinada por los comités de huelgas locales, nutridas columnas de trabajadores, que provenían de los barrios de la Capital y del Gran Buenos Aires, ocuparon el centro de la ciudad, mientras se producían movilizaciones en otras ciudades.

No obstante las movilizaciones localizadas previas, como ha indicado Juan Carlos Torre, "hasta que el Comité Central Confederal no aprobó la huelga general, los trabajadores no se lanzaron masivamente a las calles". Las columnas, que exhibían rasgos tumultuosos y pintorescos, desafiaban las imágenes que la prensa y la opinión pública porteña tenían de la movilización obrera, incluso –y quizás en

particular– las que manejaban los partidos tradicionales de la izquierda. La consigna central era la libertad de Perón. Al anochecer, luego de una serie de discretos traslados que incluyeron una estadía en el Hospital Militar, el ex secretario se dirigió a la multitud desde los balcones de la Casa Rosada. Finalizaban de este modo los acontecimientos sobre los cuales el peronismo organizaría su propio mito de los orígenes, al tiempo que se inauguraba el que sería el ritual identitario más fuerte en ese movimiento: Perón hablando a sus fieles en la Plaza de Mayo.

La CGT ante la prisión de Perón

El 16 de octubre de 1945, el Comité Central Confederal de la CGT se reunió para discutir la posición a tomar ante la prisión de Perón y la inquietud obrera. Ni los diagnósticos ni las propuestas de líneas de acción fueron unánimes; "si este cuerpo no resuelve la huelga general", planteaba R. Bustamante, del Sindicato de la Carne de Rosario, "les puedo asegurar que se producirá lo mismo, por el estado emotivo de los trabajadores". El mismo dirigente destacaba la cuestión del papel de las organizaciones sindicales en el proceso: "Nosotros ya hemos constituido un comité de huelga", que había sido declarada en Rosario; "únicamente están esperando las instrucciones de la CGT a efectos de que el movimiento se haga en forma coordinada".

Pero no todos pensaban lo mismo en cuanto a la eficacia de la medida: "Yo sospecho que con esta huelga favoreceríamos a la clase capitalista y no a los trabajadores", sostenía el dirigente Manso, mientras Néstor Álvarez, alto dirigente de la CGT, se resistía a atar la suerte de las organizaciones obreras a la de Perón: "La CGT no puede pedir de forma directa la libertad de Perón"; si la huelga fuera declarada, debía serlo "en defensa de las conquistas obreras amenazadas por la reacción capitalista".

Ramón Tejada, ferroviario, sostenía en cambio: "Por mucho que le demos vueltas al asunto, si declaramos la huelga general, ésta será por la libertad del coronel Perón, porque reclamando su retorno al gobierno estamos defendiendo nuestras conquistas".

Las citas fueron extraídas de Juan Carlos Torre, *La vieja guardia sindical y Perón*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

El 17 de Octubre

El peronismo pronto transformó el 17 de Octubre en el momento fundacional de su movimiento, cuando se habría sellado la alianza entre los trabajadores, el "pueblo peronista", y su líder. Como ocurre a menudo con acciones de este tipo, el suceso fue representado con tonos heroicos. A fines de los años cuarenta, imágenes como ésta eran frecuentes a la hora de evocar el 17 de Octubre inicial.



Afiche del 17 de Octubre, en *El Líder*, 16 de octubre de 1949, reproducido en Marcela Gené, *Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo, 1956-1955*, Buenos Aires, FCE, 2005.



Aspecto de la movilización del 17 de octubre de 1945. Archivo General de la Nación.

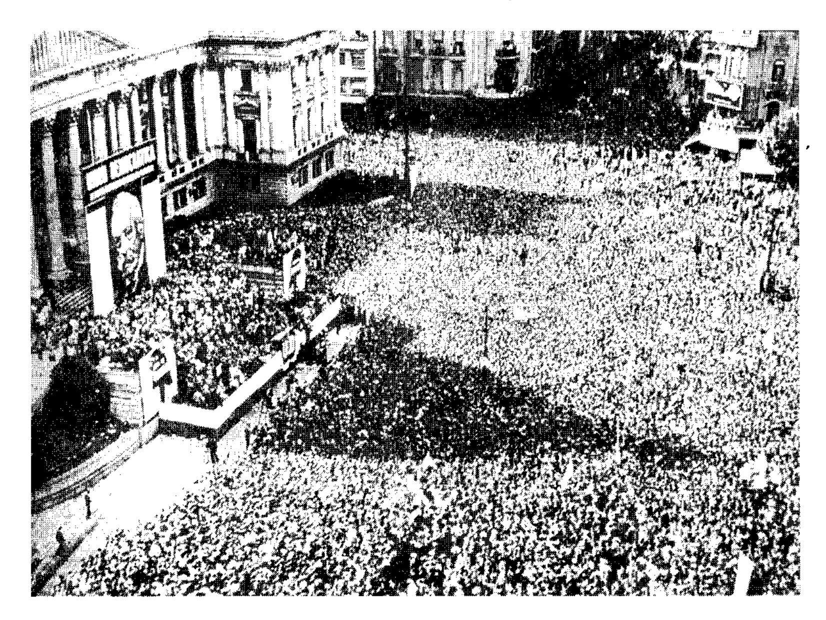
Elecciones

A partir de entonces, el proceso se aceleró todavía más: el gobierno convocó a elecciones generales para febrero de 1946 y comenzaron a delinearse los dos bloques que habrían de enfrentarse. Por una parte, la oposición, que finalmente constituyó la Unión Democrática, y por otra, la conjunción de fuerzas que apoyaban la candidatura de Perón, en lo que aparecía como la continuación del gobierno militar.

La Unión Democrática reunió al radicalismo, el socialismo, el PDP y el PC en torno a la candidatura radical, que recayó en José Tamborini y Enrique Mosca. Varios de los grupos conservadores intentaron formar parte de la alianza, pero el radicalismo no estaba dispuesto a admitir a sus viejos adversarios, que habían sido actores centrales del fraude y las violencias electorales sufridas hasta poco tiempo atrás; en consecuencia, el apoyo conservador fue informal y parcial. La constitución de una alianza de este tipo era una novedad para el radicalismo, históricamente proclive a desestimarlas tanto en razón de su potencia electoral –real o supuesta– como por motivos ideológicos. Para los cargos legislativos y provinciales, salvo algunas excepciones, los partidos de la Unión Democrática presentaron diferentes candidatos.

La Unión Democrática

En diciembre de 1945, la Unión Democrática realizó una masiva movilización que tuvo lugar en la explanada del Congreso. La consigna unitaria del acto fue "Por la libertad, contra el nazismo", que planteaba de manera sumaria y precisa el modo en que los partidos que la integraban concibieron el enfrentamiento electoral con el peronismo.



Archivo General de la Nación.

Por su parte, tanto los diarios nacionales más importantes como las entidades patronales apoyaron a la Unión Democrática; estas últimas lo hicieron públicamente y con empeño. Así, frente a decisiones tomadas en la Secretaría de Trabajo –sin dudas, con oportunismo– que fijaban aumentos generales de salarios, la ampliación del período de vacaciones y el establecimiento del aguinaldo, los empresarios se negaron a pagar este último, lo cual derivó en la toma de plantas por parte de los trabajadores en enero de 1946. Días después, los empresarios llevaron adelante un *lock out*, en una ofensiva contra el aguinaldo, que fracasaría. La Unión Democrática, prisionera de su propio discurso acerca de la urgencia del combate por las libertades públicas, también se pronunció contra aquellas decisiones oficiales. Las dimensiones sociales del en-

frentamiento terminaron de teñir, definitivamente y con tonos todavía más agudos, la elección.

La candidatura de Perón fue sostenida, a su vez, por el reciente Partido Laborista, constituido a pocos días del 17 de Octubre sobre la base sindical, por un desprendimiento del radicalismo que se denominó UCR-Junta Renovadora, varios de cuyos dirigentes ya ocupaban altos cargos en el gobierno militar, y por agrupamientos que se pretendían independientes, como los Centros Cívicos Coronel Perón. Algunos grupos conservadores provinciales también apoyaron la candidatura peronista, luego de los contactos fallidos con la Unión Democrática, así como la Alianza Libertadora Nacionalista, una agrupación del nacionalismo radicalizado, en ciertos distritos. El candidato a vicepresidente, Hortensio Quijano, provino del radicalismo que apoyaba a Perón. Quijano había logrado desplazar a otro dirigente radical que exhibía una larga trayectoria partidaria, Armando Antille, uno de los defensores de Hipólito Yrigoyen luego del golpe de 1930. La iglesia católica manifestó su opinión nuevamente y, como había hecho con la de Justo, indicó que su candidatura predilecta era la peronista.

Las elecciones tuvieron lugar el 24 de febrero, luego de una campaña donde no faltaron los incidentes. Los partidos de la Unión Democrática, desde el fin de los comicios, asumieron que se había tratado de elecciones limpias y anunciaron su victoria. Sin embargo, a medida que avanzaba el recuento de votos –que solía durar varios días en razón de las dificultades técnicas–, la *performance* del peronismo mejoraba. Finalmente, en los últimos días de marzo se supo que su candidato había conquistado aproximadamente 1 488 000 votos, frente a 1 207 000 de sus adversarios. En cuanto a los gobiernos provinciales, sólo el de Corrientes quedó fuera del control peronista; en el Congreso, la nueva formación contaba con mayoría en ambas cámaras, que en el Senado pronto se tornó unanimidad.

1945-1946: disputas políticas, dimensiones sociales, conflictos imaginarios

La situación política quedó así planteada de un modo curioso. Un candidato absolutamente desconocido poco tiempo atrás, apoyado por partidos organizados recientemente, lograba derrotar en casi todo el país a gran parte de las estructuras oficiales de los partidos tradiciona

les y a conocidos dirigentes políticos. La disputa electoral había adquirido un marcado anclaje social; el apoyo empresarial a la Unión Democrática y la fuerte presencia sindical en el peronismo contribuían a subrayar esta característica. En ciertas provincias, los episodios de violencia social se hicieron presentes a lo largo de todo el proceso que va de 1943 a 1946.

Por otro lado, a escala nacional la propia campaña fue planteada como un enfrentamiento entre grandes principios absolutos, que cruzaban toda la escena política: la libertad frente al autoritarismo militar, cuando no frente al fascismo; la justicia social frente al privilegio; la soberanía nacional frente a la intervención de las potencias extranjeras, que a ojos del peronismo encarnaba el ex embajador Braden, quien impulsó desde el Departamento de Estado la publicación del *Libro azul*, a pocos días de las elecciones, donde acusaba al gobierno militar de colaboración con los nazis. El peronismo respondió con el *Libro azul y blanco,* donde se denunciaba la intromisión norteamericana en la política local. Así, la campaña de 1946 tuvo uno de sus centros en los esfuerzos de ambos bloques por imponer su propia interpretación de lo que estaba en juego y por desactivar la del adversario.

Tal como fue concebido el enfrentamiento, la victoria peronista fue presentada como la victoria de la justicia social y de las grandes mayorías populares, con eje en los trabajadores, a pesar de que en realidad había sido un triunfo ajustado. Simultáneamente, se la planteaba también como el triunfo de la causa nacional, que ahora pasaba a incluirlos. En una fórmula a la que Perón solía apelar, el triunfo anunciaba además la llegada de la era de las masas. Todos estos argumentos reforzaron los cambios identitarios que había sufrido en los últimos tiempos el radicalismo, que, por primera vez, debió enfrentarse abiertamente con un adversario que se proclamaba, como él, la expresión política de la nación, y que tenía chances de triunfo. Esa circunstancia terminó de instalar en la UCR un modo de concebir la representación política más plural que el predominante entre sus filas durante largo tiempo.

Construcciones sencillas y simplificadoras como éstas fueron no obstante eficaces para librar la batalla electoral de 1946, e incluso perduraron bastante más allá en el imaginario político argentino. Ellas, sin embargo, no resisten el cotejo con las trayectorias de quienes formaban en la dirigencia de uno y otro bando; desde este punto de vista, los contendientes se parecían más a dos conjuntos heterogéneos y de bordes poco definidos, salvo en lo que hace al apoyo a uno y otro candidato en oportunidad de las elecciones de 1946. Así, por un lado,

el personal político sin demasiada experiencia previa parece haber sido relativamente abundante en las filas peronistas. Por otro, prácticamente todos los partidos tradicionales experimentaron fugas de dirigentes y de votantes hacia el peronismo, que incluso continuarían luego de las elecciones. En el caso radical, debe tenerse en cuenta que, contra lo que se ha supuesto muchas veces, no sólo pasaron al peronismo grupos de los llamados yrigoyenistas. Eso ocurrió con la mayoría de quienes formaron en FORJA, pero la UCR-Junta Renovadora convocó a dirigentes del partido oficial, de larga trayectoria en los organismos del radicalismo fiel a Alvear.

En un nivel más restringido, como el de los dirigentes, el propio Perón consideró que Amadeo Sabattini, importante radical intransigente de Córdoba, integrara la fórmula como vicepresidente, en un intento que fracasó. Entre 1943 y 1946 también fallaron otros sistemas de contactos; de acuerdo con las declaraciones de uno de los militantes socialistas de segunda línea que adhirió al peronismo, eso fue lo que ocurrió con una negociación discreta con Alfredo Palacios, aunque no parece haber habido candidaturas en danza. Entre los tanteos infructuosos deben contarse, asimismo, algunas reuniones con altos cuadros comunistas.

A su vez, el socialismo sufrió la pérdida de varios dirigentes y activistas. De las zonas partidarias entramadas con la militancia sindical provino Ángel Borlenghi, una figura central para el peronismo, notable dirigente de los empleados de comercio en los años treinta y futuro ministro del Interior. También se aproximarían al peronismo dirigentes como Joaquín Coca, que había formado parte del Partido Socialista Obrero a fines de la década anterior y había sido legislador por el PS. La disidencia comunista, al menos la de los dirigentes de mayor nota, fue más acotada, pero incluyó a intelectuales que habían conquistado prestigio en los años anteriores, como Rodolfo Puiggrós y Eduardo Astesano, así como a dirigentes sindicales poco encumbrados y activistas de base. Algunos grupos del incipiente trotskismo argentino apoyaron críticamente al nuevo agrupamiento; entre ellos sobresalió el nombre de Jorge Abelardo Ramos. En la segunda línea del movimiento obrero se produjo un importante desplazamiento de cuadros de vieja militancia sindical hacia el laborismo; entre otras cosas, con ellos venían las huellas de antiguas diferencias entre los distintos sectores del activismo obrero: con clara exageración, que puede hallar sus causas en aquellas disputas añejas, luego de las elecciones el laborismo acusó al PC de salvar a la burguesía argentina de una derrota electoral catastrófica.

El peronismo también conquistó apoyos en otras zonas, muy diferentes, del mapa ideológico argentino. En principio, debe recordarse que muchos de los cuadros e intelectuales del nacionalismo católico fueron funcionarios de variado rango de los gobiernos surgidos del golpe de 1943, que pocos días después de producido fue saludado con fervor por las más importantes publicaciones nacionalistas. Los vaivenes de la interna militar decidían la llegada o el alejamiento de estas figuras, pero su presencia fue más clara a partir de octubre de 1943 y hasta mediados de 1944. Alberto Baldrich, un joven Mario Amadeo, Jordán Bruno Genta, Bonifacio del Carril, Tomás Casares, Ramón Doll, Héctor Llambías fueron algunas de esas figuras. A lo largo de los primeros meses de 1944, parecen haberse nucleado alrededor del general Perlinger, por entonces ministro del Interior, en lucha con el sector de Perón. Gustavo Martínez Zuviría, alto funcionario desde los tiempos de Justo, lo fue también de Castillo y, finalmente, actuó como ministro de Justicia de Ramírez; luego de apoyar durante los primeros años al peronismo, terminaría alejado de él. En muchos otros casos, ni la política social que impulsó Perón desde la Secretaría de Trabajo, ni luego la declaración de guerra al Eje favorecieron la simpatía del nacionalismo. De los que permanecieron apoyándolo, amplias franjas terminaron alejándose en ocasión de los conflictos con la iglesia. En cambio, otra de las formaciones del nacionalismo, la Alianza Libertadora Nacionalista, mantuvo su apoyo hasta el final.

A estas circunstancias debe sumarse el hecho de que tanto la Unión Democrática como el peronismo sufrieron tensiones internas en el camino hacia las elecciones de 1946. En el primer caso, ello se evidenció en la presentación de candidatos diferenciados en los niveles legislativos y provinciales. A su vez, en el peronismo las listas laboristas, radicales y aliancistas compitieron entre sí en numerosos distritos. Iniciada ya la presidencia de Perón, se vería que esas disidencias no se aplacaban fácilmente, y que en varias provincias las representaciones parlamentarias oficialistas se dividían en varios bloques. Este fenómeno, en el que estructuras políticas que se presumían nacionales se diferenciaban, a veces con escándalo, en los escenarios provinciales, no era nuevo en la política argentina; por el contrario, había afectado al radicalismo desde sus primeros tiempos.

La multiplicidad de los apoyos era paralela a lo impreciso de los perfiles de ambos bandos. Estas circunstancias devenían, en parte, del hecho de que también las disputas político-culturales y los actores colectivos que las sostenían habían tenido un carácter semejante a lo largo de buena parte de los años treinta. Quizás a comienzos de los años cua-

renta, al calor de la guerra mundial, esos bloques se hayan estabilizado, pero los puntos de fuga seguían siendo demasiados entre 1945 y 1946, en lo que respecta a los grupos políticos y dirigentes actuantes: en ambos bandos había conservadores, socialistas, nacionalistas, comunistas, radicales...

En lo referido a las relaciones que Perón, en principio desde la Secretaría de Trabajo, trazó con la dirigencia sindical, también se dibuja un escenario nuevo que, sin embargo, contiene algunos datos conocidos. La búsqueda de relaciones estables con el estado y la presión para que interviniera en conflictos puntuales del lado de los trabajadores era una práctica que sectores de aquella dirigencia venían realizando desde hacía algo más de veinte años. En ocasiones, durante los años treinta se combinó con la utilización de estrategias que buscaban en el Parlamento la sanción de leyes favorables a los trabajadores. Las distintas dimensiones de la relación con la política habían sido ensayadas por los sindicalistas desde los tiempos de Yrigoyen, y en los años treinta, por socialistas y comunistas, a veces con éxito.

Luego del golpe de 1943, la dirigencia obrera avanzó con suma cautela en las tratativas con Perón y mantuvo sus propios objetivos, que no resignaba. El establecimiento de nuevas y más estrechas relaciones con el estado, y con Perón en particular, no adoptó la forma de una rendición incondicional de aquellos dirigentes; en los momentos iniciales predominaba la tensión y el recelo entre dos aliados que no terminaban de considerarse mutuamente confiables, aunque ambos sabían que tenían algo que ganar con la alianza. Las discusiones previas, los votos en disidencia y las consignas de la huelga general lanzada para el 18 de octubre pueden ser vistos como indicios de esa situación.

Sin embargo, en aquellos años se sumó un dato novedoso al cuadro: amplios sectores trabajadores y populares reconocieron a Perón un liderazgo que no dependía, al menos no totalmente, del aparato sindical. Ese liderazgo alcanzaba también a grupos que estaban más allá de los trabajadores encuadrados sindicalmente. A medida que avanzaba la primera presidencia de Perón, la figura de Evita adquirió importancia tanto en las relaciones más institucionales con la dirigencia obrera como en aquellas más informales, con lo que ambos líderes solían llamar “el pueblo peronista”.

Luego de la victoria electoral del peronismo se produjeron algunos cambios en el plano político y se hicieron manifiestos otros. El primero de ellos fue la desaparición de la Unión Democrática: la alianza no se recuperó de la derrota, en parte porque el único de sus partidos que había

alcanzado a ubicar un número respetable de candidatos en el Congreso era el radicalismo. En el seno de la UCR arreciaron las críticas al llamado "unionismo", que se suponía heredero de la conducción oficial de Alvear durante los años treinta, al tiempo que se afirmaban las posiciones de quienes habían sido miembros de los grupos internos opositores, que proclamaban su estirpe yrigoyenista. Por su parte, los socialistas habían sufrido una conmoción electoral importante, porque el partido había tenido representación parlamentaria durante muchos años; en 1946, el objetivo no se logró. También en el PS la aparición del peronismo y su victoria desatarían a futuro debates internos: si bien el partido se mantuvo como uno de los núcleos antiperonistas más duros y consecuentes, hubo voces que advirtieron acerca de la pérdida del carácter obrero en el PS y de su transformación en un mero partido liberal.

El PC pasó por etapas de apoyo crítico a los programas proclamados por el peronismo, aunque no dejaba de exigir, precisamente, su cumplimiento. Las relaciones del PC y el gobierno también se modularon en función de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. De todos modos, los desplazamientos parciales en la interpretación comunista del peronismo se ciñeron a las declaraciones oficiales de los dirigentes y a la línea política decidida; la cultura política comunista era proclive a una oposición más enérgica.

Por otra parte, cabe notar que las elecciones de 1946 pusieron de manifiesto la extinción de varias de las fuerzas que habían controlado el aparato estatal desde el golpe de 1930. Ni la UCR Antipersonalista, que había logrado imponer ministros, gobernadores, diputados y hasta un presidente, Ortiz, en 1938; ni el Partido Socialista Independiente, de donde provenían varios de los ministros de Justo, tuvieron esta vez un lugar destacado en la partida, salvo en lo que podían aportar a los grandes agrupamientos que se enfrentaban. Los grupos conservadores se dispersaron en ocasión de las elecciones de 1946; con el tiempo, dejaron de constituir alternativas con posibilidades electorales a escala nacional, e incluso se debilitaron marcadamente en provincias donde habían tenido gran potencia.

Cambios perdurables

En términos más amplios, a partir de 1945-1946 el conflicto político más importante en la Argentina pasó a ser librado por grupos diferentes de los que habían intervenido en las etapas anteriores. Al enfrenta-

miento radicales-conservadores, que había sido central durante mucho tiempo, le sucedía una lucha nueva, que sin embargo recogía fragmentos –de organizaciones, de comportamientos, de visiones– del mundo político previo. Sin que fueran del todo claras ni estables las caracterizaciones de los contendientes, el conflicto entre el peronismo y el antiperonismo pasó a organizar la disputa política argentina.

Entre las fuerzas antiperonistas, el radicalismo era la de mayor implante electoral. En cuanto al peronismo, desde octubre de 1945 había quedado claro que la magnitud de la presencia de los trabajadores entre sus apoyos era su rasgo más singular. Los trabajadores, aun en compañía de otros sectores sociales que sin duda formaban también en el peronismo, pasaron a disponer de una nueva herramienta de intervención en los asuntos públicos. En el mismo movimiento, se hizo evidente una fuerte tendencia a su integración en la comunidad política nacional.

En la escena pública participaban otros actores, presentes y activos en la etapa anterior. El caso más visible es el de las fuerzas armadas: pese a que la salida de 1946 fue electoral, no perdieron su capacidad de intervención en la política. A lo largo de las primeras presidencias de Perón, continuaron jugando un papel decisivo: conviene recordar que la caída de Perón en 1955 fue, una vez más, fruto de un golpe de estado. Por otro lado, la iglesia católica se había constituido en un factor que debía ser tenido en cuenta. Menos espectacular en sus intervenciones que los militares, a lo largo de los años treinta había afianzado sus redes sociales, ampliado su presencia en varios ámbitos (de los cuales los círculos de oficiales eran importantes, pero no exclusivos), y establecido enlaces con las posiciones nacionalistas. Las relaciones con el gobierno surgido de las elecciones de 1946 fueron al principio fluidas; más adelante, sufrieron un deterioro agudo, cuyos primeros síntomas comenzaron a hacerse visibles hacia 1950. Finalmente, el golpe de 1955 la contó entre los protagonistas decisivos.

9. El peronismo en el gobierno

Durante los primeros gobiernos peronistas, los apoyos electorales del oficialismo continuaron siendo importantes, mientras que un núcleo de oposición nada despreciable siguió expresándose en las urnas. La relación del gobierno con el movimiento obrero fue estrecha, aun cuando se produjeron ciertos cambios en la política económica, cuya primera etapa había estado caracterizada por un fuerte impulso a la redistribución de la riqueza. Luego de la reforma de la Constitución, en 1949, llevada adelante sin la presencia de la oposición, y en particular en los primeros años cincuenta, el peronismo avanzó en sus intentos de control sobre la oposición y sobre las instituciones estatales. Esta política no fue ajena al conflicto con la iglesia, proceso que constituyó el marco del golpe de estado que derrocó al gobierno peronista en 1955.

La primera presidencia de Perón

Juan Perón y Hortensio Quijano, miembros de la fórmula triunfante en las elecciones de febrero de 1946, asumieron sus cargos el 4 de junio de ese año. En tanto, la oposición parlamentaria quedó reducida al bloque radical de "los cuarenta y cuatro", acompañados de otros pocos diputados, entre los cuales se destacaba Reynaldo Pastor, conservador; de los 158 diputados, 109 eran peronistas. En el Senado, merced al rechazo de los diplomas de los senadores por Corrientes, en poco tiempo hubo unanimidad de voces oficialistas.

Entre 1946 y 1955, los desempeños electorales del peronismo, en elecciones parlamentarias o presidenciales, se estabilizaron alrededor del 60 por ciento a escala nacional; el radicalismo, que era el núcleo más fuerte de la oposición, solía obtener algo más del 30 por ciento de los votos. Las disposiciones legales que regían las elecciones, por detrás

de estas tendencias, cambiaron: en 1949 tuvo lugar una reforma constitucional que estableció el voto directo para presidente, vicepresidente y senadores nacionales, y la posibilidad de reelección. A su vez, el derecho al voto de las mujeres se fijó por ley y una reforma restableció el sistema de circunscripción uninominal.

En aquellas cifras pueden leerse tres de los rasgos que caracterizaron la situación política en tiempos del primer peronismo: los sólidos apoyos electorales del oficialismo; la existencia de un importante sector de la sociedad que se manifestaba opositor y que lograba sostenerse; las dificultades de los dirigentes de los partidos opositores para construir una alternativa de reemplazo dentro del propio espacio de la política, que el peronismo se encargaba de alimentar. Alberto Ciria ha calculado que los diputados radicales se redujeron de los iniciales 44 a 30 en 1950, a 14 en 1952 y a 12 en 1955, en un proceso sobre el cual el gobierno intervenía a través de las reformas en la legislación electoral. Así, el sistema de circunscripción uninominal transformaba en magras cosechas de bancas los resultados porcentuales obtenidos. En ese cuadro, algunos sectores opositores sucumbieron pronto a la tentación de apelar a grupos de las fuerzas armadas en busca de un golpe que cambiara las condiciones.

Estas características vinieron a sumarse a las propias de los años 1945 y 1946, y empalmaron con ellas sin mayores dificultades, ratificando las imágenes que peronismo y antiperonismo habían construido de sí mismos y de sus adversarios. Una lucha esencial, definitiva, de dos conjuntos entre los cuales no cabía más relación que el combate. El peronismo se concebía como la mayoría popular que, legítimamente, tenía el derecho de gobernar, y veía a sus opositores como minorías que, en la versión más benévola, eran "contreras" incapaces de reconocer cuánto habían mejorado las cosas. En la versión marcial y de combate, se tildaba a los opositores de enemigos de la nación y del pueblo, de aliados de la oligarquía, el imperialismo y, en una retórica que reaparecería de manera intermitente, incluso el comunismo. Según la mirada peronista, obstaculizaban el proceso de transformación encarado por el gobierno y alteraban la vida tranquila y justa de la que gozaban los trabajadores y el pueblo.

Para la oposición, a su vez, el peronismo violaba las normas del juego político leal, desconocía los comportamientos parlamentarios más elementales y apenas cumplía por compromiso las reglas institucionales, en las que no creía realmente. El juicio político a la Corte Suprema, encarado por el peronismo cuando llegó al poder, era uno de los ejem-

plos que se exhibían, como lo fue luego la prohibición que sufrió la oposición de utilizar la radio en las campañas electorales. El control general de la prensa se sumaba a las pruebas ofrecidas. El diagnóstico que hacía del peronismo una forma criolla del fascismo continuaba circulando en ciertos ámbitos, y también aquel otro más preocupado por el quiebre de las jerarquías tradicionales, que lo transformaba en expresión de la indisciplina social, de la rebelión insolente de los "cabecitas negras" –como ciertos sectores acomodados y medios porteños caracterizaron, con desprecio, a quienes provenían del interior de país–, y en antesala de un comunismo ciertamente improbable.

Algunos otros sectores de la oposición política, en cambio, observaban que la legislación social impulsada por el peronismo contenía elementos valiosos y que debía ser profundizada. Entre los opositores, durante todo este tiempo el partido más estable y con mayores apoyos continuó siendo el radical; de cualquier modo, la UCR se vio atravesada por pujas internas entre unionistas e intransigentes y, lo que era un dato importante, no podía tener expectativas sensatas de derrotar electoralmente al peronismo en soledad.

El conflicto político continuaba exhibiendo enlaces sociales construidos años antes. A pesar de que ahora lo habitaban otros grupos, el peronismo en el poder no perdió el apoyo de los sectores populares y los trabajadores del momento inicial, aun cuando se produjeron conflictos laborales y huelgas. El primero de estos hechos condicionaba fuertemente la contienda política, ya que no era sencillo construir una alternativa antiperonista popular de fuerte implante electoral.

Pero otras cosas habían cambiado, entre ellas, la estructura política oficialista. Los desencuentros entre laboristas y miembros de la UCR-Junta Renovadora habían sido frecuentes antes de la elección de febrero de 1946 y prosiguieron luego; naturalmente, el motivo más evidente de tensión era definir quiénes habrían de ocupar los cargos ejecutivos y algunos cargos electivos pendientes. Antes de asumir, Perón decidió la unificación de las organizaciones que lo habían apoyado en el llamado Partido Único de la Revolución Nacional, transformado en Partido Peronista a comienzos de 1947. En el laborismo, de fuerte raigambre sindical, pocos recibieron la medida con fervor, ya que el Partido Laborista era una herramienta que los viejos dirigentes sindicales intentaban utilizar para mantener cierto margen de acción autónoma ante el estado y ante el propio Perón.

A pesar de las resistencias parciales, el Partido Laborista se integró finalmente en el Partido Único de la Revolución Nacional, y a fines de

1946 el triunfo de Luis Gay en las elecciones para definir la conducción de la CGT pareció dar algo de aire a las posiciones de los dirigentes menos favorables al alineamiento automático con el gobierno. La situación duró poco, ya que Gay renunció a su cargo a comienzos de 1947, presionado por el gobierno. Otro dirigente laborista connotado, Cipriano Reyes, diputado electo que había tenido una actuación destacada el 17 de Octubre, terminó preso en 1948, acusado de participar en un complot, de dudosa existencia, para asesinar a Perón y a Evita. En 1949, el Partido Peronista se dividió en ramas –sindical, masculina y femenina, presentada luego como Partido Peronista Femenino– y el liderazgo que Perón ejercía en los hechos se vio ratificado formalmente por su carácter de jefe del partido.

Simultáneamente, Evita –cuya presencia cobró importancia a partir de la llegada al gobierno– encarnaba una versión del liderazgo peronista más jacobina, menos sometida al protocolo, de relación más directa con sus partidarios y, en particular, con los sectores más desprotegidos, y más hostil a lo que denunciaba como la oligarquía. También sostenía una relación privilegiada, aunque no siempre apacible, con el aparato sindical, que a escala confederal había pasado a ser conducido por dirigentes sin mayor trayectoria previa a la aparición del peronismo.

Entre los apoyos iniciales al gobierno deben contarse asimismo el de la mayoría de las fuerzas armadas y la iglesia. Sin embargo, en algunos sectores militares, por un largo tiempo minoritarios, el recelo frente al peronismo apenas se había aplacado desde los años agitados que rodearon a 1945. Hacia 1950, comenzaron a producirse algunos desencuentros entre ambas instituciones y el peronismo.

Discurso de Ricardo Balbín, radical, en la Cámara de Diputados, en ocasión de discutirse su suspensión, el 29 de septiembre de 1949

Demasiadas ventajas tiene el peronismo. Son excesivas las ventajas. El presidente o el jefe del partido –no sé cuándo habla de una o de otra manera, porque se confunde en los discursos–, ¿cómo quiere que respondamos nosotros cuando dice que somos antipatria? No sé cómo tenemos que utilizar nuestro lenguaje para contestarle cuando dice que somos traidores al país. ¿Qué lenguaje hemos de usar para decirle al pueblo que no somos antiargentinos dentro de la República? ¿Cómo tengo que conducirme en mi oposición frente a un Presidente que

confunde bandera y divisas, se comporta como él quiere y agravia en las condiciones que se le antojan. [...]

¡El radicalismo debe al país una revolución social, la realización total de su programa, que lo realizará pese a los procesos por desacato! ¡Él deberá ser cumplido, porque es un designio argentino! Yo comprendo que muchos de ustedes tuvieron nuestras mismas inquietudes y afanes, y que en un determinado momento creyeron que ése [el de la incorporación al peronismo] era el camino para realizar la revolución demorada del radicalismo. Nosotros sabíamos que no, y nos quedamos. Muchos de ustedes se fueron creyendo que allí estaba la gran posibilidad. Y a tres años de realización revolucionaria yo pregunto si la legislación actual que dicta este Parlamento, si el régimen de prohibición que existe en el país, y la traba a la difusión de ideas, si el control de la radio, si el monopolio de producción, si el régimen legal y económico del país puede ser la revolución del radicalismo. Sin embargo, siguen caminando por la senda del error, perdiendo esfuerzos y gastando tiempo.

La economía: nuevas condiciones

El fin de la Segunda Guerra Mundial inauguró una etapa en la que criterios y políticas distintos de los que predominaron en períodos anteriores se extendieron y afirmaron entre los dirigentes de gran parte del mundo. Ellos tenían en su centro la noción de que el estado debía jugar un papel más activo que el que le atribuía el liberalismo clásico en la vida económica; algunas políticas de ese tipo habían sido puestas en práctica ya en los años treinta, como respuestas –en muchos casos, ensayadas a tientas– a la crisis de 1929.

A menudo se ha recurrido al *New Deal* del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, impulsado desde 1933, como un ejemplo de esas posiciones; lo cierto es que la planificación de la producción creció, como era previsible, en un contexto en el que la guerra se aproximaba. También fascistas y nazis habían desarrollado políticas de este tipo, al igual que la dirigencia de la Unión Soviética. En la Europa que salía de la guerra hacia 1945-1946, las nacionalizaciones y estatizaciones de empresas fueron corrientes. Bancos, compañías de seguros, empresas de gas y energía eléctrica, carbón, ferrocarriles, fueron nacionalizados en Francia e Inglaterra, ahora bajo gobierno laborista. Por otra parte, políticas sociales más activas eran encaradas por el estado en numerosos países, por ejemplo a través de planes de salud pública.

Las intervenciones en la economía estaban fundadas en un punto de vista que se había difundido en aquellos años, pero que hundía sus raíces en períodos previos: las poblaciones no podían estar condenadas a sufrir la desocupación o la miseria, sino que la acción estatal debía evitarlas. Poco más tarde, en el contexto de la Guerra Fría, se sumaría a esta tendencia la voluntad de las dirigencias occidentales de evitar lo que se les aparecía como una posible inclinación de las clases populares al comunismo. Las políticas de intervención activa del estado en la economía y las políticas sociales tuvieron entonces un impulso nuevo, dado que eran presentadas como una posibilidad para evitar el temido desplazamiento a la izquierda.

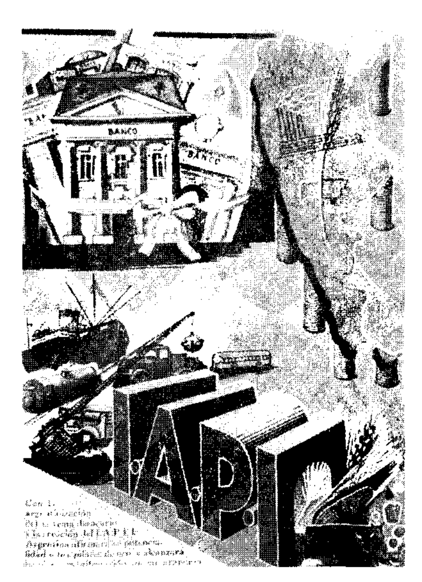
Mientras tanto, en la Argentina, la situación económica a la salida de la guerra exhibía dos características principales. Por un lado, se disponía de divisas acumuladas en virtud de varios años de balanza comercial favorable, resultado en parte de la restricción de las importaciones a causa de la guerra; luego del conflicto, los precios de los productos agropecuarios, en alza, fortalecieron este saldo favorable. Por otro lado, se había ampliado y consolidado el sector industrial asociado a la sustitución de importaciones, en alza notoria desde mediados de los años treinta. La tendencia a la industrialización se había visto favorecida por la guerra, cuando la producción industrial de los países en conflicto estaba en gran parte destinada al esfuerzo bélico, así como a los sistemas de transportes marítimos. De todas maneras, en los primeros tiempos era una incógnita qué ocurriría con la economía internacional luego de la guerra, y en consecuencia tampoco quedaba claro qué habría de ocurrir con la industria argentina.

La política económica de los primeros tiempos de la presidencia de Perón estuvo parcialmente relacionada con todas las circunstancias mencionadas, y el Primer Plan Quinquenal de 1947 reunió una parte importante de los instrumentos legales para llevarla adelante. Antes de su llegada a la presidencia, Perón había conseguido que el gobierno militar nacionalizara el sistema financiero, incluido el Banco Central, y creara el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). El IAPI podía intervenir firmemente en el comercio exterior, comprando a los productores y vendiendo en el mercado externo; también subsidiaba la producción de algunos bienes y reasignaba recursos entre los diversos sectores económicos. Fue una de las herramientas utilizadas por el peronismo al momento de defender la industria local en aquellos primeros años de la posguerra, apuntando en particular a sostener la industria liviana, relacionada más estrechamente con la ampliación

del consumo popular. Simultáneamente, se retomaba y alentaba una política general de nacionalizaciones que incluía el gas, los teléfonos, los puertos, la energía y, en 1948, los ferrocarriles, en el episodio de mayor impacto simbólico, ya que desde los años treinta habían sido convertidos por varios grupos políticos e intelectuales en la expresión más clara de la dependencia económica de Inglaterra.

La política económica peronista

El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) fue una de las herramientas de intervención del estado peronista en la economía. En los primeros años tuvo, entre otras funciones, una importante: compraba a los productores locales y vendía en el mercado externo, manejando así el comercio exterior. El mecanismo contribuyó a quebrar la relación entre el precio internacional y el local de los bienes que se exportaban, principalmente productos alimenticios; esa circunstancia consolidó el crecimiento del salario real en la Argentina.



Propaganda oficial acerca de las actividades del IAPI.

En el centro de esta política estaba la decisión del gobierno de lograr una mejora sustantiva en los salarios reales, lo que entrañaría un fuerte impulso hacia la redistribución de la riqueza, y de alcanzar una situa-

ción de pleno empleo. Esa decisión se asentaba tanto en convicciones económicas como en cálculos políticos, ya que beneficiaba a los sectores que habían sido la base social del peronismo. La mejora en los salarios, entendía el gobierno, actuaría como motor de la demanda interna, que a su vez sostendría las posibilidades de expansión de la economía del país y el desarrollo social. Así, desde 1946 hasta el fin de la década, se produjo un fuerte crecimiento de la participación de los trabajadores en el ingreso y de las capacidades de consumo y ahorro de los sectores populares a raíz de los aumentos de salarios. Pablo Gerchunoff y Damián Antúnez han destacado que "muchos otros países con los que Argentina era por una u otra razón comparable –Chile, Brasil, México, Colombia, Australia, Nueva Zelanda– se embarcaron por entonces en políticas de industrialización acelerada, de nacionalización de servicios públicos y de algunas manufacturas, de consolidación de políticas sociales. La Argentina tuvo todo eso pero tuvo también el agregado de una impresionante política de reparto".



Argumentos peronistas en torno a la política económica y social

La Dirección de la revista *Hechos e Ideas,* que en la segunda mitad de los años treinta había formado parte del radicalismo oficial y se había incorporado al peronismo hacia 1947, planteaba en estos términos la política económico-social del gobierno peronista: "El gobierno se ha impuesto como programa abolir la miseria. Esta concepción, aparentemente simplista, constituye sin embargo la suma de esfuerzos e iniciativas que el gobierno ha cristalizado en un plan integral de reconstrucción económico y social de la nación, que cumplirá en un período de cinco años. Para conseguir establecer un régimen de seguridad social que aleje la miseria, dispone de dos instrumentos considerados decisivos: intensificar la explotación de las fuentes de producción existentes e incorporar las que se mantienen inexploradas; y, por otra parte, la política social que representa el instrumento más apto para operar una redistribución más equitativa en la riqueza y elevar al máximo el nivel de vida de la población. No existe ningún otro camino más adecuado para abolir la miseria que crear un régimen de abundancia, ya que no es concebible la justicia social en medio de la escasez. Para alcanzar estos objetivos el gobierno no se propone destruir las clases o categorías sociales en que se divide la comunidad nacional, sino anular la

influencia de aquellas que no están capacitadas para comprender la realidad histórica". Continúa afirmando que "la revolución y la política social que de ella dimana han logrado establecer un nuevo equilibrio de fuerzas, concediendo a las que representan al trabajo la legítima gravitación en la dirección y administración de los negocios del estado".

Hechos e Ideas, número 43, septiembre de 1947.

En un momento en que el comienzo de la reconstrucción alentaba la demanda europea de alimentos, el quiebre local del vínculo entre los precios nacionales de la carne y los cereales y su cotización internacional, por efecto de la centralización del comercio exterior, hizo que los aumentos nominales de salarios devinieran en aumentos reales, que a su vez generaban mayor demanda. Los controles de precios, entre ellos el de los alquileres, contribuyeron a reforzar el fenómeno. Así, entre 1945 y 1948, el incremento en los salarios reales fue de un 50 por ciento, mientras que la presencia de los trabajadores en la distribución del ingreso subía del 44,4 por ciento en 1943 al 53 por ciento en 1948; en 1955, se hallaba aproximadamente en el 50 por ciento. Tanto los grupos populares como los grupos medios se vieron beneficiados. Tales políticas se combinaron con la acción de la Fundación Eva Perón, dedicada al auxilio de los sectores populares menos integrados. El peronismo también impulsó los créditos baratos para la vivienda, a través del Banco Hipotecario Nacional, así como la construcción de barrios para aquellos grupos. De este modo, más allá de los vaivenes económicos, en el período que va de 1946 a 1955 se recuperaron en la Argentina posibilidades de movilidad social ascendente para amplios sectores de la población, que lograba así alcanzar bienes y servicios que habían estado restringidos en etapas previas, como se verá en el capítulo siguiente.

Hacia la reforma constitucional

En el período caracterizado por esas condiciones económicas y sociales iniciales, el oficialismo impulsó varias transformaciones de impacto electoral. Por una parte, en 1947 el Congreso sancionó la ley que consagraba el voto femenino, a iniciativa formal del Poder Ejecutivo, en una acción política que tuvo como protagonista destacada a Eva Perón; el voto femenino se concretó en 1951. También obtuvieron el derecho a voto los habitantes de varios territorios nacionales transformados en

provincias. Ambas medidas se tradujeron en un notorio aumento del número de personas habilitadas para votar y los inscriptos en el padrón pasaron de 3 800 000 en 1948 a 8 630 000 en 1951. Desde ya, el efecto de integración y de ampliación –aun parcial– de la ciudadanía política fue importante.

Otros cambios significativos tuvieron lugar por efecto de una reforma constitucional. Lanzado el proceso en 1948, las elecciones de constituyentes dieron un amplio triunfo al peronismo, cuyos votos alcanzaban el 61 por ciento aproximadamente. En 1949, tras un trámite accidentado que incluyó el retiro de los opositores de las sesiones, con lo que la reforma perdió todo viso de haber sido fruto de debates y consensos, se sancionó la nueva Constitución. En el preámbulo figuraba la fórmula peronista que se haría clásica, cuando se señalaba que el objetivo era "constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana". La nueva Constitución reconocía además derechos especiales a la ancianidad y fijaba los "derechos del trabajador", como el derecho a una retribución justa, a condiciones de trabajo y vivienda dignas, al esparcimiento, la seguridad social y la salud; esa inclusión había sido uno de los ejes de la propaganda de la CGT a favor de la reforma. El derecho a huelga, sin embargo, no fue sancionado.

La inclusión de tales derechos sociales significaba una novedad en la tradición constitucional argentina, hasta entonces inspirada en el liberalismo de mediados del siglo XIX, y aproximaba la Constitución de 1949 a otras que se inscribían en el constitucionalismo social, entre las que suele ubicarse a la Constitución mexicana de 1917, la de la República de Weimar, en la Alemania de entreguerras, y la de la República Española. Se establecía además la propiedad nacional del subsuelo y la elección directa de senadores, del vicepresidente y el presidente. Las posibilidades de reelección, también establecida en el nuevo texto constitucional, eran indefinidas.

La continuidad inicial del activismo obrero

Luego del proceso electoral de 1946 e incluso luego de la liquidación del proyecto laborista, la gran afiliación de trabajadores a los sindicatos continuó. Entre 1946 y 1948, en el contexto de un fuerte aumento del salario real, el crecimiento del número de afiliados se incrementó y algunos cálculos indican que se pasó de unos 880 000 trabajadores sindicalizados a 1 550 000, un crecimiento de más del 75 por ciento. La ten-

dencia continuó, aunque desacelerada, y un año antes de la caída de Perón los afiliados eran 2 257 000 aproximadamente. A fines de la década de 1930, los trabajadores urbanos sindicalizados representaban el 12 por ciento del total, mientras que, una década más tarde, la tasa trepaba a más del 50 por ciento. Hacia 1954, se ha calculado la tasa general de sindicalización –siempre más baja que la urbana– en un 43 por ciento.

El 1° de Mayo de 1950

Las movilizaciones eran piezas centrales para el peronismo, que a través de ellas ratificaba su identidad y exhibía sus apoyos populares en las ciudades más grandes. Las convocadas en ocasión del 1° de Mayo y del 17 de Octubre eran las más importantes entre las que se celebraban regularmente. La presencia de vastos grupos de trabajadores y de la CGT solían ser, a su vez, notorias.



Archivo General de la Nación.

Esta capacidad de convocatoria se fundó en varias razones. Una de ellas era que la nueva legislación establecía que el estado reconocería la personería gremial a la organización con mayor número de afiliados en el sector. Esa personería era la que habilitaba a participar en las negociaciones de los convenios; otros sindicatos podían existir, pero sin la personería. Al mismo tiempo, si bien la CGT había visto acotada su autonomía como actor político cuando la derrota laborista, y aún más al pasar a formar parte del propio movimiento en el gobierno, los sindicatos continuaron siendo instituciones eficaces para llevar adelante disputas en el ámbito laboral, fuera por reivindicaciones estrictamente económicas o por condiciones de trabajo y garantías de estabilidad. Mientras los sindicatos se afirmaban, la nueva legislación recogía transformaciones producidas en los años inmediatamente anteriores al comienzo de la presidencia de Perón. En este contexto, los trabajadores no dudaron en apelar con frecuencia a las huelgas entre 1946 y 1949: muchas de ellas fueron declaradas durante las negociaciones colectivas, con el objetivo de que el gobierno interviniera en apoyo de las posiciones sindicales.

Otras movilizaciones

Durante estos diez años, el peronismo no dejó de apelar a las movilizaciones de masas. La mayor parte de las veces se trató de grandes concentraciones convocadas y amparadas por el propio estado, o por la CGT en tanto parte del movimiento. Los sucesivos 17 de octubre se conmemoraban como Día de la Lealtad y celebraban lo que se suponía era la gesta inicial del peronismo, el momento en que los trabajadores rescataban a su líder. El 1° de Mayo, la "fiesta del trabajo", era también una efeméride importante en la liturgia peronista. Pero más allá de estas grandes movilizaciones fijas, hubo otras: el Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951 que la CGT concibió como una herramienta en su disputa interna con otros sectores para imponer la candidatura de Evita a la vicepresidencia; los actos realizados a fines de 1954 mientras se desarrollaba el conflicto con la iglesia, o las concentraciones y marchas a medida que las contiendas políticas se radicalizaban en 1955.

Fragmentos del discurso de Evita en el Cabildo Abierto del Justicialismo, convocado por la CGT el 22 de agosto de 1951

Excelentísimo señor presidente; mis queridos descamisados de la Patria: Es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descamisados, como el 17 de octubre y como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presente. Hoy, mi general, en este Cabildo del Justicialismo, el pueblo, que en 1810 se reunió para preguntar de qué se trataba, se reúne para decir que quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la Patria. Es el pueblo, son las mujeres, los niños, los ancianos, los trabajadores, que están presentes porque han tomado el porvenir en sus manos, y saben que la justicia y la libertad únicamente la encontrarán teniendo al general Perón al frente de la nave de la Nación. Mi general: son vuestras gloriosas vanguardias descamisadas las que están presentes hoy, como lo estuvieron ayer y estarán siempre, dispuestas a dar la vida por Perón. Ellos saben bien que antes de la llegada del general Perón vivían en la esclavitud y, por sobre todas las cosas, habían perdido las esperanzas en un futuro mejor. Saben que fue el general Perón quien los dignificó social, moral y espiritualmente. Saben también que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatria todavía no están derrotados, y que desde sus guaridas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Pero nuestra oligarquía, que siempre se vendió por cuatro monedas, no cuenta en esta época con que el pueblo está de pie, y que el pueblo argentino está formado por hombres y mujeres dignos, capaces de morir y terminar de una vez por todas con los vendepatrias y con los entreguistas. Ellos no perdonarán jamás que el general Perón haya levantado el nivel de los trabajadores, que haya creado el Justicialismo, que haya establecido que en nuestra Patria la única dignidad es la de los que trabajan. Ellos no perdonarán jamás al general Perón por haber levantado todo lo que desprecian: los trabajadores, que ellos olvidaron; los niños y los ancianos y las mujeres, que ellos relegaron a un segundo plano.

En *Habla Eva Perón*, folleto oficial, Buenos Aires, s/e, 1952.

A través de la gran manifestación, cuyo escenario máximo era Buenos Aires, el peronismo lograba varios objetivos. Por un lado, exhibir las huellas del apoyo trabajador y popular más allá de las elecciones; para los trabajadores peronistas en particular, era también la oportunidad de

recordar que ahora eran participantes plenos de la vida colectiva y que podían reiterar, con menos urgencias y dramatismo, con un sentido más ritual, pero también más festivo, las apariciones en el centro de Buenos Aires que habían sorprendido a tantos hacia 1945. Así, el peronismo buscaba mostrar cuánto de masivos, mayoritarios y plebiscitarios eran los apoyos que cosechaba: los trabajadores, el pueblo de la patria, la mayoría popular que ahora, en la Nueva Argentina, podía conmemorar en paz sus propias fechas, eran elementos importantes en el imaginario peronista. Eva Perón, a su vez, ocupó un lugar central en las movilizaciones.

Desde ya, tales prácticas asumían los sentidos mencionados sólo fronteras adentro del propio peronismo. Afuera, en las franjas sociales que seguían en la oposición, circularon tempranamente las imágenes del "arreo" de manifestantes, cuando no de la coerción aplicada para lograr la movilización. Por otra parte, es evidente que dicha actitud plebiscitaria no era fácilmente compatible con el respeto a la representación política plural.

Un cambio de etapa: crisis económica y reelección

Las condiciones económicas comenzaron a variar entre 1949 y 1950. El deterioro de los términos del intercambio, agravado por una serie de malas cosechas a raíz de la sequía, y una inflación que se desbordaba fueron dos de los detonantes del cambio de etapa, que se extendería hasta 1952 aproximadamente, en la que la escasez de divisas fue una cuestión importante. Ese año, 1952, fue el del "pan negro", que quedaría en la memoria de los opositores, y de los cortes recurrentes de la electricidad.

En 1951 se habían producido huelgas en ciertos sectores afectados por la baja en los subsidios estatales, de las cuales la más intensa fue la ferroviaria, reprimida con dureza. La caída de las exportaciones impactó en la capacidad de importación, lo que a su vez complicaba la producción industrial dado que en el sector muchos insumos provenían del exterior. Las autoridades del área económica habían cambiado también, y las que ahora tomaban las decisiones apostaron, al menos por el momento, a fortalecer al sector rural, con la convicción de que era imprescindible aumentar las exportaciones para sostener el crecimiento de la industria, objetivo al que no se renunció. Así, créditos a baja tasa, concentración del IAPI en la comercialización de gra-

nos e impulso a la tecnificación fueron las medidas para el agro, con el propósito último de mantener en pie la posibilidad de la expansión industrial. En relación con la inflación, las medidas tomadas no parecen haber surtido efecto hasta 1952.

Reformada la Constitución en 1949, había quedado abierto el camino para la reelección de Perón. Sin embargo, la cuestión de la vicepresidencia suscitó una disputa dentro del propio esquema de poder del oficialismo. En 1951, la CGT había decidido formalmente su apoyo a la candidatura del presidente, y poco más tarde comenzaba su campaña para hacer de Evita la candidata a la vicepresidencia. La iniciativa de la CGT culminó en el Cabildo Abierto del Justicialismo, que el 22 de agosto de 1951 reunió una multitud imponente en la ciudad de Buenos Aires, bajo los carteles que promovían la fórmula impulsada por la central. Ante Perón y su esposa, la multitud vivó a Evita y reclamó su candidatura; el acto terminó sin una definición sobre ese punto. El plan sindical fue cuestionado con éxito por la alta jerarquía militar y Evita renunció a la posibilidad de ser vicepresidente pocos días más tarde.



Instrucciones impartidas por el movimiento peronista a sus adherentes

"Peronistas: la oposición, oscura y enmarañada confabulación de imperialismo capitalista con la oligarquía, las bandas políticas en decadencia y los comunistas a sueldo, planea sabotajes para crear un clima de desorden y evitar que el pueblo se reúna el 22 de agosto". Esa circunstancia llevaba a que "el movimiento peronista, representado por sus organismos partidarios y sindicales" haya resuelto que se "ha de denunciar de inmediato a la autoridad partidaria o policial más cercana de cualquier intento [...] tendiente a alterar el orden o perturbar la tranquilidad pública". El texto terminaba, en la instrucción número 10, con una advertencia muy dura: "Que cada uno sepa cumplir con su deber de peronista y de argentino. Ha llegado la hora de aplastar a la canalla ensoberbecida por nuestra tolerancia. Ninguna provocación ha de quedar sin contestar, ningún desmán sin reprimir, ningún abuso sin sancionar".

Las citas están tomadas de Félix Luna, *Perón y su tiempo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1984.

A pesar de que, en esa oportunidad, los jefes militares consiguieron su objetivo, pronto se produjo el primer episodio de conflicto abierto con el gobierno: el 28 de septiembre de 1951 el general Benjamín Menéndez intentó un golpe de estado que fue fácilmente reprimido, ya que ninguna guarnición de importancia se sumó. Durante la Segunda Guerra, Menéndez había sido partidario de Alemania; en los años de su intento golpista, ya menos radicalizado, sus contactos civiles eran conservadores. El episodio es significativo porque señala que ciertas figuras de la oposición estaban ya decididas a complicarse abiertamente en acciones por fuera de las estrictamente políticas; en el campo militar, se produjo otra conspiración a fines de ese mismo año, que fue desbaratada antes de comenzar. Con la iglesia, otra de las fuerzas que habían apoyado al peronismo, se había producido un primer roce, cuando el oficialismo tomó distancia de la celebración del Congreso Eucarístico de 1950, mientras Perón y Evita enviaban una carta de adhesión a un acto espiritista organizado en el Luna Park, apenas unos días antes. En ambos casos, el de los militares y el de la iglesia, se trató de episodios todavía acotados.

Las elecciones celebradas en noviembre de 1951 dieron una nueva victoria al peronismo. La fórmula Perón-Quijano obtuvo unos 4 745 000 votos, que representaban alrededor del 62 por ciento. Los candidatos radicales, que en la oportunidad fueron Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, llegaron a conseguir 2 415 000 votos. Dado que el gobierno había impulsado una reforma de la legislación electoral que restauraba el viejo sistema de circunscripciones uninominales para la elección de legisladores, la presencia opositora en la Cámara de Diputados quedó reducida a 14 bancas.

La segunda presidencia

Perón asumió su segundo mandato el 4 de junio de 1952. La situación había cambiado respecto de la que había encontrado seis años atrás: la etapa económica complicada que había comenzado en 1949 se prolongaba todavía, aunque se vislumbraban leves síntomas de mejoría. Además, el año anterior se había producido un primer intento golpista. Evita, figura central en el peronismo, estaba enferma de gravedad y moriría apenas un mes y medio después, el 26 de julio de 1952. Las muestras de pesar popular fueron multitudinarias; también fue frecuente la apelación a una retórica recargada y aparatosa por parte de muchos di-

rigentes peronistas. Con todo, los apoyos electorales eran importantes y exhibían un fuerte perfil trabajador –tanto de obreros industriales como de empleados– en las zonas urbanas de economía capitalista compleja, mientras que en el interior más tradicional la composición del electorado peronista atenuaba sus perfiles de clase, convocando a varios y diferentes sectores sociales.

En lo referido a la política económica, la nueva etapa comenzó en febrero, meses antes de la asunción, cuando el gobierno lanzó un Plan de Estabilización. Se buscaba frenar la inflación, que continuaba siendo alta; el recurso central elegido fue novedoso en el repertorio del gobierno, ya que se congelaron precios, salarios y tarifas por el término de dos años y se estableció que luego de ese plazo, cuando volvieran a tener lugar las discusiones entre empresarios y sindicatos por salarios, éstas quedarían supeditadas a la productividad. En lo inmediato, la nueva política resultó eficaz, puesto que la inflación de 1953 y la de 1954 descendieron. A fines de 1952, Perón presentó al Congreso el Segundo Plan Quinquenal, que se lanzó en 1953 y apuntó –con éxito apenas relativo– a la industrialización pesada y de sectores básicos: siderurgia, maquinaria, petroquímica. Se contemplaba, además, la convocatoria al capital extranjero, una decisión que a la larga sería una de las medidas más criticadas por la oposición y también por algunos dirigentes del propio peronismo, cuando se firmaron acuerdos petroleros con empresas de capitales norteamericanos. El plan ponía el aumento de la productividad en el centro de sus objetivos, difundidos a gran escala por medio de la propaganda oficial.

Simultáneamente, con la segunda presidencia de Perón comenzó un intento más decidido de avance del peronismo sobre instituciones estatales, que tuvo repercusiones tanto sobre los sectores sociales adversos como sobre la oposición política, angostando su terreno de acción. Por una parte, el conjunto de principios doctrinarios del peronismo fue transformado en "doctrina nacional", una decisión tomada por el Congreso. Por otra, se impulsó una política de difusión de los principios peronistas en el ejército. Hasta ese momento, la actitud había sido reconocer en las fuerzas armadas una institución fundamental de la nación, subrayar su unidad con el pueblo y asignarles funciones profesionales destacadas, incluso en el área de la industria, acompañadas de un presupuesto generoso. En la nueva etapa, la doctrina peronista pasó a ser parte de la bibliografía examinada en las escuelas militares, mientras que, en otro plano, el sistema de promociones tendió a beneficiar a los más visibles partidarios del oficialismo. A pesar de

que el intento de golpe de Menéndez llevó a la prisión a los oficiales comprometidos, entre 1952 y 1954 las relaciones entre el gobierno y los militares no sufrieron perturbaciones serias. Es posible, de todas maneras, que el clima político, que se tornaba más tenso, terminara impactando en la institución.

Intentos de "peronización"

A partir de comienzos de los años cincuenta se hicieron más intensos los esfuerzos del oficialismo por controlar las expresiones disidentes y opositoras y avanzar sobre los sectores sociales que no le eran afectos. Los libros de lectura con ejercicios semejantes al que se reproduce aquí, que fueron muchos, quedarían en la memoria del antiperonismo como una prueba de lo faccioso de las iniciativas del gobierno.



Libro de lectura para la escuela primaria.

La razón de mi vida, el libro que con la firma de Evita se había publicado en 1951, fue transformado un año después en texto oficial para las escuelas primarias e incluido en los programas de literatura de las secundarias. En 1953 comenzó a circular un número importante de libros de lectura donde las referencias a Evita y al presidente eran insistentes y abierta-

mente favorables. La creación de la Confederación General Económica (CGE), en 1953, y sus equivalentes en el ámbito profesional y universitario fueron herramientas para una intervención estatal mayor, de aires corporativos y afanes regulatorios, dirigidas a controlar la expresión pública de los intereses sectoriales. Sin embargo, no todos estos organismos tuvieron existencia efectiva o lograron cumplir con sus objetivos. La Unión de Estudiantes Secundarios, que más adelante sería uno de los blancos de la propaganda opositora, se creó también en aquel año; en 1952 se había establecido la obligatoriedad del dictado de cursos de Formación Política en las universidades. Antes incluso del comienzo de la nueva presidencia, en 1951, el peronismo había expropiado el diario porteño *La Prensa*, que quedó en manos de la CGT. Luego se redobló la presión sobre otras expresiones periodísticas opositoras y el gobierno participó por varias vías de la red de radiodifusión, mientras que en 1951 se realizaron las primeras transmisiones de televisión, a cargo del estado. Dos años más tarde, una nueva ley era sancionada con la intención de reglamentar la radiodifusión y la televisión. Así, muy pocos medios recogían las voces de los opositores, mientras que la censura actuaba.

La política oficial de aproximación y confusión entre la estructura del movimiento y la del propio estado se inscribió en este mismo proceso de recorte de las expresiones disidentes y opositoras. El fenómeno de ampliación del aparato estatal, en el mediano plazo, había comenzado varias décadas atrás, se había acelerado en los años treinta y todavía más a partir de los primeros años peronistas. Las políticas sociales en las que el estado, durante las presidencias de Perón, tomaba parte activa –en el área de salud y turismo social, por ejemplo– expandían las reparticiones existentes y contribuían a crear nuevas, y lo mismo ocurría con las oficinas dedicadas a la economía y las empresas nacionalizadas. A partir de los años cercanos al comienzo de la segunda presi
cia de Perón, la idea de que la administración pública deseable de
ser eficaz, técnicamente hábil en los escalafones superiores, y con
mar una burocracia moderna que funcionara en forma adecuada
vio en tensión con el postulado peronista de que existía una func
social que ella debía cumplir. El deslizamiento hacia el reclamo de
compromiso ideológico era previsible y fue el que sostuvo el dict
de cursos de adoctrinamiento entre los empleados públicos; quiene
adherían al justicialismo, puede presumirse, no debieron recibi
buen grado el ensayo. A pesar de que su eficacia fue dudosa, los nu
ministerios de Asuntos Técnicos y de Asuntos Políticos intentaron ll
adelante esta empresa y otras semejantes.

En el movimiento obrero también aparecían novedades en lo referido a la burocracia. Ello obedecía, en principio, a que el estado había reconocido a las organizaciones como interlocutoras legales y en esa zona de encuentro se tejía un tipo de vínculo que reclamaba especialización y manejo de ciertos saberes por parte de los dirigentes. La relación era ahora estable y estrecha: la CGT era parte del movimiento peronista, a cargo del manejo del estado. A su vez, el significativo crecimiento de la afiliación había transformado a los viejos sindicatos de menos de 15 000 miembros, dominantes en 1943, en organizaciones de 50 000 y hasta 85 000 trabajadores. La mayoría de los sindicatos, como había ocurrido anteriormente sólo con algunos de ellos, pasaron a tener sus propias administraciones y sus empleados; la participación obrera cara a cara, directa y sostenida en el tiempo, disminuyó en las organizaciones y quedó confinada al lugar de trabajo y las comisiones internas. Se afirmaron así sindicatos más grandes, con mayor poder, más modernos, burocratizados, y en consecuencia menos permeables a la acción en la base. Sin embargo, ello no devino en quietismo absoluto.

En aquel clima, el conflicto entre peronismo y antiperonismo se tornó cada vez más tenso desde 1950-1951, y en 1953 esa tensión creció marcadamente. A comienzos de ese año, Juan Duarte –secretario del presidente y hermano de Evita– apareció muerto. Duarte estaba sospechado de haber protagonizado un episodio de corrupción, y el propio Perón había dado indicaciones precisas de investigar la cuestión. Días más tarde, se produjo su muerte, y los rumores que la atribuían al gobierno circularon rápidamente, transformándolo en un asunto sensible. La CGT decidió movilizarse en apoyo al presidente el 15 de abril. En la Plaza de Mayo, durante la concentración, mientras Perón pronunciaba su discurso, explotaron dos bombas que dejaron siete personas muertas y alrededor de cien heridos. Esa misma noche, grupos peronistas atacaron el Jockey Club y las sedes de algunos de los partidos opositores: el radical, el socialista y el conservador Partido Demócrata. Los edificios fueron incendiados y sufrieron daños considerables.

Tanto el atentado opositor como la respuesta peronista habían sido episodios muy graves y hablaban de los rumbos que tomaba la contienda política. En los días siguientes, fueron detenidos más de 3000 opositores; a fines de año, luego de su liberación acordada por el gobierno con los partidos, fueron amnistiados. Sin embargo, el clima de tensión no amainó.

Acción sindical y recomposición salarial

En 1954, las negociaciones entre sindicatos y empresarios se reabrieron luego de haber estado suspendidas por dos años, y las organizaciones obreras dieron muestras de estar dispuestas a lidiar por la recomposición salarial y la defensa de los derechos conquistados desde 1946. Así, movilizaciones, trabajo a reglamento y huelgas fueron empleados a menudo en varios sectores, impulsados por las comisiones de empresa y, en algunos casos, incluso por las organizaciones de alcance nacional dirigidas por partidarios del oficialismo, que habían registrado la extensión de una actitud decidida entre sus bases. De todas maneras, en general, las acciones sindicales se orientaron contra el sector empresario, dejando al gobierno y a Perón fuera del conflicto.

Así, el activismo sindical, en baja en los años anteriores, se reactivó hacia 1954. El movimiento fue eficaz, ya que se consiguió una mejora del 12 por ciento en el salario real si se lo compara con el de 1952, cuando las paritarias se habían clausurado. A comienzos de 1955 y a iniciativa del gobierno se reunió el Congreso Nacional de la Productividad, en el que empresarios, sindicatos y funcionarios estatales pujaron por imponer sus puntos de vista e intereses; no hubo allí acuerdos sustantivos. A pesar de la reorientación de su política y de las señales de autonomía que los trabajadores y parte de sus organizaciones daban a la hora de la disputa laboral, el gobierno no vio comprometida su potencia electoral. En 1954 se celebraron elecciones legislativas y los votos a los candidatos peronistas volvían a situarse alrededor del 62 por ciento.

El conflicto con la iglesia

Ese mismo año tuvo lugar la radicalización de las diferencias entre el peronismo en el gobierno y la iglesia. Como ha indicado Lila Caimari, lo novedoso no fue tanto la existencia de tales diferencias, críticas y recelos mutuos, sino el amplio eco que éstos encontraron, en ambos bandos, en la coyuntura de 1954. Puesto en otros términos, la cuestión decisiva fue que ese conflicto pasó, con rapidez, a articular la contienda política y social, y fue finalmente la batalla que el peronismo no pudo ganar. Los partidos antiperonistas vinieron a encontrar, en algunos casos con sorpresa, no sólo un aliado en la iglesia, sino una masa de activistas fervorosos en los católicos.



Peronismo y cristianismo en la versión de un funcionario de gobierno

[...] ¡queremos realizar el auténtico cristianismo! ¡El cristianismo que todavía no ha vivido la humanidad!

El cristianismo de verdad.

Cristianismo del espíritu, que considera a la materia magnífica hechura de Dios y no despreciable obstáculo a su perfectibilidad.

Cristianismo de hombres. No de ángeles.

¡Que Dios nos hizo hombres, no ángeles!

Cristianismo de la persona humana en la sociedad humana. De la persona humana digna, con divina dignidad, en la sociedad humana que es camino del hombre para volver a Dios, su eterno destino.

Debemos señalar (y utilizamos para ello palabras de Maritain) que el Estado cristiano que intenta crear el Justicialismo no es "un Estado clerical o decorativamente cristiano" sino el Estado de una "sociedad política, vital y realmente cristiana", en cuya vida se realizan las virtudes del cristianismo, según el orden cristiano de los valores humanos. Ni siquiera será necesario para ello que todos sus integrantes sean cristianos. Con tal que todos ellos reconozcan la misma valoración cristiana de las fuerzas fundamentales, de la humanidad.

Y, sobre todo, que acepten aquellas consecuencias humanas que contiene el Evangelio de Cristo [...].

Raúl Mendé, *El Justicialismo. Doctrina y realidad peronista*, Buenos Aires, s/d, 1950.

Tal como se señaló, la iglesia había manifestado con claridad que el candidato que prefería para las elecciones de 1946 era Perón, mientras que en 1950 tuvo lugar aquel primer conflicto en ocasión del Congreso Eucarístico. En el peronismo habían comenzado a circular con más frecuencia los argumentos que subrayaban que la prédica de Jesús tenía un fuerte contenido social y manifestaban su predilección por una suerte de cristianismo espontáneo que no estaba asociado ni a la liturgia ni a la jerarquía eclesiástica. A su vez, el encuadramiento que el estado peronista se proponía extender socialmente en los años cincuenta era difícil de tolerar para un activismo como el católico, acostumbrado a organizarse y discutir acerca de cuestiones sociales y políticas. Los sectores más liberales del catolicismo habían sido críticos del peronismo desde tiempo atrás,

y los más vinculados a las elites nunca habían tolerado el talante popular del movimiento de 1945. Ni la introducción de *La razón de mi vida* en la escuela, mientras las clases de religión parecían ser desatendidas por el gobierno, ni la elevación de la doctrina peronista, con su cristianismo no clerical, al rango de doctrina nacional, favorecieron las relaciones, como tampoco lo hizo la creación de la Unión de Estudiantes Secundarios y las sospechas que sobre ella hizo circular la oposición, centradas en una crítica moral que la iglesia bien podía compartir. Es probable que los intentos de organización de un Partido Demócrata Cristiano con base en la militancia católica laica contribuyeran a aumentar la tensión.

A lo largo de los últimos meses de 1954, los medios peronistas y algunos dirigentes elevaron el tono de sus críticas, y el propio presidente denunció la participación de sacerdotes en la actividad opositora. La cuestión fue definida luego como estrictamente política por Perón, quien advertía que el clero y las instituciones católicas podían cobijar a elementos antiperonistas; los partidos opositores estaban actuando allí, señalaba. En noviembre se celebró un acto peronista con participación de la CGT, donde los discursos contra la iglesia fueron muy duros.

A lo largo de diciembre, el peronismo tomó decisiones que revelan los niveles del enfrentamiento: se eliminaron los subsidios para los colegios católicos; el diario *El Pueblo* fue clausurado y varios sacerdotes terminaron en prisión; prácticamente se suprimió la educación religiosa en los hechos, una decisión que luego tomaría por ley el Parlamento. En el Congreso se sancionó una Ley de Divorcio y, en los primeros meses de 1955, se redujeron los feriados religiosos, mientras se consideraba llevar adelante una nueva reforma constitucional para establecer la separación entre el estado y la iglesia. En diciembre de 1954, un primer movimiento de los católicos en ocasión del Día de la Virgen culminó en una procesión masiva, a pesar de la prohibición del gobierno.

A comienzos de 1955, todas las fuerzas tomaron nota de que este nuevo enfrentamiento resultaba clave para definir la situación política. El activismo católico se veía ahora acompañado por los militantes y dirigentes de partidos opositores y ponía la eficaz y extendida estructura parroquial y laica en juego. Así, en junio de 1955, tuvo lugar una procesión en ocasión de celebrarse Corpus Christi, en la que junto a los católicos marcharon miembros de partidos de dudosa vocación religiosa, como el socialista y el comunista, y también radicales y conservadores. Los nacionalistas católicos que por entonces aún quedaban en el peronismo tendieron a alinearse con la iglesia; del nacionalismo, el grupo que quedó en el bando peronista fue el aliancismo, ya mencionado.

La oposición reunía grupos que combatían en el peronismo cosas muy diversas; esta circunstancia se enlaza, en el mediano plazo, con los alineamientos de 1945, que no exhibían tampoco demasiada coherencia ideológica. Así, hacia 1955 existían antiperonistas que reclamaban el retorno a la tradición liberal que la Constitución de 1949 había quebrado y otros que asumían la herencia del catolicismo, que entendían menoscabada por el gobierno y que no era fácil articular con la anterior. En el bloque antiperonista también hubo quien reclamaba el respeto a las libertades públicas y quienes observaban con inquietud lo que entendían como una excesiva concesión de derechos a los grupos populares, que juzgaban una amenaza.

Violencia y política

Los bombardeos de la ciudad por aviones navales, en junio de 1955, dejaron un número muy alto de víctimas. Grupos peronistas replicaron esa noche con la quema de templos; la iglesia era por entonces el eje que articulaba la acción de la oposición. El conflicto político y social había alcanzado altos niveles de violencia.



Bombardeo en Plaza de Mayo. Archivo General de la Nación.



Incendio en la curia. Archivo General de la Nación.

En este cuadro, el 16 de junio de 1955, oficiales de la marina y de la fuerza aérea intentaron un nuevo golpe de estado, que tenía como uno de sus objetivos el asesinato de Perón. El movimiento, en el que aparecían complicados tanto sectores liberales como católicos, incluyó el bombardeo de la Plaza de Mayo y otras zonas céntricas. El ataque dejó más de 300 muertos y muchos más heridos; entre ellos había víctimas ocasionales y también miembros de grupos peronistas que habían comenzado a reunirse en apoyo al gobierno. Al parecer, trabajadores armados habían tomado edificios con el mismo fin. Esa noche, activistas peronistas emprendieron la quema de iglesias tradicionales y distinguidas del centro porteño.

Luego de una dura represión inicial a los opositores, algunos jefes militares recomendaron a Perón adoptar una política de conciliación, con el argumento de que se extendían las dudas entre los oficiales que, aun siendo católicos, se mantenían leales al gobierno. Tampoco era tranquilizadora para el ejército la vocación que algunos dirigentes sindicales manifestaban por organizar milicias obreras. Perón cambió su táctica en ese momento: levantó el estado de sitio, permitió que los opositores hablaran por la radio en mensajes a la población y produjo modificaciones en el gabinete. Poco después, ante el fracaso de su po-

lítica expresado en el endurecimiento de las posiciones de sus adversarios, retomó la actitud de abierto enfrentamiento, asumiendo nuevamente el papel de jefe de una facción en lucha con un enemigo mortal. Esa actitud terminó de definir muchas voluntades militares hacia el bando del golpe de estado, que finalmente se produjo el 16 de septiembre de 1955.

La sublevación comenzó en Córdoba y, tras pocos días de combate en algunas zonas del interior, las tropas leales al gobierno se dieron por derrotadas. El 23 de septiembre, el general Eduardo Lonardi asumió la presidencia; la interna militar, sin embargo, llevó a que el general Pedro E. Aramburu desplazara a Lonardi como presidente de la nación en noviembre. Las fuerzas armadas estaban de nuevo en el poder.

10. Otras dimensiones de la experiencia peronista

La experiencia peronista, más allá de los sucesos estrictamente políticos, tuvo en la mejora de las condiciones de vida de grupos muy extendidos uno de sus rasgos más destacados. Entre los cambios producidos en ese plano, se contó el desarrollo de acciones de gobierno que buscaban ampliar los públicos de ciertos bienes culturales y favorecer la incorporación de nuevos sectores al sistema educativo. Por otra parte, las iniciativas que el peronismo planteó hacia los intelectuales resultaron fallidas en gran parte. A su vez, los grupos opositores continuaban siendo vastos. Estos elementos se articularon cuando, en los tiempos cercanos a 1955, el conflicto político y social argentino asumió una nueva configuración.

El peronismo y la extensión del bienestar social

Como se ha indicado en el capítulo anterior, a pesar de los cambios en la coyuntura y en las políticas económicas, los casi diez años de gobierno del primer peronismo fueron un período de importantes mejoras en la situación de franjas muy amplias de la población, en particular de los sectores populares. Puesto en los precisos términos de Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, cuyos planteos se seguirán en parte aquí, se trató de un proceso de "democratización del bienestar".

Así, se amplió el número de personas con posibilidades de acceso a bienes antes reservados a sectores sociales restringidos. También, merced a la mejora de los salarios reales y a la legislación laboral, creció el tiempo libre del que disponían quienes trabajaban, y al mismo tiempo las posibilidades de utilizarlo en entretenimiento. El consumo de sectores populares y medios se modificó en el mismo sentido, en un amplio arco que incluía desde la carne hasta los aparatos de uso hogareño y desde la bebida hasta los espectáculos. Se volvió a acelerar el ritmo de

crecimiento de la escolarización primaria y también, de manera aún más marcada, la secundaria, mientras se producía una ampliación de los grupos sociales que aportaban estudiantes al nivel universitario.

Ello, junto con la extensión de las jubilaciones, las mejoras en la salud pública, la puesta en marcha de planes oficiales de vivienda, el congelamiento de alquileres y la apertura de líneas de créditos baratos para la construcción, así como la ampliación del turismo social, fueron algunos de los cambios ocurridos durante el período peronista, que llevaron a una recuperación de las posibilidades de ascenso social y a una mayor integración. Algunas de estas políticas y fenómenos habían comenzado con anterioridad, pero la dimensión alcanzada es lo que distingue a la etapa peronista. Desde otros puntos de vista, puede plantearse que en el mismo movimiento se afirmaban, si bien de un modo peculiar, los contenidos sociales de la ciudadanía.

Salarios, consumo y vivienda

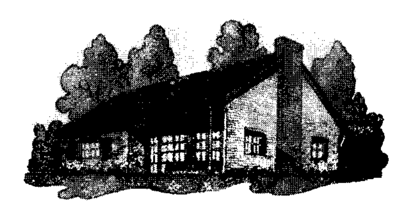
Hacia 1955, los asalariados percibían aproximadamente el 50 por ciento de la riqueza nacional; ese porcentaje había sido superado en los primeros años peronistas, después declinó y, en los tiempos anteriores al golpe de estado, se hallaba nuevamente en alza hasta alcanzar aquella cifra el año del derrocamiento. Los salarios reales, luego de que se sorteara la crisis que había comenzado hacia 1949, eran en 1955 más de un 60 por ciento superiores en relación con los de 1945. En el caso de los trabajadores industriales, el salario básico en el último año de gobierno peronista alcanzaba a cubrir casi por completo el gasto familiar.

Estos aumentos, en parte fruto de las políticas económicas y sociales del gobierno, implicaban un movimiento general de redistribución de la riqueza; de todos modos, esa tendencia se ajustaba de acuerdo con la situación previa de los distintos sectores que componían el mundo de los trabajadores. Aquellos que realizaban trabajos no calificados y mal remunerados aplicarían buena parte de esa mejora a satisfacer necesidades imperiosas: alquiler de una vivienda, alimentación, indumentaria básica. En cambio, quienes disfrutaban de una situación más desahogada en el punto de partida, podrían dedicarla al consumo de otros bienes y al acceso a otros servicios. Algunos índices dan cabal cuenta de las modificaciones de conjunto en el consumo de masas: entre 1946 y 1952, el porcentaje del total de la producción de carne consumida en el mercado interno creció del 75 al 89 por ciento. La producción de bebidas registró notables au-

mentos, así como la venta de vestimenta y aparatos para el hogar; las ventas de heladeras, vestidos y calzado, por ejemplo, crecieron a niveles superiores –en algunos rubros, muy superiores– al 100 por ciento en los primeros años de la presidencia de Perón. En general, el consumo se expandió, también en estos primeros años, a un promedio anual del 13,5 por ciento.

En cuanto a la vivienda, datos de 1946 señalan que, entre los trabajadores, el 64 por ciento no era propietario de la casa que habitaba. A su vez, el Censo Nacional de 1947 indicaba que las viviendas alquiladas en la Capital y el conurbano rondaban el 70 por ciento del total; el Censo Nacional de 1960 marcó una baja importante al señalar el 42 por ciento en el mismo índice. Así como el congelamiento de alquileres consolidó las mejoras nominales de salarios, los créditos a tasa baja y la propia construcción, encarada por el estado, de monoblocs y barrios de nuevas viviendas puestas a la venta con facilidades, permitieron la ampliación del número de propietarios, un proceso en el que también se notaron las diferentes situaciones internas en los sectores populares. Simultáneamente, de la mano de la migración interna que continuaba, crecían las villas miseria: en 1956, unas 110 000 personas se hallaban en esa situación en Buenos Aires y los partidos vecinos.

LA VIVIENDA PROPIA
REALIDAD ARGENTINA



REPUBLICA ARGENTINA
1953

Propaganda de los planes de vivienda del gobierno peronista. La política en esta materia se llevó adelante a través del ofrecimiento de créditos baratos y de la construcción de barrios de chalets y de monoblocs.

Salud pública y turismo social

En otra de las áreas relevantes en este proceso, la salud pública, se producían también novedades. En principio, la creación de reparticiones estatales dedicadas específicamente a esta cuestión; así, la Dirección Nacional de Salud Pública, creada en 1943, fue transformada en Secretaría en 1946 y en Ministerio en 1949. Desde estas reparticiones, el doctor Ramón Carrillo impulsó campañas para la prevención de enfermedades y para la erradicación de otras, como el paludismo y la tuberculosis, y se llevaron a cabo masivas acciones de vacunación. Esas campañas, de escala nacional, eran respaldadas con una gran tarea de propaganda, que también se aplicaba a la educación sanitaria. En cuanto a la infraestructura, las inversiones realizadas llevaron a que, entre 1946 y 1954, casi se duplicara el número de camas disponibles en hospitales, por ejemplo.

De todos modos, las diferencias regionales, ya mencionadas para áreas como la educación, siguieron pesando, así como las que devenían de la pertenencia a distintos sectores sociales. El proyecto de Carrillo tenía, originalmente, un sesgo universalista, que buscaba nivelar estas diferencias, con una conducción centralizada para la salud pública nacional, pero finalmente asumió otras formas, condicionado en parte por el aliento oficial a los servicios de salud sindicales y por la existencia de la Fundación Eva Perón, que desarrollaba sus propias tareas asistenciales, dedicadas a los grupos más vulnerables entre los sectores populares. La Fundación contaba con hogares para ancianos, proveedurías, sistemas de becas y subsidios, hospitales en el conurbano y en el interior, hogares escuelas, la Ciudad Estudiantil, colonias de vacaciones y mecanismos para la ayuda directa; Evita condujo personalmente con celo y rigor ese organismo.

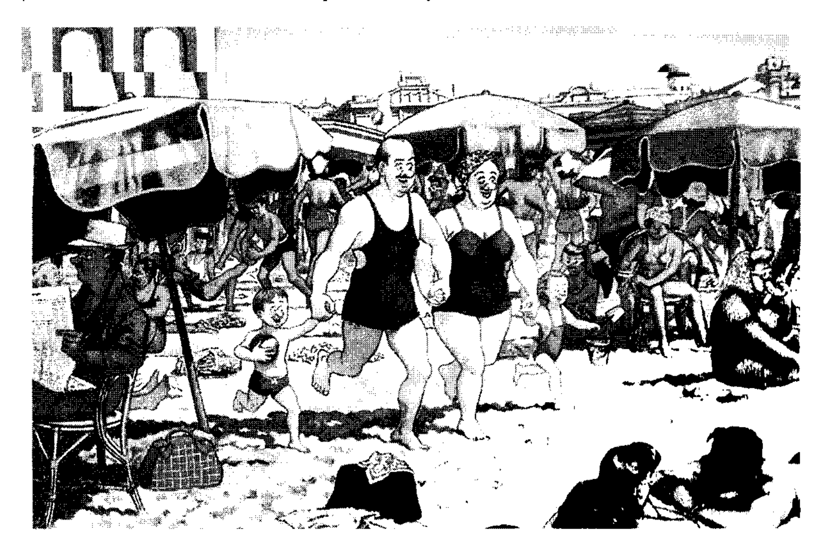
También el turismo social, que había comenzado a practicarse en los años treinta en escala más reducida, experimentó un notable crecimiento en la época peronista. Como ocurrió en otros casos, fueron los sindicatos más organizados, antiguos y poderosos los que primero ofrecieron servicios más eficaces. De todas maneras, medidas como el establecimiento de las vacaciones pagas y el aguinaldo, que estaban potencialmente vinculadas al turismo de masas, regían para el conjunto de los trabajadores. Al mismo tiempo, el gobierno construía colonias turísticas, como las de Embalse en Córdoba y Chapadmalal en las cercanías de Mar del Plata, ambos sitios emblemáticos del turismo de masas, que fueron manejados por la Fundación Eva Perón. A Mar del Plata habían

arribado, en el verano de 1930, unos 65 000 turistas; en 1940, los veraneantes eran 380 000, y en 1955 llegaban a 1 400 000. Las cifras revelan tanto la continuidad ascendente del movimiento como su envergadura, y evidencian los umbrales de masividad.



El turismo social

Desde los años treinta se había producido un aumento en la cantidad de gente que hacía turismo de verano. Junto a otros más generales, la construcción de la ruta 2 fue un factor que contribuyó a alentar ese fenómeno. En tiempos del peronismo, la extensión de las vacaciones pagas y la tendencia al crecimiento de los salarios reales, entre otros factores, reforzaron el proceso que, de todas maneras, beneficiaba en particular a sectores medios y de trabajadores calificados.

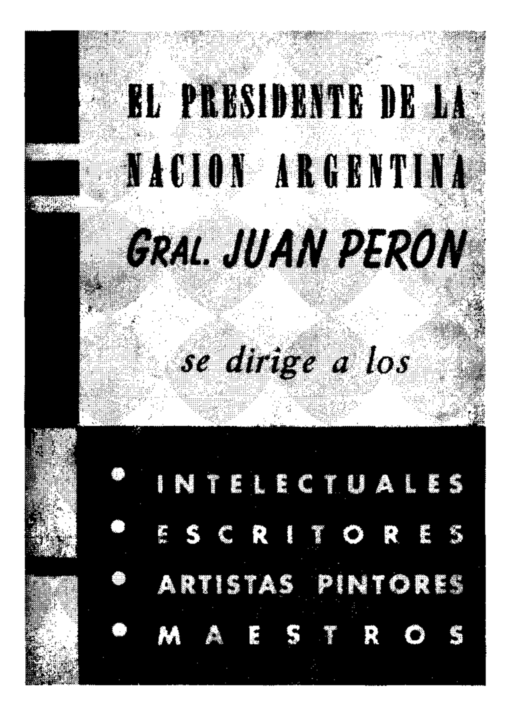


Dibujo de la Playa Bristol, en Mar del Plata, realizado por Medrano para el Calendario de Alpargatas de 1947.

Educación y cultura

Otro de los sectores en los que la política peronista se relacionó con la extensión social del bienestar fue la educación, un área donde ya se contaba con una tradicional participación estatal y una estructura ascen-

tada. En la enseñanza primaria, la tasa de crecimiento anual de la matrícula se recuperó y alcanzó las cifras de los años treinta, para luego superarlas. En la década peronista, ese crecimiento fue mayor que el que registró la población total, lo que está asociado a la escolarización de nuevos sectores, mientras que el analfabetismo continuaba su tendencia a la disminución. Los avances más significativos tuvieron lugar en el nivel secundario: el crecimiento anual promedio de la matrícula rondó el 11,5 por ciento en la década peronista, superando las cifras de los años treinta. Simultáneamente, aumentaba el número de estudiantes que eran miembros de sectores trabajadores, en particular de aquellos más consolidados, así como la extensión de la escolarización secundaria a buena parte de los grupos medios.



Folleto que reúne cuatro discursos del general Perón pronunciados en diferentes oportunidades y lugares. Buenos Aires, 1947.

También creció el número de estudiantes en el sistema universitario, integrado entonces por seis universidades nacionales: las de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Litoral y Cuyo. En 1950, un decreto estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, hasta entonces

arancelada, y hacia 1952 se creó la Universidad Obrera Nacional, transformada luego del golpe de estado de 1955 en Universidad Tecnológica Nacional. Esta iniciativa se relacionaba tanto con la vocación genérica de aliento a la industria que animó al peronismo, como con sus políticas de apertura e inclusión de nuevos grupos sociales. Desde 1949, el área de educación disponía de su propio ministerio, y el aumento de las partidas que el presupuesto le asignaba también fue importante.



Folleto del gobierno que promovía la capacitación de los trabajadores. En 1952, el peronismo creó la Universidad Obrera Nacional.

Entre 1946 y 1950, aproximadamente, el gobierno peronista intentó impulsar sus propias políticas culturales; con ese fin, reformó las reparticiones que habían sido creadas en la década anterior. La Comisión Nacional de Cultura y la Comisión Argentina de Cooperación Intelectual fueron fundadas en 1933 y 1934; entre las academias, en los años treinta se habían creado la Argentina de Letras y la Nacional de Bellas Artes, y en 1938 la vieja Junta de Historia y Numismática fue transformada en Academia Nacional de la Historia. Todas ellas tenían un alto grado de autonomía. Ya en 1943 se organizó el Instituto Nacional de la Tradición, dedicado al estudio y la difusión del folclore. En su mayoría, estas instituciones estaban diseñadas para lidiar con cuestiones vinculadas a la cultura letrada. Durante la presidencia de Perón se creó la Sub-

secretaría de Cultura –cuyo rango descendió luego a Dirección Nacional–, y una Junta Nacional de Intelectuales en el ámbito de aquella repartición. Algunas de estas iniciativas estaban dirigidas al mundo de los intelectuales y sus asociaciones. En tanto grupo social, a pesar de las consabidas excepciones, los intelectuales habían mantenido distancia, cuando no hostilidad, frente al peronismo en los años cercanos a 1945, y la política oficial una vez que Perón ocupó la presidencia no logró mayores éxitos.

Otros proyectos, en cambio, apuntaban en una dirección diferente: poner al alcance de auditorios y públicos más amplios un conjunto de productos culturales que el gobierno entendía apreciables, objetivo que se alineaba con el de la ampliación del acceso a la educación y, más en general, con el de promover mejoras en las condiciones de vida. El tesoro cultural que el peronismo decía estimar y aspiraba a distribuir entre públicos vastos reconocía varias fuentes, al menos en los documentos oficiales: la cultura universal, en muchos casos la más clásica, concebida a menudo como aquella relacionada con la herencia grecolatina e hispana; la que se suponía era la cultura argentina tradicional, y los productos de la industria cultural, propios de una cultura de masas todavía reciente.

Así, se tomaron medidas que buscaban el fomento del libro argentino y de las producciones musicales, estableciéndose que en las radios debía difundirse un 50 por ciento de música nacional. También se organizaron los viajes que un tren cultural habría de realizar por el interior, se desplegó una activísima política en la Comisión de Bibliotecas Populares y se desarrollaron planes para que los niños de hogares populares realizaran prácticas de artes. Por otra parte, a fines de 1946 se creó la Orquesta Sinfónica Municipal en la ciudad de Buenos Aires, y dos años después se fundó la Orquesta Sinfónica del Estado, hoy Nacional. También por estas fechas se organizaron la Orquesta de Radio del Estado y la Juvenil, dedicadas a la música clásica. En el Teatro Colón se celebraron recitales gratuitos de música clásica para los sindicatos y para la Fundación Eva Perón, y semanalmente se brindaban funciones gratuitas en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La Orquesta Sinfónica solía actuar con regularidad, además, en espectáculos a precios económicos; como había ocurrido con anterioridad, en tiempos peronistas las temporadas incluyeron a importantes artistas del exterior.

Los esfuerzos del peronismo por organizar su política cultural se aquietaron parcialmente luego de 1950. A pesar esa circunstancia, el

Segundo Plan Quinquenal prestó alguna atención a los asuntos culturales e incluyó un capítulo dedicado a la Cultura Histórica que se proponía "la divulgación y difusión de las obras de carácter histórico que concurran a consolidar la unidad espiritual del pueblo argentino", y hacia 1954 se realizaron algunos nuevos esfuerzos en el área. Este tipo de política había sido siempre difícil de distinguir de la propaganda peronista y, en tiempos del intento más decidido de avance oficialista sobre los sectores sociales que no le eran adictos, el control y la censura adquirieron un mayor protagonismo. La Subsecretaría de Informaciones, creada por el gobierno militar luego del golpe del 4 de junio de 1943, fue una herramienta importante en esas acciones; allí, la figura central fue la de Raúl Apold.

Los que se fueron: ¿intelectuales peronistas?

En líneas generales, las iniciativas del peronismo hacia el mundo de los intelectuales fracasaron a la hora de conseguir adhesiones o consensos amplios: los intelectuales, en conjunto, fueron reacios a apoyar al gobierno. Para explicar este fenómeno, algunos especialistas han aludido al rechazo que entre ellos producía la política general de democratización social, que convertía a nuevos sectores –a sus ojos recién llegados, poco cultivados, privados de criterios estéticos– en consumidores de bienes, entre ellos los culturales, antes reservados a grupos más reducidos, poniendo incluso a su alcance la universidad.

En otras ocasiones, se argumentó que el peronismo violó la tendencia de los intelectuales a establecer sus propias reglas y jerarquías internas, con relativa autonomía del estado y la política. En la Argentina, algo semejante a un mundo cultural que funcionara de ese modo, aun parcialmente, había existido desde el Centenario aproximadamente. La vigencia de esas reglas nunca es absoluta, pero todavía a comienzos de los años cuarenta, un destacado historiador y además diputado opositor como Emilio Ravignani podía ser electo decano de una facultad en la Universidad de Buenos Aires. Aquel argumento, entonces, insistía en que el peronismo habría recortado esa autonomía a través de varios procedimientos: la ubicación en cargos relevantes de las agencias estatales dedicadas a la cultura de personajes sin mayores antecedentes ni prestigio; el desplazamiento o la creación de las condiciones para inducir la renuncia de muchos profesores universitarios, algunos de reconocidos méritos académicos, como Bernardo Houssay –futuro premio Nobel de

Medicina– y Francisco Romero, y de largas trayectorias político-académicas, como Gabriel del Mazo y Alfredo Palacios. A ello debía sumarse la censura y el control, en particular en los últimos años, que suponían el recorte de uno de los derechos más apreciados por los hombres de la cultura, como era el de expresar libremente sus ideas, así como iniciativas oficiales que afectaban áreas sensibles para los intelectuales, como la obligatoriedad del análisis de *La razón de mi vida* en la escuela o las disposiciones que estrechaban las potestades de las academias.

En cambio, otros autores han insistido en que, en la coyuntura de 1945-1946, las posiciones liberal-democráticas se habían extendido entre los intelectuales, y que desde esas posiciones era sencillo interpretar al peronismo como una especie local de fascismo. Pero, al mismo tiempo, se ha planteado que el tono general de la vida intelectual y del debate cultural, luego de 1946, fue más bien apagado y sin recepción de las novedades que agitaban el horizonte internacional; una suerte de quietismo opaco antes que un fascismo agresivo y radical, salvo quizás en los últimos tiempos. Todos estos argumentos son pertinentes aunque dejan aspectos del problema sin resolver.

En cualquier caso, hubo intelectuales, algunos de trayectorias sólidas, que, con mayor o menor distancia crítica, adhirieron al peronismo. Entre ellos no hubo uniformidad en lo que respecta a los itinerarios estéticos e ideológicos previos, ni tampoco en el rango que ocupaban en el universo de las letras. Había allí escritores muy tradicionales, miembros de la elite, que desde hacía décadas gozaban de visibilidad en los ambientes de la cultura; Manuel Gálvez, Delfina Bunge, su esposa, y Carlos Ibarguren son tres casos, instalados desde el punto de vista ideológico en el espacio en el que se cruzaban conservadurismo, nacionalismo y catolicismo. Desde hacía años, Ibarguren era miembro de la Academia Nacional de la Historia y de la Argentina de Letras, y había logrado éxito de ventas y premios por su biografía de Rosas, a comienzos de los años treinta. Gálvez fue un novelista muy leído, aunque los críticos más innovadores no le fueron favorables.

También se definieron como peronistas varios intelectuales de una generación menor, antiguos participantes de las experiencias de las vanguardias literarias de los años veinte, que viraron luego al catolicismo y al nacionalismo, como Ernesto Palacio y Leopoldo Marechal. Otros escritores que rondaron las empresas de las vanguardias, como Homero Guglielmini, Brandán Caraffa y el poeta Horacio Rega Molina, terminaron apoyando al peronismo. El artista plástico Xul Solar, un nombre muy importante en esos espacios, parece haber tenido, a su

vez, una cierta afinidad con el movimiento. Con una vieja relación que lo unía a las vanguardias y, simultáneamente, a los escritores del grupo de Boedo, dedicado a la literatura de denuncia social desde la izquierda, el poeta Nicolás Olivari formó parte de este sector de intelectuales que sostuvo relaciones cercanas con el oficialismo. De Boedo provenían César Tiempo, que dirigió el suplemento cultural del diario *La Prensa* mientras estuvo bajo control de la CGT, y Elías Castelnuovo.

Rodolfo Puiggrós y Eduardo Astesano, con alguna notoriedad como historiadores y, en el primer caso, participación en iniciativas culturales prestigiosas que convocaban a miembros de varias tradiciones, como el Colegio Libre de Estudios Superiores, apoyaron al gobierno peronista desde una antigua militancia en el Partido Comunista. Entre los historiadores también se ubicaba Diego Luis Molinari, de viejo implante en la universidad, funcionario yrigoyenista y próximo al nacionalismo en los años treinta. Raúl Scalabrini Ortiz, que también había participado de las empresas vanguardistas, fue activo militante cercano a FORJA y desde allí pasó al peronismo. En otro sector del mundo de la cultura, tres importantes letristas de tangos se definieron peronistas: Enrique Santos Discépolo, Cátulo Castillo y Homero Manzi, quien fue forjista en los años treinta y apoyó a la Unión Democrática en 1946, para aproximarse al nuevo movimiento hacia 1947 junto a otros intelectuales radicales.

Si bien la lista podría extenderse, interesa destacar que el único elemento común que puede hallarse en este conjunto es el apoyo al gobierno peronista. La explicación de estas convivencias llamativas entre intelectuales nacionalistas, marxistas, católicos, conservadores, izquierdistas, debe tener en cuenta que no se trataba de hombres de la cultura que, abandonando los sistemas de ideas que habían sostenido hasta aquel momento, abrazaban una nueva alternativa ideológica, al menos en un comienzo. Por el contrario, intentaban explicar el peronismo y su adhesión a él apelando a instrumentos conceptuales similares a los que habían empleado en las décadas anteriores para dar cuenta de sus posiciones. El peronismo era la nueva herramienta que estos intelectuales volcados a la política creían haber encontrado para la realización de sus antiguos objetivos; antes que un nuevo modelo de sociedad, el peronismo parecía ofrecerles nuevas y más sólidas posibilidades para alcanzar lo que habían anhelado desde tiempo atrás.

Las justificaciones del apoyo al gobierno variaban de acuerdo con la matriz desde la que se las ensayaba; sin embargo, todas reconocían en el peronismo un movimiento que a menudo caracterizaban como "de

la nación y del pueblo". La fórmula era muy conocida para los intelectuales que provenían del radicalismo en cualquiera de sus versiones; para los nacionalistas, se vinculaba con las inquietudes sociales que habían sacudido a sus formaciones a fines de los años treinta y les permitía no resignar su vocación por la defensa de lo que suponían auténticamente argentino. Para los hombres de las formaciones culturales de izquierda, la mención al pueblo, que en la retórica peronista era el pueblo trabajador, resultaba la pieza decisiva, aunque no debe despreciarse, sobre todo para quienes habían pasado por el Partido Comunista, la cuestión de la nación y el antiimperialismo. A este complejo se sumaba la apelación a la justicia social, sobre la que insistía fuertemente el peronismo, de largos ecos en la tradición de izquierda.

Hacia 1947, Joaquín Coca, abogado y ex parlamentario socialista, expuso sus argumentos para apoyar al peronismo. La política peronista de impulso a la industrialización, razonaba, "no es ciertamente una revolución socialista, aunque sí es para los socialistas auténticos la condición previa e indispensable de todo socialismo". Por esos mismos años, el autor de un artículo favorable al peronismo se preguntaba si la "revolución de Perón" era la que había soñado como radical. Más allá de que fuera precisa, la respuesta era positiva.

Una versión peronista de la relación entre política y cultura

En 1947, en una publicación oficial, con el sello de la Comisión Nacional de Cooperación Intelectual, Leopoldo Marechal sostenía que en la sociedad "los creadores" constituyen "una minoría, una elite", cuya tarea sólo puede ser fecunda si "trasciende a los otros" en lugar de "aislarse en una torre de marfil". Entre "la minoría creadora y la mayoría asimiladora", continúa Marechal, debe existir "un contacto efectivo y permanente". Agrega que "en los movimientos revolucionarios", como aquel que lo cobija, "es frecuente y hasta inevitable que algunos estratos inferiores de la cultura salgan a la superficie y se abroguen derechos que, en esa materia, sólo confieren la capacidad y el talento creador". Aquí vuelven a entremezclarse criterios políticos e intelectuales, pero, por otro lado, es posible preguntarse cuál es el rasgo que permite reconocer como peronista el argumento de Marechal, más allá de la caracterización de su movimiento como revolucionario. La imagen de una minoría creadora que, sin embargo, debe buscar auditorios amplios y la afirmación de que, en materia cultural, sólo el talento y la capacidad importan a la hora de

reconocer derechos, estaban extendidas entre quienes se dedicaban a la tarea cultural desde mucho tiempo atrás. En lo que hace al último criterio expuesto, ni siquiera las versiones más radicalizadas de las que apelaban a la necesidad del compromiso del escritor lo habían impugnado. Así, con la excepción de su identificación como peronista, nada hay en los argumentos de Marechal que los distinga de los que podían circular entre algunos de los círculos opositores al gobierno.

Las citas de Marechal fueron tomadas de su artículo "Proyecciones culturales del momento argentino", incluido en la compilación de trabajos de varios autores titulada *Argentina en marcha*, Buenos Aires, Comisión Nacional de Cooperación Intelectual, 1947.

Por otra parte, entre los intelectuales peronistas, aunque con algunas excepciones, se registra un patrón: incluso aquellos que habían tenido una intensa actividad en los años treinta parecen haberse llamado a sosiego durante el período 1946-1955, para exhibir una mayor producción luego del derrocamiento en 1955. En los años siguientes, Arturo Jauretche, Rodolfo Puiggrós, Juan José Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, José María Rosa, alcanzaron gran notoriedad. El revisionismo, al que varios de los mencionados adhirieron, veía por entonces cómo sus argumentos seducían a públicos extendidos en virtud de que el peronismo lo había transformado en su interpretación del pasado nacional luego de su derrocamiento. Tales éxitos de público, de todas maneras, no se asociaban al impacto en la crítica o en la universidad, de la que el peronismo estaba excluido. En un plano distinto, Leopoldo Marechal –en particular, con dos novelas, *El banquete de Severo Arcangelo* (1965) y *Megafón, o la guerra* (1970)– conseguía también una repercusión importante, incluso entre la crítica. Quizás aquella mengua en la producción en los años del peronismo en el gobierno pueda relacionarse con los conflictos, tan reiterados, que los intelectuales tienen con el poder, aun cuando se definan oficialistas.

En relación con la cuestión de la autonomía y el respeto por parte del estado a los criterios fundados en los méritos intelectuales, debe tenerse en cuenta que los escritores y poetas peronistas asumían explícitamente un compromiso político y apoyaban abiertamente al movimiento en el gobierno; los intelectuales antiperonistas, en su mayoría, insistieron en cambio en la defensa de aquella autonomía de cara no tanto a la acción estatal en abstracto, sino a la forma que ella asumía bajo el peronismo. Muchos, por otra parte, tuvieron también filiaciones

políticas conocidas, como ocurría en el caso de Ricardo Rojas, opositor desde el radicalismo; en el de Julio V. González, dirigente reformista incorporado luego al Partido Socialista; en el de José Luis Romero, también socialista, o en el de Julio Irazusta, vinculado al nacionalista Partido Libertador.

Se trataba así de una nueva versión de las pujas y las disputas que ya habían sido planteadas desde los años veinte entre distintos modos de concebir cómo debía funcionar el mundo de los intelectuales, cómo debía desarrollarse su intervención política y su toma de posición ante cuestiones colectivas, y qué posiciones debían asumirse ante la acción del estado. El peronismo en el gobierno acotaba los márgenes de autonomía; los intelectuales opositores denunciaban la situación, que entendían como una intromisión estatal en sus propios asuntos. Sin embargo, la intensidad del conflicto, en particular en los últimos años, impulsó a los intelectuales de la oposición, nuevamente, a una intervención pública y ciertamente política, al punto de ser apoyos de otro golpe de estado. Una vez más, la defensa de la autonomía de su espacio les reclamaba, precisamente, la intervención fuera de éste, en un contexto de lucha política muy crispada.

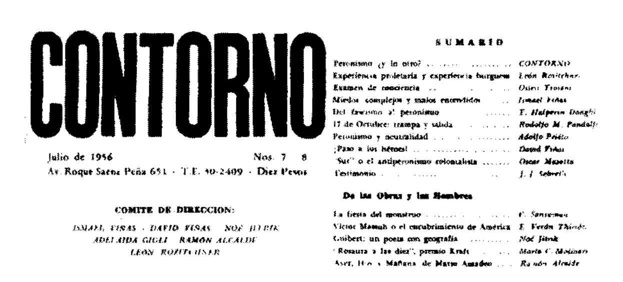
En el vasto espacio del antiperonismo intelectual, vinculados a linajes ideológicos diferentes entre sí y a grupos generacionales también distintos, se destacan varios emprendimientos culturales. Uno de ellos fue la revista *Sur*, fundada en 1931 y ya tradicional, cuyo elenco incluía a su fundadora, Victoria Ocampo, a Jorge Luis Borges, Eduardo Mallea y Adolfo Bioy Casares, entre otros. En 1953, se fundó *Imago Mundi*, dedicada a los estudios históricos y culturales, donde participaron José Luis Romero, su director, y Tulio Halperin Donghi. Por esa experiencia pasaron intelectuales que, luego de 1955, tendrían una importante actuación en la universidad. *Contorno*, también fundada en 1953, reunió a Ismael y David Viñas, Noé Jitrik, Oscar Massota, Juan José Sebreli y Rodolfo Kusch, muchos de ellos vinculados a la Facultad de Filosofía y Letras como estudiantes, y atentos a las posiciones del existencialismo. Estas revistas, más allá de la censura y de algunos episodios represivos, pudieron publicarse con cierta regularidad; en los dos últimos casos, se trataba de emprendimientos animados por elencos más jóvenes que los reunidos en *Sur*. El conflicto con la iglesia haría que varios intelectuales católicos pasaran a formar parte del frente antiperonista.

Al igual que ocurría con el antiperonismo político, el frente intelectual antiperonista tampoco era uniforme, ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el de la participación previa en tradiciones inte-

lectuales, ni desde una perspectiva generacional. Muchas de estas diferencias se harían visibles a poco de producido el golpe de estado, cuando los intelectuales más jóvenes de *Contorno* iniciaron un proceso de reinterpretación del movimiento derrocado que los alejaría de sus antiguos aliados.

La revista *Contorno*

Creada en 1953, *Contorno* reunió a jóvenes intelectuales que formaron parte del frente intelectual antiperonista. Luego del golpe de estado de 1955, algunos de sus miembros iniciaron un proceso de distanciamiento de los grupos mayores, en el que la revisión de ciertos aspectos de la experiencia peronista tuvo alguna importancia.



CONTORNO

Julio de 1956 — Nos. 7 8

Av. Roque Saenz Peña 651 - T.E. 30-2409 - Diez Pesos

COMITE DE DIRECCION:

ISMAEL VIÑAS - DAVID VIÑAS - NOE JITRIK
ADELAIDA GIGLI - RAMON ALCALDE
LEON ROZITCHNER

SUMARIO

Peronismo ¿y lo otro?	*CONTORNO*
Experiencia proletaria y experiencia burguesa	*León Rozitchner*
Examen de conciencia	*Osiris Troiani*
Miedos, complejos y malos entendidos	*Ismael Viñas*
Del fascismo al peronismo	*T. Halperin Donghi*
17 de Octubre: trampa y salida	*Rodolfo M. Pandolfi*
Peronismo y neutralidad	*Adolfo Prieto*
¡Paso a los héroes!	*David Viñas*
"Sur" o el antiperonismo colonialista	*Oscar Masotta*
Testimonio	*J. J. Sebreli*

De las Obras y los Hombres

La fiesta del monstruo	*C. Sanseverino*
Víctor Massuh o el encubrimiento de América	*E. Verón Thirión*
Guibert: un poeta con geografía	*Noé Jitrik*
"Rosaura a las diez", premio Kraft	*María C. Molinari*
Ayer, Hoy y Mañana de Mario Amadeo	*Ramón Alcalde*

"Luego nos argüirán, para condenar todo lo que contiene nuestro país de glorioso y distinguido en personajes políticos y literarios, ¿por qué habéis recorrido los dos partidos que le constituyen con el acto de reprobación en la mano y tirado indistintamente sobre ellos? ¿Qué es, pues, lo que queréis? ¿A qué partido pertenecéis vos? ¿En provecho de qué idea, de qué sistema, de qué gentes escribís?...

"Yo contestaré: hace muchos años que persigo a las dos fracciones en que se ha dividido la generación pasada de mi país, porque no nos han hecho sino inmensos males; la colorada por sus crímenes; la celeste por su inepcia...

"Juzgo al pasado con severidad, y llamó al porvenir a sucederlo. Digo que es tiempo de que el país cuide de no confiar la menor de sus tentativas de regeneración a hombres que no harán sino malograrlas, porque han perdido la fe y la disposición al sacrificio, y han cesado, sobre todo, de comprender los instintos y los medios de acción de nuestras masas, han pasado como su tiempo."

J. B. Alberdi "Acontecimientos del Plata en 1839 y 1840", en "Escritos póstumos", tomo XV, Bs. As., 1900, pág. 510 y sgs.

Peronismo... ¿y lo otro?

POCO tiempo antes de la revolución de septiembre enviamos a la imprenta los originales del número de CONTORNO dedicado a la novela argentina. Producida aquélla, sentimos que quizá era necesaria una aclaración: una de esas notas por medio de las cuales se deslindan posiciones y se le indica al lector que algo no significa lo que parece —o lo que significa en realidad. Nos sentimos tentados de establecer que durante todos los años del peronismo no nos habíamos entregado. Y por no habernos entregado entendíamos no solamente no habernos entregado al peronismo, sino tampoco al antiperonismo; que habíamos luchado —con mayor o menor eficacia, con éxito o sin éxito— para distingir la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en el país.

Unos momentos de reflexión nos convencieron de lo gratuito que sería explicar ninguna circunstancia particular: caímos en la cuenta de que nuestro lenguaje durante el peronismo más crudo debía seguir siendo idéntico a sí mismo y que el margen de nuestra libertad había estado mínimamene fijado por exigencias exteriores. Aquello que a los intelectuales les fué vedado por la dictadura nunca tuvo un caracter fatalmente problemático. Era, por cierto, riesgoso escribir sobre política o actuar en política. Pero jamás faltó la suficiente libertad de autoengañarnos y declarar paladinamente que se nos impedía tocar la realidad más urgente y atractiva. Los intelectuales argentinos en su casi totalidad preferimos disfrazar nuestra inepcia con resignadas y lamentosas imputaciones a un sistema que no nos respetaba ni nos admitía. Seriamente, lo concreto y lo histórico es que, salvo casos aislados muy especiales, el conjunto de la realidad nos pasaba tan inadvertido que casi todos pudimos creer que el diablo, como en un cuento de Payró, andaba por estos lugares. La inefiencia y la falta de carnalidad eran más bien impotencia que el peronismo excusaba cómodamente.

El grupo que hace CONTORNO nació a la vida activa cuando las cosas eran aparentemente fáciles: un nacionalista era, generalmente, un bisnieto de inmigrantes, partidario de los gobiernos fuertes, y en abierta oposición a todos los movimientos e ideas populares. Desde esa derecha hasta la izquierda comunista se graduaban infinitas tendencias, agrupaciones y núcleos de intereses. Ese cielo clásico se repetía en todos los órdenes, como algo lógico y admitido: en literatura, desde Bordo a Marechal.

Debajo de ese esquema político se movía una realidad social mucho más compleja. Sobre ambos irrumpió el peronismo en momentos en que todavía nosotros no habíamos superado el esquema. Nosotros tomamos partido fácilmente frente a los militares y los nacionalistas hispanizantes. Pronto advertimos la calidad de algunos de los aliados que habíamos adoptado y que, si bien las masas estaban casi unánimemente de un lado, apellidos iguales o parecidos estaban instalados en ambos márgenes. Fuimos advirtiendo la invalidez del esquema a medida que el peronismo iba desarrollándose en respuesta a particulares circunstancias de nuestra realidad. En frente también ocurrían transformaciones de signos diversos, opuestos o coincidentes —nuestra realidad se revelaba tal como es: compleja y fluida.

Tapa del número 7/8 de *Contorno*, correspondiente a julio de 1956.

Si bien en anteriores ocasiones la política había dibujado líneas de disputa en el universo de la cultura, a partir de 1945 y bajo el peronismo la situación fue distinta. Esta vez, el conflicto fue mucho más fuerte y dejó huellas mucho más hondas; viejas amistades naufragaron y se rompieron relaciones de antiguos y cercanos compañeros de aventuras intelectuales. Las repercusiones llegarían más allá de 1955; todo el proceso habla, nuevamente, de lo complejo de las relaciones entre el mundo de la cultura y el de la política, así como del impacto que produjo el fenómeno peronista.

Declaración de la Mesa Directiva de la Federación Universitaria Argentina, del 23 de septiembre de 1955

Los estudiantes argentinos han saludado la caída de un régimen opresor y falaz que intentó conculcar todo vestigio de democracia, sumiendo al país en un caos que corrompió la enseñanza primaria y secundaria y destruyó la Universidad. Quienes erigieron la violencia física y moral como sistema de gobierno han sido desplazados por la violencia. Quienes arbitraron todos los medios para perpetuarse en el poder son los únicos responsables de que un sector del pueblo no haya encontrado otra alternativa que el alzamiento armado. La sublevación ha triunfado en nombre de la democracia y la libertad. [...]

La FUA recuerda también al pueblo y al gobierno que la democracia debe ser defendida del privilegio económico y de la intromisión del imperialismo.

Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti, *Los reformistas*, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968.

Imágenes del pasado (I)

Entre los intelectuales que debieron tomar posición frente al peronismo en los años de su aparición se encontraron quienes, en 1938, habían fundado el Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas, dotando al revisionismo histórico de una base institucional más duradera. El grupo, que trataba de actuar en el ámbito historiográfico, en el cultural y en el político, contaba entre sus filas con nacionalistas y algunos radicales.

Tampoco para el revisionismo fue sencillo asumir una posición común ante el nuevo movimiento, y ya en 1950, Julio Irazusta, quien por otra parte había sido opositor desde que el peronismo apareció en la escena pública, se alejaba del instituto en medio de un conflicto entre oficialistas y adversarios del gobierno.

El peronismo, tal como había hecho frente a otros sectores de intelectuales y políticos, tampoco reclamó a los historiadores ninguna pertenencia previa particular. Con el paso del tiempo, algunos dirigentes peronistas, como el diputado John W. Cooke, se apropiaron de alguna de las lecturas revisionistas acerca del pasado nacional. A su vez, miembros del revisionismo se incorporaron al peronismo, como Ernesto Palacio, funcionario y diputado, al igual que Joaquín Díaz de Vivar, revisionista aunque miembro del radicalismo oficial en los años treinta. Pero otros historiadores, con participaciones ya largas en instituciones diferentes y alejados de todo rosismo, también apoyaron al gobierno y ocuparon cargos en el aparato estatal. Fue el caso de José Torre Revelo, integrante de la "nueva escuela histórica", que desde tiempos de la Primera Guerra Mundial se encontraba empeñada en la consolidación de una historia profesional con base universitaria; de Ricardo Piccirilli o Leoncio Gianello, ambos miembros de la Academia Nacional de la Historia, que encarnaba para el revisionismo el principal adversario en cuanto a las interpretaciones del pasado. En 1951, incluso, el senador peronista Juan de Lázaro, con presencia en la historia universitaria desde fines de los años treinta, lograba en un discurso asociar a Mitre, una de las figuras que el revisionismo condenaba con mayor fervor como responsable de la falsificación de la historia nacional, con su propio movimiento. Así, en el peronismo formaron historiadores de varios de los grupos activos en la Argentina de los años cuarenta.

En un nivel más vinculado con las políticas hacia el pasado llevadas adelante por el estado peronista, Antonio Castro, subsecretario de Cultura y presidente de la Comisión Nacional de Cultura, celebró en un folleto oficial de distribución gratuita la reunión que Urquiza y Sarmiento, dos "paladines argentinos", habían sostenido en un aniversario de la "gloriosa batalla de Caseros". Nada más alejado de la interpretación revisionista clásica, que hacía de Urquiza un traidor y de Sarmiento alguien que había propuesto la entrega de la Patagonia a Chile, que recomendaba liquidar al gauchaje y que, para rematar, había impulsado la escuela laica y liberal. De este modo, los miembros del revisionismo que apoyaron al peronismo se hallaron con que buena parte de la dirigencia y de los funcionarios del movimiento preferían vincularse con una tradición más convencional.

Es en esta misma línea en la que deben inscribirse otras acciones del gobierno peronista hacia el pasado nacional: los nombres elegidos para los ferrocarriles nacionalizados –Mitre, Sarmiento, Roca, Urquiza, San Martín y Belgrano–, que eran los del completo panteón repudiado por el revisionismo, con el agregado de dos próceres que nadie osaba discutir; los proyectos de monumentos a Sarmiento; la celebración del Año Sanmartiniano, así como la multitud de referencias, en los libros de texto, en la propaganda y en la prensa, que buscaban la filiación sanmartiniana para el presidente Perón. Esa misma operación llegó a realizarse, en menor escala, con la figura de Sarmiento, pero no con la de Rosas, el héroe máximo del revisionismo.

A las figuras recuperadas y celebradas por el peronismo en el gobierno se les atribuían virtudes y políticas que no eran las mismas que en ellos veían sus adversarios en el presente: el San Martín o el Sarmiento construidos por el peronismo para atribuirse un linaje eran sólo una de las versiones posibles de los próceres. Este tipo de acciones no eran nuevas en la Argentina; así, por ejemplo, en los años treinta, el catolicismo había llevado adelante una reinterpretación de Sarmiento que le permitía recuperar su figura, y Ricardo Rojas, desde el radicalismo en la oposición, proponía en 1933 su visión de San Martín, expresada en *El santo de la espada* y en entredicho con la que el gobierno justista ofrecía por entonces.

Estos fenómenos tienen dos caras, ya que por una parte demuestran la existencia de conflictos intensos entre visiones del pasado diferentes, pero al mismo tiempo evidencian el fuerte implante de algunas figuras del procerato. De todas maneras, es claro que el oficialismo buscaba dotarse de una genealogía más tradicional que la ofrecida por la alternativa revisionista. El rosismo no formó parte, entonces, del conjunto de posiciones oficiales del primer peronismo, aunque hubiera revisionistas que apoyaran al gobierno y funcionarios que fueran revisionistas.

Todo lo anterior no impidió que parte de la oposición, en especial el Partido Socialista, utilizara con insistencia la comparación con Rosas para realizar una crítica a los aspectos del régimen que consideraba totalitarios. Caricaturas e ilustraciones en la prensa partidaria apuntaban en ese sentido; en 1951, buena parte de la oposición halló en la celebración del centenario de la muerte de Esteban Echeverría una ocasión para hacer de la discusión sobre el pasado un debate que buscaba tener efectos en la política presente.

Por otro lado, en la propaganda peronista convivía esta apelación a una galería de héroes –sostén de una lectura del pasado–, que exhibía muchos rasgos tradicionales, con una idea de ruptura más radical. Era

frecuente que el peronismo planteara que, hasta su llegada, todo había sido un pasado de explotación, entrega e ignominia para el pueblo trabajador. Una versión sin duda más disruptiva que las filiaciones, también tan frecuentes, con San Martín.

Imágenes del pasado (II)

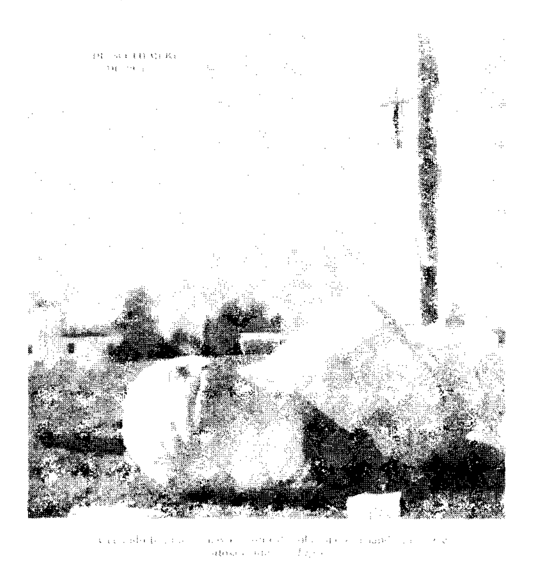
El derrocamiento del peronismo en septiembre de 1955 desató un nuevo proceso de lucha por la interpretación del pasado, sólo que esta vez se trató, en principio, del pasado reciente: lo que estaba en juego era cómo interpretar, cómo atribuir algún sentido a la experiencia que acababa de cerrarse, la del peronismo en el poder. En esa lucha, que alcanzó niveles de violencia importantes y se libró en escenarios dispersos y múltiples, intervino el estado, ahora en manos del antiperonismo, a través, por ejemplo, de la prohibición por decreto, en marzo de 1956, del uso de los símbolos del movimiento derrocado y hasta de los nombres y fotos de sus jefes.



Movilizaciones de apoyo al golpe de estado, ya instalado el gobierno del general Lonardi, el 24 de septiembre de 1955. Archivo General de la Nación.

Un combate no sólo simbólico

Los momentos posteriores al golpe de estado de septiembre de 1955 fueron de fuerte hostilidad de los vencedores hacia el peronismo; con la llegada del general Aramburu a la presidencia, en noviembre de ese mismo año, recrudeció la represión. Mientras comenzaba la llamada resistencia peronista, en marzo de 1956 un decreto prohibía la propaganda y los símbolos de ese movimiento, así como la mención de los nombres de Perón y de Evita.



Revista *Life*, Nueva York, reproducida en Bonifacio del Carril, *Crónica interna de la Revolución Libertadora*, Buenos Aires, s/e, 1959.

A su vez, los distintos grupos de la resistencia peronista, inorgánicos y desarrollando actividades muchas veces clandestinas, desde temprano proclamaron la necesidad de mantener la memoria –la fórmula "*su* memoria" sería más precisa– de los años en que el gobierno estaba en sus manos. También, poco después de septiembre de 1955, comenzaron a participar de esta puja los intelectuales de uno y otro bando, ofreciendo interpretaciones del período en cuestión y, naturalmente, el propio Perón, que intervino en forma activa. Las distintas imágenes del período peronista se transformaron así en objeto de debate y en una pieza del combate político.

La controversia pronto desbordó el pasado inmediato y se proyectó a toda la experiencia histórica argentina. El fenómeno se aceleró cuando, hacia fines de 1957, Perón dio los primeros indicios de que se estaba apropiando de una interpretación genéricamente revisionista del pasado nacional, en respuesta a la línea que los partidarios del golpe habían planteado en 1955, cuyos hitos eran Mayo, Caseros y el propio golpe de estado. A partir de las opiniones de su jefe, el peronismo, al unificar y simplificar las versiones revisionistas disponibles, acuñó su propia interpretación de la historia argentina. En este combate que era a un tiempo histórico y político, la defensa o el ataque a Rosas se tornaban defensas o ataques al peronismo, que incorporaba a sus efemérides la Vuelta de Obligado. No faltaron, a comienzos de los años sesenta, los atentados explosivos contra bustos de Sarmiento, explicados por uno de los grupos de la Juventud Peronista con citas de autores revisionistas transcriptas en volantes. Para el peronismo, sus luchas del presente se volvían también, imaginariamente, capítulos de una larguísima y continua batalla nacional y popular.

A poco de andar, comenzó a quedar claro que, contra lo que habían supuesto algunos de sus adversarios, el peronismo no desaparecería de la escena aunque estuviera privado del manejo de los recursos estatales. Al mismo tiempo, el carácter de expresión política de las clases trabajadoras, que el peronismo había demostrado, se vio ratificado luego del golpe de estado de 1955 y a partir de la resistencia, y perduró mucho tiempo. A tal ratificación no fue ajena la propia política oficial, que en los primeros momentos asumió a veces los tonos de la revancha patronal; la represión al peronismo no se distinguía fácilmente, para quienes la sufrían, de la represión a esos dos colectivos tan cargados de sentido en el lenguaje político, el pueblo y los trabajadores. Se trataba ahora, además y en los hechos, de unos trabajadores que habían alcanzado en los tiempos del peronismo una legislación social avanzada y una participación importante en los asuntos públicos y que, en el presente, disponían de herramientas eficaces para la puja sindical –entramada fuertemente, dada la situación general, con la política–, favorecidos estructuralmente por un cuadro en el que la demanda de mano de obra era alta.

Si el funcionamiento institucional de acuerdo con las reglas de la democracia había sido complicado durante el peronismo, luego de 1955 y en el mediano plazo, su proscripción habría de impugnar la legitimidad de cualquier salida política y también su pretensión de presentarse como democrática. La ciudadanía social o, si se prefiere, la dimensión

social de la ciudadanía, que por vías incluso heterodoxas se había visto fortalecida en tiempos del peronismo, quedaba en principio en entredicho, aunque también lo estaba el conjunto de derechos más estrictamente políticos, precisamente porque aquella proscripción violaba un derecho básico para amplios sectores de la población. Los tiempos que se avecinaban no serían apacibles.

Bibliografía

Tal como ocurre con la bibliografía dedicada a otros períodos, la que se refiere a la historia argentina en la primera mitad del siglo XX, aproximadamente, es ya muy vasta y ha crecido de manera muy notoria, en particular a lo largo de los últimos veinticinco años. Los aspectos políticos, sociales y culturales, que constituyen los ejes de este libro, han sido a su vez particularmente analizados por los historiadores, que en coincidencia con ciertas tendencias en la historiografía internacional les atribuyeron una gran importancia en la explicación del proceso histórico general. A ello cabe agregar el hecho de que el período de los primeros gobiernos peronistas atrajo la atención de especialistas locales y extranjeros durante muchos años.

También en este caso, esa producción asume formas diversas. Una de ellas, muy significativa, es la de los artículos acotados que los historiadores suelen publicar en revistas especializadas; muchos de ellos, incluso, han sido antes ponencias más específicas aún, discutidas en congresos. La importancia de esta producción reside en que es la base sobre la que se apoyan interpretaciones más amplias del pasado, que se construyen paulatinamente. Otros trabajos dedicados a la historia, que llegan al público interesado en estas cuestiones con mayor frecuencia y facilidad, son los libros, compilados o producidos por un solo autor, que se refieren a alguna dimensión en cierto período: una historia de las ideas y la cultura en los años treinta, o de las políticas sociales durante el peronismo, serían ejemplos de estas aproximaciones. Finalmente, se cuenta con historias argentinas más integrales, que a menudo asumen la forma de colecciones de varios volúmenes, a veces a cargo de varios historiadores.

Esta bibliografía consta, entonces, de dos partes. En la primera se sugieren algunas obras generales y colecciones; en la segunda,

ordenadas de acuerdo con las partes en que se dividió este libro, se consignan obras más específicas.

I

Algunas obras generales y colecciones de las que se enumeran aquí han aparecido recientemente, mientras que en otros casos se trata de reediciones. Dos historias de la Argentina publicadas en los últimos tiempos, ambas en varios tomos, son la *Nueva Historia Argentina,* dirigida por Juan Suriano, con el sello de Editorial Sudamericana, y la *Nueva Historia de la Nación Argentina,* de la Academia Nacional de la Historia, coordinada por algunos de sus miembros. Estos dos emprendimientos se ubican temporalmente en torno al año 2000. La *Historia Argentina* de Editorial Paidós, dirigida por Tulio Halperin Donghi y originalmente publicada a comienzos de los años setenta, volvía a lanzarse al mercado y completaba los tomos restantes en esos mismos años.

En un formato diferente, dado que se trata de una obra en un tomo, Jorge Saborido y Luciano de Privitellio presentaron en Madrid, editada por Alianza, una *Breve historia de la Argentina,* en 2006. Luis Alberto Romero, por su parte, publicó en 2007 una segunda edición revisada y actualizada de su *Breve historia contemporánea de la Argentina*, que editó el Fondo de Cultura Económica; la primera edición había salido en 1994. En 2000 apareció la *Historia política, económica y social de la Argentina (1880-2000),* publicada por Macchi, a cargo de Mario Rapoport y colaboradores. Restringida al siglo XX, Susana Torrado compiló y publicó en 2007, con el sello de Edhasa, la obra en dos volúmenes *Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX.*

En un rango menor de generalidad, la editorial Galerna presentó a comienzos de los años noventa la *Historia de la educación argentina,* también en varios tomos, dirigida por Adriana Puiggrós. Con una perspectiva también específica, en la actualidad están apareciendo los tomos de una *Historia crítica de la literatura argentina,* que dirige Noé Jitrik y publica Emecé. Tulio Halperin Donghi, por su parte, dirige la Biblioteca del Pensamiento Argentino, que ha editado ya siete tomos y es publicada por la

editorial Ariel desde fines de los años noventa; los volúmenes cuentan con amplios estudios preliminares y recopilaciones de documentos. En 2008, bajo la dirección de Carlos Altamirano, apareció el primer volumen de la *Historia de los intelectuales en América Latina,* en Ediciones Katz, colección todavía en curso. Obras integrales sobre aspectos culturales y de historia de las ideas son la de José Luis Romero, *El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX*, Buenos Aires, Solar, 1983 [1ª ed. mexicana: 1965], y la de Oscar Terán (coord.), *Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano,* Siglo XXI/Fundación OSDE, 2004, además de la *Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales 1810-1980,* Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

II

Figura a continuación un elenco inicial de obras seleccionadas de una bibliografía que, como se indicó, es ya muy amplia. El ordenamiento se ha realizado teniendo en cuenta las partes del libro y no sus capítulos, porque en muchos casos las obras en cuestión analizan procesos que cruzan varios de ellos o, incluso, no se alinean con los períodos que se han propuesto. Se ha preferido hacer referencia a libros o capítulos de libros, pero figuran también algunos artículos específicos, aparecidos en revistas especializadas, que están dedicados a cuestiones de interés.

Primera parte (1880-1916)

Alonso, Paula, *Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años noventa,* Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Bertoni, Lilia Ana, *Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

Bilsky, Edgardo, *La FORA y el movimiento obrero,* Buenos Aires, CEAL, 1985.